

El Colegio de México

Centro de Estudios Sociológicos

**Prisioneros del Estado.
Cultura Política y Gobernabilidad. La Dinámica de una Sociedad en
Tránsito: México, 1980-1994.**

**Tesis para Obtener el Grado de Doctor en Ciencias Sociales
con Especialidad en Sociología que presenta:**

Jorge Alberto Sánchez Ortega

Director: Rafael Segovia Canosa

México, D.F.

septiembre, 1999.

**A la memoria de
Francisca Ortega Lázaro**

“Cuando exigimos del historiador o del sociólogo la premisa elemental de que sepa distinguir entre lo esencial y lo secundario, y que para ello cuente con los “puntos de vista” precisos, únicamente queremos decir que sepa referir - consciente o inconscientemente- los procesos de la realidad a unos “valores culturales” universales y entresacar consecuentemente aquellas conexiones que tengan un significado para nosotros.”

Max Weber

INDICE GENERAL

INTRODUCCION

I

CONTRIBUCIONES TEORICAS RELEVANTES

Cultura Política. Un Recuento Rápido del Desacuerdo
Espacio Público. La Manufactura del Sentido de la Política
Gobernabilidad. La Dimensión Suspica de la Reflexión

II

MARCO TEORICO-METODOLOGICO

Ubicación del Problema
Metodología de la Investigación
Instrumentos Técnicos de Recopilación de la Información
Métodos y Técnicas de Análisis e Interpretación de los Datos

III

A LA SOMBRA DE LAS MAYORIAS

La Política de un Régimen Gobernable
Revolución y Gobernabilidad
Tradición y Revolución

IV

CUANDO LA VIRTUD PIERDE TODO SU ENCANTO

Crisis, Transformación y Cambio
La Reforma de la Conexión Estado-economía
Las Secuelas Políticas de la Liberalización Económica
El Ajuste del Balance Estado-Sociedad

V

EL MALESTAR EN LA ESFERA PUBLICA

La Expansión de la Vida Pública
La Irrupción Pública del Disenso
Vida Pública y Orden Político

VI

EL AGOTAMIENTO DEL BUEN GOBIERNO

Autoridad y Estado
La Política Cotidiana
Cambio Político y Estabilidad

VII

ESPERANDO A GODOT

Del Autoritarismo a la Tolerancia (y viceversa)

Entre el Antiguo Régimen y la Revolución

Orden Moral y Cultura Política

VIII

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

Anexos y Bibliografía

Introducción

Con el advenimiento de la democracia como el adjetivo de uso mas extendido en nuestro léxico político, términos como cultura política y gobernabilidad antes ignorados, han salido de su anonimato para convertirse hoy día, en parte integral de nuestro imaginario político. Estas nociones que hasta hace poco eran axiomas, supuestos elementales de la explicación del sistema político mexicano, se han transformado en problema, en objeto de acaloradas discusiones tanto en el plano académico como en el terreno, poco mesurado, del debate político partidista.

Cultura política y gobernabilidad son actualmente, el centro de la atención pública de un régimen que gradualmente liberaliza su modelo de inclusión y participación política, al tiempo que abre su economía. No es motivo de sorpresa entonces, que ambos conceptos se conviertan en estas circunstancias, en objeto de un renovado interés político y académico. Especialmente si tomamos en cuenta que la capacidad de gobierno del régimen, así como la estabilidad de la cultura política, han representado históricamente una de las constantes del modelo de desarrollo político en México en los últimos sesenta años. Por todo ello son un tema especialmente atractivo para investigar, en momentos que se discute apasionadamente si estamos en los umbrales de un proceso de profunda

transformación de la cultura política nacional, así como de la aparición de síntomas que indican un incremento de las dificultades del arte del “buen gobierno”.

En este marco general, el objetivo del trabajo es mostrar que no estamos en presencia de una nueva cultura política cívica y democrática, señalando al mismo tiempo, cuáles fueron los efectos del cambio político sobre el patrón histórico de relación entre gobernantes y gobernados, en los ámbitos correspondientes a consenso de valores, legitimidad del régimen y apoyo electoral. Para ello, la estructura de la investigación se compone de ocho apartados. En la primera parte se hace un breve recuento de las diferentes posiciones y modelos teóricos que se han ocupado del estudio de la cultura política, la gobernabilidad y sus formas de vinculación, precisando la definición de cada uno de estos conceptos que será utilizada en el trabajo.

El segundo capítulo expone la estrategia teórico-metodológica que guía el análisis, la interpretación de la cultura política como un concepto formado por niveles con ritmos diferentes de cambio. Ahí se propone también la hipótesis central de la tesis: demostrar que la mayor parte del cambio político ocurrió en la micro-cultura política, es decir, en el apoyo electoral del régimen, donde se produjo una acelerada erosión de la cultura de las mayorías absolutas, presión que pudo ser regulada sin que llegaran a provocarse crisis o problemas de gobernabilidad gracias a los ajustes realizados en las reglas del juego electoral y a la permanencia de una

cultura política reformista y poco propensa a los cambios repentinos. En este capítulo se describe la estrategia utilizada para reunir, sistematizar y analizar la información empírica que permita evaluar a través de los datos disponibles en la forma de encuestas de valores y estudios de opinión pública, los patrones de estabilidad y cambio de la cultura política. Por último, se detallan los métodos y técnicas que habrán de utilizarse para procesar y sistematizar la información obtenida.

Los siguientes dos apartados ofrecen un panorama general de la evolución y crisis de un modelo de desarrollo político caracterizado por la identificación entre Estado y gobierno, la conformación de un sistema de partido hegemónico y la centralidad del Estado en la economía, que dieron origen al paradigma del buen gobierno. El quinto capítulo explora las modificaciones experimentadas por la cultura del acuerdo como unanimidad que había conformado una esfera pública cerrada al disenso y basada en el control estatal de la opinión pública.

El capítulo sexto expone la erosión de la legitimidad del paradigma del buen gobierno, detalla los ajustes realizados a las reglas del juego político electoral, el comportamiento de las preferencias partidistas y la evolución de los niveles de apoyo popular al gobierno. Por su parte, el séptimo capítulo se ocupa de examinar los componentes de la macro-cultura política como las tendencias políticas y sociales

al autoritarismo y el libre mercado, evaluando el desarrollo de valores y actitudes propios de una cultura cívica.

Finalmente, el octavo capítulo resume los hallazgos de la investigación retomando la hipótesis central del trabajo: el cambio político experimentado por el país provocó modificaciones a las formas históricas de relacionamiento entre gobernantes y gobernados que afectaron el funcionamiento del paradigma del buen gobierno, pero no desencadenaron crisis o problemas de gobernabilidad, provocando un proceso de acomodo entre formas de ejercicio del gobierno y patrones culturales de participación política y aceptación social de la autoridad.

I

CONTRIBUCIONES TEORICAS RELEVANTES AL CAMPO DE ESTUDIO

Cultura Política. Un Recuento Rápido del Desacuerdo

La noción de cultura delimita la incertidumbre de una realidad tan vasta que una sola palabra parece insuficiente para contener las innumerables posibilidades interpretativas susceptibles de serle atribuidas. Quizá el encanto de su ambigüedad semántica explica las razones de una modernidad que contempla aturdida, el renovado interés por estudiar la cultura en sus más recónditas manifestaciones; crónica cuyo punto de partida lo mismo puede ser la filosofía y la psicología, que la antropología, la sociología o la ciencia política.

En cada una de estas disciplinas el análisis de la acción social y el orden político ha sido abordado desde dos puntos de vista opuestos. El primero corresponde a una concepción que ve el comportamiento humano como algo parecido a una máquina que responde de manera objetiva y relativamente predecible a los estímulos provenientes de su entorno; el segundo sostiene que la acción es motivada por factores internos a los individuos. Tales componentes suelen llamarse de múltiples y variadas maneras: emociones, percepciones, representaciones colectivas, valores, normas, etc. Este orden subjetivo trasciende la contingencia de las acciones singulares al concebir la individualidad de los sujetos

como una estructura, una metáfora compartida socialmente.¹ Se trata de un espacio subjetivo estructurado simbólicamente como la suma de una pluralidad de interacciones interpretativas, cuyo espacio de constitución se sitúa más allá de los actos idiosincrásicos de comprensión individual. *A este orden concebido como acción dotada de significado se le llama cultura.*

La Disputa sobre la Noción de Cultura

La discusión actual del concepto de cultura tiene su antecedente más inmediato en los trabajos de Max Weber. El principio de conformación weberiano de una ciencia social de la cultura se inserta en la tradición del esquema de pensamiento del filósofo neokantiano Heinrich Rickert. Al igual que éste último, Weber le otorga un lugar central en su análisis de la cultura a la posibilidad de contar con un principio de selección que simplificara la búsqueda de relaciones causales, de tal manera que la especificación de las posibilidades investigativas despejadas por las ciencias de la cultura va a estar directamente vinculada con los valores dominantes del científico y su época.² Weber concibe a la cultura como un concepto valórico, ligado a la conjetura de que el carácter distintivo de un evento socioeconómico no está determinado por sus propiedades objetivas u ontológicas, sino por la historicidad de nuestros valores e intereses cognoscitivos.

¹ Michael Taylor, "Structure, Culture and Action in the Explanation of Social Change." *Politics & Society*. vol. 17, 1989. pag. 138-142.

² Thomas Burger, "The Convergence of Max Weber and Heinrich Rickert." *Max Weber's Theory of Concept Formation. History, Laws, and Ideal Types*. Duke University Press, 1987. pags. 3-11.

Para el sociólogo alemán de Heidelberg la realidad empírica es cultura debido a que la formación de los conceptos, que depende a su vez del planteamiento de los problemas, varía junto con el contenido de la propia cultura. Así, Weber manifiesta su desacuerdo contra lo que llama el “acriticismo sin precedentes” de la interpretación económica de la realidad, que pretende deducir todos los fenómenos culturales en cuanto económicamente condicionados en última instancia. Según Weber, la reducción a las causas económicas no es exhaustiva en ningún campo de la vida cultural, ni siquiera en el de la economía. No pasamos del estudio de la psicología individual al análisis de los agregados sociales, por el contrario -sostiene enfáticamente-, deben elucidarse primero las precondiciones psicológicas y los efectos que aquellas tienen sobre las presuposiciones de nuestro conocimiento, así como el examen de sus conexiones.³

Nuestro punto de vista sobre el concepto de cultura deriva en muchos de sus puntos medulares de la perspectiva inaugurada por Weber. Intereses y valores son los rieles a lo largo de los cuales se desarrolla la acción mediada culturalmente. Los intereses materiales de individuos y corporaciones cumplen la función de imprimir dinamismo y movimiento a la acción humana, pero son los valores cristalizados en normas colectivas, el guardagujas que moldea la arquitectura que habrá de asumir el

³ Max Weber, “La ‘Objetividad’ Cognoscitiva de la Ciencia Social y la Política Social”. *Ensayos de Metodología Sociológica*. Amorrortu. Buenos Aires, 1982. pags. 39-101.

entramado social tejido por los individuos, especificando los medios idóneos que cada sociedad establece históricamente para llevar a cabo sus fines.⁴

Empero, si bien es cierto que la posición weberiana ha ejercido una influencia y un interés abrumadoramente dominantes en la sociología y la historia recientes su modelo no ha estado exento de críticas. Una de las más importantes se dirigió al papel que desempeña la cultura en la estructuración de la acción humana, cuyo modelo clásico de explicación causal es el texto de Weber *La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo*. El reclamo no era menor: si las ideas se encuentran siempre detrás de la formación de un ethos particular, ¿cómo explicar que el ethos del protestantismo ascético perdurara más allá de las ideas que le dieron origen? La respuesta de Weber se basa en el argumento que sugiere la existencia de una continuidad entre el modelo calvinista de la predestinación -el imperativo de saber si el destino del creyente era la salvación o la condena final-, y la ética secular de Benjamin Franklin -que llevó a buscar pruebas de dicho destino en las actividades terrenales (económicas) del individuo.⁵

Ya entrado el presente siglo el interés por el análisis de la cultura deja de ser patrimonio exclusivo de la sociología y la historia. Aparecieron otros invitados que abordaban temas nuevos, algunas veces pertrechados sólo con las herramientas de un entusiasmo ávido de escudriñar las peculiaridades de lo ajeno. Este

⁴ G. Roth y W. Schluchter, *Max Weber's Vision of History: Ethics and Methods*. University of California Press, 1979.

desplazamiento es particularmente evidente en la antropología, que se había dedicado entre tanto al estudio intenso y sistemático de los problemas que giraban en torno a la cultura de las sociedades primitivas, basada en el supuesto de que ofrecían la ventaja de integrar unidades fácilmente delimitables y relativamente estáticas. Luego de las primeras tentativas exitosas emprendidas por la sociología alemana del siglo pasado y por Durkheim, será la antropología cultural inglesa de V. Malinovski y A. R. Radcliffe Brown una de las primeras disciplinas sociales en elegir un enfoque mecánico-funcionalista de investigación empírica.⁶

En la sociología, Talcott Parsons adopta el esquema weberiano de explicación cultural basado en la preeminencia de intereses materiales y valores, pero no lo acepta sin antes modificar el sentido cognoscitivo del modelo, alterando en consecuencia la lógica y el significado que subyacen al análisis de la cultura en Weber. A la búsqueda de un modelo equiparable en precisión y elegancia formal con el paradigma del actor racional de la teoría económica, Parsons cambió el énfasis de Weber en la función protagónica de las ideas a lo largo de la historia, por un conjunto global de valores disociados del desarrollo histórico de las sociedades.⁷

Al igual que la antropología, también la teoría parsoniana de la cultura se proponía llevar a cabo análisis empíricos. Para lograr este objetivo era menester

⁵ Max Weber, "La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo." *Ensayos sobre Sociología de la Religión*, T.I. Tecnos. Madrid, 1987. pags. 54-55.

⁶ A. R. Radcliffe Brown, *Structure and Fuction in Primitive Society*. Cohen and West. London, 1963.

⁷ Adolfo Mir, "El Significado de la Cultura en la Teoría de la Acción de Talcott Parsons." Aquiles Chiu (coord.), *Sociología de la Cultura*. UAM Iztapalapa. México, 1995. pags. 133-159.

definir antes la acción social como una resultante intencional de los individuos. Así, las normas sociales, que constituyen la base de la institucionalización de patrones culturales y valores, podían ser analizadas como estructuras que operan en sistemas autoregulados. Ello marcó una profunda diferencia con Weber, quien consideraba normas y valores como constelaciones heterogéneas formadas por intereses en pugna, conflictos políticos, contingencias históricas y motivaciones pragmáticas. De esta manera, Parsons avanza un paso en el camino de apuntalar una sociología comprensiva, para luego deslizar su modelo en la dirección de un inmanentismo valórico de inspiración neokantiana.

En los hechos adopta una sociología trascendental que sujeta la perspectiva multidimensional de la sociología comprensiva weberiana, transformándola en un sistema funcional donde normas y valores se convierten en entidades abstractas, generales e intrínsecas al sistema social. Los valores no reciben el tratamiento de principios simbólicos concretos ocultos en su propia historia, a la espera de una voz que los desarraigue de su silencio (doctrinas, rituales, mitos o normas morales). En su lugar, los valores aparecen ahora como entidades esenciales alrededor de las cuales se estructuran las sociedades. Parsons considera las tradiciones culturales como meras orientaciones reguladas normativamente, donde los valores se definen como conjuntos de factores compartidos por un sistema simbólico, que cumple la función de criterio orientador de las decisiones individuales. En consecuencia, la cultura influye directamente sobre la acción humana a través de la operación de

series de valores que la empujan hacia determinados fines que, paulatinamente, son institucionalizados mediante su conversión en normas y roles que vinculan a individuos y grupos.⁸

Autores contemporáneos ligados al funcionalismo, tomaron el camino de buscar indicios de tal vinculación a través de la inspección empírica directa de la acción social. El esquema de Lipset por ejemplo, nos ayuda a entender como las variables patrón parsonianas están correlacionadas con diferentes tipos de conductas institucionales, mostrando como la dicotomía universalismo-particularismo está relacionada con el comportamiento de las elites políticas, haciéndolas más o menos propensas a incorporar al sistema a grupos sociales de bajos ingresos. No obstante, si bien Lipset fue muy cuidadoso en situar estos valores en lugares específicos de la estructura social, en realidad llegó a estas “constelaciones de valor” -como les llama Weber-, generalizando el comportamiento de grupos observados, en lugar de interpretar la dinámica interna de su desarrollo cultural. Podemos afirmar en términos generales, que la debilidad del enfoque funcionalista radica en su pretensión de sintetizar dos pretensiones opuestas: deducir los valores de la estructura social de la que se supone es analíticamente independiente y preservar al mismo tiempo su status de agente regulador de la misma.⁹

⁸ Talcott Parsons, “El Aprendizaje de las Expectativas Sociales de los Roles y los Mecanismos de Socialización de la Motivación.” *El Sistema Social*. Alianza Editorial. Madrid, 1988. pags. 193-235.

⁹ Seymour Martin Lipset, “Values and Democracy.” Jeffrey C. Alexander, y Steven Seidman (eds.), *Culture and Society. Contemporary Debates*. Cambridge University Press, 1990. pags. 75-84.

Luego de la segunda postguerra el estructuralismo y la semiótica se convirtieron en el adversario más serio del enfoque funcionalista. Su principal desacuerdo radicaba en la manera de concebir la extensión del horizonte al que debía ceñirse el concepto de cultura. Negándose a identificar como propio del sistema social ningún conjunto de valores y símbolos institucionalizados, ambas escuelas de pensamiento concentraron su interés en el sistema cultural como un todo. Insistían que la coherencia interna de la organización simbólica tenía que ser estudiada abstrayéndonos de cualquier otra referencia a procesos o niveles de análisis ajenos a la cultura misma. Por consiguiente, los patrones organizativos de los sistemas simbólicos quedaban estructurados en relaciones analógicas o antinómicas, al margen de cualquier otra determinación que no estuviera ya contenida en la cultura misma.¹⁰

De las diferentes orientaciones analíticas hasta aquí revisadas podemos rescatar un elemento común. Si bien íntimamente relacionada con la estructura social, la cultura no constituye un simple reflejo de las condiciones políticas o económicas de una colectividad; por el contrario, goza de márgenes históricamente determinados de autonomía relativa. Los distintos enfoques difieren en la definición de lo que tal autonomía implica. Algunos consideran que la soberanía de la cultura es tal que nos permite aprehender por sí misma los motivos y significación de la conducta social, mientras que otros por el contrario, sostienen que la cultura debe

¹⁰ Richard M. Merelman, "On Culture and Politics in America: A Perspective from Structural

entenderse como el resultado de procesos de estructuración previos al nivel de los entramados sociales.¹¹

Otro punto de contacto de las numerosas perspectivas de estudio sobre el fenómeno de la cultura radica en que cada una de ellas se aboca al análisis de diferentes ejes del problema, sin que la solución o el método constituyan patrimonio exclusivo de alguna disciplina en particular -como a menudo tiende a pensarse en la antropología por ejemplo. De tal suerte podemos afirmar, citando a Clifford Geertz, que el hombre se halla invariablemente inserto en una red de universos de significación que él mismo ha tejido en sus relaciones con otros individuos.¹² La cultura es justamente esa compleja red. Motivo suficiente para que la investigación tome su distancia de la indagación puramente empírica o interpretativa. Casi un siglo antes de la discusión inaugurada por la antropología cultural, Weber sentó los fundamentos sobre los cuales es posible recuperar una noción más rica de cultura. Desde su perspectiva, sólo a través de la interacción entre un razonamiento basado en el establecimiento de conexiones causales y la atribución de imputaciones significativas, es como podemos penetrar más profundamente el complejo fenómeno de la cultura.¹³

Anthropology." *British Journal of Political Science*, vol. 19, octubre, 1989. pags. 465-493.

¹¹ Jeffrey C. Alexander, "Analytic Debates: Understanding the Relative Autonomy of Culture." Jeffrey C. Alexander, y Steven Seidman, *Op. cit.* pags. 1-27.

¹² Clifford Geertz, "Descripción Densa: Hacia una Teoría Interpretativa de la Cultura." *La Interpretación de las Culturas*. Gedisa. Barcelona, 1992. pags. 19-40.

¹³ Max Weber, "Sobre Algunas Categorías de la Sociología Comprensiva", *Op. cit.*, 1982. pags. 175-221.

Un elemento adicional que comparten las diferentes concepciones revisadas hasta aquí radica en la importancia que le atribuyen al supuesto de que la acción social constituye un acto unitario. Es decir, los individuos estructuran sus acciones a partir de decisiones únicas que se supone están íntegramente determinadas por un conjunto prefijado de intereses y valores. No obstante, una observación más atenta de la forma como las personas toman decisiones y estructuran sus prácticas habituales, nos muestra que las acciones individuales se integran en unidades más amplias y complejas compuestas de numerosas secuencias y estrategias de acción.¹⁴ Si hemos de considerar a la cultura como una variable dotada de una autonomía relativa que se expresa en tipos específicos de influencia sobre la acción individual, el procedimiento idóneo para sortear los obstáculos que plantea el paradigma parsoniano, viene a ser la ponderación del peso específico que tiene la cultura para definir la capacidad que poseen los sujetos para diseñar estrategias y cursos de acción alternos.¹⁵

Tales estrategias se relacionan con la cultura a través de tradiciones, hábitos, estados de ánimo, sensibilidades y cosmovisiones. El empuje de la cultura sobre la acción individual toma cuerpo en la creación y recreación de dichos vínculos, abstrayéndose de postular un conjunto global y ahistórico de valores desligado de las peculiaridades del desarrollo histórico de cada sociedad. Es necesario llamar la

¹⁴ Ann Swidler, "Culture in Action: Symbols and Strategies." *American Sociological Review*, 1986, vol. 51. pags. 273-286.

¹⁵ Ann Swidler, *Op. cit.* pag. 277.

atención al hecho de que como resultado de la cambiante constelación de intereses y valores en juego, la cultura objetiva rituales, símbolos, hábitos y tradiciones no sólo diversos, sino a menudo opuestos entre sí.¹⁶ Para los propósitos del trabajo es necesario enfatizar que la cultura no se concibe como un ente monolítico, más bien es visualizada a la manera de un repertorio plasmado históricamente de símbolos, tradiciones y hábitos, que conforman un conjunto de posibilidades electivas del cual los individuos escogen una u otra alternativa, dependiendo de las circunstancias específicas de que se trate en cada caso. Así, las personas aprenden a comportarse de diferentes maneras en escenarios variables, en función del sedimento simbólico edificado colectivamente a lo largo de su desarrollo histórico.

Afinidades Electivas. La Conexión Política-Cultura

Resulta paradójico que el desarrollo de un renovado interés por las instituciones haya contribuido a crear un clima favorable a la sospecha de que la cultura desempeña un papel capital en la investigación en ciencia política y sociología.¹⁷ Menos raro parece ser que el sentido de la política se haya convertido en un encarnizado campo de batalla durante las últimas décadas. El perímetro teórico de las perspectivas contemporáneas sobre la política está delimitado por cuatro puntos de vista: 1o. aquel que la visualiza como parte integrante de la sociedad sin establecer mayores diferencias entre lo político y lo social; 2o. aquel

¹⁶ E. P. Thompson, "Costumbre y Cultura." *Costumbres en Común*. Crítica. Barcelona, 1991. pag. 19.

¹⁷ Thomas A. Koelble, "The New Institutionalism in Political Science and Sociology." *Comparative Politics*. enero, 1995. pags. 231-243.

que la concibe en términos de los efectos a nivel macro de la acción individual; 3o. una orientación proclive a concebir la acción como el resultado de un interés egoísta y racional minuciosamente calculado, y 4o. una posición propensa a entender la toma de decisiones y la distribución de los recursos, como las preocupaciones básicas alrededor de las cuales se organiza la vida política.¹⁸ Poco dispuesta a verla, por consiguiente, en términos del despliegue de significados, símbolos, rituales y ceremonias. En todo caso, las preferencias de los actores se consideran exógenas al sistema político, y se deducen de su posición al interior de la estructura económica y social.

Así, la orgullosa ciencia de la política se autodefinía -junto con la economía- como el ejemplo más convincente para las ciencias sociales de un compromiso militante con el progreso intelectual. Esta concepción del progreso intelectual implicaba la adopción de métodos y criterios tomados del modelo de las ciencias naturales, con el fin de refundar la política como ciencia empírica. Sin lugar a dudas, el esfuerzo más exitoso en esta dirección se produjo en el campo de los estudios electorales y la opinión pública. Varios factores contribuyeron a crear un ambiente intelectual, político y cultural, que orientó la ciencia política en la dirección de un pragmatismo empirista abocado al planteamiento y solución de problemas concretos del sistema político.

¹⁸ James G. March, y Johan P. Olsen, "El Nuevo Institucionalismo: Factores Organizativos de la Vida Política." *Zona Abierta*, no. 63/64. Madrid, 1993. pags. 1-43.

En este contexto, los estudios electorales experimentaron un desarrollo acelerado en los últimos cincuenta años. Estimulado entre otros acontecimientos por los procesos democratizadores de Europa Meridional y América Latina, el análisis del voto se convirtió en objeto de estudio predilecto de un creciente número de investigadores. Podemos identificar dos grandes tradiciones de pensamiento en este terreno. Por un lado, una vieja tradición europea de investigación comparada de las instituciones políticas occidentales que evolucionó gradualmente -especialmente en la Gran Bretaña- hacia un análisis de los sistemas de partido y los sistemas electorales de las democracias industrializadas; por el otro, cruzando el Atlántico, un libro marcaría un parteaguas en el desenvolvimiento de los estudios electorales.¹⁹

La publicación del texto *The American Voter* a principios de los sesenta representó la convergencia de varias tendencias de desarrollo complejas y heterogéneas en la ciencia política norteamericana. Estas implicaron cambios en la metodología, las estructuras institucionales y las formas de financiamiento de los proyectos de investigación académicos. Lo anterior vino a conocerse como la “revolución conductista.”²⁰

En muchos sentidos, la revolución conductista no era otra cosa sino una continuación del trabajo empírico realizado antes de la guerra, tanto en sociología como en ciencia política. En lo fundamental, el conductismo era un enfoque que

¹⁹ John S. Dryzek, “Opinion Research and the Counter-Revolution in American Political Science.” *Political Studies*, vol. XL, 1992. pags. 679-694.

²⁰ Angus Campbell, Philip Converse y W.E. Miller, *The American Voter*. Wiley. New York, 1960.

ponía particular énfasis en la recolección de datos empíricos hasta entonces inéditos, así como en las modernas técnicas de análisis estadístico. Para el conductismo, la ciencia política debía progresar conforme al modelo de acumulación científica del conocimiento de Karl Popper. Es decir, el conocimiento deriva de teorías generales compuestas de hipótesis formalizadas que deben ser sometidas a un escrutinio crítico, basado en la evidencia empírica.

El objetivo del conductismo era desarrollar generalizaciones lo más amplias posibles con respecto a la naturaleza del comportamiento electoral en los Estados Unidos. De esta manera, podrían elaborarse modelos susceptible de probarse a partir de bases de datos provenientes de encuestas nacionales de preferencias electorales. Para los fines del modelo, resultaba irrelevante si tales generalizaciones resultaban consistentes o no con las pautas de participación electoral prescritas por la teoría clásica de la democracia.²¹

Por consiguiente, se privilegiaba aquí: 1. la descripción de la realidad tal como “es” antes que la prescripción normativa, 2. la identificación de uniformidades observables del comportamiento político, 3. la validación de tales hallazgos a través de instrumentos metodológicos específicos, y 4. la acumulación de conocimiento mediante el desarrollo de teorías generales verificadas -en el sentido popperiano de “conocimiento no falsado hasta ese momento”.

²¹ Pipa Norris, “Elections and Voting Behavior.” Adrian Leftwich (ed.), *New Developments in Political Science*. Elgar Publishing. London, 1990. pags. 176-195.

Durante los años de postguerra, gran parte del estímulo a los estudios electorales provino del desarrollo de técnicas de acopio de información empírica, fundamentalmente encuestas. En ambos lados del Atlántico se produjeron valiosas aportaciones y se desarrollaron diferentes enfoques para el análisis de los sistemas de partido y la participación electoral.²²

La creciente popularidad de los estudio sobre el voto llevó a pensar que el futuro del análisis político como ciencia aplicada, constituía un ideal al alcance de la mano. Sin embargo el intento, exitoso hasta ese momento, de fundar la política como una disciplina empírica centrada en el estudio del comportamiento electoral, desencadenó una ríspida y prolongada disputa entre diferentes escuelas de pensamiento, que concluyó con la silenciosa aceptación de un pluralismo metodológico discretamente reconocido. La pretensión de alcanzar un conocimiento de los fenómenos políticos capaz de justificar una teoría plenamente objetiva y libre de cualquier valoración, perdió credibilidad en los años siguientes al agotarse el impulso creativo de la revolución conductista. Exhausta la legitimidad de tan ambicioso objetivo -construir una ciencia social positiva-, el sentido mismo de la distinción entre realidad y observación, hechos y valores, y descripción-prescripción quedaba alterado. Se gestaba un viraje teórico que apuntaba a la restauración del interrogante por el sentido histórico-cultural de la política.

²² Dos ejemplos notables son el trabajo pionero de Paul Lazarsfeld, B. Berelson y H. Gaudet, *The People's Choice*. Columbia University Press, 1944, y A. Campbell, G. Gurin y W. E. Miller, *The Voter Decides*. Greenwood Press, 1954.

En este nuevo escenario, la pregunta de cuánto peso ha de darse al individuo y cuánto al contexto que lo rodea, llevó a una reflexión directa sobre la forma como se producen las decisiones de los individuos en un contexto que incluye factores como la cultura, las normas sociales y las convenciones morales. Así se introdujo nuevamente al debate el interrogante de que estrategia metodológica constituía la mejor alternativa para una interpretación plena de los fenómenos políticos: aquella que privilegia la estructura, la acción individual o la cultura.²³ Poco a poco creció cada vez más el interés en los determinantes culturales del comportamiento político.

La fascinación por el vínculo política-cultura se propagó a tal punto, que hoy día se insiste en reivindicar una concepción de la teoría política como un entramado de tres niveles: individuos, organizaciones, e instituciones. En esta perspectiva las instituciones son vistas como “materiales y simbólicas al mismo tiempo”,²⁴ de tal modo que la acción individual es susceptible de explicarse sólo en un contexto social. Recíprocamente, ese entramado sólo puede entenderse mediante la conciencia y el comportamiento individual formado por repertorios de hábitos, habilidades y valores, a través de los cuales los sujetos producen y reproducen cursos de acción diferentes.

La Invención del Concepto. El Paradigma de la Cultura Cívica

²³ Hugh V. Emy, “From a Positive to a Cultural Science: Towards a New Rationale for Political Studies.” *Political Studies*, vol. XXXVII, 1989. pags. 188-204.

²⁴ Roger Friedland y Robert R. Alford, “La Sociedad Regresa al Primer Plano: Símbolos, Prácticas y Contradicciones Institucionales.” *Zona Abierta. Op. cit.* Pags. 155-207.

Luego de un prolongado dominio del marxismo y el funcionalismo que veían en la cultura un subproducto de fuerzas materiales o requerimientos sistémicos, en la actualidad se observa un auténtico renacimiento del interés por el estudio de la cultura política. El desplome del marxismo, así como el establecimiento de regímenes políticos democráticos y el ascenso del nacionalismo en Europa Oriental, llamaron la atención hacia la forma como los ciudadanos se identifican simbólicamente y los sistemas políticos se legitiman. Procesos en los que hay una creciente conciencia del importante rol que desempeña la cultura política. Así, pese a los intentos realizados para explicar dichas transformaciones conforme a la perspectiva histórica de modelos idiosincrásicos nacionales, la insatisfacción con tales tentativas llevó a una reformulación del concepto de cultura política en un esfuerzo por repensarlo en un contexto más delimitado y específicamente político.

Sin embargo, no ha podido alcanzarse un acuerdo generalizado con respecto a la definición, teoría y método de estudio de la cultura política. El recién llegado tenía un árbol genealógico generosamente extendido, en el que muchos parientes compartían tan sólo la vaga identificación de un ilustre apellido. Fue en la década de los sesenta, gracias a la obra de Almond y Verba, que la cultura política emergió como un campo de estudio con personalidad propia. Ya en los setenta su enfoque era el paradigma dominante en la mayoría de las investigaciones sobre el tema, aún cuando empezaba a observarse también un creciente descontento con su estructura, supuestos teóricos y metodología. En la década de los ochenta se completa el ciclo

con un inesperado florecimiento de la cultura política (una suerte de “bringing political culture back”), caracterizado por una proliferación de metodologías y paradigmas en conflicto.²⁵ En este contexto, tres son los problemas fundamentales que se hallan en el centro de las discusiones sobre cultura política: 1o.- La definición del concepto, 2o.- La heterogeneidad de los numerosos enfoques teóricos, y 3o.- Las dificultades de operacionalización del concepto.

Podemos agrupar las definiciones en varias categorías que ejemplifican esta diseminación: a).- *psicológicas*, es decir, aquellas que enfatizan la orientación del individuo hacia la política; b).- *sociológicas*, las que incorporan tanto las orientaciones individuales hacia la política como las conductas sociales que sirven de soporte a las primeras; c).- *objetivas*, que definen la cultura política en términos de los valores y normas dominantes de una sociedad; d).- *lingüísticas*, cuya preocupación central es el análisis del significado de un discurso simbólico para una comunidad política, y e).- la perspectiva que concibe la cultura política como el *orden moral* de una sociedad.²⁶

Almond había introducido por primera vez el término cultura política en un artículo de 1956, con objeto de proponer un parámetro que apoyara la tarea de llevar a cabo una clasificación tentativa de los sistemas políticos contemporáneos. Para Almond, todo sistema se halla inserto en un conjunto de pautas que orientan la

²⁵ Dennis Kavanagh, “Political Culture”, *Political Science and Political Behavior*. Allen & Unwin. London, 1983. pags. 48-75.

acción, a estos patrones los denomina cultura política. Afirma también que aún cuando la cultura política se halla adherida al tejido institucional de una sociedad concreta, goza de autonomía relativa con respecto a dicha estructura.²⁷ En la formulación posterior de Almond y Verba, la cultura política se define como las predisposiciones de los individuos hacia el sistema político junto a las actitudes hacia su rol dentro del sistema.

Tales actitudes dan lugar a tres tipos diferentes de orientaciones: a) cognitiva, b) afectiva, y c) evaluativa. Patrones que corresponden respectivamente al grado de conocimiento sobre el régimen político, valores y sentimientos con respecto al mismo, y nivel de compromiso con los valores que encarna.²⁸ Un punto importante a destacar de la posición de Almond y Verba es el señalamiento de que la cultura política representa un conjunto de orientaciones para la acción política individual, susceptible de ser revelado a través de la utilización de encuestas y cuestionarios.²⁹

En un trabajo posterior escrito con G. Bingham Powell Jr. Almond reelaboró el concepto, ligándolo más estrechamente a las trayectorias de desarrollo político nacionales. La cultura política se explica ahí en términos de la capacidad estabilizadora del sistema, al tiempo que el desarrollo político se concibe como un reflejo del grado de secularización alcanzado hasta ese momento. Dicho proceso de

²⁶ John, R. Gibbins, "Contemporary Political Culture." John R. Gibbins (ed.), *Contemporary Political Culture*. Sage. London, 1989. pags. 1-30.

²⁷ Gabriel Almond, "Comparative Political Systems." *Journal of Politics*, vol. 18, 1956. pags. 391-409.

²⁸ Gabriel Almond, y Sidney Verba, *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press, 1963.

secularización cultural asume la forma de un desarrollo dinámico que discurre desde orientaciones políticas difusas, hacia orientaciones políticas más definidas acompañadas por una creciente diferenciación de los roles que se despliegan al interior del sistema político.³⁰ Así, ambigüedad es la característica distintiva de una cultura parroquial, en la cual hay poca o nula conciencia del sistema político como entidad separada del cuerpo social. En contrapartida, determinación y especificidad caracterizan una cultura política individual y participativa.

Para el caso de aquellos países con procesos recientes de formación del Estado nacional, Almond sugiere la idea de que es posible observar un “dualismo cultural.” En estas condiciones, una pequeña elite se moderniza y es socializada en el marco de orientaciones culturales universalistas, específicas y pragmáticas. Tales orientaciones caracterizan a una cultura nacional moderna, entreverada con una inmensa mayoría de la población que permanece ligada a patrones tradicionales de una cultura rígida, comunal y ambigua. Almond enfatiza el poder explicativo del concepto de cultura política, argumentando que se trata de una categoría no sólo descriptiva sino genuinamente explicativa y susceptible de evaluación empírica. El instrumento metodológico para elevar la simple noción de cultura política al status de concepto, vino a ser la revolución de las nuevas técnicas estadísticas de recolección y procesamiento de la información. Por tanto, en su formulación original

²⁹ John Street, “Review Article: Political Culture -from Civic Culture to Mass Culture.” *British Journal of Political Science*, vol. 24, enero, 1994. pag. 97.

el concepto de cultura política gira alrededor de la encuesta como herramienta básica de investigación de este campo de estudio.³¹

Ahora bien, no todos los grupos sociales comparten la misma cultura política. Valores, actitudes y sentimientos, no están uniformemente distribuidos a lo largo del espacio nacional. Las elites políticas por ejemplo, tienen un conjunto distintivo de normas y valores, sin contar con el hecho de que la vasta diversidad de instituciones que conforman una comunidad política como la iglesia, el ejército, la burocracia o la universidad, implica la existencia de subconjuntos particulares de normas y valores políticos.³² Esto nos enfrenta al interrogante de la unidad de la cultura política de un espacio nacional. La mayoría de las posiciones en este punto concuerda con el argumento de que la dimensión de lo nacional, no resulta incompatible con la presencia de lógicas específicas que se desenvuelven en el contexto de espacios regionales o locales. La noción de cultura política nacional no anula la exigencia de desagregar el concepto, de modo que nos permita entender la riqueza y heterogeneidad de las subculturas políticas regionales.³³

El interés de Almond y Verba por averiguar si había compatibilidad entre las actitudes de individuos e instituciones los condujo a la idea de cultura cívica, es decir, un tipo peculiar de cultura política constitutivo de los sistemas políticos

³⁰ Gabriel Almond y G. Bingham Powell Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little Brown. Boston, 1966.

³¹ Gabriel Almond "The Intellectual History of the Civic Culture Concept." Gabriel Almond y Sidney Verba (eds.), *The Civic Culture Revisited*. Sage Publications. London, 1989. pags. 1-36.

³² Larry Diamond, "Introduction: Political Culture and Democracy." Larry Diamond (ed.), *Political Culture and Democracy in Developing Countries*. Lynne Rienner Publishers. Boulder, 1993. pag. 8.

democráticos. En una democracia afirman, hay una compatibilidad fundamental entre sistema y cultura política. A la pregunta de porqué un tipo ideal de valores y actitudes individuales tiene consecuencias tan decisivas para la operación del sistema político, Almond y Verba responden que la cultura política es un puente entre individuo y sociedad, entre los niveles micro y macro de la política.³⁴ Por ende, sólo a través del estudio de la distribución social de esas actitudes se hace posible calibrar las características y evolución de la cultura política.

La teoría de la cultura cívica generó una vigorosa controversia. Algunos de sus críticos afirmaron que una de las tensiones fundamentales de la obra de Almond y Verba se halla en su ambición de cimentar tanto un análisis comparado, como un recuento sociológico de las culturas políticas nacionales. Ello hacía necesaria la combinación de dos exigencias contrarias: por un lado un elevado nivel de generalización conceptual, por el otro, un grado extremo de descripción empírica.³⁵ De esta manera, el desafío más fuerte para el naciente concepto radicaba en los problemas alrededor de los orígenes, forma y patrones de cambio de la cultura política.

La Inacabada y Minuciosa Construcción del Desacuerdo. Críticas y Propuestas de Revisión Inconformistas

³³ Larry Diamond, *Op. cit.* pag. 9.

³⁴ *Ibid.* pag. 32.

³⁵ John Street, *Op. cit.* pags. 95-114.

La literatura que siguió a la obra de Almond y Verba adoptó tres posturas:

1.- Seguir el marco teórico establecido, 2.- Propugnar por una versión reformada o 3.- Rechazar la validez explicativa misma de la noción de cultura política. Uno de los artífices del renacimiento de la cultura política que emprendió el primer camino fue Ronald Inglehart. La teoría de la cultura cívica elaborada por Almond y Verba propone la idea de que la viabilidad de las instituciones democráticas depende en gran medida de la cultura política, es decir, de actitudes tales como la creencia en la posibilidad de influir en las decisiones políticas del sistema o el tipo de valores socialmente compartidos con relación al mismo. Así, aquellos países con elevados niveles de lo que Almond y Verba llaman una cultura cívica participativa, cuentan con mayores posibilidades de favorecer y preservar regímenes políticos democráticos, por oposición a aquellos países que muestran bajos niveles de dicha cultura cívica.

En este contexto, Inglehart se propuso responder a una de las inconsistencias del modelo de Almond y Verba: ¿Es la cultura cívica un efecto o una causa de los sistemas políticos democráticos? Por lo regular, el establecimiento de gobiernos democráticos está asociado a consideraciones estructurales que no pasan por las actitudes de la gente hacia el sistema político. Su permanencia en el tiempo se considera causa y no efecto de la cultura política.³⁶ Los elevados niveles de valoración del desempeño del régimen y la identificación personal con el sistema

político, son vistos como normales en países con una prolongada tradición democrática. Para probar empíricamente su argumento Inglehart realizó sofisticados análisis estadísticos para medir la influencia de las actitudes políticas sobre los procesos democratizadores, a fin de compararlos posteriormente con otros factores económicos y sociales a nivel agregado. El propósito de la investigación era dilucidar el tipo de vínculos existentes entre la cultura política y el establecimiento y permanencia de sistemas democráticos.³⁷

El análisis de Inglehart despertó una enorme controversia. Su tesis central pugnaba por conceder a la cultura política un mayor peso explicativo de los procesos de cambio políticos y sociales, argumento que levantó una ola de comentarios críticos desde las mas diversas posiciones.³⁸ Estas se dirigieron en su gran mayoría a las inconsistencias que presentaba el modelo. Se argumentó en primer lugar, que no consideraba la posibilidad de efectos imprevistos sobre las actitudes políticas de la gente, ocasionados por la permanencia ininterrumpida de un sistema democrático a lo largo del tiempo.³⁹ En segundo lugar, se criticó el concepto de cultura cívica adoptado por Inglehart ya que incluye un elemento que no forma parte de la definición propuesta originalmente por Almond y Verba: el índice de

³⁶ Ronald Inglehart, "The Renaissance of Political Culture:" *American Political Science Review*, vol. 82, diciembre, 1988. pags. 1203-1230.

³⁷ Ronald Inglehart, *El Cambio Cultural en las Sociedades Industriales Avanzadas*. Siglo XXI/CIS. Madrid, 1991.

³⁸ Edward Muller, "Democracy, Economic Development, and Income Inequality." *American Sociological Review*, vol. 53, 1988. pags. 50-68.

³⁹ Edward N. Muller, y Mitchell A. Seligson, "Civic Culture and Democracy: The Question of Causal Relationships." *American Political Science Review*, vol. 88, septiembre, 1994. pag. 635.

satisfacción del nivel de vida individual. De esta manera, la metodología de Inglehart comprende tanto un índice de confianza interpersonal ciudadana como un índice de apoyo a cambios radicales del régimen político.⁴⁰

En ningún momento proporciona Inglehart una razón que justifique la incorporación de dicho componente al conjunto de actitudes políticas que forman la cultura cívica de un país -una estrategia alternativa podría ser tomar el índice compuesto de cultura cívica y someter a prueba cada una de las variables políticas por separado. Finalmente, un tercer problema del modelo de Inglehart consistía en la probabilidad de que contuviera errores de especificación estadística, puesto que tomaba el porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada en el sector terciario como la única macrovariable sociológica sustancial, además del nivel de desarrollo económico.⁴¹

Un variado repertorio de las posiciones a favor y en contra del enfoque de Almond y Verba se encuentra en el volumen colectivo titulado *The Civic Culture Revisited*.⁴² Es interesante anotar al respecto que si bien en el texto hay fuertes críticas al soporte teórico del modelo, en los hechos, la investigación continuó desarrollándose dentro del marco metodológico general establecido por *The Civic Culture*. Esta revisión crítica de las propuestas centrales de Almond y Verba comprendía una amplia gama de aspectos. En principio, se cuestionaba el concepto

⁴⁰ Edward N. Muller y Mitchell A. Seligson, *Op. cit.* pag. 637.

⁴¹ *Ibid.* pag. 640.

⁴² Gabriel Almond y Sidney Verba, *Op. cit.*, 1989.

mismo por llevarlo más allá de las actitudes explícitamente políticas de los individuos, hasta incluir relaciones sociales no vinculadas directamente con las percepciones subjetivas sobre el sistema político. De esta manera, argumentaban, se introducía un elemento de vaguedad en el análisis que habría podido evitarse, restringiendo el concepto a sus componentes estrictamente políticos.⁴³

Aún cuando *The Civic Culture* ofrecía interesantes correlaciones entre actitudes políticas y nivel educacional, se le criticó también la manera poco convincente de explicar la producción del cambio cultural a lo largo del tiempo. En el modelo de Almond y Verba la noción de socialización política venía a ser el eslabón intermedio entre los niveles micro y macro del sistema. Sin embargo, en total desacuerdo con tal idea, varios críticos sostenían que ésta jugaba un papel activo y determinante sólo en el caso de que existieran fuertes tensiones entre la orientación del individuo y la forma en que el sistema intervenía para responder a las motivaciones individuales.⁴⁴

Al calor de la discusión se desarrollaron sugerentes perspectivas de análisis que proponían nuevos abordajes de la relación entre cultura y política. La nueva historia cultural, una de las corrientes interpretativas más prometedoras irrumpió con fuerza en el escenario intelectual a fines de la década pasada. A diferencia de los varios enfoques revisados hasta aquí, el concepto de cultura política que maneja la nueva historia cultural se propone rescatar la autonomía específica de la cultura y

⁴³ John Street, *Op. cit.* pag. 100.

transmutarla en un ámbito dotado de una dinámica y lógica propias. Lógica que se interrelaciona de múltiples maneras con los ámbitos de lo político, lo económico y lo social. Prácticas y representaciones políticas de los actores pasan a considerarse aquí como sistemas simbólicos animados por historias y lógicas propias.⁴⁵ Además, tales universos simbólicos constituyen en sí mismos, formas objetivadas de lucha política por el poder al mismo tiempo que formas de expresión cultural. De esta manera, rompen con la añeja idea que había presidido las discusiones de varias generaciones de historiadores de la escuela de los *Annales* y el marxismo. Manía metodológica que demandaba la primacía explicativa de las condiciones materiales para conformar el paradigma de una política mecánica, caracterizada por actores rutinarios en su accionar, armados con una percepción de la cultura que se limitaba a reflejar la dinámica “real” de las relaciones sociales.⁴⁶

Muchos de los trabajos realizados con este nuevo enfoque se concentraron en su gran mayoría en el examen de la Revolución francesa, reconceptualizando la cultura política del período anterior a la caída del *Antiguo Régimen* en la forma de una lucha por el poder simbólico, que precedió la toma del poder político institucional. Muy a tono con la reorientación de la corriente principal de análisis en ciencias sociales, la nueva historia cultural abandonó la ciudadela positivista, en beneficio de un enfoque más interesado en los procesos enfocados hacia la

⁴⁴ *Ibid.* pag. 101.

⁴⁵ Lynn Hunt “Introduction: History, Culture and Text.” Lynn Hunt (ed.) *The New Cultural History*. University of California Press, 1989. pags. 1-22.

comprensión e interpretación de las representaciones simbólicas sociales. La fascinación por los problemas del significado y el lenguaje no es nueva, se remonta al texto del filósofo alemán Martin Heidegger *Ser y Tiempo*, publicado a principios de siglo. Lo novedoso de este enfoque es la utilización de las teorías del estructuralismo francés de Lévi Strauss y la lingüística de Saussure como estrategia metodológica aplicada a la construcción de un nuevo concepto de cultura política.

La nueva historia cultural olvida la lucha de clases y el materialismo geográfico braudeliano en nombre de un tipo de análisis más preocupado por los efectos y el poder estructurador del nuevo lenguaje político democrático, republicano y popular. Discurso que llevó la lucha por el poder al terreno del imaginario colectivo que se construía alrededor de nuevas formas de discusión y participación políticas simbólicas que repercutieron sobre el espacio de intercambio político, alterando las condiciones de reproducción comunicativa del *Antiguo Régimen*. Armados con este bagaje analítico, autores como Lynn Hunt o Roger Chartier, insistirán en la necesidad de investigar la lógica interna de los procesos de confrontación cultural. Así, desde esta perspectiva, las fronteras del escenario político se hallan delimitadas por las potencialidades disruptivas contenidas en los universos simbólicos de los lenguajes políticos en pugna.⁴⁷

Para estos autores, el curso de las prácticas políticas resulta ininteligible si no decodificamos antes las reglas simbólicas internas de la cultura, así como las formas

⁴⁶ Lynn Hunt, *Op. cit.* pag. 4.

políticas que están en juego en todo proceso de cambio. Roger Chartier por ejemplo, se opone a la dicotomía que estructura el escenario de las prácticas políticas de los actores sociales en realidades simbólicas o culturales por un lado, y realidades materiales u objetivas por el otro. En su lugar, se propone analizar las diversas modalidades que asumen los significados culturales en el contexto de la aparición de nuevas sociabilidades intelectuales, que ayudaron a conformar un espacio público que dio como resultado una nueva cultura política. Desde su punto de vista ésta es un elemento mediador entre el mundo de las prácticas político-sociales y el universo de las representaciones simbólicas. Por tanto, estudia los procesos de socialización política a través del surgimiento de nuevas sociabilidades culturales que ayudaron a formar un nuevo espacio público durante el siglo XVIII. El estudio de la cultura política se encamina aquí hacia la comprensión de la paulatina politización de la esfera pública, así como al surgimiento y expansión de la crítica hacia ámbitos prohibidos hasta ese momento, particularmente los concernientes a la religión y el Estado.⁴⁸

Para terminar expondremos brevemente dos de las posiciones más interesantes del debate contemporáneo en el campo de estudio de la cultura política, vertientes teóricas sobre las cuales basamos en buena medida ésta investigación. La primera de ellas concibe la cultura política en términos del *orden*

⁴⁷ Lynn Hunt, *Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. University of California Press, 1984.

⁴⁸ Roger Chartier, *Espacio Público, Crítica y Desacralización en el Siglo XVIII*. Gedisa. Barcelona, 1995. pag. 27-29.

moral de una sociedad. Desde esta perspectiva de análisis, el paradigma convencional de la cultura cívica es sometido a una exhaustiva revisión crítica en los puntos nodales de metodología, interpretación y análisis de los datos. La cultura política se define entonces como las actitudes que adoptan los individuos con el fin de dotar de significado a su participación política.

La cultura política se convierte aquí en una forma de vida, es decir algo que se *vive* y no es más una mera orientación funcional de una conducta predefinida por la lógica del modelo. En esta concepción el comportamiento político se ve como la expresión de valores o posiciones del orden moral constitutivo de una cultura política formada históricamente, dicho entramado normativo define repertorios de posibilidades que delimitan los márgenes de maniobra del pensamiento y la acción política de los individuos. Se deduce de lo anterior que la cultura política no es solamente un conjunto de orientaciones funcionales que tiende a estabilizar el sistema político.⁴⁹ El orden moral que sirve de base a valores y creencias directamente asociadas con la acción y la participación políticas, no es más un “rol” (como se le denomina en la teoría parsoniana de los sistemas sociales) sino una *identidad política*.

Otra versión reciente de la cultura política propone desagregarla en tres niveles de análisis: las dimensiones *macro*, *meso* y *micro*. El nivel macro de la cultura política apunta a los símbolos, valores, identidades y prácticas que tienen un

ritmo de cambio gradual situado en la larga duración. Las reglas del juego político vale decir, la forma como una comunidad política se organiza a sí misma constituye el nivel intermedio o meso nivel. Finalmente, el micro nivel corresponde a la lucha política cotidiana por lo que se ubica en la coyuntura, o para utilizar la metáfora de Braudel, el tiempo breve. Cada nivel de la cultura política está sometido a una permanente tensión entre estabilidad y cambio, de modo que la dirección de los procesos puede derivar en trayectorias aparentemente contradictorias, que dependerán de la forma en que se asimilen las tensiones intra e inter niveles. En consecuencia, la cultura política deja de ser un conjunto definido a priori de orientaciones políticas para transformarse en un instrumento de construcción de la política en varios planos.⁵⁰ En síntesis, es posible definir la cultura política como *un conjunto de valores, ideas y principios que conforma un patrón histórico de vinculación entre gobernantes y gobernados que delimita las posibilidades reflexivas, cognoscitivas y prácticas de la acción política individual o colectiva.*

Espacio Público. La Manufactura del Sentido de la Política

Esfera Pública y Democracia. Modelos de Análisis

Un año antes de la publicación de la obra de Almond y Verba *The Civic Culture*, apareció en Alemania el libro *Historia y Crítica de la Opinión Pública* del

⁴⁹ Richard Topf, "Political Change and Political Culture in Britain, 1959-1987." John R. Gibbins, *Op. cit.* pags. 52-80.

⁵⁰ Brian Girvin, "Change and Continuity in Liberal Democratic Political Culture." *Ibid.* pags. 31-51.

filósofo alemán Jürgen Habermas, texto que sienta las bases de una tradición analítica alternativa del concepto de cultura política. El concepto fundamental no es aquí la internalización de valores y normas sino una perspectiva estructural-histórica centrada en la noción de espacio público. A diferencia del modelo de la cultura cívica, en el esquema de Habermas la cultura política se define a partir de la conformación de una esfera pública. Al igual que Parsons, Habermas es consciente de la importancia del concepto de cultura política como un eslabón intermedio que se expresa analíticamente en la dicotomía público/ privado, e históricamente en la distinción de los ámbitos correspondientes al Estado y la sociedad civil.

Desde sus primeros trabajos Habermas se interesó en el desarrollo y conformación de la esfera pública como principio discursivo de la formación de la voluntad popular sobre la cual se funda. Por esfera pública Habermas entiende aquella parte de la vida social institucionalizada en la cual la opinión pública somete a discusión -contando con posibilidades reales de cambio- el contenido del discurso político.⁵¹ En este punto, Habermas supone que la vida política de una sociedad puede ser discutida abiertamente, que el debate se desarrolla conforme a criterios argumentativos racionales y no por simple apelación a la autoridad, el dogma o la tradición. El procedimiento y la presuposición de un discurso argumentativo libre son las bases que justifican aquí cualquier opinión.⁵² Esto es lo que distingue la

⁵¹ Jürgen Habermas, "Prefacio a la Nueva Edición Alemana de 1990." *Historia y Crítica de la Opinión Pública*. Gustavo Gili. Barcelona, 1994. pags. 1-36.

⁵² John Keane, *La Vida Pública y el Capitalismo Tardío*. Alianza Editorial. México, 1992. pags. 213-299.

opinión pública de otras formas de comunicación política -como es el caso de los prejuicios colectivos por ejemplo-.

Por medio de un detallado análisis histórico Habermas rastrea la emergencia de una opinión pública a lo largo de los siglos XVIII y XIX en la forma de clubes, periódicos y revistas que ayudaron a consolidar la división entre sociedad civil y sociedad política. La esfera pública reemplazó gradualmente el dominio de la tradición por el dominio de la comunicación argumentativa, sostiene Habermas. Un número creciente de agentes privados excluidos de las instituciones políticas dominantes -industriales, comerciantes, etc.- se interesaban cada vez más en los asuntos del gobierno, gracias al rápido desarrollo de una economía de mercado que sobrepasaba los límites impuestos por cualquier autoridad. La esfera pública empezó a reclamar el derecho a representar el interés general, pese a que en un principio sus únicos participantes eran miembros de la alta burguesía educada.⁵³

No obstante, la creciente base social de esta esfera pública no implicó en ningún momento un compromiso con la autodeterminación racional del individuo, fuera en el ámbito de sus actividades económicas o dentro de los límites de la política. El principio ilustrado de la libertad de pensamiento y de una formación discursiva independiente de la opinión pública estuvo siempre distante de la realidad, y tal discrepancia se incrementaría con el desarrollo de la economía capitalista. Poco a poco la prensa cambió el carácter de su involucramiento en el

debate político pasando de una actividad motivada por la convicción y los valores, a otra regida primordialmente por el interés privado. La esfera pública se transformó: en las sociedades industriales de capitalismo avanzado se redujo y fue comprimida a su mínima expresión.⁵⁴

El desarrollo del capitalismo alteraría la lógica reproductiva del sistema modificando la estructura de la relación Estado-sociedad. Habermas menciona dos tendencias determinantes a este respecto: 1. el incremento de la intervención estatal con el fin de estabilizar el crecimiento económico y disminuir la inflación, 2. la progresiva interdependencia entre investigación y tecnología que transformaría a la ciencia en la principal fuerza productiva. En consecuencia, afirma, el tejido de la estructura social no puede ser analizado de la misma manera. Base y superestructura de una sociedad pasan a ser estudiadas como entidades separadas, al mismo tiempo que sociedad civil y Estado conforman dos esferas diferenciadas. A partir del momento en que la sociedad civil no puede regularse autónomamente a través del mercado, sino que necesita de la participación estatal, la naturaleza de las relaciones entre base y superestructura postulada por el marxismo clásico tiene que ser reformulada.⁵⁵

Habermas propone un modelo teórico que incorpora tres niveles de análisis: Estado, mercado y esfera pública. Sin embargo, a pesar de su riqueza explicativa su

⁵³ Jürgen Habermas, *Op. cit.* pags. 124-171.

⁵⁴ De McLuskie, "Against Transformation of Communication into Control: Continuities in the Critical Theory of Jürgen Habermas," *Journal of Communication*, invierno de 1993. pags. 154-165.

propuesta plantea varios interrogantes. En primer lugar, el filósofo alemán no puede conciliar el análisis formal del concepto, es decir la ubicación social de la esfera pública, con una exposición del contenido de la misma. La razón de tal incompatibilidad entre ambas dimensiones radica en que su modelo está determinado por una división fundacional previa, que divide el espacio de lo político y lo social en la gran dicotomía público/privado. De esta manera, si bien la esfera pública es un espacio de expresión discursivo del pensamiento y la práctica política, los individuos que participan en este espacio ingresan con identidades políticas ya formadas que preceden su participación en dicho ámbito.⁵⁶

El espacio donde se forman los ciudadanos no es propiamente hablando el de la cultura política definida como esfera pública, más bien es el ámbito de la sociedad civil o el Estado, que a través de procesos de socialización e internalización de valores y normas, modela la identidad de los sujetos participantes. En consecuencia, la constitución de la esfera pública deriva (al igual que en el modelo de Parsons) de un espacio social preexistente configurado por la sociedad de mercado, rasgo que contribuiría a explicar el agotamiento de su potencial crítico y formativo.⁵⁷

De lo anterior se desprende una invitación sugerente para repensar la noción de lo público en México. La paulatina modificación del entramado social subyacente

⁵⁵ Jürgen Habermas, *Ciencia y Técnica como Ideología*. Tecnos. Madrid, 1986. pags. 53-112. pags. 53-112.

⁵⁶ *Ibid.* pags. 24-28.

a la modificación de las relaciones Estado-mercado y Estado-sociedad civil, nos da la pauta para llevar a cabo una relectura del contenido discursivo de la esfera pública. Ambito que se define como *el espacio de la vida social que define la importancia histórica que asumen valores, símbolos y normas en el proceso de formación y organización de la sociedad como portadora de la opinión pública*. De esta manera, podemos sortear los problemas expuestos líneas arriba, que señalan la incongruencia analítica entre forma y contenido del concepto. Lo que nos conduce a tomar la variable opinión pública como indicador tanto de la erosión de la cultura de las mayorías absolutas, como de la gradual emergencia del disenso y el pluralismo político en la esfera pública. Consecuentemente, el concepto se analiza mediante la información proveniente de encuestas realizadas a lo largo del período de estudio.

Gobernabilidad. La Dimensión Suspica de la Reflexión

Arqueología del Concepto

A mediados de la década de los setenta tres influyentes “think tanks” dieron a la luz pública un libro destinado a ejercer una decisiva influencia en las controversias académicas entre keynesianos y monetaristas, respecto al destino último del Estado de bienestar. Su mayor impacto no se produjo sin embargo, en los corredores del docto escrutinio universitario, sino en el plano del debate acerca de

⁵⁷ Alberto J. Olvera Rivera, “El Concepto de sociedad Civil en una Perspectiva Habermasiana.” *Sociedad*

puntos concretos de la instrumentación de políticas públicas alrededor de los partidos demócrata y republicano en los Estados Unidos, laborista y conservador en la Gran Bretaña, y demócratacristiano y socialdemócrata, en la ex República Federal Alemana. El título del libro era por demás provocador: *The Crisis of Democracy*, los autores, Samuel Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki.

La tesis central del texto semeja una paradoja de la historia. En la versión del liberalismo clásico del siglo XIX, John Sturt Mill conceptualiza democracia y capitalismo como dos polos inestables de una relación a todas luces ambigua.⁵⁸ A principios del siglo XX los marxistas se proponen abatir el capitalismo sacrificando la democracia.⁵⁹ Medio siglo más tarde, el neoliberalismo retoma las tesis de Mill y reformula sutilmente la propuesta original: equilibrar la democracia para salvar el capitalismo. Este *leit motiv* se convertiría en el grito de guerra del pensamiento neoconservador al mismo tiempo que un catalizador de la creciente influencia de la derecha en la segunda postguerra.⁶⁰

El libro significó el preámbulo de una serie de textos que examinaban el problema de la sobrecarga de las democracias industrializadas de Europa Occidental y Norteamérica. Lo anterior condujo a un nuevo objeto de análisis para las ciencias sociales, particularmente en el caso de la ciencia política y la sociología: los

Civil. Análisis y Debates. no. 1. México, 1996, pags. 31-44.

⁵⁸ John Stuart Mill, *Del Gobierno Representativo*. Tecnos. Madrid, 1985. pag. 100.

⁵⁹ Norberto Bobbio, *El Futuro de la Democracia*. FCE. México, 1989.

⁶⁰ Samuel P. Huntington, Michel Crozier y Joji Watanuki, *The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Comission*. New York University Press, 1975.

problemas de gobernabilidad de los sistemas políticos. Tema que prepararía el camino a la exploración de un terreno intelectual que con el tiempo se convertiría en uno de los temas dominante del análisis de la disciplina. Se trata del debate abierto por los procesos de cambio político y las denominadas transiciones a la democracia.

Los problemas de gobernabilidad de un régimen político en proceso de cambio han adquirido en los últimos años una creciente importancia en México y América Latina, lo que se explica en gran medida por el inicio del proceso de apertura política todavía en curso en nuestro país. También recientemente la palabra ingobernabilidad ha aparecido con mayor frecuencia en la pluma de los analistas políticos, como un insumo metodológico de gran valor heurístico para explicar algunos de los conflictos económicos, políticos y sociales recientes.⁶¹ Resulta fundamental por tanto, empezar con un breve examen de las diferentes perspectivas analíticas que han estudiado el problema de la gobernabilidad de un sistema político.

Los Diversos Enfoques

El término gobernabilidad aparece recién en la literatura política -apenas en la edición castellana de 1983 del *Diccionario de Política* de Bobbio, Mateucci y Pasquino. No obstante, los análisis sobre la acción del gobierno, las formas en que

⁶¹ Arturo Valenzuela, "Presidencialismo Devaluado. Nueva Gobernabilidad en América Latina." *Etcétera*, enero, 1995. pags. 16-21; Rogelio Hernández y José Luis Reyna "El Riesgo de la Ingobernabilidad de

éste se adapta a su entorno, las modalidades que asumen los procesos de toma decisiones de las políticas públicas y la percepción que producen las mismas en los destinatarios finales, han sido una constante en el ejercicio de la disciplina. Pese a ello, no es una tarea fácil definir el concepto de gobernabilidad. A primera vista parece una noción tan esquivada, que en opinión de algunos autores puede clasificarse como una especie de *catch-all-word*.⁶² Justamente la naturaleza interdisciplinaria del problema hace necesaria la cooperación de distintas ramas del saber, si queremos que nuestra investigación no resulte incompleta o sesgada.

La palabra gobernabilidad se empleó en un principio para describir una situación de funcionamiento fluido u homeóstasis de un sistema económico -es decir, un sistema caracterizado bajo ciertas condiciones, por su ubicación a lo largo de una ruta de equilibrio a largo plazo. Algunas de las definiciones del concepto de gobernabilidad lo asocian habitualmente con: a).- la toma de decisiones gubernamentales oportunas, b).- la efectividad de esa toma de decisiones, c).- la legitimidad que induce en los destinatarios o la aceptación social de las mismas, y d).- su coherencia en el tiempo.⁶³

En su acepción más general el concepto de gobernabilidad se define como el conjunto de condiciones favorables a la acción del gobierno o consustanciales al

México. Los Últimos Meses del Gobierno de Carlos Salinas." *Estudios Sociológicos*, vol. XII, no. 36. 1994. pags. 515-532.

⁶² Angel Flisfisch, "Gobernabilidad y Consolidación Democrática: Sugerencias para la Discusión." *Rev. Mexicana de Sociología*. México, julio-septiembre, 1989. pags. 113-133.

⁶³ Anthony H. Birch, "Overload, Ungovernability and Deligitimation: the Theories and the British Case." *British Journal of Political Science*, no. 14. Londres, 1984. pags. 135-160.

mismo, en tanto que la ingobernabilidad es una disfunción del sistema que obstaculiza la acción gubernamental.⁶⁴ En su gran mayoría las definiciones de la gobernabilidad de un régimen político la hacen depender del cumplimiento de dos requisitos básicos: legitimidad y eficacia. Ello resulta de suma utilidad si consideramos que nos ayuda a visualizar desde otro ángulo de análisis, el complejo problema de las relaciones entre Estado y sociedad civil. Perspectiva que nos ayuda a evitar la posición que restringe el concepto de gobernabilidad a la esfera de acción del Estado, en tanto medio de formulación y ejecución de aquellas decisiones de orden político, social o económico que se ejercen sobre la sociedad.⁶⁵

Esto es particularmente riesgoso en países como México donde la identificación entre gobierno, sistema político y Estado, ha sido un problema recurrente debido a la naturaleza del régimen político. Surge entonces un interrogante esencial: de qué manera se combinan mercado y democracia de modo que garanticen la estabilidad y permanencia de esta última. Con frecuencia suponemos que hay una correlación positiva entre autoritarismo e ingobernabilidad si lo vemos desde la perspectiva de la legitimidad de tales regímenes. Una vez más sin embargo, México constituye un caso por demás interesante, debido a la peculiar

⁶⁴ Manuel Alcántara Sáez, "Los Problemas de Gobernabilidad de un Sistema Político," Mauricio Merino (coord.), *Cambio Político y Gobernabilidad*. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México, 1992. pags. 19-55.

⁶⁵ Samuel P. Huntington, *La Tercera Ola. La Democratización a Finales del Siglo XX*. Paidós. Buenos Aires, 1994.

característica de un modelo de desarrollo político, que consiguió integrar históricamente déficit democráticos con superávits de gobernabilidad.

Con la creciente participación del Estado en la economía impulsada en la segunda postguerra por la teoría keynesiana del empleo y la demanda efectiva, la operación del gobierno en el ámbito de la economía adquirió tal grado de inclusión, que se alteró la propia dinámica de su funcionamiento, así como sus vínculos con la sociedad civil. En este nuevo escenario el gobierno quedaba potencialmente expuesto a los vaivenes de factores que escapaban a sus posibilidades de gestión - tal es el caso por ejemplo, de las fluctuaciones de la economía internacional. A partir del momento en que la gestión pública enfrenta crecientes dificultades, el término gobernabilidad pasa a ocupar un lugar central en la reflexión teórica sobre el Estado.⁶⁶

De igual forma, el estudio de los procesos de transición a la democracia contribuiría también a colocar en el centro de la discusión el tema de la gobernabilidad, aunque desde una óptica diferente a la que había inspirado el trabajo pionero de Huntington, Crozier y Watanuki. Si a mediados de la década de los setenta el problema parecía ser el desequilibrio entre democracia y mercado, poco tiempo después la democracia sería conceptualizada como el complemento insustituible de una economía de mercado. Si a fines de los setenta democracia y

⁶⁶ Ralf Dahrendorf, "Effectiveness and Legitimacy: On the Governability of Democracies." *Political Quarterly*, vol. LI, no. 4. pags. 393-410.

governabilidad parecían principios incompatibles entre sí, posteriormente serían vistos como complemento necesario uno del otro.

A grandes rasgos, cuatro son las perspectivas analíticas que han estudiado el fenómeno de la gobernabilidad: 1o. los conservadores, entre cuyos representantes destacan Robert Nozick y Friederich Von Hayek, 2o. el pensamiento neoconservador representado por la obra de Daniel Bell, Seymour Martin Lipset y Samuel Huntington, 3o. la escuela liberal con Samuel Brittan a la cabeza, y 4o. el neomarxismo, que abarca una amplia gama de teóricos no ortodoxos como Jürgen Habermas, Claus Offe y Alan Wolfe entre otros.

El conservadurismo parte de una defensa a ultranza de la economía de mercado y es hostil por principio al poder estatal. Considera que toda acción del Estado no puede ir más allá del punto en que perturbe la garantía de los derechos individuales, cualquier intervención del Estado en la sociedad que atravesase este umbral despierta la sospecha de totalitarismo. Para los conservadores la gobernabilidad es una cuestión de fondo y no una simple tesis sobre la efectividad de la acción del gobierno. En pocas palabras, si la sociedad es capaz de autoregularse la intervención del gobierno es innecesaria, y sólo podrá justificarse cuando quede delimitada por los límites infranqueables de los derechos individuales.⁶⁷ Cualquier otro camino lleva irreversiblemente a la esclavitud y la

⁶⁷ Robert Nozick, *Anarquía, Estado, y Utopía*. FCE. México, 1988.

servidumbre. Desde este enfoque, la gobernabilidad se convierte en un problema sólo en la medida que la sociedad recibe interferencias por parte del Estado.⁶⁸

El planteamiento neoconservador analiza la ingobernabilidad como resultado de un exceso de demandas a las que el Estado responde con la expansión de los servicios públicos y el déficit presupuestal, situación que provoca una aguda crisis fiscal que desequilibra tanto las instituciones políticas como el funcionamiento de mercado de la economía. Para el neoconservadurismo, la democracia puede convertirse en una amenaza si sobrecargamos las instituciones políticas con demandas a las que no es posible dar satisfacción por falta de recursos. Por lo tanto, la gobernabilidad es aquí un problema preciso: no se trata ya de optimizar las acciones del gobierno, sino más bien de eliminar toda intervención que vulnere la efectividad del mercado. El objetivo explícito es salvaguardar las instituciones democráticas de los excesos que pudieran volverlas incompatibles con el desempeño de una economía de mercado.⁶⁹

En sus últimos trabajos Huntington desplazó el énfasis desde el tema de la ingobernabilidad de las democracias, mostrando un creciente interés en un tema que inicialmente no formaba parte del vocabulario intelectual neoconservador: los problemas de gobernabilidad de los nuevos regímenes democráticos, en un contexto de inflación, pobreza, bajas tasas de crecimiento y elevados niveles de endeudamiento externo. El pesimismo acerca del futuro de las instituciones

⁶⁸ Friederich Von Hayek, *Camino de Servidumbre*. Alianza Editorial. Madrid, 1985.

democráticas que caracterizaba sus primeros trabajos, dio paso a una actitud más optimista respecto a los procesos de transición en Europa Oriental y América Latina.⁷⁰

La visión liberal comparte con el conservadurismo el énfasis respecto a la importancia de los derechos individuales y la primacía de la ley, pero adopta una posición diferente cuando considera las tensiones entre Estado y sociedad civil resultado del activismo gubernamental en la economía. Señalan que la democracia se halla sometida a una constante presión inflacionaria debido a que el gobierno es visto por sindicatos y ciudadanos como un potencial botín proveedor de servicios. Su preocupación fundamental es reordenar la relación entre Estado y mercado, con el propósito de preservar la libertad política y económica, refrenando las propensiones desmedidas a la igualdad.⁷¹ Desde el punto de vista de Samuel Brittan, una condición del éxito de esta estrategia es la depuración de la vida política de expectativas igualitarias. La restauración del mercado eliminaría paulatinamente las presiones que ejercen los diversos grupos de interés organizados sobre el Estado. Desde la perspectiva liberal, la gobernabilidad implica la supresión de la autonomía

⁶⁹ Samuel P. Huntington, et. al. *Op. cit.* pag. 27.

⁷⁰ Samuel P. Huntington, "The Ungovernability of Democracy." *The American Enterprise*, vol. 4, nov.-dic., 1993. pags. 34-37.

⁷¹ Milton Friedman, *Capitalismo y Libertad*. Rialp. Madrid, 1977.

de la política hasta el punto de hacer coincidir su lógica con los límites establecidos por el mercado.⁷²

A diferencia de las perspectivas anteriores la corriente neomarxista toma como punto de partida no tanto el alcance de la intervención del Estado en la economía, sino la consideración de los factores que posibilitan la aceptación subjetiva del poder estatal.⁷³ Así, el tema de la legitimidad se encuentra íntimamente vinculado a la pregunta relativa a los mandatos de obediencia que emanan del orden político. La premisa analítica básica del marxismo contemporáneo enfoca la gobernabilidad, como un tema ligado al estudio de la legitimidad de los sistemas políticos.⁷⁴ En consecuencia, los problemas de gobernabilidad de las sociedades capitalistas son para el neomarxismo, problemas de legitimidad ocasionados por contradicciones entre los subsistemas político y económico. Los trabajos de Jürgen Habermas y Claus Offe han enfatizado la existencia de una doble crisis tanto de legitimidad como de racionalidad, desde el momento en que la burocracia no puede hacer compatibles los mecanismos de control provenientes del sistema económico, con los imperativos propios del sistema político.⁷⁵

Conforme a lo visto hasta aquí queda claro que resulta difícil aprehender una noción tan elusiva como la gobernabilidad, especialmente si tomamos en cuenta que

⁷² Samuel Brittan, "The Economic Contradictions of Democracy." *British Journal of Political Science*, no. 5, 1975. pags. 129-159.

⁷³ Claus Offe, *Las Contradicciones del Estado de Bienestar*. Alianza Editorial. Madrid, 1989.

⁷⁴ Alan Wolfe, *Los Límites de la Legitimidad*. Siglo XXI. México, 1987.

⁷⁵ Jürgen Habermas, *Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío*. Amorrortu. Buenos Aires, 1986.

se trata de un concepto multidimensional que abarca la interacción de lógicas diferentes, aunque superpuestas e interactuando unas sobre otras. En términos generales comprende al menos cinco variables: *el sistema político, los actores sociales, la cultura política y el entorno internacional*. La gobernabilidad de un régimen político no es por tanto, resultado exclusivo de la dinámica de sus instituciones, en la medida que ellas no están suspendidas en un espacio social étérico. Queremos hacer hincapié en que no hay una relación de determinación unicausal que vaya de lo estatal a lo social, sino una interdependencia mediada a todos los niveles.⁷⁶

Considerando que nuestro interés recae fundamentalmente en el tercero de los componentes enumerados, los elementos restantes se analizan únicamente en su dimensión relacional con el nivel de la cultura política. Por tanto, si bien en su acepción más amplia la gobernabilidad comprende el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas e institucionales, que favorecen y legitiman la acción del gobierno en su relación con la sociedad civil, la noción que adoptamos se centra fundamentalmente en la cultura política. En consecuencia, podemos definir la gobernabilidad como *la capacidad de un repertorio de valores institucionalizado de absorber las tensiones provocadas por el cambio político*. La gobernabilidad es un atributo propio de una comunidad política según el cual las instituciones de

⁷⁶ Edgar Boeninger, "La Gobernabilidad un Concepto Multidimensional." *Estudios Internacionales*. Universidad de Chile, enero-marzo, 1994. pags. 79-94.

gobierno actúan en el contexto de un esfera pública aceptado por los integrantes de esa colectividad.

Así entendida, la gobernabilidad se basa en la validez cognoscitiva y emotiva de valores internalizados, en la legitimidad de un orden político que provee de dignidad normativa a formas de conducta prácticas que indican al individuo por qué “debe” conducirse de una y no de otra manera, dotando de sentido racional a las explicaciones cotidianas acerca de por qué las cosas ocurren conforme a ciertos parámetros.

II

MARCO TEORICO-METODOLOGICO

Ubicación del Problema

Perspectivas de Análisis sobre la Política en México

Las peculiaridades históricas del quehacer político en México han sido fuente inagotable de fascinación para propios y extraños a lo largo del presente siglo. Por esa razón, las modalidades de interpretación y estudio del régimen político mexicano son a tal punto diversas, que han proliferado clasificaciones de la más variada índole. Algunos autores sugieren la existencia de cuatro paradigmas teóricos dentro de los cuales es posible agrupar la mayor parte de los trabajos desarrollados en los últimos años.

Primero, el modelo clientelista, que considera la creación y recreación de redes de relaciones de dependencia recíproca entre patrones y clientes, como el mecanismo de integración política central del sistema. *Segundo*, el paradigma pluralista, cuyo interés académico se desplazó del análisis de las condiciones de emergencia de la democracia, hacia el estudio de los problemas subyacentes a los procesos de consolidación democrática. Mucho tiempo desacreditado por la emergencia de otros modelos explicativos del comportamiento político, ha regresado con fuerza a la agenda de discusión, en el contexto de los procesos democratizadores de los últimos años que estimularon el desarrollo de sistemas electorales más competitivos.

Es el retorno de un viejo tema fundacional de la sociología política que daría origen al interés por el análisis de la cultura política: el estudio de lo que Lipset llamó las condiciones sociales de la democracia. *Tercero*, el enfoque autoritario-corporativo, que parte del supuesto de que el Estado es el factor explicativo crucial de la lógica del sistema político en su conjunto. *Cuarto*, por último la perspectiva marxista, que considera clave para entender la lógica de la historia política del México contemporáneo, los procesos de acumulación de capital a escala mundial y las relaciones de clase que de él se derivan.¹

El modelo pluralista se exportó hacia América Latina con la denominación de origen de teoría de la modernización. Sus raíces intelectuales se hunden en tres tradiciones teóricas. Una vertiente económica que establece una correlación positiva entre desarrollo económico y democratización, una perspectiva sociológica anclada en la noción de sistema social que defiende la idea de que es la presencia de una serie de condiciones sociales -urbanización, educación, tamaño de la clase media, etc.-, lo que acrecienta las posibilidades democratizadoras de un régimen político. Finalmente, el enfoque de la cultura política que subraya el peso que tienen los valores para la consolidación y desarrollo de un sistema político democrático.² Las tres orientaciones conciben el desarrollo político como un proceso de cambio pacífico hacia sistemas de gobierno estables, así como formas más democráticas de

¹ Viviane Brachet-Márquez, "Explaining Sociopolitical Change in Mexico: the Case of Mexico." *Latin American Research Review*, vol. 27, 1992. pags. 91-122.

ejercicio del poder, derivadas de los efectos del desarrollo económico experimentado por las sociedades tradicionales en su tránsito hacia la modernidad. El texto que mejor condensa los tres enfoques dedicados al estudio de las condiciones sociales de la democracia es el libro de Seymour Martin Lipset *El Hombre Político*.³

Los investigadores de la política mexicana que adoptaron el enfoque pluralista buscaron la evidencia empírica que respaldara sus argumentos, en el florecimiento de un proceso general de desarrollo político que se habría llevado a cabo bajo la influencia de la Revolución de 1910. El debate se centró por tanto, en la trascendencia de sus efectos político-sociales. Algunos sostenían que la toma violenta del poder había acelerado el aniquilamiento de un sistema político insuficientemente institucionalizado, que había logrado preservarse hasta 1917. Otros opinaban que la nueva política postrevolucionaria constituía una prolongación del pretorianismo de las prácticas políticas porfiristas.

Para algunos de los primeros teóricos de esta corriente de interpretación como Howard Cline, Robert Scott y Samuel Huntington, el proceso de institucionalización política del México contemporáneo se encaminaba paulatinamente hacia la democracia. El *Partido Nacional Revolucionario* y sus sucesores el *Partido de la Revolución Mexicana*, y el *Partido Revolucionario*

² J. A. Bill y R.L. Hardgrave, "Modernización y Desarrollo Político." Teresa Carnero Arbat (ed.), *Modernización, Desarrollo Político y Cambio Social*. Alianza Universidad. Madrid, 1992. pags. 101-150.

Institucional, eran considerados la fuerza política aglutinante que había conseguido satisfacer a tantos como era posible y a tan pocos como fuera prudente.⁴ A su juicio, el acelerado proceso de urbanización e industrialización iniciado en 1940, representaba un factor primordial en la instrucción de las masas que acabaría por ciudadanizarlas, transformándolas en individuos integrados a un sistema plenamente democrático.

La perspectiva de análisis centrada en el autoritarismo surgió de la crisis del paradigma pluralista. Luego de los procesos de descolonización de la postguerra, muchos de los países latinoamericanos no sólo se apartaron de la ruta democratizadora predicha por la teoría de la modernización, sino que aparecieron situaciones contradictorias e inexplicables de acuerdo a los supuestos del modelo. Emergieron regímenes autoritarios en países que habían alcanzado considerables niveles de modernización, lo que desmentía la hipótesis que correlacionaba positivamente desarrollo económico y desarrollo político.

El paradigma tuvo que ser revisado y esa tarea la emprendieron David Apter, y Samuel Huntington entre otros, quienes argumentaron que la modernización era en sí misma inestable, y que el desarrollo político no debía quedar asociado a un prototipo de organización política específica. Dicho en otras palabras, no había una

³ Seymour Martin Lipset, "Las Condiciones del Orden Democrático." *El Hombre Político. Las Bases Sociales de la Política*. EUDEBA. Buenos Aires, 1977. pags. 25-158.

⁴ Véase Howard Cline, *México: Revolution to Evolution: 1940-1960*. Oxford University Press, 1962, Robert Scott, *Mexican Government in Transition*. University of Illinois Press, 1964, y Samuel Huntington, *El Orden Político en las Sociedades en Cambio*. Paidós. Buenos Aires, 1992.

propiedad que pudiera ser aplicable a cualquier tipo de régimen político al margen de la historia.⁵ El problema de esta perspectiva radica en que concebía modernidad y tradición como dos polos opuestos mutuamente excluyentes. De esta manera, la propia noción de cambio social se basaba en el supuesto de transición de una etapa a la otra en una secuencia de momentos sucesivos y necesarios. Nuestro destino era ser modernos y para ello debíamos dejar atrás la tradición.

La Interpretación del Autoritarismo

Una de las líneas de investigación más influyentes sobre el sistema político mexicano fue inaugurada por el politólogo español Juan José Linz, quien introdujo su teoría del régimen autoritario a principios de la década de los sesenta, en un texto dedicado a analizar el régimen político español bajo la dictadura franquista.⁶ Linz propone una tipología alternativa a la rígida dicotomía democracia-totalitarismo e introduce la noción de regímenes políticos autoritarios, partiendo de la hipótesis de que éstos tienen una forma particular de consecución y preservación de su legitimidad, así como de articulación-agregación de intereses y mecanismos distintivos de toma de decisiones. A la luz de esta lectura, ciertos aspectos del régimen político mexicano parecían encajar satisfactoriamente con una serie de rasgos definitorios de los sistemas políticos autoritarios.

⁵ Samuel P. Huntington, "Political Development and Political Decay." *World Politics*, no. 17, 1965. pags. 386-430.

⁶ Juan Linz, "Una Teoría del Régimen Autoritario. El Caso de España." *Sociedad y Política en España*. Siglo XX. Madrid, 1963.

El primero de ellos es un pluralismo limitado. En contraste con el totalitarismo, Linz sostiene que en los sistemas autoritarios, la distinción entre Estado y sociedad no se suprime en ningún momento. Asimismo, los regímenes autoritarios carecen de una ideología, tienen más bien una mentalidad que mezcla diversos elementos y admite distintas interpretaciones. Otro rasgo importante es la apatía. Estos regímenes se caracterizan por una exigua movilización política, que supone que los habitantes del país aceptarán pasivamente los dictados del gobierno y se abstendrán de actividades que vayan en contra del statu quo. Asimismo, predomina un sólo partido, aunque algunos sistemas autoritarios toleran fórmulas legales multipartidistas. Este tipo de regímenes combina formas de legitimidad carismática con formas de legitimidad legal, y tiende a la modernización de sus mecanismos de legitimación política.

Por último, Linz considera que la elite autoritaria es heterogénea tanto en su ideología como en sus mecanismos de reclutamiento, lo cual implica que los militares son desplazados gradualmente de la esfera política. Linz no analiza en detalle el caso de México y se limita a señalar que el régimen político mexicano es una evolución de formas caudillistas con rasgos oligárquicos modernizantes, que tiende hacia expresiones más depuradas y estables de estatismo orgánico. Los autores más representativos de esta línea de análisis son Susan Kaufman y Roger Hansen, quienes alegan que el sistema político mexicano no se basa en el nivel de institucionalización alcanzado, sino en el férreo disciplinamiento de las elites

políticas de modo tal que no trasciendan los límites permitidos por la negociación, hecho que contribuye a incrementar su capacidad para concentrar el poder.⁷

Otra versión del paradigma autoritario sostiene que el sistema político mexicano es resultado de una evolución gradual que hunde sus raíces en la revolución y el porfiriato, su característica más relevante es la inclusividad del orden político, especialmente el partidario. Dentro de esta vertiente analítica, una de las interpretaciones más conocidas es la de Lorenzo Meyer, quien estudia con detenimiento los patrones de continuidad y cambio entre el sistema político porfirista y el régimen postrevolucionario. Entre otras cosas, destaca que en ambos regímenes los procesos electorales tienen un significado muy restringido, si bien el sistema se las arregla para contar siempre con una oposición leal.

Con respecto a las diferencias, Meyer destaca que durante el porfiriato la presidencia tenía un carácter personalista que contrasta con la institucionalización del régimen postrevolucionario; igualmente señala que no hay una clara diferenciación entre elites políticas y económicas, mientras que el régimen surgido de la revolución produjo una separación entre elites políticas y elites económicas como resultado de la formación de una nueva clase política.⁸ Subraya también las continuidades con el Antiguo Régimen y sugiere tres momentos clave del proceso

⁷ Susan Kaufman, *The Mexican Profit-Sharing Decision: Politics in an Authoritarian Regime*. Princeton University Press, 1975.

⁸ Lorenzo Meyer, "Historical Roots of the Authoritarian State in Mexico." José Luis Reyna & Richard S. Weinert (eds.), *Authoritarianism in Mexico*. Institute for the Study of Human Issues. Philadelphia, 1977. pags. 3-22.

de institucionalización del nuevo régimen: la promulgación de la constitución de 1917, la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 y, finalmente, la etapa de redefinición de los mecanismos formales e informales del quehacer político en la década de los treinta, durante el período cardenista. Así, el significado de la política se metamorfosea en la dirección de una mayor corporativización y el modelo autoritario asume su forma clásica.

Evolución del Estudio de la Cultura Política en México

De las diferentes perspectivas de estudio sobre la política en México el enfoque culturalista encontró desde sus inicios terreno fértil a sus exploraciones. Uno de los efectos más tangibles de la Revolución de 1910 fue sin lugar a dudas la conformación de un sistema institucional, así como una peculiar tradición cultural de ejercicio de la autoridad pública y la obediencia política. Desde entonces, el estudio de la cultura política ha sido un tema de interés constante que como rejuvenecido espectro sedicioso, recorre la literatura del análisis sociopolítico en México. Sin temor a exagerar podemos afirmar que su discusión forma parte de un debate más amplio que comprende el estudio de nuestra propia definición e identidad nacionales. Una vez más la cultura política estaba detrás de muchas de las explicaciones de la especificidad de funcionamiento del sistema político mexicano.

En términos generales y aceptando el riesgo que implica toda clasificación de procesos en sí mismos multidimensionales y complejos, podemos afirmar que el estudio de la cultura política en México se ha abordado a partir de tres enfoques. 1º.

los escritores, que bajo la forma de la novela y el ensayo llevaron a cabo sugerentes, populares y exitosas tentativas de comprender la cultura e idiosincrasia nacionales; 2º. los antropólogos, quienes desde una perspectiva más académica, aspiraban a construir una teoría de la producción y reproducción de la cultura nacional en el ámbito político y social, y 3º. los sociólogos, politólogos y economistas, que abrazando con más o menos modificaciones la metodología de Almond y Verba la aplicaron al caso de México.

Cada una de estas perspectivas partía de supuestos teóricos e históricos diversos, que conformaron un registro de preocupaciones divergentes muchas veces opuestas. Dicha situación llevó a la adopción de metodologías sustantivamente diferenciadas. En algunos casos la falta de información empírica fue sustituida mediante coloridas descripciones de la singularidad de prácticas políticas y patrones culturales de ejercicio y aceptación de la autoridad, mientras que en otros llevó a una estricta aplicación de metodologías empíricas que permitieran justificar con un alto grado de confiabilidad, las conclusiones teórica extraídas del conjunto de datos recolectados.

Literatura

Históricamente fueron los llamados “pensadores” quienes primero se comprometieron, en la mejor tradición del ensayo político-filosófico y literario-cultural, con la empresa de erigir una teoría de la cultura nacional (en sus más variadas expresiones) que iba desde la definición de la idiosincrasia nacional, hasta

la caracterización del comportamiento y las actitudes políticas de los mexicanos. Tales interpretaciones se convirtieron con el correr del tiempo, en opinión autorizada y punto de referencia obligado de las investigaciones de la cultura política nacional. Como afirma Claudio Lomnitz, la tradición se convirtió en historia, la historia en psicodrama, y éste en la clave de interpretaciones culturales concretas del espacio de lo nacional.⁹

Colaborador externo de la revista cultural *Contemporáneos* compuesta por un grupo de intelectuales partidarios de las más heterogéneas orientaciones políticas como Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Jorge Cuesta y otros nombres no menos ilustres, Samuel Ramos representa un buen ejemplo de las disputas que caracterizaron el espacio público de lo nacional en las primeras tres décadas del presente siglo. El primer paso en la exploración de la cultura política nacional se llevó a cabo asomándose a la subjetividad del mexicano.

Samuel Ramos sería el primero en utilizar las técnicas del psicoanálisis y de filosofía de la cultura para trazar el mapa cognitivo de un objeto de estudio que se convertiría en campo de pruebas de las especulaciones filosóficas de incontables autores que vendrían después.¹⁰ Filósofo de profesión, ayudante de Vasconcelos en la revista *Antorcha*, paradójicamente fue el primero en seguir el camino inaugurado por Alfonso Reyes, para quien la localización privilegiada de lo mexicano se hallaba en la intimidad psicológica del individuo. Forrado con la armadura conceptual de

⁹ Claudio Lomnitz-Adler, *Las Salidas del Laberinto*. Joaquín Mortiz. México, 1995. pags 11-27.

Adler, Scheler, y Ortega y Gasset, en 1934 publica *El Perfil del Hombre en la Cultura en México*, libro que con los años se convertiría en un clásico en la materia. Su punto de partida es un concepto de cultura entendido como formas de vida -idea similar a la definición wittgensteiniana del lenguaje-, noción que hacía posible definir la especificidad de la cultura mexicana como una síntesis idiosincrásica de la cultura nacional con la cultura universal.

Precisamente es el estudio del ser nacional como forma de vida lo que lleva a Samuel Ramos a sondear las modalidades que asume la subjetividad social de nuestra circunstancia histórica. Apoyado en una perspectiva determinista, Samuel Ramos sostiene que el atributo distintivo de la cultura nacional es su carácter derivado; el proceso civilizatorio nacional es tan sólo una ramificación de la cultura europea. Si hasta aquí el razonamiento resulta tendencioso, su desarrollo posterior resulta abiertamente controversial. El desarrollo de su argumento no se detiene ahí sino que pasa a considerar ese rasgo como la esencia inmutable de nuestra cultura y por tanto un rasgo definitorio de la conciencia y cultura nacionales.¹¹ Nuestro destino histórico es la imitación de la cultura europea. Tal es el rasgo esencial de nuestra cultura nacional.

El fatalismo revestido de inmovilismo histórico de esta concepción se hace manifiesto en el hecho de que para Ramos, a diferencia de Reyes, no hay una oposición entre universalismo versus nacionalismo sino una derivación distorsionada

¹⁰ Abelardo Villegas, *La Filosofía en la Historia Política de México*. Porrúa. México, 1966.

de lo universal en lo nacional. Las raíces más profundas de esta relación asimétrica y anómala que determina una infatigable búsqueda de modelos y patrones de organización y de comportamiento político, social y económico ajenos, se hunden en la ignorancia de las especificidades de la realidad nacional en la que se pretende insertarlos.

Los espacios abiertos por el mito de la Revolución dieron la pauta a nuevas formas reflexivas que encontraron expresión cultural en el terreno fértil y abundante de la especulación sobre la identidad nacional, verdadero ejido espiritual usufructuado por pensadores ocupados en definir escrupulosamente los perfiles del ser nacional. Inspirados en los esquemas filosóficos de Heidegger y Ortega y Gasset, las meditaciones psico-poéticas del período anterior dieron paso a intelectuales como Octavio Paz o Leopoldo Zea, quienes pronto alcanzaron un alto grado de abstracción filosófica al plantear la pregunta sobre el Ser del mexicano. La búsqueda del espíritu nacional continuó inagotable solo que mudó su vieja piel psicoanalítica cambiándola por un nuevo atuendo: un concepto ontológico que funcionaba a la manera de un *aleph* explicativo. Partiendo de la definición heideggeriana del Ser como temporalidad, concluían que la tarea más urgente era encontrar las estructuras ontológicas subyacentes a lo mexicano, de manera tal que pudiéramos ubicar histórica y espacialmente los fragmentos del ser nacional.

¹¹ Samuel Ramos, *El Perfil del Hombre y la Cultura en México*. Espasa-Calpe. México, 1996. pags. 19-25.

En el contexto de esta discusión Octavio Paz publica en 1950 *El Laberinto de la Soledad*, libro que contiene su propuesta de interpretación del ser y tiempo nacionales. En el esquema interpretativo de Paz no es el complejo de inferioridad sino el sentimiento de soledad el hilo de Ariadna que nos ubica en el laberinto subjetivo de la identidad colectiva nacional.¹² Esta soledad es un sentimiento de desarraigo, pero también de conciencia de la peculiaridad de nuestro horizonte histórico. La soledad es diferencia, afirma Paz. Además, la soledad se ontologiza a partir del momento en que se revela incapaz de expresarse en una forma que proporcione una personalidad social propia. Es el carácter distintivo de nuestro ser el que persigue incansable la actualidad siempre traicionada de nuestra circunstancia histórica.

Sin embargo, en medio de la profusión autoimpuesta de ideologías ajenas a la realidad del país, Paz encuentra un sólo momento de autenticidad: la Revolución de 1910. La Revolución se concibe como un regreso a los orígenes, un descubrimiento, un compromiso y un reto a las tradiciones de pensamiento y organización sociopolítica, que se proponía levantar por sí misma la estructura de una transparencia que reflejara nítidamente la especificidad de nuestra verdadera tradición. Paz sugiere que la solución a la dicotomía universalismo-particularismo es la autenticidad. Esta constituye una síntesis diferenciada tanto de la estructura

¹² Octavio Paz, "Apéndice: La Dialéctica de la Soledad." *El Laberinto de la Soledad*. Cátedra. Madrid, 1993. pags. 341-361.

ontológica como de la temporalidad en la que se halla atrapado el desarrollo histórico.¹³

Pero ¿hasta donde se remonta tal autenticidad? La respuesta de Paz nos transporta varios siglos hacia atrás hasta las culturas prehispánicas. Es la continuidad con los valores mesoamericanos, más concretamente aztecas, lo que ayuda a explicar las peculiaridades de la mentalidad social y política del mexicano.¹⁴ Paz propone una nueva interpretación de la historia nacional donde la “barbarie” indígena termina por conquistar a la civilización hispano-europea, a tal grado que los vencedores son los valores y la cosmología aztecas. Un ejemplo claro de la trascendencia de la cosmovisión de los aztecas en la historia política del México contemporáneo es la ya célebre equiparación entre el sistema presidencial mexicano y los antiguos tlatoanis mesoamericanos.

La estructura política del México postrevolucionaria es otro indicador adicional de la influencia del pasado en nuestra cultura. Para Paz la fundación del PNR constituyó un paso más en la senda de la aniquilación del caudillismo y del reforzamiento del paradigma autoritario. Así, el pasado indígena es un factor que acentúa el problema de definir la identidad nacional de nuestro país, al convertirnos en ciudadanos de una cultura que no pertenece ni al tiempo de una tradición que quiere hacerse nuestra a fuerza de soñarla, ni al presente de un carácter nacional

¹³ Octavio Paz, “De la Independencia a la Revolución.” *Op. cit.* pags. 259-294.

ajeno que tampoco reconocemos como propio. Los rasgos distintivos de la cultura política en nuestro país se apoyan, desde la perspectiva de Paz, en la tragedia de un sincretismo que nos define como hijos de un pasado que nos determina, un presente que nunca acaba de ser él mismo, y una fuga incesante de nuestra actualidad histórica.

De lo anterior se deduce que una de las constantes del debate político nacional ha sido la búsqueda obsesiva de la modernidad. La democracia, en tanto componente irrenunciable del ser de esta modernidad, ha estado presente en el imaginario político mexicano desde la independencia, sea al nivel del discurso oficial o contestatario. No obstante, la democracia parecía al mismo tiempo, un objetivo muy distante de la cultura e identidad nacionales: en el mejor de los casos, una adaptación pintoresca a nuestro modo de vida idiosincrásico. Así surgió la dicotomía entre un México profundo o auténtico y un México real pero ficticio. Paradójicamente sin embargo, es este país ficticio el único que nos ha acompañado realmente como Estado-nación a lo largo de nuestra historia. Citando a Claudio Lomnitz podemos decir que “Al crear el mexicano mítico, los intelectuales y políticos mexicanos reproducen la fuente original de su melancolía que no es sino una modernidad a medias.”¹⁵

¹⁴ Rafael Montano Rodríguez, *De Raza a Cultura: Un Acercamiento Crítico al Concepto de Mestizaje y Mexicanidad en Vasconcelos, Ramos, Paz y Fuentes*. Tesis de Maestría. Ann Arbor. Michigan, 1996. pags. 31-47.

¹⁵ Claudio Lomnitz, *Op. cit.* pag. 323.

Antropología

A diferencia de los pensadores, los antropólogos se dedicaron a estudiar las formas culturales locales de internalización de la autoridad. Los enfoques han sido diversos y los temas variados. Uno de los antropólogos que más se ha ocupado, en distintos trabajos, de indagar explícitamente las peculiaridades de la cultura política nacional conectándolos con el hilo temático expuesto hasta aquí ha sido Roger Bartra. A diferencia de Octavio Paz, que en la década de los cincuenta todavía pensaba que la Revolución albergaba en su seno posibilidades históricas susceptibles de ser recuperadas, Bartra parte de un modelo más crítico en el que la cultura política aparece por primera vez explícitamente articulada como una variable interviniente de un modelo más amplio que comprende cuatro elementos: nacionalismo, legitimación, poder político y Estado.

Bartra empieza por analizar al igual que Ramos y Paz, las explicaciones que a lo largo del siglo XX se convirtieron en estereotipos del carácter mexicano. La diferencia más notable con los autores revisados líneas arriba radica en que para Bartra los estereotipos culturales no constituyen una casualidad fatal de nuestro sino histórico, sino más bien una síntesis histórica terrenal, cuyo designio capital es cumplir funciones políticas legitimadoras del orden establecido. Los estudios sobre lo mexicano representan, dice Bartra, una expresión objetiva de lo que denomina la cultura política dominante o cultura política oficial.

En efecto, según Bartra, esta cultura burocrática proviene de las oficinas de gobierno e impregna a todos los niveles el ejercicio de la autoridad política. Afirma que esta subjetividad históricamente moldeada se representa cotidianamente como una obra de teatro, en la que los personajes tienen roles predefinidos que se ajustan a una lógica global que los trasciende. Esta lógica general es la ideología de la unidad nacional dividida a su vez en tres conceptos cardinales:

De las notas anteriores se desprende que debemos distinguir tres fenómenos: la identidad nacional, la cultura política y la política cultural oficial. Al examinar las relaciones entre estos tres aspectos debemos ver que se trata de los lazos entre la formación de un mito (la identidad), su inserción en la vida institucional (la cultura política) y la ideología que intenta explicar y dirigir el proceso (la cultura oficial).¹⁶

Es decir, nuevamente por oposición a Samuel Ramos y Octavio Paz, en el modelo de Bartra el mito de la esencia del mexicano se ha convertido, a través de un prolongado período de decantación histórica, en un componente esencial e inexpugnable de la cultura política oficial. Ahora bien, este mito de la identidad nacional palidece y se desdibuja inexorablemente con la modernización política,

económica y social del país a medida que se convierte en un factor disfuncional de la nueva complejidad del desarrollo capitalista nacional: "...el mito es eficiente para legitimar el poder priísta, pero ineficiente para legitimar la racionalidad de la fábrica."¹⁷ Para Bartra no se trata sino del agotamiento de una forma de legitimidad política basada en una articulación Estado-mercado que ya no resulta funcional a los imperativos de reproducción del sistema. Lo que no queda claro es si los componentes antiestablishment del mito pueden ser recuperados en una remozada república de los signos, o si han quedado definitivamente superados con el florecimiento de las ideologías antiestatistas hoy en boga.

La respuesta nos lo proporciona Bartra en un artículo posterior. El elemento mediador entre cultura/política y sociedad/Estado es el nacionalismo, mito que se asimila de una manera especial y compleja en la sociedad civil: asume la forma de la paradoja. En otras palabras, se vuelve incapaz de integrar las funciones de legitimación política y racionalidad económica, debido a los cambios estructurales experimentados por el país en las últimas décadas, pero también gracias al peso específico que tiene la formación histórica de una tradición política que ha contribuido a moldear el comportamiento político nacional.

Si la naturaleza de los vínculos entre sociedad y Estado está regulada normativamente, la cultura política aparece en el esquema de Bartra, como la

¹⁶ Roger Bartra, "Oficio mexicano: Miserias y Esplendores de la Cultura." *Oficio Mexicano*. Grijalbo. México, 1993. pag. 38.

¹⁷ Roger Bartra, *Op. cit.* pag. 39.

variable que permite comprender la forma en que se conectan poder e ideología para producir una constelación históricamente determinada de prácticas y valores políticos. En esta lógica, la forma que asume el conflicto político es una expresión del paulatino agotamiento de la cultura política oficial que rompe viejos parámetros de una tradición política disfuncional. Situación que se hace manifiesta en las tendencias a los conflictos intra e inter elites y en los problemas de gobernabilidad asociados con la administración de la política económica y la gestión de la crisis.¹⁸

Pese a que la dinámica del modelo parece en no pocas ocasiones excesivamente especulativa, varias cuestiones interesantes se desprenden de su planteamiento. En primer lugar, si la cultura política nacional ha estado determinada en buena medida por la preeminencia del manejo del discurso revolucionario, ello implica que con el ascenso al poder de la llamada tecnocracia hablaríamos de la existencia de dos culturas políticas relativamente diferenciadas, cuyo término medio no sería ya el nacionalismo o el Estado, sino el discurso del mercado y la eficiencia. Los datos de las encuestas de opinión pública realizados a partir de la década pasada resultan de suma utilidad al respecto.

Por otro lado, si el nacionalismo estimuló el nacimiento de una tradición política ligada al estado, los resultados de las últimas elecciones parecerían avalar la tesis de Bartra que afirma que la estatolatría que caracterizó el nacionalismo de la cultura política está en franca retirada. Hecho que se explicaría, entre otras razones,

¹⁸ Rober Bartra, "La Crisis del Nacionalismo." *Ibid.* pag. 107.

por el hecho de que si bien el Estado logró establecer una estructura política homogénea, no tuvo el mismo éxito en el ámbito de la cultura política, espacio donde la característica dominante siguió siendo la multiplicidad y heterogeneidad de tradiciones políticas.

Guillermo de la Peña, otro antropólogo interesado en el tema de la cultura política, propone una tipología alternativa al modelo clásico de Almond y Verba, con cuatro patrones correspondientes a la realidad mexicana en un trabajo reciente sobre la cultura política de los sectores populares de Guadalajara: a).- la cultura política *clientelar*, anclada en prácticas añejas de distribución desigual de la riqueza, mediada por una red de intermediarios formales e informales, b).- la cultura política *liberal*, donde la distribución de la riqueza se realiza a través de mecanismos de mercado y a la competencia más o menos libre entre individuos que sólo esperan del Estado que haga cumplir las reglas del juego, c).- la cultura política *proletaria*, que concibe la desigualdad económica y social como resultado de la existencia de una clase o grupo privilegiado que monopoliza el poder, y d).- la cultura política *comunitaria*, que se basa en lazos afectivos de pertenencia a un espacio local y que ve la política siempre con referencia al grupo de origen.¹⁹

Sociología

Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados por la antropología para justificar empíricamente sus investigaciones así como los esfuerzos de los

pensadores por teorizar en una vertiente más totalizadora aunque especulativa, la mayor parte de lo que sabemos sobre la cultura política en México, se debe al esfuerzo de aquellos investigadores que siguiendo críticamente la metodología de Almond y Verba realizaron estudios con una buena dosis de trabajo de campo.²⁰ Entre estos trabajos destacan, el libro *Los Mexicanos Frente al Poder* de Francisco González Pineda, y Antonio Delhumeau,²¹ y el trabajo de Robert Scott, quien aplicó la tipología de Almond y Verba al caso mexicano. Los resultados fueron sugerentes. El autor encontró que luego de cincuenta años de revolución el porcentaje de cultura parroquial había disminuido (90 a 25 %), aunque en el mismo período aumentó también la proporción de la cultura súbdito (9 a 65 %) y la cultura participativa (1 a 10 %).²²

No obstante, el mayor esfuerzo de sistematización de la cultura política en México logrado hasta la fecha, es sin lugar a duda, el libro del maestro Rafael Segovia sobre *La Politización del Niño Mexicano*. Texto que muestra un patrón de generalizada desconfianza, autoritarismo, intolerancia hacia el comunismo y un rechazo al derecho a disentir políticamente. En este estudio se encontró también evidencia empírica que avalaba el supuesto de que las orientaciones políticas que se

¹⁹ Guillermo de la Peña, "La Cultura Política Entre los Sectores Populares de Guadalajara." *Nueva Antropología*, vol. XI, no. 38. México, 1990. pags. 83-107.

²⁰ Ann L. Craig y Wayne A. Cornelius, "Political Culture in Mexico: Continuities and Revisionist Interpretations." Gabriel Almond y Sidney Verba (comps.), *Op. cit.* pags. 325-391.

²¹ Francisco González Pineda y Antonio Delhumeau, *Los Mexicanos Frente al Poder*. Instituto Mexicano de Estudios Políticos. México, 1973.

²² Robert Scott, "Politics in Mexico," Gabriel Almond (ed.), *Comparative Politics Today: A World View*. Little Brown, 1974. pags. 366-402.

desprenden de la cultura política están fuertemente relacionadas con los procesos de socialización política infantil, de los cuales la escuela es uno de los más importantes.²³

Como han señalado algunos autores, uno de los aportes decisivos de la investigación del profesor Segovia es la adopción crítica del enfoque de Almond y Verba al puntualizar que la cultura política es un concepto esencialmente temporal, íntimamente relacionado con el proceso de conformación histórica de un régimen político específico.²⁴ De ahí que la singular sensibilidad histórica del profesor Segovia sea particularmente útil en la tarea de emitir juicios fundados con respecto a los procesos de modernización y cambio de la cultura política nacional.

De lo visto hasta aquí se desprende que la gran mayoría de los trabajos sobre cultura política se concentra en una etapa específica del desarrollo económico, político y social del México contemporáneo: se trata del período que comprende el ciclo de acelerado crecimiento económico, fuerte participación estatal y organización de la vida política alrededor de un partido que no conoció oposición significativa alguna. Esta etapa corre de fines de la década de los cuarenta y se prolonga hasta ya bien entrada la década de los sesenta. Durante este período se establecen los criterios culturales de interpretación de la política nacional, basados en la aplicación de la entonces novedosa metodología de investigación a través de encuestas -

²³ Rafael Segovia, *La Politización del Niño Mexicano*. Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México. México, 1975.

fenómeno que dio lugar al surgimiento del área de estudio de la cultura política a comienzos de la década de los sesenta.

El cuadro resultante de estas investigaciones delineó los rasgos generales de una cultura política definida por un fuerte apoyo popular a las instituciones emanadas de la Revolución Mexicana, junto a un elevado nivel de adhesión a los principios de justicia social establecidos por la Constitución de 1917. Sin embargo, también se encontró que las actitudes políticas eran críticas, especialmente cuando se trataba de evaluar el desempeño gubernamental en lo concerniente a la creación de empleos, reducción de las desigualdades socioeconómicas y prestación de servicios públicos básicos. Asimismo, dichas investigaciones revelaron que la mayoría de los políticos y los funcionarios públicos, eran vistos como distantes, elitistas y corruptos. Un gran porcentaje de los mexicanos se mostraba profundamente pesimista con relación a la posibilidad de influir en los resultados de las elecciones. Las campañas electorales aparecían a los ojos de la gran mayoría como actividades meramente rituales, en las que se participaba sólo en el caso de que existiera la posibilidad de extraer algún beneficio del sistema.²⁵

La cultura política en México está llena de paradojas y contradicciones. Un interrogante fundamental del análisis sigue siendo comprender la razón de que un sistema político tan duramente criticado en los últimos años continúe siendo

²⁴ Ilán Bizberg, "Legitimidad y Cultura Política: Una Discusión Teórica y una Revisión del Caso Mexicano." *Revista Mexicana de Sociología*, enero-marzo, 1997. pags. 3-18.

apoyado por la mayoría de los habitantes. En términos históricos, las fuentes de legitimidad del sistema político mexicano han descansado en tres pilares: los orígenes revolucionarios del régimen, la eficacia del gobierno en promover el crecimiento económico y su habilidad para distribuir beneficios materiales a grandes porciones de la población nacional.

Ahora bien, la crisis económica de los últimos años erosionó gradualmente cada uno de estos elementos, configurando un paulatino realineamiento de las relaciones entre Estado y sociedad civil que se caracteriza por el desgaste de la inclusividad de los arreglos corporativos y la aparición de una creciente competencia electoral, que ha trastocado el reparto ordenado de poder al seno de la elite política y el aseguramiento de amplias mayorías electorales.

Cultura Política y Gobernabilidad en México

Las investigaciones sobre la gobernabilidad del régimen político mexicano son escasas y fragmentarias. Tal situación no es producto de la casualidad. En un régimen político cuya gobernabilidad había sido muy alta, dicha preocupación no parecía relevante. Tal inquietud constituía más bien un tema omnipresente de política práctica para la elite en el poder y no motivo de interés académico. Probablemente los únicos estudiosos explícitamente interesados en los problemas de gobernabilidad había que buscarlos entre los intelectuales marxistas, anclados a un concepto de ejercicio del gobierno que lo abordaba a partir de su contrario: la

²⁵ Wayne A. Cornelius y Ann L. Craig, *The Mexican Political System in Transition*. Center for U.S.-

ingobernabilidad. Esta era la persuasión oculta del marxismo detrás de su discurso sobre la crisis general del capitalismo en México.

Pese a lo anterior, si tuviéramos que fechar el inicio del interés por los problemas de gobernabilidad del sistema político mexicano tendríamos que anotar dos puntos de inflexión importantes, marcados a su vez por dos procesos diferentes pero relacionados. El primero se ubica en el ámbito de la lógica operativa del sistema y tiene que ver con los procesos de modernización económica y social de los últimos cincuenta años, procesos que dieron lugar a un tipo de articulación Estado-sociedad, economía-política, y público-privado que hoy parece agotada. El otro, si bien vinculado a dichos cambios estructurales, tiene como escenario substancial una lógica diferente ubicada en el terreno de las acciones de los actores políticos.

Se relaciona por tanto, con los llamados procesos de transición a la democracia que han provocado cambios importantes en las condiciones de gobernabilidad que habían caracterizado el marco de intervención del Estado en los ámbitos de la política y la economía, al modificar el entorno de los procesos de toma de decisiones gubernamentales y los niveles de legitimidad del régimen político.²⁶ Las investigaciones sobre el tema de la gobernabilidad en México son pues recientes. Arrancan en la década de los ochenta con los problemas de gestión

Mexican Studies. University of California, San Diego, 1991.

²⁶ Antonio Camou, "Gobernabilidad y Democracia. Once Tesis sobre la Transición Mexicana." *Nexos*, no. 170. México, 1992. pags. 55-65.

gubernamental ocasionados por el estallido de la crisis de la economía mexicana y el proceso de liberalización política emprendido en el sexenio de Miguel de la Madrid.

La intensidad de las recurrentes crisis económicas crearon las condiciones de reformas y transformaciones difíciles de imaginar apenas unos años atrás. Lo insólito de estas reformas en el contexto de América Latina fue que los cambios se llevaron a cabo sin perturbaciones aparentes en la estabilidad política del régimen. Un rasgo distintivo de este proceso estuvo dado por el hecho de que gracias a la tradición política corporativa del país, las tensiones resultantes se procesaron endógena y no exógenamente a la institucionalidad política.²⁷

Esa fue una de las razones que hacía parecer las perspectivas sobre el futuro de la democracia en México tan inciertas. Los motivos parecían claros: si bien era cierto que se habían acumulado tensiones en el sistema político, no era menos cierto que la capacidad institucional del gobierno se mantuvo funcionando con algunos márgenes de eficacia. Los pocos estudios disponibles mostraban que buena parte de la gobernabilidad del sistema de partidos se había basado en la distribución de prebendas y beneficios, típicas de un sistema político inclusivo. Sin embargo, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid los sucesivos gobiernos se enfrentaron a crecientes dificultades para cumplir de la misma manera que en el pasado, las expectativas tradicionales de crecimiento económico y redistribución del ingreso.

Además -y esto no es menos importante-, los mecanismos tradicionales de reproducción del consenso político intraelite se hicieron cada vez más incompatibles con las demandas de racionalidad administrativa. Esta situación era particularmente delicada, en un momento en que la crisis exigía estrategias eficientes de gestión de la administración pública, que chocaban con la estructura corporativa del Estado. Dadas estas condiciones, el gobierno vio erosionada su credibilidad como resultado de la incompetencia de los sucesivos gabinetes presidenciales para resolver los problemas que planteaba la crisis económica.²⁸

En estas circunstancias, la aplicación de programas de ajuste y estabilización económica no estuvo exenta de costos y aún cuando no podemos establecer una relación causal entre crisis económica y crisis política, es claro que a lo largo de la década pasada, se convirtieron en el catalizador que empujó a la esfera pública transformaciones que se encontraban latentes en el ámbito político y social. Destacan aquí tres conjuntos de problemas: 1o. el incremento en los niveles de competencia antagónica al interior de la elite política, 2o. la aparición de conflictos sociales ligados en su gran mayoría al incremento de tensiones en la arena electoral, y 3o. el surgimiento de disfunciones político-administrativas en las relaciones entre el centro y los poderes regionales. En opinión de algunos autores se estaba produciendo una desarticulación entre un régimen político cuyos ritmos de apertura

²⁷ Antonio Camou, "Gobernabilidad y Democracia en México. Avatares de una Transición Incierta." *Nueva Sociedad*. Caracas, nov.-dic., 1993. pags. 103-119.

no se correspondían con la rápida liberalización de la economía nacional.²⁹ El proceso de modernización económica creaba tensiones en el interior de la clase política, conformando un escenario político complejo, puesto que era el mismo proceso de cambio estructural el que socavaba la característica inclusividad del sistema.

Los niveles de gobernabilidad del régimen permanecieron dentro de márgenes tolerables, gracias a que el comportamiento de los actores políticos seguía siendo endógeno, es decir era una variable que no escapaba totalmente del control del Estado sino que se procesaba institucionalmente. No obstante, dicha situación trajo como resultado un efecto perverso, pues la gobernabilidad recaía cada vez más en la gestión económica, sin que el conjunto de los restantes sujetos sociales asumiera responsabilidad alguna por los resultados de la misma si estos eran negativos -los pactos corporativos que empezaron a ensayarse durante el sexenio de Miguel de la Madrid eran una forma negociada sectorialmente de las estrategias económicas del gobierno.

En resumen, las investigaciones concernientes a los retos que enfrentaba la gobernabilidad en México siguieron por lo regular un modelo inspirado en el tema predilecto de la ciencia política en la década de los ochenta, vale decir, el impacto

²⁸ Blanca Heredia, "Estructura Política y Reforma Económica: El Caso de México." *Política y Gobierno*. CIDE, enero-junio, 1994. pags. 5-46.

²⁹ Puede consultarse una discusión interesante de este tópico en Adam Przeworski y Fernando Limongi, "Regímenes Políticos y Crecimiento Económico." *Desarrollo Económico*. Buenos Aires, julio-septiembre, 1994. pags. 163-179.

de la modernización de los sistemas políticos autoritarios desde la perspectiva de los acuerdos y pactos de las elites políticas involucradas en los procesos de transición a la democracia. Los casos de Chile y España parecían validar la confianza en dicho enfoque. Sin embargo, las particularidades del caso mexicano fueron ignoradas o se les dio un tratamiento superficial en la mayoría de las investigaciones.

En particular, se eludió el tema de la singularidad de la historia política del México contemporáneo, hecho que establecía claras diferencias con los regímenes políticos sudamericanos. Luego de más de medio siglo de ideología nacionalista-revolucionaria instituciones y mentalidades políticas asumieron la forma característica que distingue la política "hecha en México". De ahí que uno de los ejes del trabajo sea examinar hasta que punto el modelo cultural de hacer política se transformó durante el período de estudio, adoptando una estrategia metodológica dirigida a solventar los problemas que implica la investigación del cambio político.

Metodología de la Investigación

Marco Teórico

Si consideramos que la noción de rol desarrollada en la literatura sobre cultura política deriva de la versión del funcionalismo sistémico de Parsons, donde los sistemas de personalidad son definidos como sistemas de acción, resulta difícil concebir los sistemas culturales como sistemas de patrones simbólicos. En consecuencia, la praxis política deviene un axioma analizado en términos de una

racionalidad instrumental que condiciona la interpretación de los datos. Por esta razón, en lugar del examen de preguntas y respuestas sobre actitudes políticas en el marco de una estructura totalmente racional, se propone interpretar la relación entre política y cultura como la *expresión de valores o posiciones en un orden moral cuyas características definen la conformación histórica de la esfera pública*.³⁰

Una propuesta metodológica útil para abordar el problema de la forma en que se producen los patrones de estabilidad y cambio cultural, la proporciona la distinción de niveles constitutivos de la cultura política divididos en *macro, meso y micro* dimensiones. De esta manera, la cultura política es un patrón de símbolos y valores compartidos que coexiste con diversas subculturas definidas por diferentes repertorios de valores.³¹ El primer nivel se asocia a la construcción de identidades nacionales y representa aquel conjunto de valores que forman los presupuestos básicos de un Estado-nación. Es el dilatado territorio de los símbolos políticos, religiosos y sociales que conforman el horizonte de largo plazo de la acción política.

En contrapartida, el nivel intermedio establece las reglas del juego aceptadas por la mayoría de los actores políticos. Aún cuando estas reglas son resultado de procesos de largo plazo, pueden ser desafiadas por los diferentes grupos de un sistema político, ya que aunque son orgánicas, es decir, se estructuran desde la macrocultura política, son también hegemónicas, lo que significa que se ajustan

³⁰ Richard Topf, "Political Change and Political Culture in Britain, 1959-1987." John R Gibbins (ed.) *Contemporary Political Culture*. Sage. London, 1989. pag. 69.

³¹ Brian Girvin, "Change and Continuity in Liberal Democratic Political Culture." *Op. cit.*, 1989. pag. 35.

dependiendo de la influencia y el poder de las fuerzas políticas del micro nivel. Por ende, es al nivel micro donde se produce el debate y la lucha política cotidiana. Aquí se desarrolla la actividad política regular: elecciones, protestas, movilizaciones, etc. Ello no implica que las reglas de juego del nivel intermedio sean necesariamente afectadas ya que estas son resultado tanto de valores aprendidos como de la lucha política diaria. La interacción de los diversos ritmos de cambio de los niveles permite una aproximación metodológica más global del problema de la estabilidad y cambio de la cultura política. Por consiguiente, en el nivel macro tenemos valores de larga duración como nacionalismo, autoritarismo, paternalismo, presidencialismo y antiextremismo; en el nivel intermedio las reglas del juego -formales e informales- bajo las que se expresan estos valores -como la legislación electoral-; finalmente en el nivel micro, se ubican aquellos comportamientos concretos, relacionados con las preferencias electorales y las formas del conflicto político y social.

En síntesis, se estudia la evolución de la cultura política a lo largo del período de estudio tomando como indicador las encuestas de opinión pública y valores. Se analiza también la transformación de una esfera pública dominada por el discurso nacionalista-revolucionario, en favor de otra en la que se conforma una opinión pública más plural con nuevas reglas del juego político. Dichos cambios son visibles en áreas como la legislación electoral, las atribuciones constitucionales de un sistema presidencialista, o la renovada intimidad entre política y economía que se percibe en las nuevas formas de responsabilidad de los funcionarios públicos.

El modelo propuesto analiza la gobernabilidad en tres dimensiones. 1º. Al nivel macro como consenso de valores, es decir el orden moral que fundamenta el régimen político, 2º. Al nivel intermedio como reglas del juego o formas de integración y representación electoral legítimas, 3º. Finalmente, al nivel micro como apoyo electoral. A cada nivel corresponde un tipo de información diferente: encuestas de valores, cambios a la legislación electoral y preferencias electorales e identificación partidista. Los niveles interactúan entre sí de tal forma que los conflictos que se producen en la microcultura política pueden amortiguarse con ajustes a las reglas del juego, sin que lleguen a perturbar la estabilidad del sistema ni la adhesión a los valores constitutivos del orden moral. Tenemos entonces un modelo donde la tensión entre continuidad y cambio se produce a todos los niveles pero es más intensa en la base y en el centro que en el extremo superior, siempre y cuando los conflictos de la lucha política cotidiana del micronivel puedan ser absorbidos por las reglas del juego del mesonivel y evite que suban hasta el macronivel del orden moral.

Supuestos Teórico-Methodológicos

La notable aceleración del cambio se ha convertido en una realidad indiscutible de la vida política en México. El origen del interminable debate entre las diversas fuerzas políticas del país tendríamos que buscarlo en los diversos puntos de vista respecto a la naturaleza de este cambio, así como las implicaciones que tiene para la cultura política. De hecho, siempre habrá una tensión no resuelta entre las

presiones conducentes a la innovación y los factores de continuidad opuestos al cambio, basados en factores como la inercia de la tradición. Sin embargo, muchas veces tendemos a exagerar la importancia de los cambios, subvalorando la persistencia de los elementos de continuidad. Aunque los cambios constituyen una fuente potencial de revolución social, por lo regular son susceptibles de ser asimilados dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales establecidas. Este es el supuesto teórico-metodológico de partida de la presente investigación.

El vértigo de acontecimientos políticos, económicos y sociales cotidianos, frecuentemente distrae nuestra memoria del hecho, pocas veces reconocido por un análisis impaciente, de que su ritmo de cambio no puede ser presupuesto con antelación de ninguna manera. Las dimensiones políticas, económicas y sociales operan con un conjunto distintivo de estructuras históricas que descartan la existencia de efectos directos e inmediatos, o la homogeneidad del ritmo de variación de todos los niveles. Ello trae como resultado un proceso de cambio menos uniforme y más complejo de lo que parece a simple vista. Tal es el contexto en el que hemos de entender fenómenos como la religión, el nacionalismo, y la integración de identidades políticas nacionales.

La atención del trabajo se centra en el estudio la cultura política en un contexto de cambio, momento en el que se producen modificaciones en los sistemas de valores e ideología, que traen aparejados cambios concretos al nivel de la participación política y el apoyo a los partidos. El período de estudio abarca de

principios de la década de los ochenta hasta 1994. Elegimos esta periodización no sólo porque la mayoría de los trabajos sobre el tema abordan el período inmediato anterior, sino porque coincide con el estallido de la crisis económica y la aceleración del proceso de liberalización política iniciado en 1977. Etapa particularmente importante, ya que durante esta fase se produjo una desarticulación entre la estrategia de apertura económica de la clase política, con el mantenimiento de formas más cerradas de control político.

Otro supuesto básico del marco teórico-metodológico del proyecto radica en la distinción entre la noción de cultura cívica y el concepto de cultura política. Sólo de esta manera es posible separar los componentes normativos asociados al primer término, de la posibilidad de aplicar un modelo más general para aquellos países que no se ajustan al modelo clásico de ciudadanía liberal. Retomamos aquí la definición de cultura política de Brian Girvin, quien la especifica como el intento de identificar los factores que influyen en la formación política social, tratando de

Así, se critican dos supuestos básicos del modelo de la cultura cívica: 1º. la existencia de formas universales de racionalidad que determinan la acción colectiva al margen de las peculiaridades históricas implícitas a la organización política de cada país; 2º. la presuposición de que las sociedades evolucionan históricamente por una ruta crítica prefijada que va del atraso y la tradición hacia el progreso y la modernización.

Por el contrario, ninguna colectividad política pasa mecánicamente de un tipo de organización a otro sin que su dinámica histórica esté determinada por la combinación de diferentes tradiciones culturales.³² Por tanto, el supuesto básico que retomamos aquí es la idea de que ningún modelo es exhaustivo, hecho digno de tomarse en cuenta si consideramos que muchas veces se omite el análisis de formas de vida idiosincrásicas, debido a que no son percibidas por el horizonte que nos ofrece un modelo específico como el de la cultura cívica.

Pertinencia de la Investigación

El sistema político mexicano ha experimentado en los últimos años una serie de transformaciones fundamentales, que cuestionaron seriamente los fundamentos que conformaban la articulación histórica entre política y economía por un lado, y sociedad civil y Estado por el otro, conformando un escenario jalonado de acontecimientos quizá impensables hace apenas unos años. El proceso de gradual apertura experimentado por el se complicó especialmente en el ámbito de lo político, escenario donde se llegó a un nivel de movilización -y en algunos casos de auténtico enfrentamiento- de la sociedad civil contra el orden establecido, sin precedentes en la historia contemporánea del país por su magnitud, persistencia y organización partidaria.

En este contexto, las referencias a la aparición de problemas de gobernabilidad y una nueva cultura política, se han convertido en objeto de

³² Klaus Eder, "La Paradoja de la 'Cultura'. Más allá de una Teoría de la Cultura como Factor Consensual."

comentario cotidiano en el debate político, la discusión académica y los principales medios de información del país. Trabajos recientes indican que se han producido cambios significativos en la cultura política nacional. Sectores importantes de la población se muestran cada vez más críticos de la forma como funciona el sistema, del problema de la corrupción y de la deficiente administración pública -especialmente entre los sectores de clase media.³³

El sistema de partido de Estado se diseñó para un país que en gran medida ya no existe, debido a transformaciones fundamentales en el patrón de desarrollo económico, demográfico, educativo y social. Ello hace especialmente relevante un trabajo de investigación sobre los patrones de estabilidad y cambio de la cultura política como condición de una gobernabilidad que se basa cada vez menos, en la legitimidad otorgada por el discurso nacionalista-revolucionario. El conocimiento de los patrones de cambio de la cultura política a lo largo de casi tres lustros, constituye en sí mismo, un esfuerzo rescatable que apunta a una mejor comprensión del comportamiento político actual.

Hipótesis de Trabajo

En el transcurso de la historia nacional el Estado ha sido el centro de la vida política y económica del país a través de la paulatina conformación de una articulación corporativa entre Estado y sociedad civil, con la intermediación político-

Zona Abierta, no. 77/78. Madrid, 1996-1997. pags. 95-126.

³³ John A. Both y Mitchell A. Seligson, "The Political Culture of Authoritarianism in Mexico: a Reexamination." *Latin American Research Review*, vol. XIX, no. 2, 1984. pags. 106-124.

social del PRI en el trinomio Estado-partido-gobierno. El sistema de partido de Estado jugó un papel primordial de mediador entre Estado y sociedad civil absorbiendo los efectos potencialmente disruptivos del proceso de modernización, al tiempo que permitía que se preservara la autonomía del Estado con respecto a la sociedad, ampliando considerablemente sus márgenes de maniobra respecto a los actores políticos.

A partir de la década de los ochenta presenciamos sin embargo, una progresiva desarticulación del modelo corporativo de sociedad-Estado que llevó a un trastocamiento de las relaciones entre política y economía, y a una prolongada discusión sobre las tendencias al cambio de la cultura política y el surgimiento de problemas de gobernabilidad. En este contexto, las hipótesis generales de trabajo son las siguientes:

1ª.- Aún cuando la cultura política se ha movido gradualmente hacia formas más participativas, no se ha producido un resquebrajamiento del orden moral que la sustenta, lo que *significa que no estamos ante un cambio radical de los patrones básicos de la cultura política nacional.*

2ª.- *Los componentes de la macrocultura política evolucionan a una tasa de cambio diferente a la que indican las preferencias electorales* tomadas como indicadores de la tendencia o magnitud de su variación.

3ª.- *La cultura política se mueve más de prisa al nivel micro, es decir, de los comportamientos políticos cotidianos, donde el notable incremento en los índices de*

participación electoral, activismo partidario y movilización social, eventualmente pueden transformarse en una fuente de oposición político-electoral permanente.

4ª.- Algunos *elementos del modelo de vinculación entre gobernantes y gobernados han sido modificados*, como la erosión de la figura retórica de la *unidad nacional* y la vocación estatal del *buen gobierno*.

5ª.- Se ha producido una notable *transformación del patrón históricamente establecido de participación electoral y aceptación social de la autoridad política*, desde una cultura de las mayorías absolutas a una cultura política más plural y heterogénea.

Instrumentos Técnicos de Recopilación de la Información

Un momento crucial en las ciencias sociales es aquel relativo a la medición y observación empírica del objeto de estudio. Frecuentemente se argumenta que no hay razón por la cual no puedan medirse los componentes individuales de un orden social como edad, sexo, lugar de nacimiento o estado civil. Asimismo, se afirma también que el comportamiento social agregado es susceptible de ser sometido a mediciones sistemáticas. Numerosos estudios empíricos de la ciencia política nos han ayudado a mejorar nuestra comprensión del comportamiento electoral de un país, una región, o un municipio. Actitudes como religiosidad, liberalismo, tradicionalismo o autoritarismo político, aparecen como variables susceptibles de ser

medidas.³⁴ En 1880 un abogado alemán llamado Karl Marx, uno de los primeros estudiosos de las ciencias sociales interesado en la medición de problemas concretos de la ciencia política, envió por correo a un numeroso grupo de obreros franceses, 25 000 cuestionarios para determinar su grado de explotación. Ninguno de ellos respondió.³⁵

Si bien hay una gran controversia al respecto, tradicionalmente los valores se han entendido como “sistemas organizados de creencias perdurables concernientes a modos de conducta socialmente preferidos a lo largo de un continuum de relativa importancia.”³⁶ El problema radica aquí en que la medición de las actitudes en general y de los valores políticos en particular, frecuentemente es caracterizada como un indicador no confiable. Toda medida es el fruto de una convención entre personas. Un investigador no tiene posibilidades de describir inequívocamente a una persona como tradicionalista o liberal. En su lugar definirá a un grupo de personas como relativamente más o menos tradicionalistas. Dadas estas limitaciones, optamos por la posición que considera que toda medición científica debe ser juzgada sobre la base de su utilidad para la investigación, y en ningún momento como la demostración de una verdad absoluta. No podemos esperar nunca describir a una persona en términos absolutos. Los valores y las actitudes de los individuos sólo adquieren sentido en su relación con otros individuos, es decir en el entramado de

³⁴ Oliver Benson, *El Laboratorio de Ciencia Política*. Amorrortu. Buenos Aires, 1974. pags. 11-27.

³⁵ Earl R. Babbie, *Survey Research Methods*. Wadsworth. California, 1973. pag. 42.

³⁶ Milton Rokeach, *The Nature of Human Values*. Free Press. New York, 1973. pag. 5.

una sociedad concreta. Es la naturaleza dinámica del cambio social lo que obliga a una permanente apertura y a una actitud crítica que no fije una sola interpretación de los problemas abordados.³⁷

El campo de análisis de la cultura política y la opinión pública es un campo de estudio relativamente nuevo y poco explorado en México. Estimulado por el creciente interés e importancia que suscita la participación electoral y la competencia partidaria, las encuestas se han convertido en una herramienta analítica cada vez más popular. Su utilización se ha extendido allende las fronteras de la comunidad de sociólogos y politólogos: economistas, funcionarios públicos, comunicólogos y empresarios constituyen sólo algunos de los nuevos usuarios. Por tanto, la lista de encuestas levantadas a lo largo del período de estudio representa un insumo especialmente valioso a la hora de aproximarnos empíricamente al conocimiento de la realidad política y social del país.

Del conjunto de tales investigaciones, el trabajo se basa fundamentalmente en información derivada de la *World Values Survey Research 1981-1984 y 1990-1993*. Esta importante encuesta realizada por el *Inter-university Consortium for Political and Social Research* del *Institute for Social Research* de la *Universidad de Michigan* se levantó en 43 países, cifra que representa casi un 70 por ciento de la población mundial, abarcando un amplísimo rango de variables que proporcionan una vasta información sobre valores y actitudes políticas y sociales. En el caso de México la

³⁷Hubert Blalock, *Conceptualization and Measurement in the Social Sciences*. Sage. California, 1982.

primera encuesta se levantó en la primavera de 1981. Posteriormente, en mayo de 1990 fue replicada por MORI de México (Market and Opinion Research International). Los datos proporcionados por la *World Values Survey Research* se complementan con encuestas de opinión pública, cultura política y preferencias electorales llevadas a cabo a lo largo del período en estudio.

Métodos y Técnicas de Análisis e Interpretación de los Datos

Como ya se vio en el primer apartado de la tesis, los trabajos sobre el concepto de cultura política enfrentan tres desafíos: 1º. definición, 2º. diversidad de enfoques teórico-metodológicos y 3º. operacionalización. La investigación empírica de conceptos tan escurridizos y debatidos como cultura política y gobernabilidad representa uno de los más serios desafíos de esta investigación. El recorte de realidad proporcionado por los indicadores empíricos siempre será un universo reflexivo sumamente complejo.

Con respecto a este punto dos son los problemas más importantes con los que el investigador se enfrenta en su trabajo. En primer lugar los conceptos teóricos difícilmente admiten definiciones unívocas. Por el contrario, constituyen herramientas teóricas, abstractas y generales, por lo que cualquier especificación que utilice indicadores empíricos ha de tomarse tan sólo como una aproximación. En segundo lugar no debemos olvidar tampoco que las asociaciones empíricas entre variables por lo regular no son perfectas. En sentido estricto casi todas las variables

se relacionan empíricamente unas con otras en magnitudes variables. La especificación de la medida que implica aceptación o rechazo de una hipótesis es una decisión resultado de un acuerdo o convención metodológica. El investigador utiliza indicadores que remiten a conceptos teóricos con el fin de encontrar asociaciones que cobran sentido en función del enfoque metodológico adoptado por la investigación.

Lo anterior nos permite entender mejor porqué uno de los puntos más álgidos del debate en el análisis de la cultura política tiene que ver con el problema de su medición. La interpretación tradicional de los datos sobre actitudes y comportamiento político, ha seguido el modelo de orientaciones y roles adscritos del funcionalismo sistémico de Talcott Parsons. Esta no constituye sin embargo, la única alternativa a la interpretación de la información empírica, para los objetivos de esta investigación los datos se interpretan como expresiones de valores o posiciones dentro de un orden moral conformado históricamente. Es decir, representan indicadores de aquello que las personas consideran valioso o que constituye un imperativo o una obligación moral. Esto nos ayuda a resolver la aparente contradicción entre el comportamiento como expresión de un orden moral constituido históricamente y su participación política concreta como individuos, donde se manifiestan fuertes tensiones entre dichos valores y su descontento con los resultados concretos de la gestión gubernamental. También explica porque las personas se conducen de manera aparentemente contradictoria: manifestando un

creciente descontento con el gobierno pero apoyándolo al momento de votar en los procesos electorales.

Con este propósito investigamos los componentes simbólicos del orden moral que definen en términos generales las diferentes dimensiones de la cultura política nacional. Estos valores han sido asociados generalmente al nivel macro con el nacionalismo revolucionario autoritario y estatista, la cultura de las mayorías absolutas, el principio de la unidad nacional, el presidencialismo, el desinterés en la política y la poca disposición al cambio. Reformismo, gradualismo y antiextremismo constituyen valores y actitudes propias de la tradición política postrevolucionaria constitutivas del nivel intermedio. La dimensión micro de la cultura política incluye la variable comportamiento y participación electoral. De esta forma, pueden establecerse varios tipos de relaciones analíticas entre los diferentes órdenes constitutivos de la cultura política, a través del estudio de los datos proporcionados por las encuestas de opinión pública, valores y preferencias electorales.

El procesamiento estadístico de la información se realizó con el *SPSS* (Statistical Package for Social Sciences) versión 8.0. En la mayoría de los casos nos interesaba conocer la evolución a lo largo del tiempo de nuestras variables, lo que delimitó el instrumental estadístico a la utilización de distribuciones de frecuencias y tablas de contingencia múltiples. Tomando en cuenta esta restricción se eligieron como variables independientes aquellas que estuvieran disponibles en ambas encuestas. *Edad, educación, afinidad política y región* cubrieron este requisito en

tanto que *género, ingreso, status socioeconómico y preferencias electorales* fueron descartados por no ajustarse a dicho criterio. En este último caso se utilizaron datos provenientes de otras encuestas-específicamente de encuestas sobre preferencias electorales.

Para contrastar la hipótesis del cambio diferencial de los diferentes niveles de la cultura política se eligió correr un análisis factorial de la segunda encuesta. Como bien se sabe esta es una técnica que consiste en resumir la información contenida en una matriz de datos con V variables, con el fin de interpretar las relaciones entre ellas. Con este procedimiento pueden determinarse subconjuntos claramente diferenciados en los que si cada una de las variables están muy relacionadas y pertenecen a distintos subconjuntos que no tienen ninguna relación entre sí, entonces el conjunto total de variables puede ser simplificado hasta formar un nuevo conjunto de variables no directamente observables, denominadas factores. Cada uno de estos factores representa la información que tienen en común las variables que se ubican en el mismo subconjunto.³⁸ Para correr el modelo y considerando que las variables de la encuesta tienen un nivel de medición ordinal, se procederá a dicotomizarlas recodificando como uno las respuestas positivas y cero las negativas para darles la característica intervalar requerida por este método. El método de extracción de factores que se utilizará es el de componentes

³⁸ Rafael Bizquerra Alzina, "Análisis Factorial." *Introducción Conceptual al Análisis Multivariable*. PPU. Barcelona, 1989. pags. 287-345.

principales con rotación varimax. Los casos con valores perdidos serán excluidos del análisis y no se considerarán cargas factoriales inferiores a 0.30.

El análisis factorial resulta de suma utilidad para determinar si el orden moral que proponemos existe, es decir si las variables que lo forman tienen correlaciones significativas. Esto significa que al correrlo estaremos evaluando si las variables se ajustan entre sí en términos estadísticos. Luego, una vez conocida la estructura de las saturaciones factoriales, estaremos en condiciones de estimar que componentes del modelo han experimentado cambios importantes a lo largo del tiempo, lo que nos servirá para contrastar la hipótesis de que el ritmo de cambio del micronivel ha sido más intenso.

“.....los sindicatos y partidos reformistas que operan en el marco del Estado democrático de derecho vivieron, en la realización del compromiso que representa el Estado social, la experiencia decepcionante de tener que contentarse con una mera adaptación del legado liberal burgués, viéndose obligados a renunciar al cumplimiento de las promesas de una democracia radical.”

Jürgen Habermas

III

A LA SOMBRA DE LAS MAYORIAS

La Política de un Régimen Gobernable

La Organización de una Hegemonía Partidaria

Capital y trabajo han sido en México los pilares del orden establecido desde mediados de la década de los treinta cuando se consolida el proceso de institucionalización de los sujetos políticos orgánicos, independientes hasta ese momento: sindicatos, partidos políticos, ligas agrarias y facciones o grupos militares regionales. Sin embargo, el medio de hacer operativo el acuerdo histórico entre gobierno y trabajadores no significó que constituyera en sus orígenes, un instrumento de control directo de los sujetos políticos por parte del Estado.¹ Por el contrario, sus objetivos fueron en un principio la urgencia de terminar con los conflictos armados, encontrar un mecanismo pacífico de sucesión de la elite política, así como convertirse en un recurso institucionalizado de integración y circulación de

¹ Lorenzo Meyer, *Los Inicios de la Institucionalización Política del Maximato*. El Colegio de México. México, 1978.

dichas elites en un poder político centrado en la figura del jefe del ejecutivo. Con el tiempo ayudó a resolver también el enigma de encontrar una forma de representación política estable cuya permanencia no fuese puesta en cuestión incesantemente;² situación que se había convertido en uno de los rasgos típicos de la etapa postrevolucionaria. El problema principal durante este período va a ser, por tanto, la búsqueda de formas consensuales que permitieran un ejercicio ininterrumpido del poder político a nivel nacional, lo que suponía de igual forma, la consolidación de una autoridad central administrativa.

La solución al interrogante fundamental de concluir el proceso de construcción de un Estado nacional en el ámbito político lo va a constituir entonces la fundación del primer partido con una dimensión verdaderamente nacional. Es en esta coyuntura que se produce la creación del PNR (Partido Nacional Revolucionario), en cuyas siglas se funden *lo político* de la formación nacional mexicana directamente asociada al Estado, con *la política* del nacionalismo revolucionario vinculada a la institucionalización de un organismo político establecido desde la instancia estatal, que se definía a sí mismo como el sistema político garante de la estabilidad requerida por el país. Es importante subrayar que la política se entiende aquí como el proceso dinámico de interacción práctica de las

² Arturo Alvarado Mendoza, "La Fundación del PNR." Varios autores, *El Partido en el Poder*. IEPES/El Día. México, 1991. pags. 15-85.

instancias institucionales del poder político. Lo político alude en cambio, a la forma como se “vive” la política desde el ámbito de la ciudadanía.³

Así pues, la fundación del PNR en marzo de 1929 conjuga toda una serie de circunstancias interrelacionadas: la voluntad de un caudillo -Calles-, el proyecto hegemónico de un grupo, y el imperativo de formar un partido ligado al nuevo Estado revolucionario.⁴ Ni voluntad caudillista ni proyectos nacionales clasistas son factores históricos excluyentes ajenos al nacimiento de las instituciones políticas en México.⁵ La gama de circunstancias socio-políticas que condicionaron su desarrollo, permanecerán entonces, como una mediación de fondo de la dinámica política nacional -tal es el caso por ejemplo del ejercicio de la representación subordinada de las organizaciones sindicales en la estructura del orden político naciente, la conformación de un sistema político vacío de alternativas partidarias desligadas del Estado, y la cimentación de un proyecto de desarrollo nacional con una ciudadanía dependiente orgánicamente del Estado.

La problemática de las organizaciones sociales y políticas en México ha sido siempre un factor determinado por el Estado. En el México postrevolucionario esta se definió por dos factores: 1o. la presencia de una multiplicidad de corrientes

³ Esta distinción se ha hecho también en términos de “Sistema Político” y “Régimen Político”. Véase por ejemplo Luis F. Aguilar Villanueva, “Estado, Régimen y Sistema Político (Notas para una Discusión sobre las Crisis del Welfare State).” Juan Eduardo Vega (comp.), *Teoría y Política en América Latina*. CIDE. México, 1983. pags. 205-219. Lechner hace una diferenciación similar en Norbert Lechner, “Los Nuevos Perfiles de la Política. Un Bosquejo.” *Nueva Sociedad*. Caracas, 1994. pags. 33-34.

⁴ Sergio Hernández Días et. al., *El proyecto Histórico del PNR. Tres Ensayos*. IEPES/El Día. México, 1990.

organizadas de las más diversas formas: sindicatos, partidos políticos regionales, etcétera.; 2o. la irrupción de las masas en la escena política. Es importante destacar a este respecto que una característica de la acción colectiva activa de las masas radicaba en la tendencia a depositar su confianza en los caudillos o líderes de las organizaciones laborales antes que en las propias organizaciones.⁶ Situación que persiste hasta nuestros días en escenarios políticos históricamente diferenciados -especialmente interesante por ejemplo, es el papel que jugó Cuahutémoc Cárdenas en el PRD, o el impacto que causó la personalidad del candidato panista en las elecciones presidenciales de agosto de 1994. No obstante, no deben subestimarse las diferencias entre uno y otro caso a un grado tal, que nos lleven a extrapolaciones mecanicistas, que dejen caer todo el peso del razonamiento a la sola intervención de vastas tendencias históricas de largo plazo.

La pluralidad de organizaciones políticas y sociales en el México postrevolucionario, especialmente en el plano regional, trajo como resultado una pronunciada inestabilidad política ostensiblemente manifiesta en la debilidad de las coaliciones creadas a lo largo del período. En la mayoría de los casos cuando se lograba algún tipo de acuerdo político, este era más bien producto de una

⁵ Víctor Díaz Arciniega, "Calles: el Voluntarioso Circunspecto." *Historia Mexicana*. El Colegio de México. México, enero-marzo, 1985. pags. 460-505.

⁶ Arnaldo Córdova, "Revolución Burguesa y Política de Masas." Varios autores, *Interpretaciones de la Revolución Mexicana*. Nueva Imagen. México, 1988.

negociación o de un pacto entre clientelas y líderes políticos.⁷ El resultado de lo anterior fue la exacerbación de un orden político descentrado, que convivía inestablemente al lado de una esfera pública fraccionada, con una permanente incapacidad del gobierno central para llevar a la práctica sus decisiones. Los esfuerzos de constitución de un poder político nacional privilegiaron entonces una estrategia integradora de estas cavidades regionales ingobernables, en una coalición en la que la ciudadanía va a definirse por la pertenencia, en términos de representación política, a las organizaciones de trabajadores, dentro de una esfera pública delimitada *ex ante* por el Estado.

El verdadero éxito del nuevo partido no se asentaba solamente en el carisma o la inteligencia individual del líder -si bien es cierto que ella jugó un papel determinante en muchos casos-, sino en su habilidad para incluir en su seno toda la múltiple riqueza organizativa de la sociedad civil postrevolucionaria que remitiría, paulatinamente, a la formación de una voluntad nacional ciudadana tutelada desde el partido de Estado.⁸ Las implicaciones del proceso de desarrollo histórico de una conciencia ciudadana estatal, así como su relación con el establecimiento de condiciones de gobernabilidad legitimadas por la ascendencia revolucionaria de la elite política, tendría efectos decisivos sobre el sistema político mexicano.

⁷ Arnaldo Córdova, "Una Epoca de Crisis (1928-1934)." Varios autores, *La Clase Obrera en la Historia de México*, vol. 9. Siglo XXI. México, 1980.

⁸ Manuel Rodríguez Lapuente, "El Estado y el Partido." Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (coords.), *El Nuevo Estado Mexicano*, vol. II. Nueva Imagen. México, 1992. pags. 43-52.

El nuevo partido aceptó formalmente con pocas reservas el sistema democrático y la forma de gobierno establecida en la Constitución de 1917, pero al mismo tiempo ratificó su función como medio de apoyo y fuente de legitimidad del gobierno, sentando las bases de una integración unitaria Estado-gobierno-partido.⁹ En su declaración de principios queda firmemente establecido el respaldo a la intervención del Estado en la economía, la colaboración entre grupos sociales antagónicos, la unidad nacional sustentada en la ideología del nacionalismo revolucionario y la conciliación entre clases.¹⁰ De este modo, si bien reconoce a obreros y campesinos como el interlocutor político más importante del nuevo régimen, se autodefine también como una organización plural en la que tienen cabida las clases y grupos sociales que “componen a la gran nación mexicana”.

Así se instituyó el primer partido político moderno de alcances nacionales tanto en lo que corresponde a sus funciones estrictamente organizativas, como en lo que toca a sus objetivos electorales. Las decisiones al más alto nivel quedaron centralizadas en un Comité Ejecutivo Nacional, que estableció las directrices para conformar una organización centralizada, con una jerarquía que separaba verticalmente los órganos directivos de las bases. Cada uno de los miembros del partido adquiere una identidad política ciudadana orgánicamente restringida en lo

⁹ Rafael Loyola Díaz, “1938: El Despliegue del Corporativismo Partidario.” Varios autores, *Op. cit.*, 1991. pags. 129-182.

¹⁰ Luis Javier Garrido, *El Partido de la Revolución Institucionalizada. La Formación del Nuevo Estado en México*. SEP/Siglo XXI. México, 1986.

que respecta a la participación y comunicación horizontales, sin contar con ninguna posibilidad de ejercer alguna influencia efectiva en la selección de los funcionarios del partido, o en las decisiones de sus órganos ejecutivos nacionales.¹¹ La célula básica del partido no será como en el modelo liberal clásico el individuo, es decir el ciudadano moderno, ni las organizaciones de clase, como en el caso de los partidos socialdemócratas de inspiración marxista. Por el contrario, en este modelo se privilegia en una primera etapa la integración por la vía de las organizaciones regionales. La fuerza y representación de estas unidades elementales del partido dependía entonces del poder que detentaran a nivel local, así como de la habilidad que tuvieran de pertenecer a alguna comisión partidaria que les permitiera tener acceso a la obtención de concesiones o privilegios clientelares.

Estos líderes regionales fortalecieron al partido en el plano de la acción política dando origen a la integración vertical de los más diversos intereses políticos y económicos, lo que llevaría con el tiempo a la aparición de una burocracia partidaria centralista y disciplinada verticalmente, cuyo objetivo sería terminar a toda costa con la dispersión y el pluralismo caudillista existente a nivel regional. Hecho que significaba un pesado lastre en el largo plazo para la consolidación vertical y horizontal de la incipiente organización del partido.

¹¹ Paulina Fernández, "De la Libertad Ciudadana al Control Gubernamental. Historia Legal de los Candidatos Comunes y las Coaliciones Electorales (1946-1990)." *Estudios Políticos*, no. 8. México, octubre-diciembre, 1991. pags. 89-108.

A partir de la fundación del PNR que culminará en el establecimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), da comienzo una nueva etapa en la vida política del México contemporáneo. Surgido de la alianza entre diferentes grupos de poder y caudillos revolucionarios, el propósito inicial del PNR no era convertirse en un partido de masas, sino en un instrumento de conciliación de las diferencias al seno de la “familia revolucionaria”. Tampoco buscaba representar por medio del sufragio los intereses gremiales, individuales o ciudadanos, puesto que en sentido estricto estos no existían al margen del Estado -orgánica e ideológicamente.¹² Ello trajo como resultado que las cuestiones electorales no tuvieran ninguna importancia en los hechos, ya que no constituían un elemento de peso en la toma de decisiones políticas. Lo más importante era conseguir la unidad y cohesión de los grupos revolucionarios dominantes. Un agudo observador de la vida política en México, Daniel Cosío Villegas lo resume así:

“No parece haberse insistido bastante en las tres importantísimas funciones que desempeñó inicialmente el partido oficial al fundarse en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario: contener el desgajamiento del grupo revolucionario; instaurar un sistema civilizado de dirimir las luchas por el poder y dar un alcance nacional a la acción

¹² Luis Medina, *Historia de la Revolución Mexicana. 1940-1952. Civilismo y Modernización del Autoritarismo*. El Colegio de México. México, 1979.

político-administrativa para lograr las metas de la Revolución Mexicana.”¹³

El último paso en la conformación de este contrato social entre Estado, capital y trabajo va a ser la incorporación orgánica de trabajadores y campesinos al partido de Estado. A este respecto, es importante enfatizar que no se trató solamente de una voluntad gubernamental que manipuló y engañó a la sociedad civil con el fin de conseguir sus objetivos particulares. Por el contrario, otro punto interesante que debe destacarse aquí, es la vocación participativa de la sociedad civil, amalgamada con una tendencia a reproducir formas de sociabilidad con una fuerte vocación estatal, que articuló a sectores mayoritarios de la sociedad en torno a la identificación del binomio Estado-nación-gobierno y gobierno-sistema político. Ello ayuda a comprender mejor el hecho de que los trabajadores estuvieran dispuestos a apoyar y fortalecer al Estado postrevolucionario, sin dejar de lado una premisa básica del acuerdo: que se diera satisfacción a sus demandas específicas.

Quedaban sentadas las bases de una de las características más importantes del nuevo Estado. Sobre el presidencialismo va a descansar la legitimidad incuestionada del Estado, otorgándole una influencia decisiva en la consecución de la gobernabilidad al lado del congreso, los gobernadores de los estados y el ejército.

¹³ Daniel Cosío Villegas, *El Sistema Político Mexicano*. Joaquín Mortíz. México, 1982. pag. 35.

Si bien el gobierno había entendido que las masas organizadas son la fuente del poder político legítimo (especialmente en el período cardenista), comprendió también que no habían nacido institucionalizadas, con lo que procedió a incorporarlas al Estado mediante su afiliación obligatoria al PRI. La movilización de los trabajadores en las ciudades culminó con la creación de la Confederación de trabajadores de México (CTM), que se convirtió en poco tiempo, en la organización laboral más importante durante el sexenio de Lázaro Cárdenas.

El establecimiento de la política de Frente Popular dictada por el VII Congreso de la Internacional Comunista el 2 de agosto de 1935, llevó a los partidos comunistas en todo el mundo a proponer alianzas con el fin de detener el avance del fascismo. La idea de promover el desarrollo de frentes populares no tomaría lugar en Iberoamérica sino en España, Chile y México. En el último caso dicha política estuvo motivada por el riesgo que representaba la evolución de las organizaciones sindicales independientes, que amenazaban convertirse en fuerzas políticas que enfrentaran al gobierno colocándose al margen de las instituciones políticas nacionales.¹⁴ El Comité Ejecutivo Nacional del partido anunció entonces una estrategia de puertas abiertas para la integración de todas las organizaciones de obreros y campesinos al frente popular antifascista, no con el fin de que el partido formara parte de esa alianza, sino con el propósito de incluir al frente popular en el

¹⁴ Ignacio Marván, "El Frente Popular en México durante el Cardenismo." *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. México, julio-septiembre, 1977. pags. 9-23.

partido. Paradójicamente, esta idea provenía del Partido Comunista Mexicano y especialmente de Vicente Lombardo Toledano, líder de la Central de Trabajadores de México (CTM), principal organización obrera del país. Se empieza a transitar progresivamente a un partido de sectores, a través de la cooptación de aquellos actores políticos independientes que habían conseguido algún grado de representatividad social, como en el caso de la Confederación Campesina Mexicana (CCM), la propia CTM, el PCM, y otras organizaciones urbano-populares. Es en la representación sectorial organizada donde se va a buscar la clave de la nueva estructura de representación política.

Un Modelo de Desarrollo Político Monopartidista

De principios de los cuarenta y hasta fines de la década de los sesenta arranca otra fase del desarrollo económico y político nacional. Es la época de la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones, basada en una activa participación del Estado en la economía. Años de crecimiento económico sostenido y estabilidad política propiciaron elevados niveles de consenso del régimen político postrevolucionario.¹⁵ El Estado había logrado consolidar una estrategia de integración política apoyada en la eliminación oficial del conflicto de la esfera pública, monopolizando el manejo de la ideología de la revolución y de una conciencia ciudadana articulada en torno al principio de la unidad nacional

¹⁵ Ernesto Fernández Hurtado, "La Iniciativa Privada y el Estado como Promotores del Desarrollo." Varios autores, *México. Cincuenta Años de Revolución. La Economía*. FCE. México, 1960. pags. 593-619.

encarnado en la figura del jefe del ejecutivo. Corresponde a la institución presidencial, en la cual se cristalizan la identidad y defensa de la soberanía nacional, perseguir los objetivos de crecimiento económico, justicia social y equidad en las relaciones laborales. Además, dadas las atribuciones que la Constitución le confiere, el titular del poder ejecutivo se convierte en el juez supremo de los pequeños y grandes problemas nacionales. Nuevamente, Daniel Cosío Villegas lo describe con su peculiar lucidez analítica:

“Pero en la realidad ocurre que los inconformes con una disposición, sea del ejecutivo, sea del legislativo de un Estado, acuden al Presidente de la República para que sea modificada por la vía de la ‘persuasión’. En esta forma el Presidente resulta ser el juez de última instancia o el arbitro final de los conflictos entre los gobernantes y los gobernados de las comunidades municipales y estatales.”¹⁶

Si bien este período se distinguió por altas tasas de crecimiento económico, paz social y estabilidad política, eso no significa que el conflicto haya estado ausente de la escena política. Lo que ocurrió fue que las estructuras institucionales

¹⁶ Daniel Cosío Villegas, *Op. cit.*, 1982. pag. 26.

diseñadas para absorberlo funcionaban a su plena capacidad instalada, no permitiendo que llegaran en ningún caso a provocar crisis políticas serias, ni cuestionamientos que suscitaran un rompimiento de la institucionalidad política o económica existente. Una parte fundamental de las posibilidades de gestión política del consenso estuvo cimentada en la satisfacción de las expectativas de una continua movilidad económica y social ascendente, particularmente en aquellos sectores que crecieron al amparo del modelo sustitutivo de importaciones: clases medias, sectores acomodados y obreros sindicalizados.

Poco a poco el Estado se convierte en el centro de la vida política y económica del país en este nuevo modelo de desarrollo económico, rematando la articulación corporativa entre Estado y sociedad civil a través de la intermediación político-social del PRI en el trinomio Estado-partido-gobierno.¹⁷ En estos años se acelera también el rezago de la modernización política del país respecto de la modernización de la sociedad y la economía. Las razones son múltiples: actores y formas de hacer política no experimentan ningún cambio notable, no hay un sistema de partidos políticos competitivo, el congreso es un instrumento al servicio del poder ejecutivo, incapaz de vigilar los actos del gobierno y de reflejar en su seno la creciente pluralidad social del país. Al mismo tiempo, la competencia electoral continuó siendo desigual e inequitativa, por lo que los procesos electorales

¹⁷ Alejandra Lajous, *Los Orígenes del Partido Unico en México*. UNAM. México, 1979.

se transformaron paulatinamente en un mecanismo ritual, donde el ejercicio de los derechos políticos ciudadanos se moderó hasta quedar reducido a la función de legitimar en las casillas decisiones tomadas con antelación por el jefe del ejecutivo.

Esta estrategia basada en el consenso, supone que los conflictos resultantes del proceso de modernización junto con las demandas planteadas por los diversos grupos sociales, dependen de las negociaciones directas entre los líderes de las organizaciones laborales y las diferentes instancias político-administrativas del gobierno y no en los espacios electoral o parlamentario. La articulación que se consolida luego de la revolución de 1910 llevó a la construcción de una sociedad corporativa, donde la propia idea de nación se transformó en patrimonio exclusivo del Estado postrevolucionario.

A lo largo de este período el PRI jugó un papel primordial de mediador entre Estado y sociedad civil absorbiendo los efectos potencialmente disruptivos del proceso de modernización que el país experimentaba, al tiempo que permitía que se preservara la autonomía del Estado con respecto a la sociedad, ampliando considerablemente sus márgenes de maniobra respecto a los actores políticos. Por otra parte, el sistema político, circunscrito en los hechos a la operación de un modelo de democracia unipartidista, continuó atrayendo a los nuevos grupos que aparecían en la esfera política y social, sin renunciar en ningún momento al

monopolio de representación de lo público que siguió ocupado por el binomio Estado-sistema político.

Un hecho decisivo de este período es la incorporación de las clases medias al sistema político. Sin embargo, a diferencia de la inclusión corporativa típica de los sectores obrero y campesino, su adhesión al partido se llevó a cabo más en términos individuales que gremiales. De este modo, a partir de la década de los cuarenta las clases medias otorgaron un apoyo relativamente constante al gobierno, motivado al igual que el movimiento obrero, por la satisfacción de las expectativas de mejoras económicas por parte del Estado. Ahora bien, al condicionar desde una posición más independiente que los sectores obrero y campesino su apoyo a las instituciones políticas, se configuraba un factor potencialmente desestabilizador del sistema político en su conjunto. Este hecho, junto a la prácticamente nula presencia de conflictos entre la clase media y los obreros, permite entender mejor el secreto de la exitosa transición desde un gobierno militar a un gobierno civil llevada a cabo entre los años treinta y cuarenta.

Otro factor relevante en este proceso fue el establecimiento de la CNOP (Confederación Nacional de Organizaciones Populares), que abrió todavía más el perfil político del partido con el propósito de incorporar a las “clases populares.”¹⁸ Debemos mencionar en este punto que la CNOP tuvo la importantísima función de

¹⁸ Samuel León, “Del Partido de Partidos al Partido de Sectores.” Varios autores, *Op. cit.*, 1991. pags. 83-128.

absorber institucionalmente al ejército, eliminándolo de la estructura sectorial partidaria y propiciando su desmilitarización. Luego de la segunda guerra mundial la CNOP se convirtió en el factor de cohesión de la retórica de la identidad nacional, contribuyendo a crear un terreno ideológico común en el que la ciudadanía vio estrecharse aún más sus opciones políticas, en el contexto de un orden político sustentado en los valores del nacionalismo revolucionario.¹⁹

Desmilitarización, inclusión política de la clase media, conciliación de los conflictos inherentes a la dicotomía entre identidad de masa y clase, disolución de los antagonismos de clase y administración conjunta del consenso, constituyen los atributos distintivos del proceso que estableció las condiciones políticas y sociales que dieron la pauta de un progresivo alejamiento del riesgo de gobiernos militares.

Paradójicamente, el éxito del Estado postrevolucionario trajo consigo una desvalorización de prácticas que estimularan una genuina democratización de las instituciones políticas nacionales. No se alentó la formación de identidades ciudadanas que propiciaran el desarrollo de un sistema de partidos competitivo. Durante varios decenios el único partido con una estructura territorial de alcance nacional y con estrategias electorales de largo plazo siguió siendo el PRI, en tanto que a su lado subsistían por breves períodos el resto de los partidos políticos. Muchas veces con propósitos dictados tan sólo por la coyuntura, sin contar en la

¹⁹ Otto Granados, "Estado y Rectoría del Desarrollo en México. Una Perspectiva Política." *México, Setenta y Cinco Años de Revolución*. T I. FCE. México, 1988. pags. 1-76.

generalidad de los casos con un apoyo electoral importante, que seguía siendo un mercado cautivo del partido en el poder. El único partido que compitió en la mayoría de las elecciones presidenciales con un candidato propio en estos años fue el PAN, la única alternativa de oposición que se aproximaba al prototipo de un auténtico partido político.²⁰ Su apoyo electoral estuvo tradicionalmente entre aquellos sectores de la población que no estaban incorporados al sistema corporativo, como grupos de nuevos empresarios y una amplia variedad de sectores de la clase media.

Queda claro entonces que el orden político partidista definido por la hegemonía del PRI involucró un Estado fuerte, una sociedad propensa a colocarse en una relación corporativa y un confinamiento de su participación al espacio político limitado por el Estado. Mientras el Estado tuviera posibilidades de garantizar crecimiento económico con estabilidad de precios, podría continuarse la redistribución de los recursos generados por el modelo de desarrollo económico, sin entrar en contradicción con los mecanismos de asignación de recursos del mercado. El patrón de acumulación de capital sustentado en la participación del Estado en la economía y la regulación discrecional del mercado, incrementaba las posibilidades de mantener el control sobre el sistema político, la administración de

²⁰ Leticia Barraza e Ilán Bizberg, *El Partido Acción Nacional y el Régimen Político Mexicano.* Varios autores, *Op. cit.*, 1994. pags. 81-111.

la legitimidad, y la consecución de la gobernabilidad en los planos económico, político y social.

Aún cuando la retórica oficial refrendaba incansablemente el compromiso con una sociedad más democrática y participativa, este objetivo se relegó a un segundo plano, privilegiándose en cambio un uso pragmático del poder como instrumento privilegiado de estabilización política. La única probabilidad de ejercicio de la ciudadanía política en una sociedad corporativizada se daba en el plano electoral. No obstante, también esta posibilidad se anuló, al adquirir los procesos electorales una importancia creciente en la evolución del sistema político en las décadas subsiguientes.²¹

Los cambios en el ámbito electoral se produjeron en dos vertientes. Por una parte continuaron siendo un ritual en la medida que los mecanismos de toma de decisiones se mantenían en las cúpulas, fuera del alcance de las bases. Al mismo tiempo, adquirieron nuevas funciones: dotar de legitimidad democrática a la elite en el poder, actualizar de manera permanente la movilidad política intraelite y permitir que el acuerdo histórico con los líderes de las organizaciones de trabajadores se ratificara periódicamente. En un orden político caracterizado por su inclusividad, el único terreno en el que las reglas del juego eran altamente excluyentes va a ser justamente la legislación electoral. Ante la falta de espacios para una competencia

²¹ Jacqueline Peshard, "El Partido Hegemónico: 1946-1972." *Ibid.* pags. 183-215.

equitativa, así como de libertad para participar en la esfera política, el atractivo de las elecciones se perdió.

Con todo, a lo largo de este período se observa la presencia de importantes movilizaciones sociales que representaron serios desafíos para el régimen político, especialmente a fines de la década de los sesenta y principios de los setenta. Sin embargo, lo aislado de los movimientos, el vacío de opciones políticas en la única dimensión validada oficialmente -el espacio electoral-, así como una ciudadanía ligada orgánicamente al Estado, contribuyó a que los estímulos provenientes de la sociedad civil carecieran de fuerza y continuidad.²²

Revolución y Gobernabilidad

Legitimidad de Origen y Esfera Pública

El proceso de institucionalización política se expresó también en la conformación de una esfera pública que se correspondía con el tipo de instituciones y prácticas políticas que el régimen postrevolucionario había estructurado. Si el objetivo era garantizar la estabilidad del régimen político emanado de la revolución terminando con las tendencias a la fragmentación política había que privilegiar consenso sobre pluralismo. No era ésta por supuesto una elección consciente. Norbert Elias ha introducido el concepto de *efectos no*

²² Diane Davis, "Protesta Social y Cambio Político en México." *Rev. Mexicana de Sociología*. México, 1988. pags. 89-124.

deseados para denotar la propiedad que tienen las decisiones individuales para determinar en el largo plazo, patrones de interacción social diferentes a aquellos previstos por los actores.²³

El imperativo de erigir una comunidad políticamente homogénea determinó que la primera característica de la esfera pública estuviera constituida por la preeminencia del tema (convertido en valor incontrovertible) de la *nacionalidad*, noción que en México asume una forma cercana a la idea de razón de Estado, que los gobiernos postrevolucionarios convirtieron en fuente de legitimidad política incontestable. Por ende, las categorías que mejor describen esta configuración histórica son las de pueblo o nación y no las de individuo o ciudadano.²⁴ Esta herencia de la revolución encontró un lugar en la memoria colectiva a través de la transformación del discurso de la elite política dominante, para la cual el concepto de lo público debía ser resignificado en la noción más integradora de lo nacional-popular. Tal conformación de la esfera pública resultó ser una contribución decisiva de la Revolución en el proceso de refundación de la cultura política nacional. Luis Aguilar ha resumido con claridad una de los efectos más debatidos de su funcionamiento: “El ‘Estado nacional’ lleva la delantera al ‘estado de derecho’ en la

²³ Norbert Elias, “La Sociedad de los Individuos.” *La Sociedad de los Individuos*. Península. Barcelona, 1990. pags. 83-84.

²⁴ Luis Aguilar, “Rasgos de la Vida Pública Mexicana.” *Sociológica*. México, 1990. pags. 129-149.

socialización política de las conciencias y en la forma de presentar y argumentar los intereses con pretensión de validez colectiva.”²⁵

Otra característica de la conformación de la esfera pública directamente relacionada con la elaboración simbólica de la política llevada a cabo por el discurso revolucionario, es lo que Luis Aguilar denomina el “mestizaje político-cultural”. Dicho en otras palabras, el término mediador entre la política oficial y la cultura hecha política fueron las propiedades conectivas del cemento de la nacionalidad. La acción del Estado, principal actor político y económico del período definió una modalidad específica de existencia y expresión de la opinión pública. Se trataba de uniformar la esfera pública al costo de cerrarla a formas expresivas incompatibles con la ideología revolucionaria, oficializando los modos permitidos de acceso y expresión a un espacio controlado por el Estado.

La articulación de un patrón de relaciones Estado-sociedad que se expresó en la corporativización de obreros y campesinos, un sistema político unipartidista y la personalización constitucional del poder en la figura presidencial, sentó las bases de una esfera pública donde la agenda de discusión social y política pasó a ser definida por el Estado, ante la presión de un modelo de gestión de la política y la economía que reclamaba una esfera pública no fragmentada. Una vez más Luis Aguilar describe claramente este proceso: “La estatalización de la sociedad y la

²⁵ Luis Aguilar, *Op. cit.*, 1990. pags. 136-137.

gubernamentalización del Estado han sido efectos de una vida pública ausente o limitada. La determinación de lo público se ha desprendido de la iniciativa e inteligencia social y se ha vuelto monopolio del Estado-gobierno.”²⁶ Aún cuando resulta tentador partir del supuesto de la ausencia de vida pública, una interpretación alternativa debe subrayar las especificidades históricas que asumió su funcionamiento. La esfera pública nacida de la revolución no fue sino una expresión dinámica de la tradición, la cultura política y el entramado institucional corporativo que se había creado.²⁷

Un rasgo fundamental de esta esfera pública ligado al predominio del discurso nacionalista está representado por el lento ascenso de una cultura de las mayorías absolutas. El otro no existe políticamente. Cuando aparece se muestra públicamente con el perfil del enemigo de la nación y el pueblo, cuya voluntad ha sido delegada a un gobierno capaz de incorporarla simbólicamente al discurso político oficial. Esta característica se expresó también en el terreno de los procesos electorales. Ahí se manifestó con claridad uno de los rasgos típicos de la cultura política: la existencia dual de una tradición legalista de respeto a la ley, acompañada de una no observancia del espíritu que la anima. Esta paradoja se

²⁶ *Ibid.* pag. 138.

²⁷ Margaret Somers ha problematizado las rutas críticas de la formación del espacio público y la ciudadanía en comunidades políticas consideradas similares como los Estados Unidos y la Gran Bretaña, enfatizando la función que desempeñan las interrelaciones entre desarrollo capitalista y ciudadanía por un lado, y estado y desarrollo capitalista por el otro. Margaret Somers. “Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy.” *American Sociological Review*, 1993, octubre. pags. 587-620.

resolvió gracias al recurso de la negociación y el acuerdo permanente, lo que dio lugar a un pragmatismo político que sería el correlato del respeto a las formas sancionadas oficialmente por la norma. De esta manera, aunque las elecciones no representaban la fuente sustantiva de la legitimidad del régimen, le conferían la autoridad moral de quien respeta las formas establecidas de un sistema democrático.

Esta cultura del consenso como mayoría absoluta tuvo repercusiones decisivas para la creación de formas de sociabilidad políticas en el México moderno, determinó además una configuración simbólica particular en la que disidencia y conflicto político-social son desterrados terminantemente de una esfera pública controlada por el Estado. La única modalidad de comunicación política permitida en este espacio pasó a ser la ideología del nacionalismo revolucionario y la unidad nacional, en torno a sus objetivos económicos, sociales y políticos. Pronto, el voto se transformó en la correa de transmisión institucional que posibilitaba la expresión electoral de este consenso mayoritario. Sin embargo, ello ocasionó efectos no previstos en aquellas lógicas imposibilitadas para expresarse públicamente, lo que provocó un doble entrelazamiento: por un lado la política se oficializó en el discurso nacionalista-revolucionario; por el otro, fue privatizada en una serie de prácticas que se hallaban al margen del ámbito sancionado por el Estado.

Este principio que operaba al margen de la política oficialmente reconocida asumió diferentes formas como la política del *rumor*, forma de participación en la esfera pública no reconocida oficialmente.²⁸ La importancia de estas modalidades de expresión política no públicas radica en que exteriorizan la imposibilidad de control total de la esfera pública, y la capacidad de la sociedad de dotarse a sí misma de formas participativas que asumirán un peso cada vez mayor. Esta situación se hará más evidente a principios de los ochenta, cuando se convertirá en un catalizador de las presiones a las que se vieron sometidos los repertorios de valores que habían estructurado el imaginario político nacional.

El funcionamiento de los patrones de vinculación entre gobernantes y gobernados en sociedades articuladas corporativamente, configura un vínculo política-economía-sociedad determinado por una interdependencia singular. Lo político se distingue aquí por la ausencia en la esfera pública de sujetos políticos definidos en términos de autonomía ideológica con relación al Estado, configurando así condiciones peculiares de ejercicio del gobierno. Control estatal de la esfera pública se traduce en mayor elasticidad de las variables económicas, puesto que el efecto de las restricciones socio-políticas que influyen en su desempeño es endógeno al sistema. Los procesos de toma de decisiones del gobierno se convierten en un aspecto crucial de la viabilidad del ordenamiento de la economía, al no tener

²⁸ Claudio Lomnitz, "Ritual, Rumor y Corrupción en la Formación del Espacio Nacional en México." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1996. pags. 21-51.

que confrontar interferencias políticas significativas, lo que deviene en un incremento considerable de la gobernabilidad del sistema político.²⁹ Estas condiciones empezarían a modificarse a fines de los sesenta y harían crisis en el curso de la década siguiente.

Otro rasgo distintivo de la esfera pública en México está dado por la conformación de una opinión pública con funciones diferentes a las supuestas por la tradición liberal. Para este último, la opinión pública es el fundamento sustantivo y operativo de la democracia: “En síntesis, ‘público’ no es sólo el sujeto sino también el objeto de la expresión. Se dice que una opinión es pública no sólo porque es del público (difundida entre muchos), sino también porque implica objetos y materias que son de naturaleza pública: el interés general, el bien común y, en sustancia, la *res pública*.”³⁰ Dicho escenario adoptó una forma distintiva en México. A medida que progresaba la tarea de construir un sistema político basado en la tradición de la mayoría, el consenso pasó a significar más que aprobación activa, aceptación pasiva de las decisiones del gobierno y de las reglas del juego establecidas.

Tal configuración histórica se expresó en el terreno de la opinión pública mediante la eliminación casi total de las posibilidades de influir sobre la intervención del Estado en la vida política, así como en la implementación de las

²⁹ Assar Lindbeck, “Políticas de Estabilización en Economías Abiertas con Comportamiento Político Endógeno.” *Revista Española de Economía*. Madrid, 1977. pags. 109-137.

políticas públicas. Algunos autores inconformes con una opinión pública cuyas funciones no eran de control y fiscalización de la intervención del gobierno, sino campo de expresión del consenso, llegaron a considerarla inexistente o corrompida,³¹ al no poder encontrar otro depositario de la responsabilidad de dicha gestión que no fuera el Estado.

La ciudadanía que se modeló en esta esfera pública hizo de la diferencia entre forma y contenido de la política oficial, una conciencia sensible a la percepción de las posibilidades reales de participación e influencia política: “Todos ... descubrieron y enseñaron a su sociedad que sólo lo organizado es real y sólo lo organizado que negocia con el Estado tiene carta de ciudadanía y es atendible en la polis mexicana. El pacto social de los treinta fue, en más de un sentido, una actualización del orbe político colonial, el mundo por excelencia de la presión y la negociación corporativas.”³² Queda claro que las instituciones que dieron origen al sistema político mexicano se fundaron en la negación de toda forma de participación política independiente, por lo que se asumió socialmente una identidad ciudadana ligada orgánica e ideológicamente al Estado.

³⁰ Giovanni Sartori, *¿Qué es la Democracia?* Nueva Imagen. México, 1996. pag. 59.

³¹ Véase por ejemplo Raúl Trejo Delarbre, “La Expresión Pública.” José Joaquín Blanco y José Woldenberg (comps.), *México a Fines de Siglo T II*. FCE. México, 1995. pags. 189-224.

Tradición y Revolución

Crisis económica y Apertura Política

Las condiciones que habían dado lugar a la conformación de una esfera pública estatizada, típica de la cultura política del México postrevolucionario, experimentaron un gradual proceso de envejecimiento funcional tanto en el plano económico como en el político. Luego del afianzamiento del sistema político postrevolucionario, los años que van de los cuarenta a principios de la sesenta constituyen la época del milagro mexicano. Este período se caracterizó por elevadas tasas de crecimiento económico, bajas tasas de inflación, déficit presupuestales moderados, así como pequeños déficits en la cuenta corriente. No obstante, hacia fines de la década de los sesenta empezaron a surgir problemas en el modelo. Una incompatibilidad cada vez mayor entre la política comercial y la política del tipo de cambio hacía cada vez más difícil mantener el equilibrio en las cuentas externas del país, los aumentos del salario real por encima de los niveles de productividad amenazaban la estabilidad de precios y la restricción del gasto público generaba malestar social.

Se gestaban las condiciones de un cambio en el modelo de desarrollo económico de la economía mexicana. El detonante sería un manejo errático de la política macroeconómica. Muchos de los problemas que desataron la crisis de este

³² Héctor Aguilar Camín citado por Fernando Solana Olivares, "Notas sobre Cultura Política." Enrique Florescano (coord.), *Hacia una Moderna Cultura Nacional*. Cambio XXI/IEPES. México, s.f. pag. 221.

modelo de desarrollo como el sesgo interno de la industrialización sustitutiva de importaciones, su ineficiente capacidad exportadora, el rezago del desarrollo en el campo, la presencia de disparidades en el desarrollo regional, una distribución del ingreso extremadamente desigual y un incremento alarmante de los índices de pobreza extrema, permanecerían como una constante en los años siguientes.³³

A partir de 1970 los crecientes niveles de descontento popular propiciaron la implementación de un conjunto de políticas macroeconómicas de corte populista. La respuesta del gobierno a la crisis consistió en aumentar la participación del Estado en la economía, abandonar toda cautela en la conducción del gasto público y optar por una mayor audacia en su manejo. Tal expansión del gasto público junto con la elevación nominal de los precios de las empresas públicas, ocasionó fuertes presiones inflacionarias y un creciente déficit en las finanzas públicas que fue saldado con créditos provenientes de la banca internacional, dando paso al proceso de endeudamiento externo de la economía mexicana.³⁴

Tasas de interés de rendimientos variables con plazos más cortos, un creciente endeudamiento externo que llevaría cíclicamente a fugas de capital y devaluaciones del tipo de cambio van a ser las constantes en esta década, pese a que la estrategia de contracción económica del gobierno se modificó con el

³³ María Guadalupe Acevedo, "Crisis del Desarrollismo y Transformación del Aparato Estatal: México 1970-1975." *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. México, octubre-diciembre, 1975. pags. 133-163.

descubrimiento de grandes reservas petroleras, combinado con la elevación coyuntural de los precios del energético. La década de los ochenta siguió el mismo patrón: devaluación y crisis económica llevarán a la firma de cartas de intención destinadas a poner en marcha programas de ajuste con el Fondo Monetario Internacional.

El Malestar en la Esfera Pública

En el ámbito político los cambios no fueron menos pronunciados. Durante este período se produjeron conflictos y escisiones dentro de la propia elite revolucionaria: 1940 con la candidatura presidencial del general Juan Andrew Almazán, 1946 con Ezequiel Padilla y 1952 con Miguel Enríquez. Pero no sólo en la política había desacuerdos e inconformidad. Entre 1956 y 1959 dos importantes conflictos laborales, el movimiento magisterial y la protesta de los ferrocarrileros dieron cuenta de los crecientes niveles de malestar social. En 1965 el presidente Díaz Ordaz tuvo que enfrentar dos acontecimientos que mostraban la magnitud de los cambios ocurridos en la relación entre sociedad y Estado y la gradual conformación de una nueva esfera pública. El movimiento de protesta de los médicos en octubre de 1964 ponía de manifiesto el profundo malestar existente en las filas de un gremio profesional típico de la clase media. Ese mismo año Carlos Madrazo era nombrado nuevo presidente del PRI. Luego del conflicto en San Luis

³⁴ Carlos Bazdresch y Santiago Levy, "El Populismo y la Política Económica de México, 1970-1982." Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards (comps.), *Macroeconomía del Populismo en América Latina*. FCE.

Potosí propiciado por un ex militante del partido, Salvador Nava, Madrazo comprendió que el crecimiento económico y la acelerada urbanización de los últimos años, habían colocado la mayor parte de la clientela política del partido en las ciudades, por lo que propuso un serie de reformas al PRI que culminaron con su remoción en diciembre del año siguiente.

Sin embargo, ninguno de los conflictos anteriores dejó una huella simbólica tan profunda como el movimiento estudiantil de protesta de 1968, hecho que puede ser considerado como el fin de un modelo de articulación entre desarrollo económico y régimen político, así como la culminación de un ciclo de la historia política del México contemporáneo. Significó también, según algunos autores, un anticipo de la manifestación pública de amplios sectores descontentos con las formas tradicionales del quehacer político en México.³⁵ La presencia pública estudiantil resultó trascendental gracias a la herencia simbólica de un imaginario colectivo que se construyó alrededor de la memoria del autoritarismo de la política oficial y el espíritu democrático del pueblo. Por primera vez en la historia del México contemporáneo se hacía explícita la rigidez de un sistema, cuya estrategia política en la esfera pública en esa coyuntura había sido la coerción y la violencia. La derrota práctica del movimiento estudiantil se convirtió en una victoria simbólica reconocida posteriormente como uno de los antecedentes inmediatos de los

México, 1992. pags. 255-296.

procesos de liberalización política que el gobierno emprendió hacia fines de los setenta. Si la aparición de la primera protesta simbólicamente exitosa se expresó en el estrecho marco de la revuelta estudiantil callejera, la segunda tuvo efectos más tangibles y un escenario más amplio que mostró el nuevo rostro de la política gracias a un procedimiento permitido por el sistema: la participación electoral.

El verano del 68 representó un primer indicio del agotamiento de la cultura de las mayorías absolutas y el consenso nacionalista del régimen, alimentado por circunstancias históricas de la más variada índole. La articulación histórica entre sociedad y Estado había sido desgastada por la crisis económica en varios de sus elementos constitutivos como la existencia de un partido de Estado, un sistema presidencialista con pluralismo limitado, una representación de intereses corporativa y elecciones no competitivas.³⁶ Transformaciones que no alcanzaron el grado de madurez necesario para convertir una esfera pública tutelada por el Estado en otra más plural con espacios para la crítica y el disenso.

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos del sistema político mexicano, coincide en señalar 1968 como un año clave para cualquier periodización de la historia política del México contemporáneo. A partir de ahí algunos autores distinguen tres momentos del proceso de modificación de las reglas del juego

³⁵ Soledad Loaeza, "México, 1968: Los Orígenes de la Transición." Varios autores, *La Transición Interrumpida. México 1968-1988*. Nueva Imagen. México, 1993. pags. 15-47.

³⁶ Wayne A. Cornelius y Ann L. Craig, *The Mexican Political System in Transition*. San Diego. University of California. Center for U.S.-Mexican Studies, 1991.

político: i). un período que abarca del inicio a la persistencia de la inestabilidad política (1968-1977); ii). otra etapa que va de la persistencia de los síntomas de inestabilidad a la crisis del autoritarismo (1977-19889); y una tercera fase que corre de la crisis del autoritarismo a la adaptación institucional del régimen (1988-1995).³⁷ Durante el sexenio del presidente López Portillo, se llevó a cabo la reforma política más ambiciosa intentada hasta ese momento. Sus propósitos pueden resumirse en dos objetivos: hacer más atractivo el sistema de partidos e incorporar a la legalidad a disidentes políticos y guerrilleros que habían optado por vías diferentes a las establecidas por los instancias legales. Dicha Reforma Electoral se materializó en la *Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales* (LOPPE) y fue aprobada por el congreso en diciembre de 1977. Al aumentar el número de diputados, reducir los requisitos de registro para los partidos y reconocer personalidad jurídica a las asociaciones políticas -hasta ese momento ilegales-, se estimuló la incorporación de nuevos actores al sistema.³⁸ El ajuste de las reglas del juego político ayudó a regular las presiones que pugnaban por una mayor participación en la esfera pública.

Algunos autores hablan de la existencia de más de una esfera pública y resumen sus transformaciones en seis momentos clave: "... 1) después de la

³⁷ César Cansino, "La Transición Política." *Construir la Democracia. Límites y Perspectivas de la Transición en México*. Miguel Angel Porrúa. México, 1995. pags. 13-49.

³⁸ Luis Medina, *Evolución Electoral en el México Contemporáneo*. Comisión Federal Electoral. México, 1978.

Independencia, la creación de una esfera pública propiamente nacional; 2) la formación de una base industrial moderna durante el Porfiriato; 3) la incorporación de un sector obrero al partido oficial después de la Revolución; 4) el surgimiento de grupos profesionales de clase media; 5) el surgimiento de sindicatos independientes en los años setenta, y 6) el aumento en los movimientos sociales que no se organizan en torno a intereses explícitamente de clase sino que se enfocan en problemas específicos tales como vivienda, derechos de la mujer, defensa de la ecología, etcétera.”³⁹ Cada uno de estas etapas significó una reformulación de la esfera pública que apuntaba en la dirección de una comunidad política más plural y participativa.

Ahora bien, el principal desafío que enfrenta un examen de la génesis y desarrollo de la esfera pública en México es la casi total ausencia de trabajos que aborden el tema. La gran mayoría de las encuestas de opinión pública se levantaron a principios de la década de los sesenta, por lo que no contamos con indicadores que nos permitan hacer un seguimiento de su evolución. Pese a ello, existen algunas investigaciones empíricas que nos permiten evaluar el pulso de la opinión pública luego del parteaguas del movimiento del 68.

Uno de los espacios de expresión de la opinión pública son indudablemente los procesos electorales, terreno donde se definen con claridad reglas del juego que

³⁹ Claudio Lomnitz, *Op. cit.*, 1996. pag. 32.

regulan el intercambio político entre los diferentes actores del sistema. Las elecciones han sido objeto de enconados debates entre los numerosos politólogos que han estudiado el caso mexicano. Autores como Vincent Padgett y Charles W. Anderson opinan que la única forma de opinión pública permitida por el gobierno era el punto de vista de los intereses formalmente organizados en sectores dentro del partido.⁴⁰ Ello era una muestra de la manera en que se privilegiaba la ideología revolucionaria sobre el estado de derecho, y la unanimidad nacionalista de un consenso que concebía a la oposición política como enemigo irreconciliable. La existencia de una opinión pública poco crítica de la toma de decisiones institucional, llevó a una situación en la que el Estado no llegó a reconocer como valor de la cultura política el control social de las acciones del gobierno.

Las elecciones se convirtieron en un mecanismo de respeto procedimental de un sistema constitucionalmente democrático, a fin de evitar problemas de gobernabilidad en la medida que no había una cultura de la responsabilidad pública ni medios organizativos de expresarla en espacios institucionales como el parlamento. Lo sorprendente de esta configuración histórica era la aceptación mayoritaria de un entramado institucional que no satisfacía del todo sus expectativas. Almond y Verba lo explicaron argumentado la existencia de una brecha entre aspiración y desempeño, que se expresaba en el “cinismo” de las

⁴⁰ Vincent Padgett, *The Mexican Political System*. Houghton Mifflin. Boston , 1966, Charles W. Anderson, y William P. Glade Jr., *The Political Economy of Mexico*. University of Wisconsin Press, 1963.

respuestas de sus entrevistados, quienes reconocían que las elecciones no eran un escenario donde estuvieran en juego decisiones fundamentales para el sistema. El discurso había logrado hacerse constitutivo de la realidad que reflejaba. Como afirma Foucault, una vez que se elabora una nueva terminología que explica y posibilita el acceso a la comprensión de un rango de eventos políticos, discursos y valores que aspiran a dar cuenta de la realidad, aquella termina por permearla de tal modo que contribuye de manera fundamental a su reorganización práctica.⁴¹

Así pues, a la invención oficial de la política por parte del Estado, correspondió una reapropiación social doble: 1º aquella que se expresó directamente en la esfera pública como consenso, y 2º. aquella que fue privatizada a través de prácticas y valores que no tenían acceso formal a dicha esfera. De ahí la desconfianza hacia la política en tanto ésta no era concebida como una expresión que agotaba su verdad ni sus posibles simbolizaciones en lo estrictamente público, sino que era resignificada en los espacios no reconocidos oficialmente como el rumor o el chisme político. Desde esta perspectiva, el Estado no puede concebirse como el “leviathan exhausto” que algunos investigadores han querido ver,⁴² por el contrario, su discurso es apropiado y transformado por la sociedad a la cual está dirigido, lo que ayuda a explicar en buena medida la aceptación del statu quo para la mayoría de la población.

⁴¹ Michel Foucault, “Totalidad Nacional y Universalidad del Estado.” *Genealogía del Racismo*. La Piqueta. Barcelona, 1992. pags. 223-245.

A fines de la década de los setenta se publicó una de las escasas investigaciones que analizaba empíricamente la opinión pública en la capital de la república y áreas conurbadas del estado de México. Los resultados obtenidos provocaron el desconcierto de aquellos politólogos empeñados en explicar el sistema político mexicano con los conceptos, metáforas y categorías del sistema bipartidista norteamericano. Utilizando la noción de “convicciones” o “creencias básicas” como herramienta de análisis de la opinión pública, el autor encontró que la peculiaridad de un sistema unipartidista no se ajustaba al paradigma que explica la participación política tomando como variable central la identificación partidaria. En el caso mexicano la identificación partidaria no parecía ser un elemento relevante de la esfera pública, la clave explicativa había que buscarla en la hegemonía del discurso del consenso como mayoría absoluta y su personificación en la figura del jefe del ejecutivo. Pocos años después del movimiento del 68 los datos revelaron que las dos creencias básicas de la opinión pública seguían siendo presidencialismo e ideología nacionalista, ambos factores de identificación política en un sistema organizado alrededor de un sólo partido.

Adicionalmente, los datos recolectados mostraron que la distribución del conocimiento sobre política estaba fuertemente determinado por el sesgo personalista del sistema: más del 90 por ciento de los entrevistados respondieron

⁴² Héctor Aguilar Camín, *Después del Milagro*. Cal y Arena. México, 1993.

correctamente a las preguntas relacionadas con la figura presidencial, en tanto que apenas un 7.4 por ciento mostró tener algún conocimiento básico de la estructura del gobierno y del partido.⁴³ Asimismo, pese a que los investigadores partían del supuesto de que el incremento de la información constituía un elemento determinante de las formas de comportamiento político, los resultados de la encuesta mostraron que su aumento no estaba necesariamente correlacionado con un rechazo del sistema electoral. Dicho en otras palabras, no se asociaba a la evaluación crítica del desempeño de las instancias gubernamentales relacionadas con la organización de los procesos electorales.

No obstante, los resultados de la encuesta mostraron también un rechazo a la hipótesis de la no utilización del voto como estrategia de protesta. Los datos a este respecto son particularmente interesantes ya que permiten detectar un patrón de comportamiento político que anticipa algunos de los cambios que harían eclosión posteriormente. Así, aún los individuos políticamente menos informados mostraron una mayor propensión a votar por la oposición o abstenerse, si el candidato del partido en el gobierno no les satisfacía.⁴⁴

Otro resultado notable de esta investigación que permite ilustrar las particularidades de la cultura del consenso como mayoría absoluta es el hecho de que 73.8 por ciento del total de la muestra manifestara un fuerte acuerdo con la

⁴³ Kenneth Coleman, *Public Opinion in Mexico City about the Electoral System*. University of North Carolina Press. Chapel Hill, 1972. pags. 26-27.

forma en que las elecciones eran llevadas a cabo, 65.8 por ciento pensaba que la mayor parte de la población tenía confianza en las elecciones y más del 70 por ciento (72.4 %) estaba convencida de que su funcionamiento representaba una prueba de que la democracia existía en México. Además, es sintomático que sólo un 17 por ciento de los entrevistados defendiera la existencia de una prensa veraz e imparcial, al tiempo que más del 60 por ciento (66 %) de los ciudadanos no estuvo de acuerdo con la reelección del jefe del ejecutivo.⁴⁵

Los datos presentados reflejan la herencia de casi cuatro décadas de discurso nacionalista-revolucionario así como la asociación entre pluripartidismo e inestabilidad, preocupación que estuvo en el origen del diseño de las instituciones políticas del México postrevolucionario. Esta idea transformó la política en consenso y desterró el conflicto del discurso oficial convirtiendo la democracia en un fetiche. La idea de que el Estado es el único representante legítimo de los intereses colectivos y la búsqueda de una política de unidad nacional se hace manifiesta en la información empírica proporcionada por la encuesta. Sin embargo, la tendencia a utilizar el voto como expresión de protesta e inconformidad evidencia la creciente tensión entre un modelo político cuyo principio de representación se sustentaba en la obtención de mayorías absolutas en una esfera pública homogeneizada, y la tendencia, estimulada por cambios en los patrones económicos y demográficos, por

⁴⁴ Kenneth Coleman, *Op. cit.*, 1972. pags. 32-33.

⁴⁵ *Ibid.* pags. 46-48.

un reconocimiento oficial de la pluralidad social que deviniera en una mayor pluralidad política en una esfera pública más independiente del Estado.

“El liberalismo se define, en abierto contraste con el maquiavelismo, por la máxima se gobierna siempre demasiado, por lo menos es necesario sospechar que se gobierna demasiado.”

M. Foucault

IV

CUANDO LA VIRTUD PIERDE TODO SU ENCANTO

Crisis, Transformación y Cambio

El presidente Miguel De la Madrid tomó posesión de su cargo el 1º de diciembre de 1982 en medio de una crisis sin precedentes en la historia reciente del país. Devaluación del tipo de cambio, caída de los precios internacionales del petróleo, nacionalización de la banca, deuda externa y conflicto con el sector empresarial, constituían el entorno al cual tuvo que hacer frente la nueva administración. La economía fue el primer campo de batalla.

En su discurso de toma de posesión anunció un Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) que pretendía hacer frente a dos problemas: 1. El refinanciamiento de la deuda externa y la reanudación de los flujos internacionales de capital, 2. La instrumentación de una estrategia de cambio estructural que evitara la recurrencia de crisis económicas cíclicas. Para superar ambos obstáculos el plan

contemplaba reducir los desequilibrios en las finanzas públicas, la balanza de pagos y el ritmo de crecimiento de los precios. En consecuencia, una de sus primeras medidas de política económica fue negociar un Acuerdo de Acceso Ampliado con el Fondo Monetario Internacional, a fin de iniciar un programa de estabilización que abarcó los tres primeros años de su gestión.

Los indicadores comerciales y financieros mostraban signos de la magnitud del problema. La inflación había alcanzado una tasa de crecimiento superior al 100 por ciento anual en el último trimestre de 1982, el flujo de recursos financieros procedentes del exterior prácticamente se había detenido, el déficit de las finanzas públicas rondaba el 8 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el tipo de cambio real mostraba una sobrevaluación del orden de casi 25 por ciento. Todo ello condujo a un entorno macroeconómico desfavorable que provocó una fuga masiva de capitales que fluctuó entre los 17 y los 22 mil millones de dólares tan sólo en el período 1980-1982. Entretanto la deuda externa rebasaba ya los 80 mil millones de dólares y había pasado a ser uno de los principales determinantes del deterioro de la cuenta corriente. Los pagos de intereses del principal habían rebasado sustancialmente la disponibilidad neta de recursos provenientes del saldo de la balanza comercial y otros rubros como los servicios no factoriales, alcanzando los 14

000 millones de dólares en 1982, un monto que equivalía casi a la mitad de total de exportaciones de bienes y servicios de ese año.¹

El impacto de la crisis provocó ajustes importantes a las formas históricamente establecidas de relación entre Estado y mercado. La Revolución había hecho del desarrollo económico su gran objetivo, impulso cuya cristalización política en la ideología de la unidad nacional lo convirtió en mandato dominante de la actividad estatal. Para la nueva administración la divisa de más economía y menos política, condensada en el eslogan del realismo económico, chocaba con uno los principios rectores de los regímenes postrevolucionarios sobre el que se había fundado la ideología igualitaria del sistema político, constituida por la eficacia del gobierno para conciliar legitimación y acumulación, sin ocasionar problemas de gobernabilidad al régimen. Parte de la explicación de esta peculiaridad radica en la evolución de la actividad económica. Durante el período del desarrollo estabilizador la tasa promedio de crecimiento de la economía se había mantenido de manera consistente en niveles superiores al 6 por ciento, contrastando con la tendencia a la desaceleración del ritmo de la actividad económica que culminó en un crecimiento negativo de -0.6 por ciento en 1982.

Para fines de la década de los ochenta el impacto de las restricciones externas se hizo cada vez más fuerte con la emergencia de un patrón de comercio exterior

¹ Rudiger Dornbusch, "México: Estabilización, Deuda y Crecimiento." *El Trimestre Económico*. México, octubre-diciembre, 1988. pags. 891-894.

que concentraba las exportaciones en un solo producto, el petróleo, por fuerza vulnerable a las oscilaciones en los mercados internacionales, al tiempo que perfilaba un flujo de importaciones de bienes de capital e insumos intermedios que tendía a incrementarse más que proporcionalmente, a medida que aumentaba la producción interna. Esta situación provocó que el crecimiento de la economía se volviera dependiente de una sola mercancía y por ende más sensible a las rigideces de la demanda externa de exportaciones, mientras por el lado de las importaciones el aumento de la producción industrial se ligaba a déficits crónicos de la balanza comercial.

Una muestra clara de las tensiones latentes a las que se hallaba sometida la economía lo ilustra la evolución longitudinal de los niveles de endeudamiento externo. En 1973 la razón deuda externa/producto interno bruto se hallaba en un nivel aproximado del 20 por ciento, una década después la proporción se había elevado hasta alcanzar un 70 por ciento del PIB. Esto significa que las obligaciones crediticias del Estado representaban casi las cuatro quintas partes del Producto Interno Bruto en ese año. El aumento de los pasivos gubernamentales en los últimos años del sexenio del presidente López Portillo nos da una idea del monto de los desequilibrios: de diciembre de 1980 a diciembre de 1982 los compromisos financieros con el exterior aumentaron de 40 a 90 mil millones de dólares.²

² Rudiger Dornbusch, *Op. cit.* pag. 889.

La declaratoria de suspensión temporal de pagos en agosto de 1982 obligó al gobierno del Presidente De la Madrid a reconsiderar aspectos sustantivos de la relación entre política y economía. La estrategia, empezó modificando el diseño tradicional de la política macroeconómica y terminó por cuestionar la lógica que acreditaba el predominio del Estado sobre el mercado. La instrumentación de la política económica de corto plazo forzó al gobierno a dejar de lado el objetivo histórico de justificar políticamente la persistencia de las desigualdades económicas gracias al incremento de los niveles de empleo, para concentrarse en dos frentes que amenazaban la estabilidad del régimen: control de la espiral inflacionaria y ajuste gradual de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Los objetivos inmediatos de esta política apuntaban a equilibrar las finanzas públicas y mejorar la capacidad de servicio de la deuda externa. Adicionalmente, la propuesta de un modelo de “cambio estructural” de largo plazo se proponía abordar cuatro grandes problemas que se pensaba, estaban en el origen de la recurrencia de las crisis económicas: 1. Ineficiencia del sistema productivo, 2. Mal uso y generación insuficiente de divisas extranjeras, 3. Escasez de ahorro interno, y 4. Corrección de las desigualdades sociales producidas por el proceso de crecimiento económico. Los aspectos más importantes de la inusitada transformación a corto y largo plazo pueden resumirse en dos puntos: 1º. Gradual retirada de la intervención del Estado

en la economía, 2º. Drástica alteración de la estructura de precios relativos corriente como tipo de cambio, tasa de interés, así como precios y tarifas del sector público.³

El nuevo patrón de crecimiento liderado por las exportaciones demandaba un ajuste importante de la estructura de precios relativos. Esto no era tarea fácil. Implicaba la instrumentación de una política de promoción de las exportaciones no petroleras respecto de los bienes de consumo interno, la modificación de la estructura de tarifas de las empresas públicas, el ajuste de las tasas de interés reales, la adecuación del sistema impositivo y la disminución de los subsidios estatales. El gobierno hizo frente a la crisis poniendo en marcha un esquema de contracción de la demanda a través de los instrumentos fiscales y monetarios. Para enfrentar el ajuste provocado por la crisis de la deuda se eligió el tipo de cambio y los salarios reales como el medio idóneo para alcanzar la competitividad, variables que permitieron amortiguar el efecto negativo de las restricciones financieras externas. No obstante, la fuerte depreciación del tipo de cambio vino acompañada de una espectacular caída del salario real del orden del 50 por ciento, lo que provocó una aguda recesión económica que no favoreció la creación de empleos y el incremento de las exportaciones.⁴

³ Jaime Ros, "Del Auge Petrolero a la Crisis de la Deuda. Un Análisis de la Política Económica en el Período 1978-1985." Rosemary Thorp y Lawrence Whitehead (eds.), *La Crisis de la Deuda en América Latina. Siglo XXI Editores*. Bogotá, 1986.

⁴ René Villarreal, "Deuda Externa y Política de Ajuste: El Caso de México 1982-1986." Sthephany-Griffith Jones (comp.), *Deuda Externa, Renegociación y Ajuste en la América Latina*. FCE. México, 1988. pags. 42-67.

El centro neurálgico del proyecto se basó en la disminución y control del gasto público, la reducción del déficit presupuestario, la eficiencia de la administración pública, la instrumentación de una política que normara la responsabilidad de los funcionarios públicos y la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de renovación moral de la gestión pública. En síntesis, se trataba de atacar los problemas más acuciantes del momento: frenar el aumento de los precios, eliminar la inestabilidad del tipo de cambio, disminuir la escasez de divisas y proteger la planta productiva y el empleo, de manera tal que se evitara el estallido de conflictos políticos y se redujeran las tensiones sociales. Sin embargo, la economía no logró salir del estancamiento y entrar en un proceso de recuperación debido a las dificultades que planteaba la necesidad de compatibilizar un doble proceso: por una parte un ajuste macroeconómico ortodoxo que demandaba una elevación sustantiva de los flujos internacionales de capital, por la otra una política de vastas transferencias de recursos financieros hacia el exterior.

La incipiente recuperación económica se vio nuevamente afectada por el shock petrolero de 1985 que echó por tierra los objetivos macroeconómicos del gobierno. Dadas estas condiciones se hacía necesario un nuevo enfoque que sin apartarse del esquema ortodoxo de libre mercado introdujera otros ingredientes. Era preciso un modelo de ajuste diferente que incorporara elementos heterodoxos al dispositivo de la mano invisible. Se introdujo entonces la idea de un pacto social

construido sobre la base de la concertación entre sectores con el liderazgo del gobierno. El elemento novedoso estaba constituido aquí por el reconocimiento de integrar a la estrategia de ajuste, instrumentos no convencionales que hicieran más eficaces los engranajes del mercado. La nueva política económica anunciaba el estilo que habría de asumir el liderazgo gubernamental en los años siguientes, una rutina de negociación y ajuste que seguía echando mano de tradiciones corporativas aparentemente superadas por la crisis, en un entorno caracterizado por una mayor diferenciación funcional entre política y economía, que alteraba los repertorios de integración política fundados en la centralidad del Estado. A contrapelo de un neoliberalismo que se esforzaba por deducir política de economía -tal como lo había intentado décadas antes el marxismo-, ésta hacía valer su carácter de “instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica” en medio de la crisis.⁵

En estas condiciones el 15 de diciembre de 1987 se anunció un nuevo acuerdo. El Pacto de Solidaridad Económica (PSE) tenía como objetivo disminuir la inflación y recuperar la senda del crecimiento económico, mediante la incorporación temporal de medidas heterodoxas que incluían controles de precios y salarios. La táctica del plan consistía en reducir la inflación por etapas, descartando cualquier eliminación violenta a través de una política de shock. Al igual que en el pasado se aplicaron políticas fiscales y monetarias restrictivas y se aceleró el proceso de

⁵ Juan Carlos Portantiero, “Sociedad Civil, Estado y Sistema Político.” Juan Carlos Portantiero, *La Producción de un Orden. Ensayos sobre la Democracia entre el Estado y la Sociedad*. Nueva Visión.

liberalización comercial iniciado con el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en el verano de 1985. Otra vez aparecía la política en el corazón mismo de la trinchera económica neoliberal, dando paso a una concertación social explícita, que reiteraba una maniobra ensayada en sexenios anteriores: el establecimiento de compromisos políticos para cada sector concurrente, que minimizara la incertidumbre de sus demandas, maximizara la eficiencia, e hiciera más fluido el proceso de toma de decisiones institucionales.

Los resultados del pacto fueron alentadores. La tasa de crecimiento anual de los precios que en diciembre de 1987 había alcanzado 159.2 por ciento bajó a un 51.2 por ciento a fines de 1988, la reducción del gasto programable del gobierno superó las metas iniciales alcanzando un superávit primario de las finanzas públicas que representó un 8.1 por ciento del PIB y un crecimiento de 1.4 por ciento del PIB en 1988.⁶

El gobierno del presidente Salinas de Gortari dio seguimiento a la política económica del régimen anterior con algunas modificaciones, particularmente por lo que respecta a los objetivos de controlar la inflación y retomar el crecimiento económico. La nueva administración comprendió que el estancamiento económico de la década de los ochenta no podía prolongarse por más tiempo e implementó un

Buenos Aires, 1988. pag. 116.

⁶ Pedro Aspe, "Estabilización Macroeconómica y Cambio Estructural. La Experiencia de México (1982-1988)." Carlos Bazdresch, Nisso Bucay, Soledad Loaeza y Nora Lustig (comps.), *México. Auge, Crisis y Ajuste. II. Macroeconomía y Deuda Externa, 1982-1989*. FCE. México, 1992. pags. 79-102.

nuevo plan en diciembre de 1989, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). La nueva estrategia enfatizaba la necesidad de retomar el camino de la recuperación económica sin descuidar el combate a la inflación. Con ese propósito, Salinas de Gortari concentró sus esfuerzos de reordenación económica en tres frentes: renegociación de la deuda externa, seguimiento de la política de privatizaciones –recursos que fortalecieron las finanzas del gobierno y ayudaron a disminuir el déficit de las finanzas públicas-, e inicio de negociaciones encaminadas a firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

La estrategia de implementar una política económica que incluía la concertación a través de pactos entre los diferentes sectores de la sociedad, era un síntoma de la renovada continuidad de la política como factor determinante de la economía, modelo cuya expresión más nítida había sido el activismo económico del Estado. De esta manera, la crisis estimuló procesos de adaptación que dieron continuidad dentro del cambio, a formas históricamente arraigadas de relación entre Estado y mercado. La instrumentación de pactos sociales insinuaba la persistencia de formas añejas de sociabilidad política, insertas en estructuras político-culturales de larga duración que reaparecían en los intersticios del camino de la modernización económica. Regular una economía más abierta con el sector público como ancla de los procesos de estabilización y cambio estructural, mostró que la política aún pretendía conciliar el añejo discurso revolucionario de la unidad nacional, con la

emergencia de condiciones inéditas para el funcionamiento de un modelo de desarrollo económico erigido sobre la base de la centralidad del Estado como supuesto de la integración social y política. Esa lógica donde la economía dependía de la política y el Estado constituía la autodescripción del sistema político, lindaba los confines de su funcionalidad histórica.

La Reforma de la Conexión Estado-economía

Hablar de Estado y economía toca una de las cuerdas más sensibles de la cultura política nacional, el rol del Estado nunca estuvo acotado por el activismo económico en la forma de inversión o propiedad de grandes entidades industriales. Todo lo contrario, junto con la expansión del gasto público la creación de empresas estatales trajo aparejada una espesa red de intercambios recíprocos, de ordenamientos legales que redefinieron las fronteras entre lo público y lo privado, sociedad política y sociedad civil, fortaleciendo el liderazgo moral de la Revolución. Su propósito no era sólo estimular ciertas ramas de la economía, controlar precios, delimitar la participación del sector privado, controlar la operación de compañías extranjeras o proteger de la competencia a las empresas nacionales. Se trataba de crear un espacio de concurrencia política con el Estado como agente promotor y conductor del cambio social en gran escala.⁷

⁷ Lawrence Whitehead, "Por Qué México es casi Ingobernable." *Revista Mexicana de Sociología*, enero-marzo, 1980. pag. 208.

Las posibilidades de continuar desempeñando esta función experimentó mutaciones importantes luego de 1982. Una de las primeras bajas del proceso de liberalización emprendido por las administraciones de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas fue el modelo de eslabonamiento Estado-economía. A la postre, sería uno de los factores que más influiría en el proceso de cambio caracterizado por una reforma progresiva de los patrones de interdependencia política entre sociedad y Estado. Avalado por la Constitución de 1917, el Estado había sido el agente económico más importante del modelo de crecimiento adoptado por los gobiernos postrevolucionarios. Su participación en las actividades productivas representó durante décadas, el motor indiscutible de la estructura industrial, la distribución del ingreso y el reparto de concesiones clientelares. Ordenamiento económico alrededor del cual se creó un tipo de articulación sociopolítica que serviría de soporte material y espiritual de una cultura política no participativa, caracterizada por una acendrada propensión autoritaria.

Por el contrario, las medidas instrumentadas a principios de los ochenta tenían el objetivo declarado de equilibrar las finanzas públicas a través de una política de ajuste que controlara tanto el déficit presupuestal como la inflación. Desencantado con el descrédito del intervencionismo keynesiano que veía en el déficit de las finanzas públicas un factor efectivo para salir del estancamiento, el gobierno acogió con entusiasmo una estrategia monetarista de contracción

económica cuyo objetivo central pasó a ser el combate a la inflación. Esto significó algo más que un mero viraje de política económica. Implicaba un cambio fundamental en la manera de concebir el emplazamiento económico del Estado que abriría nuevos espacios de participación a la empresa privada.

En primer lugar se produjo una modificación de la estructura del gasto público. Pese a que los egresos se mantuvieron bajo control, el monto del desequilibrio financiero del gobierno se disparó en un primer momento, alimentado por el peso de las amortizaciones del servicio de la deuda externa y el costo de los intereses moratorios. Posteriormente, las erogaciones se mantuvieron elevadas como resultado de la necesidad de volver atractivos los rendimientos de los valores gubernamentales, decisión que indujo un crecimiento aún más desproporcionado de la deuda interna del sector público. También se produjo una contracción real del gasto programado del gobierno mediante la disminución del gasto corriente, los programas de inversión federal, así como el recorte de empresas paraestatales. La estrategia para reducir el déficit de las finanzas públicas privilegió la caída del gasto en lugar del fortalecimiento de los ingresos, situación que condujo a un brusco deslizamiento de la inversión del Estado que pasó de 11 a 4 por ciento entre 1980 y 1990.

Cuadro 1
Gasto Público e Intervención del Estado 1940-1990
(% del PIB y estructuras porcentuales)

	1940	1950	1960	1970	1975	1980	1985	1990 ^P
Gasto neto PIB ¹	7.6	8.2	12.6	19.3	30.5	33.0	39.0	32.0
Gasto programable/PIB	6.6	6.9	9.2	16.3	26.1	27.1	23.3	18.3
Intereses/PIB ²	1.0	1.3	3.4	1.7	2.0	3.4	12.7	10.1
Inversión pública/PIB	3.5	6.3	5.2	5.1	10.9	11.1	5.0	4.0
Déficit financiero/PIB	0.7	0	0.4	3.4	9.3	7.5	9.6	4.3
Balance primario/PIB ³	-	-	-	-1.3	-6.0	-3.0	3.4	7.5
PIB público/PIB total	-	-	-	-	14.6	18.5	24.0	23.0
PIB públ. manuf./tot. manuf.	-	-	-	-	3.4	5.5	5.3	2.1
(Composición porcentual)								
Gasto neto (total)	100	100	100	100	100	100	100	100
Programable	86.1	84.0	72.3	84.5	86.2	82.1	59.7	57.0
No programable	13.9	16.0	27.3	15.5	13.8	17.9	40.3	43.0
Intereses	-	-	-	8.7	6.6	10.3	32.6	32.2

Fuente: Enrique Provencio, "El Claroscuro de los Ochenta: La Década en la Perspectiva del Desarrollo." José Joaquín Blanco y José Woldenberg (comps.), *México a Fines de Siglo*. T.II. FCE. México, 1995. pag. 253.

Durante la administración del presidente De la Madrid los nuevos perfiles de la relación Estado-economía se convirtieron en discurso oficial mediante la instrumentación de una estrategia económica que dio inicio a un vasto programa de privatización, fusión o extinción de empresas y organismos paraestatales acompañada de una política de transferencia de responsabilidades administrativas a los estados. La estrategia de redimensionamiento del sector público queda firmemente establecida tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 como en el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (Pronafice). El primero fijó las líneas generales que determinaron los criterios de creación, adquisición, fusión, liquidación o venta de empresas públicas. Por su parte, el

Pronafice asentó que el objetivo de la empresa pública “no era un Estado más grande sino un Estado más fuerte y eficiente.” La regla que guió este proceso fue la desincorporación de entidades no estratégicas -definidas así constitucionalmente o de acuerdo a las pautas establecidas por los programas de desarrollo gubernamentales. El punto central aquí es el cambio en la mentalidad respecto a las funciones del Estado. De ser un promotor importante del crecimiento económico con productos finales, insumos intermedios o bienes de capital, pasó a ser visto como un actor cuyas acciones quedaban restringidas a ciertos ámbitos reservados exclusivamente a su intervención. Un reflejo nítido de la nueva visión es el reemplazo del concepto de “rectoría del Estado” por el de “intervención del Estado en materia económica.”⁸

Otro cambio fundamental de mentalidad cuya aparición representó una incómoda novedad para la tradición de izquierda, fue el abandono de la intervención directa del Estado en actividades productivas con el fin de regular la economía. El nuevo gobierno dejó claro que la redefinición del vínculo Estado-economía no implicaba un retiro masivo sino una readecuación de su rol en la promoción del desarrollo económico. En lugar de participar directamente en la actividad económica, el Estado se encargaría ahora de crear las condiciones favorables para la inversión privada. Por consiguiente, la estrategia de

⁸ Jorge Ruiz Dueñas, “El Redimensionamiento del Sector Parestatal, 1982-1988: Hacia un Balance del Sexenio.” *Foro Internacional*, abril-junio, 1990. pag. 797.

desincorporación experimentó un salto cuantitativo y cualitativo en 1989 que alcanzó sectores tan importantes como el transporte, la inversión extranjera, la petroquímica secundaria, el comercio y varias ramas de la industria manufacturera.⁹ Muchas de las empresas más grandes -medidas por el valor de sus activos- pasaron a manos del sector privado como Teléfonos de México, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Compañía Minera Cananea, Altos Hornos de México y Aseguradora Mexicana. De esta manera, las políticas de reglamentación y gasto público deficitario fueron definitivamente abandonadas.

Cuadro 2
Evolución del Sector Paraestatal 1982-1992

	1981	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Organismos descentralizados ¹	102	97	95	96	94	94	89	88	82	77	77
Empresas de participación estatal mayoritaria ²	744	700	703	629	528	437	252	229	147	119	112
Fideicomisos públicos ³	231	199	173	147	108	83	71	62	51	43	43
Empresas de participación estatal minoritaria ⁴	78	78	78	69	7	3	0	0	0	0	0
TOTAL	1155	1074	1049	941	737	617	412	379	280	239	232

¹ Firmas o instituciones autogobernadas en el sector estatal.

⁹ José Joaquín Blanco y José Woldenberg, *Op. cit.* pag. 255.

² Firmas con alguna participación privada.

³ Firmas promotoras del desarrollo económico.

⁴ Firmas con una minoría de propiedad gubernamental

Fuente: *El Proceso de Enajenación de Entidades Paraestatales*. Unidad de Desincorporación, SHyCP. México, 1992.

La reforma de la conexión Estado-economía tuvo efectos directos sobre el orden político tanto al nivel de las instituciones como de los actores. Al erosionar rasgos cruciales de un sistema de gobierno fundado en redes informales de clientelismo político, bajos niveles de responsabilidad administrativa y una estructura piramidal rígida del proceso de toma de decisiones acompañada de una buena dosis de discrecionalidad, indujo una serie de cambios fundamentales en el conjunto de las relaciones políticas definidas hasta ese momento por la hegemonía del Estado sobre los actores políticos clave –obreros y campesinos.

Las señales mas inmediatas de este reacomodo fueron el gradual distanciamiento de las clases medias del partido oficial y el liderazgo de organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). Agrupaciones que se autoerigieron en portavoces de una cruzada moral que no se reducía al perímetro de las relaciones económicas, sino que pugnaba explícitamente por un nuevo modo de articular política con economía y sociedad y Estado.

Sin embargo, pese a que la estrategia de desincorporación de empresas paraestatales provocó un adelgazamiento del Estado, propiciando con ello una

mayor dispersión del poder, esto no significó en absoluto que un Estado más esbelto y eficiente se convirtiera en un Estado menos politizado. El lanzamiento del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) en 1989 dejó clara constancia de la renovada vocación del Estado para reconciliar de manera eficiente política y economía, como mostrarían las elecciones intermedias de 1991. La dinámica de la transición, si bien acotada por el proceso de liberalización económica, estaría determinada por otro tipo de factores sociales y políticos como la cultura política de empresarios, clases medias y movimientos urbano-populares.

Las Secuelas Políticas de la Liberalización Económica

Política y economía han estado ligadas de manera inestable en función del equilibrio entre Estado y mercado, que determinó oscilaciones cíclicas que iban del nacionalismo estatizante al liberalismo modernizador. Hasta 1968 el término mediador que había refuncionalizado dicotomías inherentemente incompatibles era el consenso sobre un conjunto de ideas, principios y valores compartidos históricamente -es decir, lo que llamamos un orden moral-, que respaldaban la permanencia en el poder de un gobierno certificado por sus orígenes revolucionarios. El discurso nacionalista constituyó por décadas el factor que equilibraba las oscilaciones hacia los extremos del automatismo o la regulación. Referente obligado de la cultura política, el nacionalismo económico había hecho de

la intervención estatal un valor fuertemente demandado que se vinculaba con el compromiso social y la exigencia de estabilidad. En países como México aún “el camino del libre mercado había sido pavimentado gracias a la intervención del Estado”.

Esta situación tomó nuevos matices en la década de los ochenta. El proceso de apertura política emprendido por el gobierno provocó una serie de efectos que alteraron mecanismos arraigados de legitimación. Donde primero adquirieron presencia pública fue en la arena electoral. Al inicio de la gestión del presidente De la Madrid, los comicios municipales de 1983 mostraron el descenso de los niveles de legitimidad electoral del PRI en varias ciudades del norte del país. La oposición se fortaleció en estados como Chihuahua, donde el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó tenazmente el triunfo del partido oficial, lo que dio lugar a una serie de conflictos y movilizaciones que contribuyeron al deterioro de la credibilidad de las instancias encargadas de la organización y administración de los procesos electorales. Pese a ello, el presidente De la Madrid se comprometió a llevar a cabo una nueva reforma política que canalizara por vías institucionales el creciente descontento -especialmente en los sectores de clase media.

Con ese propósito, envió una iniciativa de ley al Congreso que reformó el artículo 115 constitucional con el propósito de restituir facultades a los municipios a través del fortalecimiento de sus finanzas y una mayor autonomía administrativa.

Además, en diciembre de 1986 se aprobó una nueva ley electoral que incrementó el número de diputados plurinominales de 100 a 200; ahora el partido en el poder tenía derecho a participar en la repartición de los diputados de mayoría relativa en la cámara baja. También creó el *Tribunal de lo Contencioso Electoral* que pasó a sustituir las competencias que tenía al respecto la *Suprema Corte de Justicia* y la *Asamblea de Representantes del Distrito Federal*.¹⁰

Sin embargo, la estrategia política del presidente De la Madrid de tolerar una competencia electoral más equitativa en el nivel local, recibió un serio revés en las elecciones intermedias de 1985. La política del nuevo gobierno representaba un riesgo bien calculado. Se pensaba que una liberalización política controlada desde arriba podría evitar una confrontación entre reformistas y conservadores, mientras el partido pudiera evitar que los puestos de elección más importantes -la presidencia y las gubernaturas- cayeran en manos de la oposición.¹¹ Los resultados electorales mostraron lo infundado de tales expectativas, de tal manera que ante las presiones de su partido, la administración del presidente De la Madrid marcó un alto al proceso de apertura política. Una de las enseñanzas más importantes de esta coyuntura fue mostrar que la liberalización política ayuda a crear mayores espacios a

¹⁰Wayne A. Cornelius, "Political Liberalization in an Authoritarian Regime: Mexico, 1976-1985." Judit Gentleman (ed.) *Mexican Politics in Transition*. Westview Press. Boulder, 1987. pags. 15-39.

¹¹Javier Molina, "Las Elecciones de 1985 y sus Consecuencias." Germán Perez y Samuel León (coordinadores), *17 Angulos de un Sexenio*. Plaza y Valdéz. México, 1987. pags. 189-224.

los partidos de oposición, pero no conduce necesariamente a una democratización del sistema en su conjunto.¹²

Las elecciones de 1988 marcaron directrices inéditas en la historia política del México contemporáneo. Sin embargo, al igual que la caída del muro de Berlín no hizo más que oficializar la operación clandestina de tendencias históricas acumuladas, julio de 1988 se convirtió en el gran mito fundador del imaginario democrático mexicano. Constituyó el catalizador de tres tiempos que mezclaron -en términos braudelianos- corta y larga duración.¹³ En primer lugar, la mayoría de los votantes estaba irritada por los costos económicos que había tenido que pagar como resultado de las políticas de estabilización y ajuste dirigidas a resolver una crisis cuyo único responsable directo en su opinión era el presidente.

Ello es importante porque -como veremos más adelante-, estudios empíricos recientes han mostrado que el mexicano promedio prefiere crecimiento económico en lugar de más democracia. Lo anterior no significa que el descontento electoral constituyera una expresión política directa del incremento en los índices de pobreza. Wayne A. Cornelius había advertido ya a fines de la década de los setenta, que el comportamiento político de los inmigrantes pobres de la ciudad de México apuntaba a un patrón de correspondencia política más complejo que la simple dependencia

¹²Véase Adam Przeworski, *Democracia y Mercado. Reformas Políticas y Económicas en Europa del Este y América Latina*. Cambridge University Press, 1995. pags. 91-112.

¹³Luis Medina, *Hacia el Nuevo Estado. México, 1920-1993*. Fondo de Cultura Económica. México, 1994.

funcional entre descontento y pobreza.¹⁴ Más bien, los resultados electorales estaban asociados a la frustración y el aplazamiento indefinido de las expectativas de progreso de individuos, trabajadores asalariados y familias.

Otra tendencia que evidenció con nitidez las modificaciones en curso, fue la crisis de un proyecto nacional basado en la ausencia de responsabilidades políticas o administrativas institucionales, uno de cuyos efectos más alarmantes vino a ser la división de la elite política en el poder.¹⁵ La escisión de la corriente democrática no significó sólo el desplazamiento de un grupo de inconformes que habían sido excluidos de la escena política y que regresaban tratando de imponer sus condiciones, sino un genuino cuestionamiento de la unidad política nacional. Finalmente, un factor no menos importante fue el logro de la confluencia de las diferentes fuerzas de izquierda en una sola organización política. El *Partido Socialista Unificado de México* (PSUM) terminó con la disgregación y clandestinidad que había caracterizado a estos grupos, permitiéndoles participar políticamente por la vía electoral y creando las condiciones de una alianza con otras fuerzas políticas que daría lugar al nacimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD).¹⁶

¹⁴Véase Wayne A. Cornelius, "Las Actitudes Políticas." *Los Inmigrantes Pobres en la Ciudad de México*. Fondo de Cultura Económica. México, 1980. pags. 58-79.

¹⁵Alonso Lujambio, "Presidencialismo, Federalismo y los Dilemas de la Transición a la Democracia en México." *Federalismo y Congreso en el Cambio Político en México*. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1996. pags. 9-53.

¹⁶Juan Molinar, y Jeffrey Weldon, "Elecciones de 1988 en México: Crisis del Autoritarismo." *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. LII, no. 4. México, 1990. pags. 229-262.

Luego de las elecciones y una vez resueltos los conflictos postelectorales, el presidente Salinas de Gortari tuvo que enfrentar cuatro desafíos fundamentales al inicio de su gestión: 1o. El aumento de los niveles de conflicto al seno de la clase política, 2o. Un notable incremento de las tensiones en la arena electoral, 3o. La disminución de la efectividad de los esquemas tradicionales de coordinación y gestión de las relaciones entre el Gobierno y los poderes regionales, y 4o. El desgaste de la figura presidencial resultado de un proceso electoral acremente cuestionado. Su administración empezó por atacar el último de estos problemas. Con ese fin, se llevaron a cabo acciones espectaculares durante los primeros meses de su gobierno en contra de dos poderosos líderes sindicales, y se instrumentó una estrategia de recuperación política global articulada en torno a dos líneas de acción fundamentales. En primer término, la generación de vínculos y alianzas con actores y grupos de poder como la Iglesia y el PAN situados fuera del binomio gobierno-partido hegemónico, en segundo lugar, la recuperación y fortalecimiento de la base popular del régimen, para lo cual se sirvió de la creación del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL).

Los retos de la apertura política para el presidente Salinas eran particularmente claros en el ámbito electoral. Ahí se planteaba la necesidad de reconciliar dos procesos que se antojaban antagónicos: por un lado, crear redes de ciudadanos que permitieran renovar y reconstituir la fortaleza del partido oficial

asegurándole la obtención de mayorías electorales; por el otro, abrir espacios a la oposición para garantizar la presencia de interlocutores que elevaran los niveles de credibilidad de los procesos electorales. El desafío era hacer compatibles estas dos tareas y evitar que se produjeran nuevas fracturas al interior del PRI. Se adoptó entonces una estrategia doble. Un proceso de apertura gradual y selectiva de los niveles de competencia electoral anclado en la alianza con el PAN, junto con un proceso de reestructuración del partido oficial que trataba de revertir el deterioro de la eficacia electoral de su aparato corporativo, mediante la renovación de los liderazgos políticos y el establecimiento de nuevas organizaciones y redes de apoyo.

La intensidad de la crisis creó las condiciones de reformas y transformaciones difíciles de imaginar tan sólo unos años antes. Lo insólito de estas reformas en el contexto de América Latina es que los cambios se hayan dado sin perturbaciones en la estabilidad política del régimen.¹⁷ Un rasgo decisivo del proceso fue que en la mejor tradición corporativa del país las tensiones resultantes se procesaron endógena y no exógenamente a las instituciones políticas. Si bien es cierto que se acumularon tensiones en el sistema político, la capacidad institucional de dirección y gestión del gobierno se mantuvo funcionando con relativa eficacia.¹⁸ No obstante, las

¹⁷ Manuel Camacho, "los Nudos Históricos del Sistema Político Mexicano." Varios autores, *La Crisis en el Sistema Político Mexicano (1928-1977)*. El Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales. México, 1977. pags. 153-217.

¹⁸ G. Bingham Powell Jr., "Sistemas de Partidos y Funcionamiento del Sistema Político: Participación Electoral, Estabilidad Gubernamental y Violencia de las Masas en las Democracias Contemporáneas." *Revista de Ciencia Política*, no. 2. Instituto de Ciencia Política, Universidad Católica de Chile. Santiago, 1983. Pags. 41-74.

condiciones de gobernabilidad del régimen resultaron afectadas debido a que fue erosionado el tradicional sistema político inclusivo basado en la distribución de prebendas y beneficios. El gobierno de Salinas de Gortari no pudo seguir cumpliendo al igual que en el pasado, las expectativas tradicionales de crecimiento económico y redistribución discrecional del ingreso. Además, los mecanismos tradicionales de reproducción del consenso político de la elite dominante se volvieron cada vez más incompatibles con las demandas de una racionalidad administrativa que privilegiaba los criterios de eficiencia, y exigía readecuar el tipo de vínculo establecido con la política. Esta situación se volvió particularmente apremiante ya que la crisis exigía estrategias eficientes de gestión de lo público que chocaban con la estructura corporativa de la sociedad y el Estado, en un momento en que el gobierno veía minada su credibilidad como resultado de las dificultades para resolver los problemas que planteaba la crisis económica.

No obstante, el enorme poder discrecional del presidente permitió que el sistema político mantuviera -e incluso recuperara- el apoyo de los grupos políticos clave en la permanencia de la estabilidad del sistema. Trabajadores sindicalizados y organizaciones empresariales fueron controladas mediante el recrudecimiento de la disciplina sindical, y la concesión selectiva de beneficios como subsidios y exenciones fiscales al capital. Esto permitió recuperar el aval político de los empresarios y la comunidad financiera internacional pese a los efectos laborales

provocados por la reestructuración productiva y el surgimiento de nuevos actores obreros en el norte del país.¹⁹

Ahora bien, los programas de estabilización y ajuste no estuvieron exentos de costos, y aunque es poco factible establecer una relación causal entre crisis económica y crisis política, es evidente que se convirtieron en el catalizador de fenómenos que se encontraban en estado latente en el ámbito político y social. La administración del presidente Salinas enfrentó aquí tres conjuntos de problemas. 1o. El incremento en los niveles de competencia antagónica violenta de la elite política, 2o. La aparición de conflictos sociales ligados fundamentalmente al incremento de tensiones en la arena electoral, y 3o. El desarrollo de disfunciones político-administrativas en las relaciones entre el centro y los poderes regionales. Se produjo una desarticulación entre un régimen político cuyos ritmos de apertura no se ajustaron a la velocidad con que se llevó a cabo la liberalización de la economía.²⁰ El rápido proceso de modernización económica creó tensiones en la elite política, conformando un escenario complejo, puesto que era el mismo proceso de cambio estructural el que desgastaba la inclusividad del sistema político.²¹

¹⁹Cfr. Enrique de la Garza Toledo, "Reestructuración Productiva, Estatal y de los Sujetos Obreros en México." Enrique de la Garza Toledo (coordinador), *Crisis y Sujetos Sociales en México*, Vol. I. Miguel Angel Porrúa. México, 1992. pags. 53-106.

²⁰Una discusión interesante de este tópico se encuentra en Adam Przeworski y Fernando Limongi, "Regímenes Políticos y Crecimiento Económico." *Desarrollo Económico*. Buenos Aires, julio-septiembre, 1994. pags. 163-179.

²¹ Luis Rubio, "La Reforma Económica y el Cambio Político en México." Riordan Roett (compilador), *La Liberalización Económica y Política de México*. Siglo XXI. México, 1993. pags. 59-80.

La desarticulación entre apertura económica y formas cerradas de control político, no sólo minó la legitimidad del régimen, estimuló también la aparición de problemas de gobernabilidad. Al aumentar la competencia en los procesos electorales, la apertura política ensayada por el gobierno de Salinas de Gortari agudizó las tensiones entre la exigencia de obtener mayorías electorales legitimadas socialmente, con el funcionamiento de un sistema de generación de consenso intraelite que dependía en parte, de la ausencia de desafíos electorales efectivos.

El resultado final del proceso de liberalización política culminó en un incremento de la dependencia del gobierno respecto a grupos y actores cuya lealtad y apoyo eran menos seguros, si los comparamos con los que había recibido de los líderes sectoriales del partido. A los costos y riesgos del aumento de la competencia electoral había que sumar los efectos potencialmente desestabilizadores de la liberalización económica sobre las formas institucionalizadas de reparto y ejercicio del poder político. Tres efectos destacan al respecto. Primero, la disminución de los fondos y cuotas de poder disponibles para ser distribuidos dentro de la elite política a través de los mecanismos de asignación tradicionales. Segundo, la aparición y fortalecimiento de circuitos privados de poder político controlados por grupos provistos de recursos de poder propio menos dependientes del Estado.²² Finalmente, un proceso de construcción de identidades ciudadanas gremiales que entró en un

²²Blanca Heredia, "Estructura Política y Reforma Económica: El Caso de México." *Política y Gobierno*, enero-junio. México, 1994. pags. 5-46.

proceso de refuncionalización, en el marco de un sistema político que buscó evitar a toda costa la fragmentación política.

Las implicaciones de este último elemento son especialmente pertinentes. A principios de los sesenta Almond y Verba encontraron en la cultura política mexicana un patrón caracterizado por la alienación con respecto al sistema, y aspiraciones muy elevadas de participación política.²³ En su opinión, el mexicano abrigaba una tendencia tan pronunciada a la participación política, que en algún momento habría de expresarse de una u otra manera. Más de medio siglo de ciudadanía revolucionaria tutelada por el Estado, resultaron insuficientes para contener los efectos de una crisis que empezaba a manifestarse en la esfera pública.

El Ajuste del Balance Estado-Sociedad

El triunfo de la ideología del libre mercado -que encajaba *ad hoc* con la crítica a la ineficiencia de la gestión pública- tuvo implicaciones políticas fundamentales sobre el modelo de interacción Estado-sociedad. Un punto de inflexión importante respecto a la tradición política de la unidad nacional estuvo constituido por la convivencia de reivindicaciones democrático- liberales orientadas a ensanchar los espacios de participación ciudadana, mezcladas con un reclamo conservador basado en la negación del Estado como principio de institucionalidad

²³Gabriel Almond y Sidney Verba, *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press. Princeton, 1966. pags. 310-312.

fundante. En un régimen con altos niveles de estabilidad política resultaba difícil compatibilizar el hecho de que la institucionalidad deseada, se ligara exclusivamente al fortalecimiento de la esfera de acción de la sociedad civil. Al parecer, a la privatización de la actividad económica seguía la “desprivatización” de la política.

En el nuevo escenario la crisis aparecía como crisis del Estado, de ahí que para la oposición política la condena del autoritarismo involucrara desde el principio muchos más aspectos que los estrictamente institucionales. Lo anterior llevaba no sólo al desgaste de un gobierno sino a la desagregación de un modo estatal de regulación de la vida social. El entrelazamiento de crisis económica, liberalización política y modernización social amplificó sus efectos desestructuradores haciendo más apremiante la exigencia de gobernabilidad, reclamo que se resumía en la fórmula más gobierno = menos Estado.

Así, la apertura hacia un sistema plural redefinió la política como el arte de lo posible y no de lo necesario. El retiro del Estado debía culminar en la política, donde modernización se equiparó a democracia y ésta a más sociedad civil. Había un fuerte repudio en los partidos políticos de oposición al recurso de apelar al nacionalismo como supuesto incuestionable de los asuntos públicos. Para éstos, el desarrollo político no representaba un problema en sí, ya que era equivalente a una modernización cuyos ejes eran democracia electoral, libre mercado y descentralización administrativa.

Los procesos de cambio inducidos por la reforma económica aceleraron el ajuste de la relación Estado-sociedad. En el caso del primero la crisis era triple: como conjunto de burocracias eficientes, como garante de un estado de derecho y finalmente, como sujeto de credibilidad moral susceptible de sostener el supuesto de que el Estado persigue el bien común. Por el lado de actores sociales como clases medias y grupos de bajos ingresos, las políticas de control inflacionario provocaron la inestabilidad de los mecanismos de control corporativo tradicionales, provocando conflictos en torno a la definición y límites de la política.

Esta disputa se expresó políticamente en la demanda de una mayor autonomía social y en la reivindicación de que la esfera pública no se redujera al ámbito de lo estatal. La irrupción de movimientos urbano-populares en la esfera pública a mediados de la década de los ochenta, mostraba las dificultades de conciliar formas de integración electorales con reivindicaciones que mezclaban viejos reclamos sociales con nuevas formas de participación política. No obstante, el rechazo del Estado como principio fundante de la política no fue acompañado aquí, como en otras latitudes, de un alejamiento de los partidos políticos. Por el contrario, al no aceptar ya la identificación del espacio político con la esfera pública y rechazar el enclaustramiento de la política dentro de los límites del Estado, se fortaleció el sistema de partidos.

Sin embargo, al igual que en períodos anteriores, el resultado histórico de la tensión modernizadora entre tradición y cambio promovido desde arriba se puso al servicio de un orden político liberal y autoritario. El primer paso en esta dirección se dio en 1982 cuando el presidente De la Madrid desplazó como tema prioritario de la discusión la reforma social sustituyéndola por la reforma del Estado. Renovación moral, lucha contra la corrupción, actualización de las bases constitucionales de la responsabilidad de los servidores públicos y planeación democrática, constituyeron los componentes más significativos del nuevo proyecto de gobierno. Se buscaba preservar los elementos que habían permitido disfrutar de un largo período de estabilidad política caracterizado por el control civil, la integración política de la clase media y la eliminación del conflicto entre identidad de clase e identidad de masa.

El gobierno del presidente Salinas de Gortari respondió a los desafíos políticos que le planteó la crisis económica y el malestar electoral instrumentando un proceso gradual y selectivo de apertura política controlada. Para ello siguió una estrategia basada en tres componentes que pretendían vincular el sistema de partidos con un nuevo esquema de gestión de la política pública. Gracias al reconocimiento en 1989 de la victoria del PAN en las elecciones estatales de Baja California, se logró concertar una alianza estratégica con la oposición de derecha que allanó el camino de la aprobación en el Congreso de una serie de reformas

constitucionales que buscaban mejorar el padrón, y reducir el fraude en los mecanismos de recuento electoral. La reforma del PRI, segundo elemento de la estrategia de liberalización política, se propuso reorganizar la estructura sectorial del partido, especialmente las organizaciones obreras, que habían mostrado poca efectividad en la obtención de victorias electorales en los distritos urbanos más competidos. Por consiguiente, se buscó fortalecer el papel de las organizaciones territoriales a fin de recuperar simpatizantes en el electorado urbano, para lo cual se sustituyó al sector popular del partido, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), por una nueva organización sin una identidad sectorial precisa (UNE, Ciudadanos en Movimiento), que funcionaba como paraguas de diversas organizaciones no gubernamentales conformadas sobre la base de identidades locales de carácter territorial, social o gremial.

El 6 de diciembre de 1988 fue creada la Comisión Nacional de Pronasol, tercer elemento de la política reformista del presidente Salinas. Los criterios generales de su implementación contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994 establecían que el combate a la pobreza se llevaría a cabo mediante la coordinación de esfuerzos entre federación, estados y municipios. La comisión, integrada en un principio por varias secretarías de estado (Hacienda, Programación y Presupuesto, Salud, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Desarrollo Urbano y Ecología, Comercio y Fomento Industrial, Educación Pública, Trabajo y Previsión

Social, Pesca y Reforma Agraria), era presidida por un coordinador general nombrado directamente por el presidente. La política social de Salinas de Gortari tenía un doble propósito. Por una parte, el programa trató de racionalizar los recursos canalizados a través de los subsidios gubernamentales restringiendo el universo de los destinatarios a sectores urbanos marginados, campesinos de bajos ingresos y comunidades indígenas depauperadas.²⁴ Por la otra, permitió reincorporar al discurso oficial la retórica de la defensa de los intereses populares y la promoción de la democracia, reorientando la ayuda oficial hacia aquellos grupos donde se había acentuado la disminución del apoyo al partido oficial.

Solidaridad no sólo se proponía recuperar votos para el PRI. Apuntaba a objetivos mucho más ambiciosos. Un propósito importante de la administración salinista era propiciar la creación de una nueva cultura política ciudadana más participativa y democrática. Buena parte de la estrategia para lograrlo descansaba en la estructura organizacional del programa, que aspiraba a descentralizar los procesos de toma de decisiones y estimular la creación de agrupaciones civiles capaces de presentar demandas colectivas al Estado, hecho que motivó un intenso debate acerca del nuevo equilibrio entre sociedad y Estado. Dicha discusión se concentró en la creación de mecanismos para la participación social en dos niveles: i) la organización de intereses colectivos en la formulación de políticas públicas y ii) la

²⁴ Alejandro Guevara Sanginés, "Programas de Alivio de la Pobreza en México: Un Ejercicio de Evaluación." Mónica Serrano y Víctor Bulmer-Thomas (comps.). *La Reconstrucción del Estado. México*

participación social en la gestión de programas o servicios públicos como Solidaridad. Sin embargo, pese al aumento de su participación en la inversión pública que pasó de 6.6 a 17.3 por ciento, al impresionante crecimiento de su presupuesto en términos reales entre 1989 y 1992 (250 %), y su elevación a nivel de gabinete con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social en 1992, los efectos del programa no propiciaron cambios sustantivos en los patrones de constitución de los actores políticos, los métodos de integración o las formas de interacción política tradicionales.

En un estudio publicado en 1994 Molinar y Weldon encontraron que los criterios determinantes en la asignación de recursos per cápita del programa eran variables político-electorales y no la proporción de pobreza relativa en cada Estado. Los Comités de Solidaridad canalizaron inversiones hacia los sectores mejor organizados, con menor dispersión geográfica y capaces de emprender acciones colectivas tendientes a presionar por una mayor erogación de recursos públicos en sus comunidades.²⁵ Así, aunque Solidaridad representó un cambio importante en aspectos tales como la mejora de las condiciones de seguimiento de los resultados del programa y la creación de vínculos más directos con los beneficiarios de las obras, la relación entre procesos electorales y política social no alteró significativamente la descentralización del gasto público, el nivel de participación

Después de Salinas. FCE. México, 1998. pag. 227.

comunitaria o los patrones de reciprocidad política tradicionales. Municipios gobernados por la oposición de izquierda como Morelia, Tijuana, Durango, Mérida o León, vieron como la discrecionalidad en el manejo de los recursos gubernamentales anulaba casi por completo la política de federalización del gasto social vulnerando la autonomía de estados y municipios.²⁶ Unas cuantas agrupaciones políticas como el Comité de Defensa Popular de Durango aprovecharon el discurso oficial de estímulo a la autonomía de las organizaciones ciudadanas, para conquistar importantes posiciones político-partidarias a nivel local consolidando sus propias clientelas electorales.

Los intentos por descentralizar recursos y decisiones no alcanzaron a cristalizarse al nivel del fortalecimiento y organización de nuevos segmentos ciudadanos, así como en términos de un mayor acceso a los recursos y frutos del bienestar. Frente a un neoliberalismo guiado por la máxima de que era necesario sospechar que se gobierna siempre demasiado, Solidaridad representó el mayor esfuerzo durante el período en estudio por reestructurar las fronteras entre los ámbitos público, privado y social. Sin embargo, la demanda de que lo público no se agotara en lo estatal no se tradujo, para el caso de la política social del régimen salinista, en modificaciones de los valores, usos y costumbres que habían definido

²⁵ Juan Molinar Horcasitas y Jeffrey A. Weldom, "Programa Nacional de Solidaridad: Determinantes Partidistas y Consecuencias Electorales." *Estudios Sociológicos* no. 34, abril-junio, 1994. pags. 155-181.

²⁶ Blanca Acedo Angulo (coord.), *Municipios en Conflicto. El Funcionamiento del Pronasol en Municipios Gobernados por la Oposición*. Nuevo Horizonte Editores. México, 1995. pags. 73-86.

los patrones de interacción entre gobernantes y gobernados. Al referirse a este proceso algunos autores advertían que: "...no *necesariamente* la generación de mecanismos de participación social estimula la organización social, sino que puede devenir en desarticulación del tejido social y/o fortalecimiento de las asimetrías en la representación social, redundando en el debilitamiento de la sociedad civil."²⁷

En resumen, si bien el proyecto modernizador de la administración del presidente Salinas introdujo modificaciones significativas a las formas de organización colectiva de los sectores urbanos de bajos ingresos, su efecto sobre la cultura política de los actores involucrados, mostró una clara tendencia a la continuidad, en el contexto de nuevas modalidades de acceso a los recursos públicos. Una encuesta levantada en sectores urbanos pobres de la Colonia Guerrero y el municipio de Ecatepec en el estado de México ilustra esta situación.

Los datos indican que la fuerza del presidencialismo no había menguado entre los grupos pobres favorecidos por Pronasol en familias estratificadas conforme a tres criterios: i) acceso a suelo, vivienda y programas sociales de abasto, ii) acceso sólo a suelo y vivienda, y iii) sin acceso a ninguno de los rubros mencionados. Resulta significativo que entre un 21.4 y un 18.8 por ciento de los entrevistados atribuyera al presidente el origen de los subsidios para vivienda y alimentos en los tres tipos de familias, mientras sólo un 7.1 del primer y segundo grupo y un 12.5

²⁷ Nuria Cunill Grau, "La Rearticulación de las Relaciones Estado-Sociedad: en Búsqueda de Nuevos Sentidos." *Rev. Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo*, no. 4. Julio, 1995. pag. 39.

por ciento del tercero lo atribuía al PRI. Irónicamente, las familias asignan el menor porcentaje del origen de los subsidios a las organizaciones de base, presumiblemente el segmento más cercano a la comunidad. Los valores son aquí 3.6, 4.5 y 3.1 por ciento respectivamente. Es interesante observar que la desigualdad en el acceso a los bienes públicos no se correlaciona con diferencias en las opiniones respecto al origen de los subsidios, lo que implica que en los sectores pobres encuestados no hay una percepción de la política que distinga lo público de lo estatal.²⁸

De la misma manera, las imágenes plasmadas alrededor de la figura presidencial, muestran el arraigo de una cultura política que se nutre de sociabilidades económicas que favorecen la persistencia de intercambios clientelares. En los tres grupos de familias la opinión sobre el presidente fue evaluada como buena con valores de 57.0, 55.7 y 44.1 por ciento respectivamente. Las familias con menor acceso a los bienes públicos manifestaron una opinión más desfavorable al presidente. La confianza en los procesos electorales medida por el tipo de acceso a bienes públicos siguió un comportamiento similar en los tres tipos familias: 47.2, 45.5 y 32.4 por ciento respectivamente.²⁹ A medida que descendemos en la escala social se observa una creciente inconformidad que se relaciona con un concepto de justicia, donde lo más importante es la consolidación y aplicación de derechos

²⁸ Rosalía López Panigua y Gerardo Torres Salcido, "Entre el Autoritarismo y la Gestión Democrática. Cultura Política y Organización Social de los Pobres Urbanos." *Estudios Sociológicos*, *Op. cit.* pag. 196.

sociales sobre la afirmación de derechos y garantías ciudadanos. Solidaridad mostró la secular adaptabilidad del sistema político mexicano aún frente a procesos de cambio estructural que no lograron alterar la sustancia de las formas establecidas de interacción entre gobernantes y gobernados.

²⁹ *Ibid.* pags. 197-201.

“The most important of all political changes -alterations in the values and beliefs of the political culture- are the most difficult to anticipate. Yet once the meaning of politics alters, then much else alters in consequence.”

Richard Rose

V

EL MALESTAR EN LA ESFERA PÚBLICA

La Expansión de la Vida Pública

Si bien es cierto que la confluencia de crisis económica y liberalización política no logró adular formas añejas de interacción entre gobernantes y gobernados durante los sexenios de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, no sucedió lo mismo con el entramado social que había presidido la sedimentación de una esfera pública propia del orden moral nacional-revolucionario. El ajuste del balance Estado-sociedad estimuló la apertura de espacios en áreas no institucionalizadas de la participación política, que desembocaron en la formación de sujetos políticos contestatarios de filiación urbano-popular, que lucharon por redefinir las fórmulas institucionales de su incorporación a la esfera pública. Este campo de tensiones entre Estado y sociedad con el telón de fondo de la reforma a la conexión Estado-economía, dio lugar a importantes innovaciones en el ámbito del

funcionamiento de la esfera pública. El orden moral nacional-revolucionario basado en el liderazgo del Estado como regulador del cambio social a largo plazo había visto emerger una esfera pública caracterizada por la indiferencia hacia la política como técnica y atributo exclusivos de la autoridad, la oficialización del significado de la política como consenso y la hegemonía de una cultura de las mayorías absolutas cuyo sentido primordial como opinión pública se había restringido a la manifestación multitudinaria del acuerdo, en el contexto de la consigna de unidad nacional.¹

Este escenario de celebración pública de la unanimidad vio emerger presiones que trajeron a la palestra de la discusión el problema de las modalidades y medios de influencia social sobre la capacidad del Estado para tomar decisiones y ejecutarlas, así como las modalidades de oposición y apoyo popular al gobierno.² Históricamente la esfera pública había sido un espacio de aseguramiento y confirmación de la legitimidad del sistema en lugar de un perímetro para impugnarla. El consenso ideológico postrevolucionario tuvo la virtud de no suprimir las diferentes tradiciones políticas regionales diluyéndolas en una concepción única, sino que las integró en un orden moral nacional-revolucionario que articuló perspectivas diferentes de la política y la sociedad -muchas veces refractarias-, de tal

¹ José Luis Gutiérrez Espíndola, "Opinión Pública, Identidades Políticas y Democracia." *Seminario sobre Aproximaciones al estudio de la Cultura Política*. IISUNAM-UAM Azcapotzalco. México, septiembre, 1990. pags. 12-13.

² Mauricio Sáez de Nanclares, *La Disputa por lo Público*. DECA. México, 1997. pags. 191-204.

forma que el conflicto fue simbólicamente desterrado de la esfera pública en nombre de la unidad del Estado nacional.³ La transformación de estas condiciones históricas implicó la evolución del conjunto de valores políticos dominantes, permitiendo que la esfera pública se configurara como un terreno de lucha donde públicos diferentes y opuestos maniobraban para conseguir un emplazamiento.

El punto de partida de este proceso estuvo signado por la metamorfosis de las formas de pensar los vínculos con el poder. La historia política del México contemporáneo había descrito con minuciosa elocuencia un atributo esencial de la esfera pública propia del orden moral nacional-revolucionario: la indiferencia y apatía hacia la política y sus resultados. Para algunos autores esta situación estaba cambiando a fines de los setenta: “En México, el interés por los asuntos públicos ha aumentado en los últimos cinco años. Grandes grupos de la población urbana están atentos al mundo de la política y reciben más información que nunca antes, a través de la prensa y de los medios de comunicación electrónica”⁴ En un contexto de recesión y estancamiento económico el creciente nivel de participación electoral -síntesis de la modernidad social- parecía certificar las nuevas actitudes políticas. Miguel de la Madrid había obtenido la victoria en los comicios presidenciales de

³ Héctor Aguilar Camín, *Saldos de la Revolución. Cultura y Política de México, 1910-1980*. Nueva Imagen. México, 1982. pag. 79.

⁴ Soledad Loaeza, “Cambios en la Cultura Política Mexicana: El Surgimiento de una Derecha Moderna (1970-1982).” *Revista Mexicana de Sociología*, julio-septiembre, 1989. pag. 221.

1982 con un tasa de abstencionismo del 25 por ciento, la cifra más baja en la historia reciente del país.

Sin embargo, la tendencia a una mayor participación en los procesos electorales resulta engañosa si no se ubica en un contexto más amplio, ya que dicha modificación de los hábitos políticos no estaba reñida con la persistencia de sociabilidades típicas del “antiguo régimen”. Si se introducen variables adicionales al comportamiento electoral, la extrapolación de tendencias deviene un ejercicio que demanda la incorporación de otros niveles de análisis de la cultura política. A este respecto, los datos proporcionados por la *Encuesta Mundial de Valores*, una de las pocas bases de datos de cultura política que permite efectuar comparaciones a lo largo del tiempo, son por demás sugerentes.

Cuando se examina la actitud hacia la política medida por el grado de interés, uno de los componentes clave del orden moral nacional-revolucionario, emerge un panorama distinto al que ofrece la insurgencia electoral. El cuadro 1 muestra que pese a que las personas que afirmaron estar muy interesadas en la política doblaron su porcentaje hacia el final del período, seguían siendo una minoría en un mar de indiferencia por los asuntos públicos. En 1990 todavía constituían menos del 10 por ciento del total de la muestra; las únicas excepciones notables ese año fueron las personas con educación superior, identificadas con la izquierda y residentes en la capital de la república. No obstante, ninguno de los valores para estos grupos fue

más allá del 11.4 por ciento, excepción hecha de aquellos que dijeron simpatizar con la izquierda (23.6 %). Aún cuando la proporción de aquellos que manifestaron no tener ningún interés en la política se redujo en 18.7 por ciento, la mayoría de la población se ubicó en la franja de los que tienen poco o nulo interés en la política (61.7 %). En síntesis, el incremento en los índices de participación electoral no se correspondía con una disminución de la apatía o un aumento del interés en los asuntos públicos.

Cuadro 1. ACTITUD HACIA LA POLITICA (%)

GRADO DE INTERES	Año de la Encuesta							
	1981				1990			
	muy interesado	algo interesado	no muy interesado	nada interesado	muy interesado	algo interesado	no muy interesado	nada interesado
<i>Nacional</i>	4.1	32.3	20.9	42.6	8.2	30.1	37.8	23.9
<i>Edad</i>								
16-29	4.4	33.6	22.7	39.3	7.2	32.3	37.6	27.0
30-49	3.7	31.8	19.9	44.5	9.3	29.8	39.7	21.2
50+	4.8	28.9	14.4	51.9	8.4	24.9	34.1	32.5
<i>Educación</i>								
básica	4.4	23.8	17.5	54.3	8.3	25.9	37.1	28.7
media	2.0	39.5	23.8	34.6	3.2	31.8	45.5	19.5
superior	4.9	39.1	23.5	32.4	11.4	41.3	34.7	12.6
<i>Afinidad Política</i>								
izquierda	5.2	32.5	18.8	43.5	23.6	41.2	23.6	11.6
centro	3.1	36.2	24.2	36.6	4.0	27.6	43.0	25.3
derecha	4.6	31.5	20.3	43.5	7.9	36.5	38.5	17.9
<i>Región</i>								
norte	4.2	29.0	23.1	43.7	8.6	30.3	36.6	24.4
centro	5.3	32.2	14.6	47.9	8.6	27.8	37.8	25.8
sur	1.9	25.8	23.3	49.1	3.5	28.5	41.8	26.2
D.F.	4.4	47.3	24.5	23.8	11.4	32.2	36.1	20.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Otra manera de explorar la evolución de las actitudes hacia la política nos lo proporciona el nivel de politización. Se observa aquí un fenómeno similar. La disposición a convertir la política en tema de conversación con los amigos es muy baja. Poco más de la mitad de los encuestados (52.3 %) reconoció discutir ocasionalmente de política en 1981, proporción que se elevó hasta casi un 60 por ciento en 1990 (57.8 %). La distribución social de estas actitudes muestra que los entrevistados con mayor educación eran el grupo que más discutía ocasionalmente de política, seguido de las personas ubicadas en la región sur del país. Curiosamente

era en el norte, cuna de la insurgencia electoral de la década pasada, donde se hallaban las personas menos propensas a discutir de política con amigos. Asimismo, el número de encuestados con altos niveles de politización -es decir propensas a discutir de política con mayor frecuencia- se elevó, en el transcurso de una década, hasta alcanzar un 16.2 por ciento en 1990. Proporción elevada si la comparamos con el valor que tenía diez años antes pero muy baja respecto del total de la muestra. De éstas, los grupos que tuvieron las tasas de crecimiento más pronunciadas fueron aquellos con menor educación, edad madura, filiación política de izquierda y geográficamente asentados en la capital del país. Por último, el número de entrevistados con bajos niveles de politización si bien se redujo, pasando de un valor cercano al 40 por ciento en 1981 a otro inferior al 30 por ciento en 1990, seguía siendo muy alto si lo comparamos con el grupo de personas con mayor nivel de politización. Es interesante observar que los únicos estratos sociales significativamente por abajo de ese valor son los encuestados con mayor educación y ubicados a la izquierda del espectro político.

Cuadro 2. NIVEL DE POLITIZACION

DISCUTE DE POLITICA CON AMIGOS	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	frecuente mente	ocasional mente	nunca	frecuente mente	ocasional mente	nunca
<i>Nacional</i>	8.7	52.3	39.0	16.2	57.8	26.1
<i>Edad</i>						
16-29	10.9	53.7	35.4	15.1	59.2	25.7
30-49	7.1	51.8	41.1	17.9	58.5	23.6
50+	2.8	44.9	52.3	15.1	52.2	32.7
<i>Educación</i>						
básica	4.6	43.2	52.1	15.1	54.9	29.9
media	7.6	63.6	28.7	14.2	57.3	28.4
superior	14.1	57.3	28.6	20.7	66.5	12.9
<i>Afinidad Política</i>						
Izquierda	16.6	41.1	42.4	33.5	56.6	10.0
Centro	9.6	57.9	32.4	13.4	59.2	27.4
Derecha	7.6	52.0	40.4	15.2	61.5	23.3
<i>Región</i>						
norte	8.5	51.1	40.5	13.2	52.7	34.1
centro	5.5	51.2	43.3	13.3	60.0	26.7
sur	7.9	55.1	37.0	11.0	64.5	24.5
D.F.	15.6	53.7	30.6	17.9	55.0	27.0

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Pese a que la Reforma Política de 1977 estimuló la canalización de la participación política hacia el ámbito electoral, uno de los supuestos básicos de la cultura del consenso como mayoría absoluta siguió siendo el acuerdo tácito de excluir de toda manifestación pública el desacuerdo con el régimen, identificando la discrepancia o la protesta con el caos y el pluralismo con la anarquía o el desorden. Sin embargo, en el contexto de las condiciones económicas y sociales que siguieron al estallido de la crisis económica en 1982, el poder del gobierno para convocar a la sociedad y hacer exhortaciones a los ciudadanos en nombre del interés nacional o

los valores patrios entró en un proceso de franco deterioro. La unanimidad como base de la estabilidad política se reveló disfuncional.⁵ El rápido descenso en los niveles de bienestar junto con el incremento del control y la intolerancia política, llevó a la proliferación de marchas y manifestaciones de inconformidad que condujo a la irrupción de movimientos políticos de protesta –especialmente de extracción urbano-popular-, creando las condiciones de emergencia de nuevas formas de acción política que pugnaban por extender la participación más allá de los límites de lo que hasta ese momento se había entendido como políticamente aceptable: una férrea definición del orden público como acuerdo y una ambigua distinción entre objetivos públicos e intereses privados.⁶

Si el nivel de interés en la política seguía siendo minúsculo no sucedía lo mismo con la disposición a participar en la esfera pública. El cuadro 3 muestra que la tendencia a ensayar formas de participación política opuestas al régimen, se había incrementado significativamente. Mientras que en 1981 menos del 10 por ciento de los encuestados admitió haber firmado peticiones, en 1990 esa cifra se había elevado hasta abarcar más del 30 por ciento del total de la muestra (34.7 %). Al mismo tiempo, aquellos que reconocieron estar dispuestos a ponerlo en práctica aumentaron su número hasta llegar a un valor cercano al 50 por ciento (44.3 %). En

⁵ Soledad Loaeza, “La Lenta Construcción del Pluralismo Mexicano.” Georges Couffignal (comp.), *Democracias Posibles. El Desafío Latinoamericano*. FCE. México, 1994. pags. 169-171.

⁶ Joe Foweraker, “Popular Movements and Political Change.” Joe Foweraker y Ann Craig (eds.), *Popular Movements and Political Change in Mexico*. Lynne Rienner. Boulder, 1990.

ambas encuestas las personas de más edad mostraron una mayor propensión a firmar peticiones comparadas con los restantes grupos de edad, lo mismo sucedió con los individuos más educados, identificados con la izquierda y asentados en la ciudad de México. Es significativo que mientras en 1981 aproximadamente la mitad de los encuestados aseveró que nunca firmaría peticiones, ese porcentaje se redujo hasta alcanzar un valor cercano al 20 por ciento en 1990 –los dos grupos más reacios a firmar peticiones correspondían a las personas mayores y a los residentes del sur del país.

Cuadro 3. LA DESPRIVATIZACION DE LA ESFERA PUBLICA (%)

FIRMAR PETICIONES	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	lo he hecho	podría hacerlo	nunca lo haría	lo he hecho	podría hacerlo	nunca lo haría
<i>Nacional</i>	9.5	40.2	50.3	34.7	44.3	21.1
<i>Edad</i>						
16-29	8.4	45.6	46.0	32.8	48.3	18.9
30-49	10.2	34.4	55.4	35.0	45.6	19.4
50+	15.0	28.1	56.9	38.9	30.8	30.3
<i>Educación</i>						
básica	8.9	29.0	62.2	34.4	39.6	26.0
media	7.6	47.1	45.4	28.8	52.8	18.4
superior	11.3	49.7	39.0	39.6	51.8	8.6
<i>Afinidad Política</i>						
Izquierda	13.5	46.8	39.7	54.4	36.8	8.8
Centro	9.0	51.1	40.0	29.3	44.6	26.1
Derecha	9.5	35.5	55.0	43.2	46.7	19.2
<i>Región</i>						
norte	7.2	40.6	52.4	37.1	40.5	22.4
centro	10.7	33.3	56.0	30.7	49.7	19.6
sur	10.5	43.6	46.0	23.0	48.7	28.3
D.F.	11.4	46.6	42.1	42.5	42.8	14.7

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

El cuadro 4 proporciona información complementaria para dar una idea más clara de lo que estaba ocurriendo. Los datos muestran que si en 1981 menos de una décima parte de los entrevistados había participado en manifestaciones autorizadas, una década después más del 20 por ciento de la población encuestada reconoció haberse involucrado en demostraciones públicas permitidas por el régimen. Las actitudes hacia la participación en la esfera pública se habían modificado considerablemente. Mientras en 1981 más de una tercera parte admitió que podría llevar a cabo este tipo de acciones, para 1990 ese valor se había elevado a un 43.2

por ciento. También disminuyó el número de personas reacias a participar en la esfera pública. Si en la primera encuesta constituían más del 50 por ciento, en 1990 representaban ya menos de la tercera parte del total de casos. Es interesante analizar el cambio en la distribución social de esta tendencia al aumento de la participación política abierta. Si observamos con atención los grupos de la tabla se puede ver que los jóvenes mostraban una mayor inclinación a participar en la esfera pública al principio del período, en tanto que al final del mismo eran las personas de edad avanzada quienes manifestaron dicha disposición. Los datos por educación y afinidad política son más homogéneos: los individuos entrevistados con más educación e identificados con la izquierda fueron los más participativos en la esfera pública, mientras que regionalmente el aumento de la participación se desplazó de sur a norte hacia fines del período de estudio.

Cuadro 4. EL ASCENSO DE LA VIDA PUBLICA

PARTICIPACION EN MANIFESTACIONES AUTORIZADAS	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	lo he hecho	podría hacerlo	nunca lo haría	lo he hecho	podría hacerlo	nunca lo haría
<i>Nacional</i>	8.9	37.6	53.5	22.0	43.2	34.8
<i>Edad</i>						
16-29	10.0	44.0	46.0	19.4	49.5	31.1
30-49	7.6	31.4	61.0	23.9	41.0	35.2
50+	8.1	21.5	70.5	24.5	31.8	43.8
<i>Educación</i>						
básica	6.0	27.9	66.1	22.1	40.8	37.2
media	8.1	43.0	49.0	13.0	47.8	39.1
superior	12.7	46.2	41.1	27.7	47.3	25.1
<i>Afinidad Política</i>						
Izquierda	14.3	42.9	42.9	47.3	42.7	10.0
Centro	8.8	46.6	44.7	15.1	43.0	41.9
Derecha	8.1	33.5	58.3	19.9	44.8	35.3
<i>Región</i>						
norte	10.0	36.4	53.5	26.8	40.6	32.6
centro	6.8	29.3	63.9	20.1	46.2	33.7
sur	10.6	46.8	42.6	15.0	39.4	45.6
D.F.	8.2	43.5	48.3	22.6	48.0	29.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

El cuadro 5 revela evidencias adicionales de la aparición de la diferencia en la esfera pública. En 1981 una proporción minúscula, apenas 1.9 por ciento de los entrevistados, reconoció haber participado en huelgas no permitidas, diez años después su número se había elevado hasta alcanzar 7.4 por ciento. Especialmente notable es la cantidad de personas que admitieron estar dispuestas a hacerlo, proporción que se incrementó en un 25 por ciento, pasando de constituir algo más de una décima parte del total hasta alcanzar una cifra cercana al 40 por ciento en el

transcurso de una década. La caída más drástica se produjo entre aquellos que afirmaron no estar dispuestos a transgredir las reglas del juego establecidas. De ser casi un 90 por ciento en 1981 su proporción se redujo a una cifra no muy lejos del 50 por ciento para 1990. Los jóvenes, los más educados, la gente de izquierda y los capitalinos fueron los grupos más dispuestos a participar en huelgas no permitidas en 1981. Algo similar sucedió en 1990 con aquellos que reconocieron su inclinación a practicar esta forma de protesta con una sola excepción: en la segunda encuesta el norte y no la capital aparece como la región más propensa a involucrarse en actividades públicas que implicaban algún tipo de desacuerdo con la política gubernamental.

Cuadro 5. LA DISPUTA DE LO PÚBLICO

PARTICIPACION EN HUELGAS NO PERMITIDAS	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	lo he hecho	podría hacerlo	nunca lo haría	lo he hecho	podría hacerlo	nunca lo haría
<i>Nacional</i>	1.9	11.0	87.1	7.4	36.0	56.7
<i>Edad</i>						
16-29	1.7	14.6	83.7	8.3	39.9	51.8
30-49	2.4	7.3	90.3	6.9	36.1	56.9
50+	1.9	4.5	93.5	5.8	24.8	69.5
<i>Educación</i>						
básica	1.6	7.7	90.7	7.6	34.5	57.9
media	1.7	11.3	87.1	4.3	33.2	62.5
superior	2.5	14.7	82.8	8.8	41.8	49.3
<i>Afinidad Política</i>						
Izquierda	2.9	19.4	77.7	20.8	55.0	24.2
Centro	0.9	13.2	85.8	4.9	31.8	63.3
Derecha	2.4	8.5	89.2	5.4	30.4	64.2
<i>Región</i>						
norte	1.8	9.8	88.4	8.3	40.1	51.6
centro	2.0	10.0	88.0	5.3	31.2	63.5
sur	2.8	12.8	84.4	4.8	30.8	64.4
D.F.	1.4	13.0	85.7	9.3	37.3	53.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

La Irrupción Pública del Disenso

En un contexto de recomposición y cambio, el incremento de la participación política se expresó a través de una disidencia que asumió la forma inicial de movimientos y organizaciones populares de protesta, que desafiaron la regla no escrita de exteriorizar desacuerdo e inconformidad en una esfera pública conformada para ratificar el carácter mayoritario del régimen. La primera etapa de este proceso está representada por la emergencia de organizaciones independientes del Estado, agrupadas en confederaciones de movimientos denominadas

coordinadoras, cada una de ellas con una apropiación distintiva de los repertorios de valores y símbolos del orden moral nacional-revolucionario.⁷ Esta confiscación simbólica se convirtió en un recurso estratégico capital que fundó la legitimidad de su lucha en el reclamo del cumplimiento del programa social de la Revolución, programa que incluía la responsabilidad gubernamental de proporcionar satisfactores básicos como salud, educación y vivienda.⁸ Se demandaba el retorno del estilo propio de los gobiernos postrevolucionarios que había hecho posible intercambiar ciudadanía política por ciudadanía social.

En el sexenio del presidente López Portillo el tema de la reunificación en el marco de la reforma política había sido tema de interés no sólo para los partidos políticos, movimientos urbano-populares y organizaciones campesinas independientes se plantearon también el problema de su reestructuración organizacional. Con el estallido en 1982 de la crisis económica, surgieron numerosos frentes amplios e instancias coordinadoras de movimientos locales y regionales de protesta contra la política económica oficial. Septiembre de 1982 marcó el nacimiento de dos organizaciones antiausteridad: el *Frente Nacional por la Defensa del Salario contra la Austeridad y la Carestía* (FNDSCAC) y el *Comité Nacional para la Defensa de la Economía Popular* (CNDEP) en un mitin público convocado por

⁷ Joe Foweraker, "Popular Movements and Political Culture in Contemporary Mexico." Wil G. Pansters (ed.), *Citizens of the Pyramid. Essays on Mexican Political Culture*. Thela Publishers. Amsterdam, 1997. pag. 231.

⁸ Juan Manuel Ramírez Sáiz, "Urban Struggles and their Political Consequences." Joe Foweraker y Ann Craig, *Op. cit.* pags. 234-246.

nueve organizaciones que incluían partidos, corrientes políticas, así como organizaciones obreras y campesinas. En junio de 1983 ambas organizaciones acordaron formar la *Asamblea Nacional Obrera, Campesina y Popular* (ANOCP).⁹

Durante este período tres fueron las coordinadoras más importantes que irrumpieron en la esfera pública: la *Coordinadora Nacional Plan de Ayala* (CNPA), la *Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación* (CNTE) y la *Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular* (CONAMUP). La primera, resultado de la experiencia de organizaciones campesinas regionales en la década de los setenta, había logrado mantener en la agenda pública de la discusión el problema campesino,¹⁰ en tanto que la segunda surgió en diciembre de 1979 como un movimiento reformista de protesta dentro del *Sindicato de Trabajadores de la Educación* (SENTE) había logrado aumentar rápidamente su militancia política. Para marzo de 1982 contaba ya con una capacidad de movilización de 150 mil maestros que pronto extendieron su influencia a nivel nacional atrayendo a miles de simpatizantes. Entre 1979 y 1982 la CNTE organizó seis oleadas sucesivas de manifestaciones públicas, en las que participaron cerca de 100 mil profesores a nivel nacional y regional.

⁹ Paul Lawrence Haber, *Collective Dissent in Mexico: The Politics of Contemporary Urban Popular Movements*. Tesis Doctoral, Universidad de Columbia, 1992. pag. 151.

¹⁰ Laura Patricia Romero, "La Reforma del Estado y los Movimientos Sociales Regionales," Jorge Alonso. Alberto Aziz y Jaime Tamayo (coords.), *El Nuevo Estado Mexicano. V. II. Estado y Política*. Nueva Imagen. México, 1992. pags. 173-193.

En mayo de 1980 las calles de la ciudad de Monterrey fueron tomadas por otra organización. La CONAMUP representó el primer esfuerzo nacional para crear una instancia organizativa que hiciera públicas las demandas de los sectores urbanos marginados, tratando de establecer mecanismos de defensa frente a la intolerancia oficial. Al igual que otras coordinadoras, la CONAMUP se pronunció en contra de su vinculación con corrientes o partidos políticos, insistiendo en la necesidad de preservar la autonomía de sus miembros para decidir a que partido político afiliarse. El clima político del momento se aprecia nítidamente en las declaraciones de un dirigente de la CNPA que afirmaba con vehemencia: “Lo que rechazamos es que los partidos quieran manipular a la CNPA. Se le cree botín y quieren aprovecharse de su fuerza, lo que nunca permitiremos. La avanzada de la izquierda está en las masas no en los partidos, ni tampoco en la Cámara de Diputados.”¹¹

1983 fue el momento de mayor presencia en la esfera pública de los movimientos disidentes encabezados por las coordinadoras. El descontento creció a tal punto que durante el segundo trimestre del año, entre mayo y junio, la *Confederación de Trabajadores de México* (CTM) y el *Congreso del Trabajo* (CT) amenazaron con una huelga general como respuesta al deterioro del nivel de vida de los trabajadores. En octubre de ese mismo año la ANOCP junto con la CNPA, la CNTE y la CONAMUP, organizaron el *Primer Paro Cívico* en el que según cálculos

¹¹ Citado por Barry Carr, *La Izquierda Mexicana a Través del Siglo XX*. Era. México, 1996. pag. 283.

extraoficiales, participaron alrededor de 2 millones de personas. El nuevo año fue escenario de crecientes protestas. LA CTM volvió a amenazar con una huelga general si no se incrementaban los salarios. A mediados de año, en el mes de junio, se organizó el *Segundo Paro Cívico* que contó con un número más reducido de participantes -cerca de 500 mil personas. Era una señal. Luego del *Segundo Paro Cívico* la fuerza de las coordinadoras empezó a declinar como resultado de fraccionamientos y luchas internas, del aumento de la contención gubernamental y de la creciente importancia de los partidos políticos. No obstante, dichos movimientos fueron importantes porque permitieron el ensayo de nuevas formas de expresión del descontento en la esfera pública como la desobediencia civil, al lado de otras más convencionales como marchas, manifestaciones y bloqueo de carreteras.¹²

A la extensión del disenso el gobierno respondió con una estrategia diferenciada. Trató con cautela algunas movilizaciones como la organizada por el *Consejo Estudiantil Universitario* de la UNAM (CEU) a fines de 1986, pero no dudó en actuar con mano dura frente a otras. En marzo de 1987 pese a las movilizaciones llevadas a cabo por el *Sindicato Mexicano de Electricistas* (SME), las autoridades terminaron con el movimiento negándose a negociar primero, interviniendo administrativamente la empresa después y declarando inexistente la huelga por

¹² Paul Lawrence Haber, *Op. cit.* pags. 162-163.

último. Lo mismo sucedió con *Aeroméxico*, donde tan pronto estalló la huelga, el gobierno declaró en quiebra la aerolínea, liquidó a todos los trabajadores y creó una nueva compañía denominada *Aerovías de México*. El titular de la *Secretaría de Programación y Presupuesto* (SPP) Carlos Salinas de Gortari, advirtió que cerraría todas las empresas que se declararan en huelga.¹³

El sismo de septiembre de 1985 estimuló un sinnúmero de nuevas organizaciones, provocando que algunas de las ya existentes como la ANOCP desaparecieran, mientras otras como la CONAMUP perdían fuerza y poder de convocatoria a favor de nuevos actores como la *Coordinadora Unica de Damnificados* (CUD) o la *Asamblea de Barrios*. Esta pérdida de centralidad de las coordinadoras a partir de mediados de los ochenta se explica en buena medida por su desinterés en integrarse al sistema de partidos. La tradición antielectoral de la izquierda sumada a la desconfianza hacia los partidos políticos, y la reproducción interna de rasgos de la cultura política dominante como el caudillismo, terminó por marginarlas de la esfera pública.¹⁴ Poco a poco el endurecimiento de la posición gubernamental transformó la interacción entre los actores, empujando la protesta callejera hacia formas de expresión pública de la opinión más amplias y elaboradas, que hicieron de la contienda electoral un terreno inexplorado cada vez más

¹³ José Agustín, *Tragicomedia Mexicana 3. La Vida en México de 1982 a 1994*. Planeta. México, 1998. pag. 139.

atractivo. El concepto mismo de lo público cambió, la cultura de las mayorías absolutas basada en el acuerdo unánime encarnado en la idea del pueblo o la nación como colectividad de valores políticos representada por el Estado fue rápidamente erosionada. En el nuevo contexto, la heterogeneidad social empezó a expresarse a través de dos instancias de la esfera pública cuyo movimiento de traslación había gravitado históricamente bajo el control del Estado: la opinión pública y los procesos electorales.

La Nueva Intimidación entre Esfera Pública y Procesos Electorales

Es claro que la aparición pública del disenso y la presencia de una activa red de movimientos urbano-populares no presionaron en la dirección de una reforma democrática.¹⁴ Pese a ello, la irrupción de movimientos urbano-populares de protesta -particularmente en la ciudad de México-, fue el catalizador de una serie de cambios que culminaron en las elecciones de julio de 1988. Hasta ese momento había sido imposible construir una coalición multclasista a nivel nacional capaz de impugnar la hegemonía electoral del Estado. La escisión del PRI de la *Corriente Democrática* encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo junto con la participación del primero en las elecciones presidenciales de 1988, puso a las organizaciones disidentes ante la oportunidad de integrarse, por primera vez, a un

¹⁴ Juan Manuel Ramírez Sáiz, "Entre el Corporativismo Social y la Lógica Electoral. El Estado y el Movimiento Urbano Popular." Jorge Alonso, Alberto Aziz y Jaime Tamayo (coords.), *Op. cit. Vol. III. Estado, Actores y Movimientos Sociales*. pags. 171-194.

¹⁵ Diane E. Davis, "Failed Democratic Reform in Contemporary Mexico: from Social Movements to the State and Back Again." *Journal of Latin American Studies*, no. 26, 1994. pags. 375-408.

frente opositor de alcance nacional. Dicha coalición nacía con la consigna de preservar y defender los valores del orden moral nacional-revolucionario frente al embate de la ideología neoliberal.

Se había alcanzado finalmente una confluencia de valores entre los disidentes del PRI que demandaban la restitución de los principios revolucionarios, con los sectores de izquierda que haciendo a un lado la democracia socialista y el carácter de clase del Estado, se pronunciaron en su lugar a favor del antiimperialismo, la economía mixta y el estatismo. En una entrevista con Porfirio Muñoz Ledo publicada en 1988, éste aclaró que la coalición construida en torno a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas era “una corriente populista-nacionalista de la Revolución Mexicana –que no defendía el socialismo.”¹⁶

Por consiguiente, el *Frente Democrático Nacional* (FDN) se integró como una coalición inestable de partidos, corrientes políticas y movimientos sociales. En julio de 1988 la candidatura de Cárdenas era apoyada por cuatro partidos políticos con registro (*Partido Popular Socialista* (PPS), *Partido Mexicano de los Trabajadores* (PMS), *Partido Auténtico de la Revolución Mexicana* (PARM) y *Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional* (PFCRN)) y más de veinticinco organizaciones y movimientos populares. Su efímera duración marca el inicio de una nueva etapa en la metamorfosis de la esfera pública. La movilización electoral

¹⁶ Andrew Reding, “The Democratic Current: a New Era in Mexican Politics.” *World Policy Journal* no. 2, 1988. pag. 344.

era ahora patrimonio no sólo del Estado sino también de la oposición, y la campaña se convirtió en el campo de batalla de manifestaciones y marchas electorales. El neocardenismo demostró contar ahí con un insólito poder de convocatoria. Los actos de proselitismo político de Cárdenas congregaron a vastas multitudes entusiastas en Uruapan (100 000) y Apatzingan (80 000), aunque también hubo importantes marchas de apoyo en Baja California, la ciudad de México y la UNAM. La intensidad de la movilización fue tal que se sumaron al frente antiguos grupos guerrilleros como la *Asociación Cívica Nacional Revolucionaria* (ACNR), movimiento encabezado por Genaro Vázquez en el estado de Guerrero durante la década de los setenta.

Luego de las elecciones entramos a un segundo momento que se resume en las declaraciones hechas por la representante del PPS, Marcela Lombardo Toledano, a nombre del FDN: "Hoy es un día aciago. Carlos Salinas de Gortari no llega como resultado de la decisión mayoritaria, que se expresó a favor de otro candidato, Cuauhtémoc Cárdenas. Todo poder que no emane del pueblo es ilegítimo."¹⁷ Aunque la totalidad de los partidos políticos agrupados en el FDN compartía esta visión, Juan Vicencio Tovar, representante del PAN, se apresuró a replicar que: "Salinas de Gortari podía legitimarse en el ejercicio del bien común."¹⁸ Los esfuerzos infructuosos por movilizar a la población en contra de los resultados oficiales

¹⁷ José Agustín, *Op. cit.* pag. 171.

¹⁸ *Ibid.*, pag. 171.

evidenció la necesidad de cambiar la estrategia de protesta y desobediencia civil, hacia formas de participación política diferentes. La urgencia de convertir el frente en un partido político que mantuviera la fuerza mostrada en las elecciones, hizo de los procesos electorales el campo de batalla definitivo para moldear los nuevos contornos de la esfera pública.

Con la opinión en contra de buena parte de movimientos populares y corrientes políticas e intelectuales, la nueva agrupación, el *Partido de la Revolución Democrática* (PRD), devino una organización más y más interesada en un solo tipo de movilización y protesta: la electoral. Como resultado, las elecciones a nivel estatal y federal serían impugnadas una y otra vez de manera sistemática en los años siguientes. Pese a que un menor abstencionismo y una mayor participación electoral delineaban un contexto más favorable a la oposición, los niveles de votación por el PRD decrecieron de manera significativa entre 1989 y 1991. La estrategia de rehusarse a reconocer la victoria de Salinas de Gortari consumió grandes cantidades de tiempo y recursos dedicados a promover a Cárdenas como el único presidente legítimo. Tal situación generó tensiones entre la directiva del partido y aquellos movimientos que se negaron a seguir los lineamientos del PRD respecto a la política de concertación social emprendida por el presidente. La directiva del partido desautorizó cualquier forma de relación con la autoridad pública que contribuyera a legitimar a Salinas de Gortari, en un esfuerzo por neutralizar la estrategia de

concertación consistente en el establecimiento de convenios de consulta entre el gobierno y los movimientos urbano-populares.

Esta política del PRD de controlar los canales de comunicación entre Estado y movimientos populares, con el argumento de que la sanción pública de tales convenios iba en contra de los principios básicos del partido, resultó ser una maniobra errónea. Para 1990 se había levantado ya una línea divisoria infranqueable entre aquellos movimientos leales a Cárdenas como la *Asamblea de Barrios* que decidieron continuar en el partido, y aquellos que optaron por abandonarlo como el *Comité de Defensa Popular* (CDP), menos reacios a negociar con el gobierno acuerdos estratégicos que les permitieran consolidar su posición y obtener beneficios económicos para sus agremiados.¹⁹

A diferencia de la administración del presidente De la Madrid que no pudo conciliar de manera simultánea la renovación del sistema de alianzas políticas con la instrumentación de un modelo de desarrollo económico orientado hacia el mercado, Salinas de Gortari trabajó desde su campaña tratando de reconstruir el apoyo electoral de los sectores del partido. Preocupado por proyectar una imagen pública más atractiva de la política económica de su gobierno, propició el establecimiento de mecanismos de concertación con los movimientos urbano-populares disidentes que habían apoyado a Cárdenas. La táctica de integrarlos a la política de

¹⁹ Vivian Brachet Márquez, *Estado, Clase y Reforma Social en México (1910-1995)*. El Colegio de México. México, 1996. pag. 214-215.

concertación social le llevó a declarar que en su gobierno había mas gente que nunca antes involucrada en los procesos de toma de decisión de las políticas públicas, pese a que éstas seguían estando muy concentradas.

Así, el Programa Nacional de Solidaridad probó ser una herramienta eficaz tanto para recuperar la legitimidad como para propiciar el reflujo del ciclo de protesta e irrupción del disenso en la esfera pública. La canalización selectiva de los recursos de Solidaridad provocó tensiones entre los movimientos que optaron por disciplinarse a los lineamientos del partido y aquellos que eligieron participar, provocando su alejamiento del PRD y la disminución de la influencia del neocardenismo. La posibilidad de construir otra gran coalición multclasista agrupada en un frente nacional se diluyó en el horizonte.²⁰

Este ciclo de movilizaciones, marchas y protestas uno de cuyos actores más importantes fueron los movimientos urbano-populares, constituía un indicio de que el descontento había trascendido la costumbre de la política como punto de encuentro entre acuerdo, consenso y vida pública.²¹ El nuevo equilibrio entre estos factores alteró la lógica de un modelo de gobernabilidad erigido sobre la base del control efectivo de la movilización y la protesta política junto con la ausencia de cuestionamientos ideológicos al carácter social del Estado. Irónicamente probó

²⁰ Paul Lawrence Haber, "El Arte de la Reestructuración y sus Implicaciones Políticas: El Caso de los Movimientos Populares." María Lorena Cook, Kevin Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas, *Las Dimensiones Políticas de la Reestructuración Económica*. Cal y Arena. México, 1996. pags. 33-370.

también que los movimientos populares no podían permanecer reclusos en sí mismos al margen del Estado y los partidos.

El despliegue de las movilizaciones de protesta impugnaba las pretensiones de la elite política de representar adecuadamente a las mayorías. Como algunos autores señalan, bajo ciertas condiciones los movimientos sociales pueden contribuir al proceso de apertura política y democratización al expandir el espacio social de interacción política.²² El desplazamiento de la protesta hacia la arena electoral apuntaba a cuestionar la eficacia de las modalidades de reconocimiento políticas y civiles como expresión de la diversidad social. Dicho en otras palabras, la proyección del disenso social en el mundo de la política empujaba en la dirección de un cambio en las formas de correspondencia entre esfera pública y representación, que hiciera posible extender la participación hacia el sistema de partidos.

No obstante, esta modificación no representó un alejamiento radical de la tradición política establecida sino que se dio en la continuidad. La integración de los movimientos de protesta en la esfera pública estuvo marcada desde sus orígenes, por el hecho de que el interlocutor principal siguió siendo el Estado, como indica la

²¹ Francisco Cruces, "Las Transformaciones de lo Público. Imágenes de Protesta en la Ciudad de México." *Perfiles Latinoamericanos* no. 12. Flacso, 1998. pags. 227-256.

²² Charles Tilly, "Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performance." *Berkeley Journal of Sociology*, vol. 38, 1993-1994. pags. 1-30.

estrategia de Solidaridad.²³ Sin embargo, las condiciones políticas no eran ya las mismas. La aparición en la esfera pública del disenso y la protesta popular habían llegado para quedarse. Como afirma el maestro Rafael Segovia: “El ya añorado consenso absoluto es una figura retórica de un pasado inmediato, que no se presentará en los años venideros.”²⁴

La refuncionalización del clientelismo ensayada por Solidaridad dejó claro no sólo que el Estado aún era el principal interlocutor de los movimientos opositores, sino que las formas de organización política de éstos tampoco se habían modificado sustantivamente.²⁵ Seguían siendo jerárquicas, con decisiones concentradas en la cúpula y poca participación de sus miembros. Una encuesta realizada en 1992 encontró que las asociaciones de barrio no habían modificado valores clave de su cultura política. El nivel de adhesión democrática en ciudades medias y grandes era de apenas 23.8 y 33.1 por ciento, con un porcentaje muy alto de valoración positiva del Estado de alrededor del 60.7 y 66.4 por ciento respectivamente.²⁶ El aumento de la participación política no entraba en conflicto con el mantenimiento de valores propios del consenso autoritario. Alan Knight advertía al respecto: “...es prematuro y arriesgado hablar de la transformación de una cultura política... que está tan

²³ Susan Street, “Movimientos Sociales y Análisis del Cambio Social en México.” *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1991. pags. 141-158.

²⁴ Rafael Segovia, “Consecuencias ante la Crisis.” *Lapidaria Política*. F.C.E. México, 1996. pag. 266.

²⁵ Judith Adler Hellman, “Mexican Popular Movements, Clientelism and the Process of Democratization.” *Latin American Perspectives*, vol. 21, 1994. Pags. 124-142.

²⁶ Ma. Marcia Smith Martins y Victor Manuel Durand, “Actores y Movimientos Sociales Urbanos y Acceso a la Ciudadanía.” *Ciudades*. Red Nacional de Investigación Urbana, enero-marzo, 1995. pag. 5.

profundamente enraizada en el pasado. Como a menudo sucede, una perspectiva histórica induce cautela y hasta conservadurismo.”²⁷

Vida Pública y Orden Político

La irrupción del disenso en la esfera pública era un indicador no sólo del desgaste de los acuerdos sociales básicos que habían permitido la estabilidad del régimen político sino del debilitamiento del interés común en nombre del cual se habían legitimado las decisiones de gobierno. Ello nos remite a una de las características fundamentales de la vida pública en México: su fragilidad histórica.²⁸ Precariedad que se explica si consideramos que el Estado trató de reafirmar la legitimidad de su mandato, mediante el control de toda manifestación pública de la pluralidad social, bloqueando las posibilidades de influir en el curso de la política cotidiana.

Ambito en el que se representa a la sociedad a través de la palabra, la manufactura del consenso de las mayorías absolutas tenía ahora como rasgo primordial una vinculación cada vez más estrecha con los ritmos del calendario electoral. La primera señal en esta dirección tomó la forma del reconocimiento del otro, es decir, la emergencia de un discurso pluralista que se materializó en el

²⁷ Alan Knight, “Historical Continuities in Social Movements.” Joe Foweraker y Ann Craig, *Ibid.* pag. 100.

²⁸ José Luis Gutiérrez Espíndola, “Opinión Pública, Identidades Políticas y Democracia.” *Seminario sobre Aproximaciones al estudio de la Cultura Política.* IISUNAM-UAM Azcapotzalco. México, septiembre, 1990. pag. 10.

advenimiento de una opinión pública con mayor autonomía del Estado. Esta nueva configuración histórica, indujo una renovación radical del lugar que la opinión pública había tenido hasta ese momento en el sistema. Más allá del contenido específico de esa entidad colectiva amorfa criticada por tirios y troyanos, la metamorfosis de la esfera pública trajo consigo una variación en las funciones que la opinión pública había tenido en el orden moral nacional-revolucionario. Luis Aguilar resume acuciosamente uno de estos atributos capitales en proceso de cambio: “La esfera pública en México se caracteriza por la tendencia a presentar y legitimar intereses en el horizonte de lo nacional (la unidad-la soberanía-el proyecto...nacional).”²⁹

Lenta pero inexorablemente lo público tomaba distancia de lo oficial. A principios de los ochenta, con un programa de reordenación económica que generaba fuerte oposición y descontento, el sector informativo recibió especial atención. El gobierno del presidente De la Madrid se propuso fortalecer la rectoría del Estado en el área de comunicación social, para lo cual instrumentó dos acciones. El 24 de marzo de 1983 presentó la reestructuración del sistema de comunicación social del gobierno federal con un proyecto descentralizador consistente en la integración de varios órganos rectores y la creación de los Institutos de Televisión, Radio y Cinematografía, junto con la creación de un nuevo canal estatal, el 7, como

²⁹ Luis Aguilar, “Rasgos de la Vida Pública Mexicana.” *Sociológica*, 1990. pag. 148.

punta de lanza de la red de Televisión de la República Mexicana. Una semana antes, el presidente había enviado al Congreso una propuesta de modificación del artículo 28 constitucional que definía la comunicación vía satélite, como área estratégica del gobierno —es decir, una actividad reservada exclusivamente al Estado.³⁰

La modificación al artículo 28 y su ley reglamentaria, colocaba bajo la jurisdicción del Estado la facultad para instalar y operar el Sistema de Satélites Morelos lo que, se pensaba, contribuiría al fortalecimiento de los medios estatales de comunicación, haciendo más efectivo el control de toda participación política o social en la televisión nacional. Al igual que en el pasado, se esperaba que los medios de comunicación cumplieran la función de respaldar las decisiones del gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la política económica. Así, los diez puntos del Programa Inmediato de Recuperación Económica fueron apoyados masivamente por la mayoría de los medios de difusión, con mensajes que presentaban las medidas como correctivos inevitables para salir de la crisis.

Pese a lo anterior, junto al deterioro de las finanzas públicas se fue gestando una crisis de la hegemonía informativa del Estado. A partir de 1982 la restricción de los flujos financieros externos obligó al gobierno a concentrar recursos en el control de la inflación y la prevención de eventuales brotes de conflicto social. Crisis económica, internacionalización de capitales y globalización económica abrieron

³⁰ Fátima Fernández Christlieb, "La Crisis Cultural y la Lucha Ideológica en la Televisión." Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín (coord.), *México ante la Crisis. El Impacto Social y Cultural. Las*

mayores espacios a la iniciativa privada y el libre juego del mercado. Como resultado, la política de comunicación social del gobierno del presidente De la Madrid se alejó de las bases tradicionales de apoyo del Estado Mexicano y eligió como respaldo a la empresa privada. Había en esta decisión algo más que un entorno macroeconómico desfavorable, se trataba de una acción ideada en el marco de un proyecto de reconstrucción nacional a largo plazo.

Gradualmente se había ido gestando una creciente tensión entre la búsqueda de la unanimidad política como base de la estabilidad, con las dificultades de representar adecuadamente una pluralidad social, que demandaba el reconocimiento oficial de la diversidad de puntos de vista y opiniones. En la historia política del México postrevolucionario disenso y pluralidad habían quedado estrechamente vinculados con inestabilidad y desorden público, situación que hacía punto menos que imposible contradecir el principio de que el Estado era el único representante legítimo de los intereses colectivos, cuya expresión cultural eran la nación y el pueblo.³¹

El Pulso de las Mayorías

En un contexto de recesión económica y malestar social la esfera pública se integró de manera acelerada con la vida política en un proceso que abarcó dos momentos. El primero, previo a las elecciones de 1988, se caracteriza por el

Alternativas. Siglo XXI. México, 1985. pags. 161-180.

³¹ José Luis Gutiérrez Espíndola, *Op. cit.* pags. 12-13.

aumento sostenido de la preocupación oficial por la aprobación popular de las decisiones de política económica del gobierno. La difusión de los sondeos de opinión realizados a lo largo del período eran un indicio del interés de las elites por evaluar el deterioro de la legitimidad del régimen. Un mes antes del arribo de la nueva administración, se llevó a cabo la primer *Encuesta de Nacionalización de la Banca*, seguida pocos meses después -en abril del siguiente año-, por la primera *Encuesta Nacional de Opinión Pública* realizada por encargo del IEPES del PRI.

A punto de concluir el sexenio del presidente De la Madrid se levantaron tres encuestas más. Gallup de México organizó en agosto la *Encuesta Política 1987* por encargo del PRI. Posteriormente, el gobierno de Veracruz ordenó en diciembre del mismo año el trabajo *Exploraciones sobre la Campaña Presidencial* y finalmente, con el patrocinio de la Contraloría General de la Federación, se llevó a cabo en junio de 1988 la *Encuesta de Opinión Pública sobre Renovación Moral*.³² La información aportada por estos trabajos no sólo permitió tomar el pulso de la unanimidad -rasgo distintivo de la vida política nacional-, representó también la irrupción en la esfera pública de un nuevo criterio político de legitimidad: la pluralidad. Esto se hizo evidente en la presentación de la primera *Encuesta Nacional de Opinión Pública* donde se afirma que las encuestas son "... un nuevo tipo de consulta popular cuyo propósito declarado es contribuir al desarrollo de la

³² Índice Badex. *Banco de Datos de Encuestas Mexicanas*. Prospectiva Estratégica. México, 1992. pags. 1-28.

democracia y el perfeccionamiento del sistema político.”³³ Asimismo, en la nota metodológica del mismo documento aparece nítidamente esbozado el objetivo oficial de las encuestas durante este período: “se pretende conocer el perfil político e ideológico de los estratos de la población y su opinión sobre el gobierno y la política, para orientar la toma de decisiones.”³⁴

Las encuestas de opinión pública revelaron varios puntos interesantes. En principio, la existencia de un progresivo deterioro de la capacidad representativa de los intereses generales por parte del Estado. La *Encuesta de Opinión Pública 1983* mostró que en ese momento el gobierno aún contaba con un considerable nivel de apoyo y simpatía entre la población, particularmente en los niveles federal y estatal. El promedio nacional de opinión a favor y en contra de los gobiernos estatales fue del orden de 62.8 y 30.5 por ciento, contra un 59.2 y 31.6 por ciento en el caso del gobierno federal. Sin embargo, al desagregar los datos se aprecia que las opiniones favorables se concentraban en los estratos más altos.

Quienes evaluaron más favorablemente al gobierno estatal fueron funcionarios públicos (78.3 %), dirigentes políticos (74.7 %), servidores públicos (68.3 %) y profesionistas (66.4 %). A nivel federal los resultados fueron prácticamente idénticos: funcionarios públicos 73.4 por ciento, dirigentes políticos 75.2 por ciento, servidores públicos 64.3 por ciento y profesionistas 61.3 por ciento.

³³ IEPES-PRI, *Encuesta Nacional de Valores Políticos, 1983*. pag. 1.

³⁴ *Ibid.* pag. 5.

A su vez, las opiniones desfavorables se agruparon entre los sectores populares. Los sectores más críticos del gobierno estatal eran los estudiantes con 37.4 por ciento, seguidos por los comerciantes con 37.2 por ciento, los obreros con 35.7 por ciento y los desempleados con 35.1 por ciento. Para el caso del gobierno federal nuevamente los estudiantes resultaron ser los críticos más severos con 37.8 por ciento, seguidos por los obreros (36.0 %), profesionistas (35.2 %) y desempleados (33.4 %). Cuatro años más tarde la *Encuesta Política 1987* encontró que el promedio nacional de opinión favorable al gobierno había caído hasta un 29.3 por ciento, mientras que las opiniones desfavorables se habían incrementado en un 55.1 por ciento.³⁵

Un tema álgido, la política económica del gobierno, contaba con un margen de legitimidad estrecho. En 1987 casi la mitad de los encuestados se manifestó en contra de la política de control de salarios (46.9 % en promedio), comparada con más de un tercio (38.6 %) que manifestó estar a favor. La estrategia de control de precios -como era de esperar-, suscitaba menos malestar ya que menos de una tercera parte la rechazaba (25.4 %), mientras que cerca de la mitad de la muestra (46.0 %) consideraba que la medida era necesaria y por lo tanto la aprobaba. En contrapartida, las opiniones se vuelven abiertamente hostiles por lo que respecta al tema de la deuda externa. Un abrumador 70.7 por ciento opinó que el manejo no había sido el adecuado comparado con un escaso 6.4 por ciento que se pronunció a

³⁵ Gallup-PRI *Encuesta Nacional Política, 1987*. pag. 4.

favor de la posición oficial.³⁶ En términos generales la encuestas revelaron una ciudadanía con un creciente escepticismo respecto a la capacidad de gestión del Estado, en un momento en que el gobierno había colocado buena parte de su capital político en el mejoramiento del desempeño económico. En vísperas del cambio de sexenio, el discurso político no tenía ya la exclusividad para hablar en nombre de la mayoría; ahora, el realismo económico exigía pronunciar un discurso responsable -acostumbraba decir el presidente-, que hablara simultáneamente en nombre de la defensa de los intereses populares, la eficacia del Estado y los principios democráticos.³⁷

Conciliar estos tres objetivos generó una tensión visible en el desarrollo de las preferencias partidistas. La *Encuesta Pública de 1983* reveló un agudo deterioro de la legitimidad electoral del régimen con un nivel de simpatía por el PRI apenas por arriba del 55.3 por ciento, comparado con un modesto 10.4 por ciento para el PAN y 8.0 por ciento para el resto de los partidos de oposición. Menos de un lustro después, el porcentaje de personas que declararon simpatizar con el PRI había caído hasta el 29.6 por ciento, mientras el nivel de apoyo a la derecha permanecía estable con una disminución de dos décimas de punto porcentual (10.2 %) y un ligero aumento de la simpatía por la oposición de 13.6 por ciento. Signo de los tiempos

³⁶ *Ibid.* pag. 3-4.

³⁷ Manuel Villa, "La Política en el Gobierno de Miguel de la Madrid." *Foro Internacional* no. 120, abril-junio, 1990. pags. 659-676.

por venir, el valor de los indecisos, -aquellos que no simpatizaban con ninguna de las opciones partidistas disponibles- se incrementó de 22.4 a 37.7 por ciento.

A dos meses de iniciada la campaña presidencial, punto crítico de la reproducción del sistema político, la encuesta de opinión pública *Exploraciones sobre la Campaña Presidencial* puso de manifiesto las nuevas dimensiones del consenso para el partido en el poder. Menos de una tercera parte de los entrevistados declararon simpatizar con el PRI (20.1 %), 32.6 por ciento afirmó que el candidato más antipático era Carlos Salinas de Gortari, y apenas un 12.6 por ciento declaró que votaría por él. La gran mayoría de los encuestados hizo patente su indiferencia por el conjunto de los aspirantes presidenciales (40.8 %).³⁸ Dos meses antes de las elecciones la encuesta *Opinión Pública sobre Renovación Moral* confirmó los datos anteriores con una novedad: un partido de oposición, el PAN, se encontraba por primera vez en la historia política del México contemporáneo a la cabeza de las preferencias del electorado (32.8 % de simpatías contra 21.6 % de apoyo al PRI), terminando con una tradición de unanimidad y mayorías absolutas de más de medio siglo de duración.³⁹

³⁸ Gobierno del Estado de Veracruz, *Encuesta de Opinión Pública Exploraciones sobre la Campaña Presidencial*, 1987 pags. 1-14.

³⁹ Contraloría General de la Federación, *Encuesta de Opinión Pública sobre Renovación Moral*, 1988. pags. 1-9.

La Nueva Hermenéutica Política

La segunda fase de la integración entre esfera pública y vida política arranca con las elecciones presidenciales de 1988 y corre a cargo de la irrupción de un actor que rápidamente se convirtió en protagonista central del debate político: las encuestas. Su presencia reconfiguró el perímetro de un imaginario dominado por la consigna de unidad nacional a toda costa, espacio cuyos rasgos históricos determinantes habían sido la unanimidad política, la cultura de las mayorías absolutas y la suspensión oficial del disenso. Esta metamorfosis de la esfera pública tuvo como efecto inmediato la dilatación de las fronteras del debate político, estimulando la expresión de una pluralidad latente en los márgenes del sistema. Asimismo, ajustó los márgenes de maniobra del proceso de toma de decisiones gubernamental, al modificar el lazo que iba de la opinión pública a la gestión del Estado. En el nuevo escenario muchas áreas encubiertas dejaron de estar automáticamente sustraídas al debate y la polémica pública sobre la distribución del poder, lo que desencadenó agrias disputas sobre la conveniencia de redefinir amplias zonas de la vida política y social que hasta ese momento se consideraban privadas.

El nuevo actor político hizo su entrada oficial a la vida pública en julio de 1988. Sólo en abril y mayo se realizaron por lo menos 20 encuestas de preferencias electorales de entre las cuales destacan *La Jornada* (abril), *Excélsior* (mayo), *El*

Universal (junio), *Unomásuno* (sin fecha), *Gallup* (mayo), *Bendixen* (junio) y *La Jornada* (junio).⁴⁰ El lunes 23 de mayo el periódico *La Jornada* publicó los resultados de un sondeo preelectoral realizado en el mes de abril con un editorial que llevaba por título “Para Enriquecer el Debate.” Destacaba ahí que el nivel de apoyo al candidato oficial se encontraba por debajo de los márgenes históricos de votación del partido, con un valor estimado inferior al 50 por ciento (45.4 %), mientras que los votos potenciales por la oposición alcanzaban un 26.3 por ciento para el FDN y un 9.9 por ciento para el PAN. La totalidad de las encuestas coincidía en el orden de importancia de los tres candidatos así como en los rangos de simpatía por partido.⁴¹

No pasaría mucho tiempo antes de que se sintieran los efectos políticos de su inserción en la esfera pública. El debilitamiento de las simpatías electorales del candidato del PRI revelado por las encuestas, precipitó las negociaciones que llevaron a la formación de una coalición electoral entre la izquierda reformista, los movimientos urbano-populares y la Corriente Democrática del PRI que culminó en la creación del Frente Democrático Nacional (FDN).

Así, el día previo a las elecciones, *La Jornada* presentó los resultados de otra encuesta nacional que indicaban una dramática redistribución de las preferencias partidistas. Este hecho constituía una novedad que se antojaba insólita en una esfera pública dominada por la unanimidad, sin cambios abruptos en las simpatías

⁴⁰ Miguel Basañez, “Encuestas de Opinión en México.” Carlos Bazdresch et. al. (comps.), *México. Auge, Crisis y Ajuste*. FCE. México, 1992. pags. 167-193.

electorales a lo largo del tiempo. A la pregunta *¿Por qué partido siente usted más simpatía?* Un 43.6 por ciento de los entrevistados respondió que el PRI, 29.1 por ciento se manifestó a favor del FDN y 17.4 por ciento afirmó que el PAN. En la capital de la república la competencia era aún más reñida: 37.8 por ciento opinó que Cuauhtémoc Cárdenas era el mejor candidato seguido por Salinas de Gortari con 34.6 por ciento y Manuel Clouthier con 12.2 por ciento.⁴²

La erosión de la cultura de las mayorías absolutas plasmada en los estudios de opinión pública desencadenó las más diversas reacciones. Algunos entusiastas reiteraban que las encuestas habían llegado para quedarse como condición básica de la democracia. Otros, más cautelosos, se mostraban escépticos de la posibilidad de que medios de comunicación y sondeos electorales contribuyeran a formar una opinión pública fundada en un consenso democrático. Sin embargo, la mayoría coincidía en el cambio cualitativo que representaba la aparición de las encuestas para la vida pública nacional: “Las elecciones federales de este año han sido las primeras, en la historia del país, en que las encuestas de opinión pública sobre intenciones de voto tienen presencia e influencia. Cualesquiera que sean sus defectos, a las encuestas de este año corresponde el mérito de haber mostrado, aunque sea parcialmente, que ya no es posible nada sin las encuestas, si queremos

⁴¹ Encuesta. *Perfil de la Jornada*, 23 de mayo, 1988.

⁴² Encuesta I. *Perfil de La Jornada*, 5 de julio, 1988.

ser de veras una sociedad democrática.”⁴³ Ahora podía alegarse que “La palabra unidad poco a poco desaparece como consigna de un nacionalismo impuesto... Hacer encuestas es destruir el código de la Revolución y acceder a los ires y venires de la ciudadanía.”⁴⁴

A partir de 1988 la clásica pregunta *¿Si hoy fuera la elección por quién votaría usted?* se repetiría una y otra vez con mayor frecuencia en numerosas encuestas en los comicios estatales de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Chihuahua y el estado de México entre otros. Ahora bien, pese a que el advenimiento de las encuestas contribuyó al fortalecimiento del pluralismo y la apertura política, desencadenó también efectos no deseados cuyas consecuencias eran ambiguas para la democratización del régimen. La preocupación gubernamental por la popularidad de los planes antiinflacionarios fue desplazada en importancia por el enorme interés suscitado por los sondeos electorales. Esta circunstancia, sumada a la enorme gravitación e influencia del Estado, estimuló la creación de centros gubernamentales de encuestas que propiciaron una guerra de cifras que, más de una vez, desacreditó información proveniente de empresas encuestadoras independientes.

En 1989 se crearon instancias organizativas dedicadas a asesorar al PRI, la Oficina de la Presidencia y el periódico *El Nacional*, propiedad del gobierno. En opinión de algunos autores, el auge de las encuestas propició el cambio de

⁴³ Iván Zavala, “Luz y Sombra de las Encuestas en México.” *La Jornada*, 8 de agosto, 1987.

⁴⁴ Federico Reyes Heróles, “Sondear a México.” *Este País*, julio, 1994. pag. 35.

estrategia del fraude tradicional, en su modalidad de robo de urnas o alteración de actas, a la moderna mercadotecnia electoral: “El PRI ha logrado identificar en detalle el perfil y ubicación de sus electores potenciales y de sus opositores. Esto le permite emprender estrategias selectivas de promoción e inhibición simultánea del voto. Difícil de detectar por la oposición, dados los altos costos involucrados en la investigación por encuestas. Tales estudios sólo están al alcance del partido gubernamental.”⁴⁵

El deterioro de la hegemonía estatal impactó profundamente la estrategia de los partidos políticos. Irónicamente quien quedó en una posición más vulnerable fue el PRI, enfrentado al requerimiento de justificar sus mayorías tanto frente a la opinión pública como a sus adversarios, que harían de la suspicacia hacia el desempeño electoral del partido en el poder, una constante de la vida pública convirtiéndola en una de sus tácticas favoritas para impugnarlo. Luis Aguilar describe bien esta situación: “...para el PRI, su gran problema es el de la credibilidad. Cómo convencer al vencedor.”⁴⁶ En esta tarea el Estado decidió utilizar los medios de comunicación y especialmente las encuestas, no sólo como un termómetro sino también como un poderoso instrumento de manufactura del consenso.

⁴⁵ Miguel Basañez, “¿Para qué Sirven las Encuestas? La Experiencia Mexicana.” *Este País*, enero, 1993. pag. 32.

⁴⁶ Citado por Frederick C. Turner, “La Validez de las Encuestas.” *Este País*, diciembre, 1994. pag. 17.

A menos de un año de iniciada su administración se hizo evidente la importancia que el gobierno de Salinas de Gortari le daba a las encuestas de opinión. En el mes de octubre de 1989 se levantó la encuesta de opinión pública nacional *Los Primeros 10 Meses de Gobierno*. El documento daba cuenta de bajos índices de apoyo popular a la nueva administración. Un 37.9 por ciento manifestó un nivel de confianza regular en el gobierno, 31.7 por ciento lo definió por su dureza y 46.0 por ciento opinó que el presidente mostraba preferencia por las clases privilegiadas. Llama la atención el desinterés de los entrevistados hacia aquellas acciones emprendidas por el presidente con el fin de recuperar su imagen ante la opinión pública: sólo un 7.2 por ciento del total de la muestra estuvo de acuerdo con el encarcelamiento de los líderes petroleros, en tanto que más de la mitad de los encuestados dejó claro que una condición indispensable para recobrar la confianza en el gobierno era la resolución de problemas (44.9 %) y la eficacia en la administración pública (29.9 %).⁴⁷

Los encuestadores no tardaron en darse cuenta que en el marco de la cultura política nacional la pregunta relacionada con las intenciones de voto generaba tal suspicacia, que muchas veces era más prudente preguntar primero cuál era el problema más importante del país, y sólo después que partido tenía más posibilidades de resolverlo.

⁴⁷ Presidencia de la República, *Encuesta de Opinión Pública Los Primeros 10 Meses de Gobierno, 1989*, pags. 1-10.

La consolidación de una sociedad más plural y el surgimiento de la incertidumbre en los procesos electorales estimularon aún más la difusión de las encuestas a medida que se convertían en un insumo político relevante. Las elecciones de 1988 contribuyeron a hacer de las encuestas práctica cotidiana de la esfera pública: “Durante su sexenio, el presidente Carlos Salinas incluyó encuestadores de tiempo completo entre su equipo de asesores más cercanos y, aunque el legado y la importancia de los encuestadores sigue siendo notorio con Ernesto Zedillo, ningún presidente mexicano antes de Salinas había desarrollado tanta confianza en las encuestas de opinión como él.”⁴⁸ Pese a la coyuntura especial que rodeó la campaña presidencial de 1994, las encuestas permanecerían como un actor político por derecho propio, inundando la esfera pública con sondeos y pronósticos electorales. Su presencia sirvió como un catalizador que despejó la esfera pública a la expresión de la crítica y el disenso, pese a que ayudó también a convertirla en una poderosa herramienta de construcción de consensos políticos.

⁴⁸ Alejandro Moreno, “El Uso Político de las Encuestas de Opinión Pública. La Construcción de Apoyo Popular Durante el Gobierno de Salinas.” Roderic A. Camp (comp.). *Encuestas y Democracia: Opinión Pública y Apertura Política en México. Siglo XXI*. México, 1997. pag. 197.

“Tanto a Azuela como a mí nos han llamado reaccionarios. Pero en México así se califica a todo el que se opone al gobierno. Acaba uno por sentirse ufano de que le apliquen este epíteto.”

J. Vasconcelos

VI

EL AGOTAMIENTO DEL BUEN GOBIERNO

Autoridad y Estado

La metamorfosis de la esfera pública y los cambios en el balance de poder Estado-sociedad ocasionados por los procesos de crisis económica y modernización social, implicaron un progresivo traspaso de la responsabilidad del Estado como promotor del desarrollo hacia una concepción neoliberal del equilibrio gubernativo basada en la autorregulación del mercado. Ello trajo como consecuencia tres cambios importantes cuyas implicaciones alteraron sustancialmente la lógica operativa del orden político vigente.

En primer lugar, se emprendió una vasta reestructuración del Estado desarrollista que se tradujo en una reducción de sus roles y atribuciones históricas, que dieron paso, de manera progresiva, a la ampliación de la racionalidad

institucional del mercado.¹ Asimismo, la sincronía entre crisis y modernización ayudó a modificar patrones y modelos interpretativos de la ciudadanía, contribuyendo a rearticular los niveles constitutivos de la cultura política². Finalmente, un tercer elemento importante estaba ligado a la nueva morfología de la estructura social y los sistemas de integración política, que escapaban a las modalidades clásicas del control político estatal. En las nuevas condiciones, los problemas de gobernabilidad giraban en torno a la paulatina disociación del vínculo entre Estado, sistema de representación y sistema de partidos. En este escenario, la cultura política vendría a ser un factor clave del acelerado proceso de transformación experimentado por el país.³

Disposición al Cambio

Buscando rectificar los excesos de sus predecesores, la administración del presidente Miguel De la Madrid empezó con una acerba crítica del populismo y los modelos de desarrollo basados en la subordinación de la economía a los imperativos de la política. Este proyecto, que aspiraba a racionalizar la gestión económica del Estado y modernizar la vida política, se enfrentó al hecho de que la crisis había erosionado más allá de lo previsto los supuestos del modelo del buen gobierno. Las medidas encaminadas a revertir la grave crisis económica por la que

¹ Dieter Nohlen, *Democracia, Transición y Gobernabilidad en América Latina*. Instituto Federal Electoral. México, 1996. pags. 30-32.

² Norbert Lechner, *Cultura Política y Gobernabilidad Democrática*. Instituto Federal Electoral. México, 1995. pags. 14-15.

atravesaba el país habían minado los mecanismos históricos de legitimidad del sistema, que permitieron disfrutar de un período largo y sostenido de estabilidad política y social. Cada vez era más difícil para el Estado aparecer simultáneamente como paladín de la racionalidad económica y defensor de la justicia social.

Los regímenes postrevolucionarios se habían servido siempre de su origen popular como principio último de su derecho a gobernar, lo que explica que la autoridad del Estado permeara los intersticios más recónditos del tejido social. No obstante, una década de estancamiento y políticas macroeconómicas antiinflacionarias basadas en el control de la demanda y el equilibrio de las finanzas públicas, terminaron por erosionar severamente la cultura del absolutismo político.

Miguel Basañez detectó que entre 1983 y 1987 las opiniones favorables al gobierno habían descendido de 41.6 a 29.3 por ciento, mientras que las desfavorables pasaron de 14 a 29.2 por ciento.⁴ Ello situaba unas y otras prácticamente en el mismo nivel, situación insólita para un sistema político acostumbrado a niveles de apoyo popular muy altos.

La *Encuesta Mundial de Valores* corroboró esta tendencia. El cuadro 1 muestra que en 1990 más del 80 por ciento de las opiniones eran contrarias al mito de un gobierno puesto al servicio de las causas populares (81.1 %), con menos de una quinta parte del total a favor de la idea de que el gobierno era conducido

³ Jaime Sánchez Susarrey, "Cultura Política, Legitimidad y Gobernabilidad." *La Transición Incierta. Vuelta.* México, 1991. pags. 157-162.

conforme a los intereses populares (18.9 %). Los sectores más críticos estaban formados por personas de edad madura, con educación superior, identificados con la izquierda y ubicados en la capital del país. Esta erosión del consenso es particularmente relevante si tomamos en cuenta que la encuesta fue levantada en un momento en que el presidente Salinas de Gortari había emprendido una serie de acciones espectaculares, encaminadas a restablecer su popularidad a toda costa. En enero de 1989, a pocas semanas de haber iniciado su gestión el ejército aprehendió a Joaquín Hernández Galicia, líder del *Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana* (STPRM), tres meses después Carlos Jongitud Barrios líder del *Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación* (SNTE) fue obligado a renunciar, y en julio del mismo año el gobierno reconocía la victoria del PAN en las elecciones para gobernador del estado de Baja California Norte.

⁴ Miguel Basañez, *El Pulso de los Sexenios. 20 Años de Crisis en México. Siglo XXI. México, 1990. pag. 219.*

Cuadro 1. AUTORIDAD Y CONSENSO (%)

	Año de la Encuesta	
	1990	
	pais manejado por unos pocos intereses	pais manejado por todo el pueblo
<i>Nacional</i>	81.1	18.9
<i>Edad</i>		
16-29	81.6	18.4
30-49	81.8	18.2
50+	78.4	21.6
<i>Educación</i>		
básica	79.6	20.4
media	78.5	21.5
superior	87.7	12.3
<i>Afinidad Política</i>		
Izquierda	92.7	7.3
Centro	82.9	17.1
Derecha	70.9	29.1
<i>Región</i>		
norte	75.3	24.7
centro	72.1	27.9
sur	81.6	18.4
D.F.	92.1	7.9

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

La información anterior perfila un panorama donde la evolución del equilibrio Estado-sociedad y la metamorfosis de la esfera pública hicieron de la participación electoral el detonante de las tendencias al cambio en la cultura política.⁵ Los datos del cuadro 2 son ilustrativos al respecto. Dos años después de los comicios de 1988 las personas encuestadas se dividían en dos fracciones más o menos exactas por lo que respecta a su opinión frente al cambio: 51.4 por ciento consideraba mejores las ideas que habían resistido la prueba del tiempo, frente a un

48.6 por ciento que pensaba que las nuevas ideas representaban una oportunidad para mejorar. Es interesante observar que contrariamente a lo que podría esperarse, la coincidencia entre los ritmos de expansión de la geografía electoral del voto opositor y la inclinación al cambio por región resultó ser parcial. La disposición a probar nuevas ideas no fue mayor en el Norte sino en el Centro, seguido de la Capital del país, con el Norte y el Sur como las regiones menos propensas a renunciar a la tutela de la tradición. El hecho de que la muestra se divida casi simétricamente en dos mitades, es un indicador elocuente de que una proporción importante de la población se había vuelto más receptiva al cambio.

⁵ Silvia Gómez Tagle, "La Ruptura en las Elecciones Mexicanas: 6 de julio de 1988." Jorge Alonso, Alberto Azis y Jaime Tamayo (coords.), *El Nuevo Estado Mexicano* vol. IV. Nueva Imagen. México, 1994. pags. 195-223.

Cuadro 2. TRADICION Y CAMBIO (%)

	Año de la Encuesta	
	1990	
	las ideas que han soportado la prueba del tiempo por lo general son mejores	las ideas nuevas por lo general son mejores que las ideas viejas
<i>Nacional</i>	51.4	48.6
<i>Edad</i>		
16-29	44.4	55.6
30-49	52.1	47.9
50+	68.4	31.6
<i>Educación</i>		
básica	54.7	45.3
media	42.7	57.3
superior	47.8	52.2
<i>Afinidad Política</i>		
Izquierda	40.4	59.6
Centro	53.9	46.1
Derecha	51.2	48.8
<i>Región</i>		
norte	54.0	46.0
centro	45.9	54.1
sur	54.5	45.5
D.F.	48.3	51.7

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Esta aspiración se evidencia más aún en el cuadro 3. Una de las características distintivas de la esfera pública postrevolucionaria había sido la institucionalización tanto del *statu quo* como del rechazo al cambio. Idea promovida desde el Estado, en el imaginario político nacional se identificaba al cambio con la anarquía y el desorden.⁶ Sin embargo, a principios de la década de los noventa esta percepción política estaba modificándose. Los datos de la *Encuesta Mundial de Valores* confirman una reducción importante de las personas opuestas al cambio.

Menos del 40 por ciento de los individuos encuestados opinó que los cambios le preocupaban y poco más del 60 por ciento manifestó una opinión positiva respecto a éste. Analizando los datos a un nivel más desagregado observamos que las personas menos reacias al cambio se identificaban políticamente con la izquierda, seguidas por aquellas con un mayor nivel educativo y ubicadas geográficamente en la ciudad de México. Del conjunto de los estratos mostrados el más reacio al cambio resultó ser el correspondiente al grupo de edad avanzada, ya que es el único que está sobre un valor cercano al 50 por ciento (49.8 %), el resto presenta valores que giran en torno al promedio de la muestra.

⁶ Soledad Loeza, "La Lenta Construcción del Pluralismo Mexicano." Georges Couffignal (comp.), *Democracias Posibles. El Desafío Latinoamericano*. FCE. México, 1994. pag. 169.

Cuadro 3. DISPOSICION HACIA EL CAMBIO (%)

	Año de la Encuesta	
	1990	
	cuando ocurren cambios en mi vida me preocupo por las dificultades que puedan ocasionar	cuando ocurren cambios en mi vida doy la bienvenida a la posibilidad de que esté empezando algo nuevo
<i>Nacional</i>	37.1	62.9
<i>Edad</i>		
16-29	32.8	67.2
30-49	36.7	63.3
50+	49.8	50.2
<i>Educación</i>		
básica	40.7	59.3
media	32.4	67.6
superior	29.9	70.1
<i>Afinidad Política</i>		
Izquierda	28.1	71.9
Centro	37.1	62.9
Derecha	37.1	62.9
<i>Región</i>		
norte	41.5	58.5
centro	36.2	63.8
sur	36.5	63.5
D.F.	32.7	67.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Ahora bien, esta mayor disposición al cambio no expresaba un deseo de modificar radicalmente las estructuras políticas existentes. Una de las características distintivas de la cultura política es su acendrada vocación reformista, como dijo Arnaldo Córdova, en México: “se revoluciona reformando”.⁷ Esta peculiaridad se refleja en el cuadro 4. Si bien es cierto que el malestar y la pérdida de legitimidad del Estado provocaron un cuestionamiento de los valores políticos dominantes, ello

⁷ Arnaldo Córdova, “Ideología y Cultura Política en México.” *La Revolución y el Estado en México*. Era. México, 1989. pag. 322.

no se tradujo en una apertura total al cambio. Por el contrario, más del 60 por ciento opinó que éstos debían tomarse con cautela, comparado con una tercera parte que consideró mejor una actitud audaz. Esta medida frente al cambio es una constante que recorre todos los estratos sociales y sólo se reduce en los sectores de menor edad, con mayor educación, simpatizantes de la izquierda y residentes en la ciudad de México, donde la resistencia al cambio es menor que el promedio nacional. En general, la cautela frente al cambio es un valor político dominante que en ningún caso disminuye por debajo del 60 por ciento, lo que habla de una mayor disposición a transformar el orden político siempre y cuando dicho proceso se lleve a cabo de manera gradual.

Cuadro 4. ACTITUD FRENTE AL CAMBIO (%)

	Año de la Encuesta	
	1990	
	se debe ser precavido al hacer cambios importantes en la vida	nunca se logrará nada a menos que se actúe de manera atrevida
<i>Nacional</i>	66.1	33.9
<i>Edad</i>		
16-29	64.1	35.9
30-49	66.4	33.6
50+	70.6	29.4
<i>Educación</i>		
básica	68.3	31.7
media	64.8	35.2
superior	60.3	39.7
<i>Afinidad Política</i>		
Izquierda	61.9	38.1
Centro	66.6	33.4
Derecha	66.4	33.6
<i>Región</i>		
norte	66.7	33.3
centro	66.7	33.3
sur	67.8	32.2
D.F.	63.6	36.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

El Gobierno y sus Descontentos

En México, como en gran parte de América Latina, el Estado desarrollista había sido la forma más avanzada de conducción política. Sin embargo la crisis económica provocó no sólo un creciente descontento con el régimen, sino una actitud cada vez más crítica hacia el sistema político en su conjunto. Supuesto fundamental de la ideología revolucionaria, la erosión del papel del Estado como promotor y regulador de la actividad económica arrastró en su caída la legitimidad

del presidencialismo.⁸ El disgusto con el desempeño económico del gobierno constituyó un estímulo adicional en la dirección del cambio político.

El cuadro 5 muestra la existencia de un fuerte rechazo a los resultados obtenidos con el modelo de desarrollo económico vigente. Apenas un 2.1 por ciento expresó su desacuerdo con la posibilidad de introducir modificaciones importantes en la economía, comparado con un 53.7 por ciento que declaró estar totalmente convencido de la necesidad de introducir cambios en la actividad económica, cifra que se eleva hasta un 85.7 por ciento si tomamos el porcentaje acumulado de aquellos que afirmaron estar parcialmente de acuerdo con dichos cambios. Resulta interesante observar en este punto el grado en que incluso el número de personas identificadas con la izquierda (más del 70 %), se pronunció a favor de introducir cambios fundamentales en la economía. Los datos obtenidos concuerdan con los hallazgos del estudio llevado a cabo por Enrique Alduncin, quien encontró que la prioridad social más valorada por los mexicanos era la eficiencia económica -por encima de valores como el aseguramiento de niveles de bienestar para la población o la igualdad de oportunidades.⁹

⁸ Rolando Cordera, "El Presidencialismo y la Transición Mexicana: Un Acercamiento a su Economía Política." *Diálogo y Debate de Cultura Política*, julio-septiembre, 1997. pags. 79-98.

⁹ Enrique Alduncin Abitia, *Los Valores de los Mexicanos*. T. III. Banamex. México, 1993. pags. 65-67.

Cuadro 5. EL MALESTAR CON EL GOBIERNO (%)

LA ECONOMIA NECESITA CAMBIOS FUNDAMENTALES	Año de la Encuesta				
	1990				
	completa mente de acuerdo	algo de acuerdo	ni de acuerdo ni en de sacuerdo	algo en desacuer do	completa mente en desacuer do
<i>Nacional</i>	53.7	32.0	8.8	3.4	2.1
<i>Edad</i>					
16-29	53.3	32.3	9.2	3.4	1.8
30-49	55.7	31.2	7.7	3.3	2.1
50+	50.0	33.5	10.2	3.8	2.5
<i>Educación</i>					
básica	51.3	33.5	9.2	3.8	2.2
media	53.4	34.1	10.3	1.3	0.9
superior	60.8	26.3	6.6	3.8	2.5
<i>Afinidad Política</i>					
Izquierda	71.4	20.2	2.8	4.0	1.6
Centro	52.3	34.0	10.0	1.8	2.0
Derecha	45.0	38.3	8.3	5.1	3.2
<i>Región</i>					
norte	47.3	36.1	10.2	4.9	1.6
centro	66.0	20.9	7.8	1.9	3.4
sur	48.1	35.8	12.0	2.5	1.5
D.F.	59.9	29.6	5.0	3.1	2.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

El cuadro 6 da cuenta del desencanto con la autoridad pública. Ahí queda de manifiesto que el paradigma del buen gobierno, apoyado en la centralidad del Estado como promotor del crecimiento económico y la justicia social, estaba siendo duramente cuestionado. La proporción de personas que consideraban que el Estado debía administrar los negocios se redujo, en el curso de una década, de una estimación ya de por sí deficiente (inferior al 10 %) a un valor mínimo de 3 por ciento. En ese mismo lapso, se incrementó hasta alcanzar casi el 50 por ciento (46.5 %), el número de personas que consideraba a los propietarios el agente económico

idóneo para conducir los negocios. Resulta significativa también la disminución de un 4.5 por ciento de aquellos encuestados que favorecían una administración conjunta de empleados y patronos. Por edad las opiniones estaban divididas. Las personas mayores se inclinaban más por los propietarios, mientras que los jóvenes favorecían una administración conjunta de propietarios y empleados. Las personas de izquierda estaban a favor de introducir cambios en la economía aunque ello no significaba que favorecieran una mayor privatización.

En 1991 se incrementó ligeramente el número de personas que pensaba que la administración conjunta era la mejor opción (46.1 por ciento). Este crecimiento fue acompañado tanto por una disminución de las personas situadas al centro del espectro político que consideraban la administración de propietarios y empleados la mejor alternativa organizacional, como por un aumento significativo de la gente de derecha -superior a los 20 puntos porcentuales-, que veía en los propietarios el agente económico más apropiado para conducir los negocios. Por región los cambios en las preferencias favorecían a los partidarios del mercado. Si en 1980 el centro resultó ser la zona menos proempresarial (21 %), para 1991 el promedio de las cuatro regiones se había elevado hasta alcanzar un umbral por arriba del 40 por ciento. Estaba en curso la transformación de un valor político fundamental: la

percepción de que sólo los recursos públicos son “buenos” y de que lo público no puede subordinarse a intereses privados.¹⁰

Cuadro 6. EL DESCONTENTO CON EL GOBIERNO (%)

COMO SE DEBEN ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS	Año de la Encuesta							
	1981				1990			
	propietarios	propietarios y empleados	el gobierno	los empleados	propietarios	propietarios y empleados	el gobierno	los empleados
<i>Nacional</i>	28.3	46.1	8.8	16.7	46.5	41.3	3.0	8.9
<i>Edad</i>								
16-20	24.1	50.3	9.0	16.5	43.3	44.6	2.6	9.6
30-49	31.0	40.8	9.6	18.6	45.9	43.0	3.1	8.0
50+	44.0	39.3	6.0	10.7	57.0	29.9	4.1	9.0
<i>Educación</i>								
básica	27.3	43.5	9.6	19.5	45.7	40.0	4.1	10.2
media	30.3	48.8	6.9	14.1	46.6	44.2	1.9	7.2
superior	28.2	47.6	9.0	15.1	48.7	44.1	1.0	6.2
<i>Afinidad Política</i>								
izquierda	24.3	45.8	9.0	20.8	31.9	46.1	6.9	15.1
centro	27.3	47.5	6.8	18.4	45.9	44.4	2.4	7.2
derecha	29.6	45.1	10.0	15.3	54.1	37.8	2.4	5.7
<i>Región</i>								
norte	34.1	42.5	9.0	14.4	50.4	35.7	4.2	9.7
centro	21.0	56.2	10.3	12.6	43.5	40.9	2.6	13.0
sur	28.2	38.6	8.4	24.8	48.4	45.0	1.9	4.7
D.F.	27.9	45.9	6.9	19.3	41.6	46.3	2.8	9.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Si bien la información presentada hasta aquí acredita la existencia de un relativo apoyo a las políticas de reforma económica implementadas a lo largo del período en estudio, la relegitimación de las instituciones políticas, especialmente la presidencia, cobró nuevas formas y matices en el sexenio del presidente Salinas. La

¹⁰ Sara Gordon, “Equidad y Justicia Social.” *Rev. Mex. de Sociología*, abril-junio, 1995. pags. 175-184.

fragmentación de las mayorías y el envejecimiento de la ideología de la unidad nacional, provocaron una desarticulación entre la legitimidad del sistema y el consentimiento popular de la institución presidencial. Ello haría posible recuperar la imagen del presidente ante la opinión pública en un contexto global poco favorable al sistema político en su conjunto.

El cuadro 7 es revelador al respecto. En un país donde el régimen había disfrutado de una cultura de las mayorías absolutas y en un momento en que el presidente Salinas luchaba por recuperar su cuota de legitimidad histórica, una proporción minúscula de la población encuestada consideró motivo de orgullo nacional al sistema político (3.7 %). Esta percepción recorre todos los grupos sociales. La valoración positiva del sistema en ningún caso alcanzó el 10 por ciento del total nacional. Sólo las personas de mayor edad, identificadas con la derecha y residentes en el norte del país tuvieron una evaluación mas benevolente del sistema político. Resulta por demás significativo que entre las cosas menos valoradas por los encuestados estén dos rubros relacionados con la gestión gubernamental: el comportamiento de la economía y el sistema de salud pública. Al igual que en el caso del sistema político, la evaluación positiva de ambos rubros nunca llega al 10 por ciento en ninguno de los grupos sociales analizados aquí.

Cuadro 7. EL DISGUSTO CON LA POLITICA (%)

MOTIVOS DE ORGULLO NACIONAL	Año de la Encuesta						
	1990						
	logros científicos	el sistema político	logros deportivos	la cultura y el arte mexicanos	el desem peño de la economía	el sistema de salud pública	ninguna de estas cosas
<i>Nacional</i>	32.1	3.7	12.6	29.1	5.5	7.5	9.5
<i>Edad</i>							
16-29	32.2	3.0	13.0	30.5	4.8	7.5	9.1
30-49	32.3	3.4	13.2	28.7	5.6	7.0	9.7
50+	31.1	6.2	10.4	26.6	7.1	8.7	10.0
<i>Educación</i>							
básica	30.1	4.1	13.9	26.5	7.1	8.0	10.3
media	35.5	4.2	12.1	33.2	0.9	7.0	7.0
superior	35.4	2.0	9.2	34.1	3.9	6.6	8.9
<i>Afinidad Política</i>							
izquierda	28.5	1.7	9.6	40.2	3.8	6.3	10.0
centro	32.7	4.1	13.5	28.0	5.6	6.8	9.3
derecha	35.4	5.1	8.8	28.7	5.9	8.0	8.0
<i>Región</i>							
norte	29.0	5.4	15.7	25.8	6.7	6.3	11.1
centro	38.1	2.5	8.6	29.4	3.0	6.6	11.1
sur	29.9	3.7	14.0	32.3	4.6	8.5	7.0
D.F.	34.7	2.2	9.6	30.5	5.9	8.6	8.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

La información del cuadro 8 complementa los hallazgos descritos hasta aquí. Casi un 40 por ciento de los entrevistados no confía en sus instituciones políticas (39.2 %), y cerca de una tercera parte admite que tiene poca confianza (30.6 %). El porcentaje de aquellos que reconocieron tener mucha confianza es inferior a una décima parte del total de la muestra (5.9 %). Por edad son las personas mayores quienes tienen más y menos confianza en el gobierno, con los porcentajes más altos en ambos extremos. Lo mismo sucede para el caso de la educación básica. Como cabría esperar, la gente identificada con la derecha tiene mayor confianza en el

gobierno mientras que aquellos ubicados a la izquierda son los que menos confían. Asimismo, el norte resultó ser la región con los mayores índices de confianza, en oposición a la capital de la república que obtuvo el porcentaje más elevado de entre los que no confían nada en el gobierno (45.2 %). Emerge así un escenario donde conviven simultáneamente de manera inestable, un conjunto de estructuras políticas deslegitimadas,¹¹ con un jefe del ejecutivo empeñado en recuperar a como dé lugar la legitimidad del sistema, por la vía de la recuperación de la autoridad presidencial a los ojos de la opinión pública.

¹¹ “Carlos Salinas ante la Opinión Pública.” *Este País*, abril, 1993. pags. 12-14.

Cuadro 8. CONFIANZA EN EL SISTEMA POLITICO (%)

	Año de la Encuesta			
	1990			
	<i>mucha</i>	<i>algo</i>	<i>poca</i>	<i>nada</i>
<i>Nacional</i>	5.9	24.3	30.6	39.2
<i>Edad</i>				
16-29	5.7	22.0	33.9	38.4
30-49	5.3	28.1	28.1	38.5
50+	7.9	21.4	27.8	42.9
<i>Educación</i>				
básica	6.6	22.9	29.7	40.8
media	3.1	25.6	34.8	36.6
superior	5.7	27.7	30.5	36.2
<i>Afinidad Política</i>				
Izquierda	1.2	19.6	34.4	44.8
Centro	5.4	24.1	32.7	37.8
Derecha	10.2	31.8	28.9	29.1
<i>Región</i>				
norte	9.0	28.5	31.3	31.1
centro	4.2	22.7	30.6	42.6
sur	5.0	23.5	29.4	42.1
D.F.	3.6	20.5	30.7	45.2

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Con ese objetivo en la mira, el gobierno de Salinas de Gortari puso en marcha el 2 de diciembre de 1988 como primer acto de gobierno, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). La operación del programa, le permitió alcanzar varios objetivos de manera simultánea. En primer lugar, recuperar la imagen benefactora de la figura presidencial; luego, promover la idea de que se estaba produciendo una genuina reestructuración de las relaciones Estado-sociedad que permitiría recuperar el voto priísta. Finalmente, esta estrategia le ayudó también a

recobrar el factor esperanza, aumentando las expectativas de vida de amplias capas de la población.¹²

No obstante, los datos del cuadro 9 indican que pese a todos los esfuerzos llevados a cabo en esa dirección, la confianza de los ciudadanos en el gobierno seguía siendo muy limitada. Más de la mitad de las personas entrevistadas declaró confiar sólo algunas veces en el gobierno (51.3 %), menos de un tercio dijo no confiar casi nunca en las acciones del gobierno (24.3 %), y apenas alrededor de una cuarta parte manifestó niveles de confianza superiores al promedio (24.4 %). Sólo las personas mayores y los simpatizantes de la derecha manifestaron una mayor confianza en el gobierno. La mayoría de la muestra se ubicaba entre aquellos que confiaban esporádicamente en el gobierno, con valores por estrato muy cercanos al promedio nacional.

¹² Francisco Salazar Sotelo y Cristina Villalpando, "Modernización Económica y Transición Democrática en México: 1982-1992." Manuel Jiménez Castillo (coord.), *México: Una Sociedad en Cambio. Reflexiones Sobre Política y Cultura*. UAM-Azcapotzalco. México, 1994. pags. 23-71.

Cuadro 9. CONFIANZA EN EL GOBIERNO (%)

	Año de la Encuesta			
	1990			
	casi siempre	la mayor parte del tiempo	sólo algunas veces	casi nunca
<i>Nacional</i>	7.8	16.6	51.3	24.3
<i>Edad</i>				
16-29	6.5	16.3	51.4	25.7
30-49	8.4	16.6	51.5	23.5
50+	9.8	17.3	50.2	22.7
<i>Educación</i>				
básica	8.0	17.5	50.6	23.9
media	9.6	16.6	51.1	22.7
superior	6.0	13.8	53.5	26.7
<i>Afinidad Política</i>				
Izquierda	3.2	8.7	51.8	36.4
Centro	6.6	18.0	52.2	23.2
Derecha	12.5	21.1	50.0	16.4
<i>Región</i>				
norte	8.6	21.6	49.6	20.3
centro	6.1	11.2	49.5	33.2
sur	9.0	18.7	54.8	17.5
D.F.	6.8	11.3	51.3	30.6

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Los efectos de esta erosión de la autoridad del Estado sobre las condiciones de gobernabilidad no serían menores, puesto que se cuestionaba la centralidad del Estado como instancia máxima de coordinación y regulación social. El descrédito de la política como actividad propia de la autoridad desbordó la institucionalidad del sistema político y colocó la acción del gobierno en un marco inusual, caracterizado por la erosión de los códigos interpretativos en que se había fundado la interacción

política entre gobernantes y gobernados.¹³ En efecto, había una gran tensión sobre la forma en que los individuos percibían las normas que habían hecho posible establecer un orden a través de la política. El modelo del buen gobierno basado en un Estado fuerte, con amplia participación del sector público en la actividad económica, promotor del desarrollo económico, la justicia social y el credo de la unidad nacional no había escapado al proceso de desgaste de la autoridad política. Se presentaba así un cuadro político singular: un régimen que no lograba atraer el consenso de sus gobernados con un depositario del poder ejecutivo con niveles récord de apoyo popular.

La Política Cotidiana

La erosión de la autoridad del Estado y la mayor disposición al cambio no tardaron en expresarse políticamente. Luego de los comicios presidenciales de 1988 la disminución del poder del Estado, producto de la instrumentación de un modelo de gestión económica que requería la cesión de importantes controles sobre ciertos sectores de la sociedad, se tradujo en una vigorización de los procesos electorales. La irrupción del disenso en la política terminó convirtiendo las elecciones en el nuevo criterio reconocido de legitimidad.¹⁴ Esto implicó, al nivel de la cultura

¹³ Norbert Lechner, "Cultura Política y Gobernabilidad Democrática." *Leviatán* no. 68, verano 1997. pags. 75-85.

¹⁴ Soledad Loaeza, "El Llamado de las Urnas." *El Llamado de las Urnas*. Cal y Arena. México, 1989. pags. 273-282.

política, una intensificación la lucha política cotidiana. Simpatías partidistas y preferencias electorales dejaron de ser una variable predecible para emerger a la vida pública como un campo de batalla, donde los instrumentos de combate comprendían desde viejas prácticas clientelares como la política social del gobierno, hasta ingredientes novedosos como el efecto político de las encuestas de opinión o los debates públicos entre candidatos. Esta modificación, susceptible de ser rastreada en la evolución de las actitudes políticas y las simpatías partidistas del electorado, dejó al descubierto las presiones sobre la estabilidad del sistema, producto de la creciente disfuncionalidad entre forma de gobierno y representación política. Equilibrio institucional que había permitido combinar armónicamente legitimidad y gobernabilidad, las dos grandes obsesiones del imaginario político nacional.

Opinión Pública, Actitud hacia el Voto y Simpatías Partidistas

Durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari el papel de las encuestas como herramienta de medición de la cultura política se elevó a niveles sin precedentes en la historia reciente del país. En los hechos, se convirtió en un actor cuya influencia en la estructuración de la agenda del debate político nacional se tornó más y más importante, en buena medida gracias a que logró implantar a la opinión pública como una variable a considerar en el juego político. De esta forma,

la deducción del comportamiento electoral parecía resumir el ritmo de cambio global de la cultura política.¹⁵

Ocho meses después de iniciado el sexenio del presidente Salinas, el periódico estadounidense *Los Angeles Times* patrocinó una encuesta nacional de opinión pública. Los datos revelan la magnitud de las transformaciones. Destaca en primer lugar el elevado nivel de participación. Alrededor de un 61.3 por ciento de los encuestados declaró haber votado en los comicios de 1988. Llama la atención también que en un sistema político dominado por más de cinco décadas por un solo partido, apenas 5.1 por ciento de los electores manifestara que la motivación de su voto recaía en la variable partido político, comparado con un 28.4 por ciento que afirmó haber emitido su voto por que ello contribuiría a cambiar las cosas. El mantenimiento del antagonismo en los márgenes del mito del Estado benefactor había entrado en un proceso de franco agotamiento: 55.1 por ciento de los entrevistados consideró que los partidos de oposición tendrían más espacios de poder en el futuro, y que el PRI no sería el único partido importante.¹⁶

¹⁵ José Antonio Crespo, "La Cultura Política después del 6 de julio." *Nueva Antropología*, vol. X, no. 35. México, 1989. pags. 29-38.

¹⁶ Los Angeles Times, *Encuesta Nacional*, octubre, 1989.

El análisis de los datos disponibles para el período, provenientes de la *Encuesta Mundial de Valores* permite detectar dos fenómenos importantes, ambos relacionados con la existencia de un amplio sector de electores que no se identifica con ningún partido. En primer lugar, el bajo porcentaje de afiliación política partidista. Entre 1981 y 1990 menos de una décima parte de los encuestados declaró pertenecer a un partido político, con una tasa de cambio positiva de un exiguo 3 por ciento. Para 1990 la gran mayoría de los encuestados seguía sin pertenecer a ningún partido político (94.7 %), únicamente la población identificada con la izquierda elevó su membresía partidista logrando rebasar el umbral del 10 por ciento (12.3 % en 1990).

La evolución de este atributo de la cultura política fue prácticamente imperceptible durante el período en estudio. De entre aquellos que declararon no pertenecer a ningún partido político la proporción mínima apenas si cambió: pasó de 94.8 a 87.7 por ciento y se concentró en un solo punto del espectro político, la izquierda. Esta situación intensificó aún más las tendencias a la volatilidad de un electorado, cuyas simpatías partidistas fluctuaban rápidamente a lo largo del tiempo. El abismo entre la elevada participación electoral y la baja militancia partidista, no constituía sino un vestigio de la ancestral desconfianza de la ciudadanía hacia la política y los partidos, agudizada por la ausencia de una legislación electoral adecuada que, observaba perspicazmente Rafael Segovia, amenazaba con dejar la “nueva cultura política en el reino de las ideas.”¹⁷

¹⁷ Rafael Segovia, “Una Nueva Cultura Política.” *Partidos y Candidatos*. Miguel Angel Porrúa, Textos para el Cambio. México, 1994. pags. 11-14.

Cuadro 10. AFILIACION PARTIDISTA %

	Año de la Encuesta			
	1981		1990	
	pertenece a partidos políticos	no pertenece a partidos políticos	pertenece a partidos políticos	no pertenece a partidos políticos
<i>Nacional</i>	2.3	97.7	5.3	94.7
<i>Edad</i>				
16-29	2.2	97.8	5.5	94.5
30-49	2.1	97.9	5.7	94.3
50+	3.7	96.3	3.9	96.1
<i>Educación</i>				
básica	1.5	98.5	6.2	93.8
media	1.7	98.3	2.6	97.4
superior	3.6	96.4	4.3	95.7
<i>Afinidad Política</i>				
izquierda	5.2	94.8	12.3	87.7
centro	1.3	98.7	3.8	96.2
derecha	2.4	97.6	5.7	94.3
<i>Región</i>				
norte	2.9	97.1	6.3	93.7
centro	1.9	98.1	5.5	94.5
sur	0.9	99.1	2.3	97.7
D.F.	3.0	97.0	6.4	93.6

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Una pista adicional nos la proporciona, en segundo lugar, la filiación ideológica de los electores entrevistados en la encuesta. En un espacio político controlado, donde el partido dominante profesaba una ideología omnicompreensiva y ambigua que abarcaba la totalidad del espectro político-ideológico desde la derecha hasta la izquierda -reservando las posiciones extremas para la oposición-, el inicio de un proceso de reforma institucional obligó al PRI a reajustar algunos componentes de la doctrina que le había permitido mantenerse en el centro vital,

tales como el carácter social del Estado o el discurso nacionalista-revolucionario. En un momento en que el partido dominante se veía obligado a oscilar hacia la derecha, la mayoría del electorado se estaba moviendo en la dirección contraria.

El cuadro 11 muestra la desincronización entre afinidad política y hegemonía partidista. Si a principios de los ochenta existía un relativo consenso respecto a la distribución de las preferencias ideológicas a lo largo del espectro político, claramente observable en el hecho de que menos de una décima parte de los encuestados se ubicó a la izquierda (8.8 %), mientras que más de la mitad declaraba su afinidad política por la derecha (65.2 %), una década después las cosas habían cambiado sustantivamente. Ahora casi la mitad de las personas entrevistadas se colocó en el centro del espectro político (47.7 %) con poco más de una quinta parte desplazándose hacia la izquierda (20.7 %). Si en 1981 los sectores de bajos ingresos coincidían con los residentes de la zona norte del país en su inclinación por defender posiciones conservadoras (69.2 72.0 % respectivamente), diez años después concordaban también pero en el bajo porcentaje de identificación con la derecha (29.5 %). Se había producido un auténtico desplazamiento hacia el centro y la izquierda de las simpatías políticas en todos los niveles sociales, acompañado de una notable caída de las preferencias ideológicas de la derecha.

Cuadro 11. EVOLUCION DE LAS PREFERENCIAS POLITICO-IDEOLOGICAS (%)

AFINIDAD POLITICA	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	izquierda	centro	derecha	izquierda	centro	derecha
<i>Nacional</i>	8.8	26.1	65.2	20.7	47.7	31.6
<i>Edad</i>						
16-29	10.1	30.2	59.7	20.7	48.2	31.1
30-49	7.1	19.8	73.1	20.6	48.5	30.8
50+	7.7	23.2	69.1	20.9	44.0	35.1
<i>Educación</i>						
básica	7.5	20.6	71.9	21.7	47.9	30.3
media	8.6	27.0	64.4	17.2	48.4	34.4
superior	10.4	32.4	57.3	20.4	46.5	33.1
<i>Ingreso</i>						
bajo	7.8	23.0	69.2	21.6	48.9	29.5
medio	10.6	29.7	59.7	21.4	42.5	36.2
alto	11.7	32.7	55.6	13.2	54.4	32.4
<i>Región</i>						
norte	7.9	20.0	72.0	20.8	49.6	29.5
centro	9.1	18.7	72.2	14.5	47.2	38.4
sur	7.4	33.8	58.8	11.9	50.8	37.3
D.F.	11.4	44.5	44.1	31.2	42.6	26.2

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Sondeos sucesivos realizados posteriormente validarían esta particularidad del proceso de cambio político en México. En julio de 1991 se levantó una encuesta semanas antes de las elecciones intermedias legislativas, que confirmó la baja identificación partidista. Más de la mitad de los encuestados no simpatizaba con ninguno de los partidos (52.8 %) y menos de la tercera parte manifestó simpatía por el PRI (27.9 %). Del lado de la oposición las evaluaciones en ningún caso se acercaron al 10 por ciento. El PAN obtuvo el valor más alto con un 6.2 por ciento, mientras que el PRD se ubicó en el tercer lugar con un escaso 5.8 por ciento.¹⁸

¹⁸ Este País, *Encuesta Nacional Electoral*, julio 1991.

A fines de ese mismo año otra encuesta dejó constancia de la baja identificación partidista, pese a que el país se encontraba en un momento de recuperación económica. Sólo un 36.3 por ciento expresó simpatía por el PRI, seguido del PAN con 7.7 y el PRD con 4.1 por ciento. Nuevamente, el dato más relevante aquí es la persistencia de casi un 50 por ciento de personas que declararon no simpatizar con ninguno de los partidos políticos registrados (47.7 %).¹⁹ En abril de 1992 los valores experimentaron un ligero repunte en los tres partidos: 43.8 por ciento para el PRI, 9.1 por ciento para el PAN y 4.8 por ciento para el PRD, al tiempo que el número de personas no identificadas con ningún partido descendía al 38.3 por ciento. Al año siguiente los valores volvieron a fluctuar quedando en 32.7 por ciento para el PRI, 11 por ciento para el PAN, 7.7 por ciento para el PRD y 44.3 por ciento ninguno.²⁰ Semanas antes de las votaciones presidenciales de 1994 las simpatías se ubicaron de la siguiente manera: PRI 23 por ciento, PAN 10 por ciento, PRD 8 por ciento y ninguno 48 por ciento.²¹

No obstante, esta baja identificación partidista no era incompatible con cambios en la micro-cultura política en el sentido de una mayor participación por la vía de los procesos electorales. En vísperas de los comicios de 1991 86.2 por ciento de los entrevistados declaró estar registrado en el padrón electoral, 79.3 por ciento afirmó que pensaba votar, y poco más de la mitad de las personas (55.1 %) estaba

¹⁹ Este País, *Encuesta Nacional*, noviembre, 1991.

²⁰ Excélsior, *Encuesta Nacional*, febrero, 1993.

informada del día y mes de las próximas elecciones. La confianza en la transparencia de los procesos electorales aumentaba gradualmente: alrededor de un 42 por ciento de los encuestados creía que el voto sería respetado por las autoridades.²² Las elecciones mostraron una alta tasa de participación. Casi el 80 por ciento de los encuestados sostuvo que había votado (79 %), y un 55 por ciento consideró que las elecciones habían sido limpias.²³ Esta valoración se movió dentro de márgenes relativamente estables en los tres años siguientes: 44.4 por ciento en 1992, 37.5 por ciento en 1993 y 51.4 por ciento en 1994.²⁴

Ahora bien, percepción del voto y preferencia política no siempre se movían en la misma dirección. Conforme a un sondeo realizado a fines del sexenio del presidente Salinas, casi la mitad de las personas entrevistadas pensaba que la forma más efectiva de influir en las decisiones del gobierno era votar en las elecciones (44 %), seguida de hablar con el presidente (12 %) y tener amigos entre los funcionarios o protestar en manifestaciones públicas (10 %). Resulta significativo que sólo un 4 por ciento considerara importante hablar con los diputados como medio de influir en la política gubernamental, juzgando al mismo tiempo que los temas que se

²¹ Excélsior, *Encuesta Nacional*, agosto, 1994.

²² Este País, *Op. cit.*, julio, 1991.

²³ Los Angeles Times, *Encuesta Nacional*, octubre, 1991.

²⁴ Excélsior, *Op. cit.* agosto, 1994.

discutían en la cámara eran más importantes para los políticos (41 %) que para los ciudadanos (38 %).²⁵

Una encuesta realizada semanas después, reveló que a pesar del notable aumento de la participación electoral, la revaloración de la importancia del voto y la capacidad de la oposición para obtener victorias y gobernar, la volatilidad de las simpatías partidistas seguía favoreciendo al PRI. Esto se expresaba en una evaluación sistemáticamente favorable del partido en el poder por parte del votante. En 1991 los electores dieron a los partidos políticos una calificación de 51 para el PAN, 46 para el PRD y 63 para el PRI en una escala ponderada de 1 a 100.²⁶ De la misma manera en 1992 el PAN obtuvo una calificación de 42.5, contra 26.6 del PRD y 56 del PRI.²⁷

Un año antes de las elecciones, en febrero de 1993, la opinión pública evaluó más estrictamente a los partidos políticos de forma tal que el PAN obtuvo una calificación de 34.5, el PRD 21.3 y el PRI 49.9.²⁸ Sin embargo, semanas antes de los comicios presidenciales, pese a que un 55 por ciento del electorado consideraba posible que un partido de la oposición ganara las elecciones –34 por ciento pensaba que no era factible-, el PRI seguía siendo valorado como el partido más competente

²⁵ Ulises Beltrán et. al., *Los Mexicanos de los Noventa*. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México, 1996. pags. 70-71.

²⁶ *Este País*, *Ibid.*, julio, 1991.

²⁷ *Este País*, *Ibid.*, abril, 1992.

²⁸ *Excélsior*, *Ibid.*, febrero, 1993.

para resolver problemas como la corrupción, la inseguridad, la pobreza o la situación económica del país.

Jorge Domínguez y James McCann ya habían detectado esta peculiaridad en las elecciones de 1988 y 1991 gracias a un modelo de regresión logística multivariado, que reveló que el principal efecto de la oposición cardenista había sido redistribuir a los votantes entre los partidos existentes, sin que se produjera una integración efectiva a la lucha política de los electores desmovilizados que no simpatizaban con ningún partido.²⁹

CUADRO 12. EVALUACIÓN PARTIDISTA (%)

En su opinión: ¿Cuál de los partidos políticos podría ser más capaz para...?	PRD	PRI	PAN	otros	no sabe	no decidido
Mejorar seguridad	9	48	22	1	18	2
Combatir corrupción	12	38	24	1	23	2
Mejorar educación	9	56	16	1	16	2
Combatir la pobreza	12	45	18	1	20	2
Combatir la contaminación	7	43	14	13	22	2
Mejorar la economía	10	51	18	1	18	2
Mejorar la situación económica personal	10	48	15	1	23	2
Mejorar el sistema electoral	11	45	19	1	22	2

Fuente: Este País, noviembre, 1994. *Resumen de una Encuesta de Preferencias Electorales.*

Otra encuesta llevada a cabo poco antes de las votaciones presidenciales de 1994 reveló que 44 por ciento de los entrevistados estaba convencido de que el PRI

aún era el partido político más adecuado para resolver los problemas del país, seguido del PAN con 16 por ciento y el PRD con un 8 por ciento. Resulta interesante advertir que pese al desgaste de la política de unidad nacional y el mito de la invencibilidad del PRI -55 por ciento de los encuestados sostuvo que los partidos de oposición tenían posibilidades de obtener más votos en la contienda presidencial-, 54 por ciento seguía sosteniendo que prefería una victoria del PRI para consolidar los avances logrados, comparado con un 36 por ciento que esperaba un triunfo de la oposición a fin de lograr un cambio en el país.³⁰

Con un nivel de participación del 77 por ciento en las elecciones de 1994, los partidos de oposición no pudieron adueñarse totalmente de los espacios políticos dejados por el PRI en 1988, pese al incremento en sus niveles de votación. Si bien la intensidad de la lucha política cotidiana provocó una considerable volatilidad de la arena electoral ello no se tradujo en la construcción de lealtades partidarias sólidas y establecidas, alrededor de un 50 por ciento de la población no simpatizaba con ninguno de los partidos políticos. Por consiguiente, la erosión de la cultura de las mayorías absolutas dejó dos secuelas que marcarían el rumbo del proceso de cambio político experimentado por el país: una baja identificación partidista y un incremento del voto independiente.

²⁹ Jorge Domínguez y James McCann, "Shaping Mexico's Electoral Arena: The Construction of Partisan Cleavages in the 1988 and 1991 National Elections." *American Political Science Review*, vol. 89, no. 1, marzo, 1995. pags. 34-48.

³⁰ Este País, *Resumen de una Encuesta de Preferencias Electorales*, noviembre, 1994.

Desempeño Gubernamental y Preferencias Electorales

El sexenio del presidente Salinas estuvo marcado por dos circunstancias íntimamente relacionadas. En primer lugar, su ascenso al poder se produjo en medio de las elecciones más competidas y polémicas de la historia reciente del país, con un desenlace que no dejó satisfecho a ninguno de los actores involucrados. Quizá eso explica, en segundo lugar, su interés casi obsesivo por medir el apoyo a su gobierno. Con poco más del 50 por ciento de los votos emitidos a su favor de acuerdo a las cifras oficiales (50.36 %), Salinas de Gortari se convirtió en el primer presidente electo que no obtuvo la mayoría absoluta en la cámara baja. En su administración como ninguna otra, se advierte que en un período de cambio político acelerado y en ausencia de identificaciones partidistas estables, el derecho a gobernar se conquista gracias a la eficiencia en la gestión del Estado.

Las encuestas de opinión pronto reflejaron que el electorado estaba dispuesto a otorgar un voto de confianza al gobierno si demostraba capacidad para resolver los problemas que aquejaban a la población. En un contexto caracterizado por la volatilidad electoral, las acciones espectaculares emprendidas por el presidente Salinas rápidamente cosecharon resultados positivos. A menos de un año de iniciada su gestión, cerca del 50 por ciento de las personas encuestadas pensaba que el fin de sexenio sería mejor (47.5 %) comparado con un 16.9 por ciento que consideraba que sería peor. Sin embargo, lo que resulta en verdad sugerente son los datos

referentes a la evaluación del manejo de la economía, así como el diferencial de opinión entre este y los valores asignados a la figura presidencial y la oposición. Mientras un 53.4 por ciento evaluó positivamente a Cuauhtémoc Cárdenas, principal líder opositor del régimen, 65.5 por ciento de los ciudadanos encuestados aprobó el programa económico del gobierno y un impresionante 79.3 por ciento manifestó una opinión favorable del presidente Salinas. Aún más significativo es el hecho de que Salinas de Gortari fuera mencionado como el tercer presidente más popular de la historia (9.9 %) sólo detrás de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos.³¹

Esta tendencia se reafirmó gracias al éxito del programa de combate a la inflación, que logró abatir el incremento del índice de precios al consumidor de un 60 por ciento en 1988 a un 19 por ciento en 1990, cifra que alcanzó un 29 por ciento en 1991 y fue acompañada de un crecimiento positivo del PIB de alrededor del 3.6 por ciento. La mejoría del comportamiento de los indicadores económicos se reflejó en los resultados de las encuestas de opinión levantadas ese año. Antes de que se llevaran a cabo las elecciones para renovar la cámara de diputados en agosto de 1991 y pese a que un 52.2 por ciento de las personas entrevistadas consideraba que la tasa de inflación era aún muy alta, 52.8 por ciento estimó que su situación personal mejoraría al año siguiente. A mitad del sexenio, la opinión sobre el jefe del ejecutivo había mejorado sustancialmente comparada con la evaluación que el

³¹ Los Angeles Times, *Op. cit.*, octubre, 1989.

electorado hacía de la oposición. En una escala de calificación de 1 a 100, Salinas de Gortari alcanzó 72 puntos mientras Cuauhtémoc Cárdenas obtenía una nota de 49 puntos porcentuales.³²

En tales condiciones las expectativas de recuperación económica se volvieron más optimistas. Una encuesta levantada semanas antes de las votaciones intermedias reveló que 52.8 por ciento de las personas entrevistadas pensaba que su situación personal mejoraría dentro de un año, comparada con 19.7 por ciento que creía que su situación empeoraría. Más sorprendente aún, 73.4 por ciento afirmó sentirse contento con la vida que llevaba frente a un 13.3 por ciento que manifestó su descontento con la situación económica del país.³³ Esta recuperación se hizo extensiva a la iniciativa privada: la inversión extranjera acumulada hasta ese momento rondaba ya los 42 000 millones de dólares. Los resultados de las elecciones legislativas despertaron las más variadas reacciones. Algunos las denominaron las elecciones de la “restauración”, otros prefirieron llamarlas el “aplastamiento”. Las tendencias a la participación electoral se fortalecieron: 66.6 por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral emitió su voto. La reducción del abstencionismo fue significativa pues se pasó de 50.5 por ciento en 1988 a 36.1 por ciento en 1991. El PRI obtuvo el 61.4 por ciento de los votos en tanto que los dos principales partidos de oposición el PAN y el PRD, alcanzaron

³² Este País, *Ibid.*, julio 1991.

³³ Este País, *Ibid.*, julio, 1991.

niveles de votación muy por debajo de sus expectativas: 17.6 en el primer caso y 8.2 por ciento en el segundo. Estos resultados permitieron al PRI recobrar la mayoría en la cámara de diputados con un total de 319 diputados entre mayoría relativa y representación proporcional, que se tradujeron en un 64 por ciento del total de escaños.³⁴

Los resultados echaron por tierra la hipótesis de que una mayor participación electoral implicaba un aumento del caudal de votos para la oposición y exhibió la fuerza de arrastre del presidencialismo. En un entorno donde una proporción importante del electorado no profesa ningún tipo de lealtad partidista y el apoyo al régimen es difuso, el carisma del líder y el desempeño económico del gobierno devienen variables cruciales para atraer el voto independiente. Lo cierto era que el votante promedio no parecía responder a las esperanzas depositadas en él por partidos y analistas políticos por igual, lo que obligó a buscar explicaciones adicionales al argumento del fraude y el monopolio oficial de los organismos electorales.³⁵

No obstante, la recuperación del sufragio para el partido en el poder no se compara con los niveles de apoyo popular a la figura presidencial. Dos meses después de las elecciones, la distancia entre Salinas de Gortari y los líderes de la

³⁴ Silvia Gómez Tagle, *La Transición Inconclusa. Treinta Años de Elecciones en México*. El Colegio de México. México, 1997. pag. 72.

³⁵ Alberto Azis, "1991: Las Elecciones de la Restauración." Alberto Azis y Jacqueline Peshard (coords.), *Las Elecciones Federales de 1991*. Miguel Angel Porrúa. México, 1992. pags. 215-242.

oposición se acrecentó. Ahora, 39.6 por ciento de los entrevistados dijo tener una buena opinión de Cuauhtémoc Cárdenas, cifra que palidecía comparada con el abrumador 83 por ciento de respaldo al presidente Salinas. Aún cuando sólo un 15.9 por ciento reconoció que el país se había vuelto más democrático, 77.2 por ciento consideraba buena la forma en que el presidente estaba manejando la economía del país, y 51 por ciento afirmó que Pronasol era una de las razones por las que Salinas de Gortari estaba teniendo un buen desempeño en su cargo.³⁶

El cuadro 13 confirma que la principal inquietud de los ciudadanos giraba en torno al control del aumento de precios, tendencia que se incrementó 7.1 por ciento hasta alcanzar 34.8 por ciento en 1990. Llama la atención que en un momento de intenso cambio político el problema del orden aparezca en segundo lugar y con una importancia decreciente respecto de 1981, cuando constituía la principal preocupación del 40.3 por ciento de la población encuestada. Por otro lado, los objetivos relacionados con una mayor democratización como el grado de participación en las decisiones del gobierno y la protección a la libertad de expresión, parecían interesar menos a las personas entrevistadas ya que ordenados jerárquicamente aparecen con los menores porcentajes en todos los grupos analizados, con la única excepción de las personas identificadas con la izquierda, que demandaban una mayor participación en las decisiones del gobierno (36.8 %).

³⁶ Los Angeles Times, *Ibid.*, octubre, 1991.

Cuadro 13. OBJETIVOS DEL PAIS (%)

	Año de la Encuesta							
	1981				1990			
	mantener el orden	mayor participación en decisiones del gobierno	control de la inflación	proteger la libertad de expresión	mantener el orden	mayor participación en decisiones del gobierno	control de la inflación	proteger la libertad de expresión
<i>Nacional</i>	40.3	24.9	27.7	7.2	28.4	23.0	34.8	13.8
<i>Edad</i>								
16-29	38.6	25.8	28.2	7.5	28.7	26.3	31.0	14.0
30-49	41.1	24.4	27.4	7.1	28.3	20.8	36.4	14.4
50+	46.2	21.9	26.0	5.9	27.7	19.4	40.9	12.0
<i>Educación</i>								
básica	43.8	17.9	31.3	7.0	29.7	21.5	36.6	12.1
media	40.2	29.0	24.5	6.3	23.7	19.1	39.1	18.1
superior	36.1	31.0	25.0	7.9	27.7	30.0	26.5	15.8
<i>Afinidad Política</i>								
izquierda	38.9	26.8	26.8	7.4	17.4	36.8	31.8	14.0
centro	35.9	28.1	29.6	6.5	27.0	22.7	34.1	16.2
derecha	42.3	23.7	26.8	7.2	36.5	20.6	30.3	12.6
<i>Región</i>								
norte	43.8	21.3	27.6	7.3	24.6	22.8	38.7	13.9
centro	46.7	27.6	21.6	4.1	28.0	24.7	33.9	13.4
sur	35.8	18.9	36.2	9.1	33.1	18.4	34.0	14.5
D.F.	26.5	34.4	28.9	10.2	29.5	26.2	31.0	13.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

La trascendencia de la figura presidencial en relación con otras instancias del poder político es un rasgo profundamente enraizado en la cultura política nacional que no parece haber experimentado cambios importantes en el sexenio del presidente Salinas.³⁷ Si los resultados de las encuestas mostraban que la población tenía una valoración negativa del sistema político, no sucedía lo mismo con el jefe del ejecutivo. Durante el segundo trimestre de 1992 la opinión pública sobre los

³⁷ Lorenzo Meyer, "El Presidencialismo: Del Populismo al Neoliberalismo." *Revista Mexicana de Sociología*, no. 2, abril-junio de 1993. pags. 71-81.

líderes políticos de oposición mejoró, pero la distancia con el presidente no sólo no se redujo sino que aumentó.

Un sondeo efectuado en abril de 1992 reveló que 47.4 por ciento de las personas entrevistadas tenía una buena opinión de Cuauhtémoc Cárdenas, 24.1 por ciento opinó positivamente del dirigente del PAN Luis H. Alvarez, y 23.2 por ciento manifestó una opinión favorable de Porfirio Muñoz Ledo líder del PRD. En contrapartida, un aplastante 92.9 por ciento de la población encuestada declaró tener una opinión favorable del presidente Salinas.³⁸ Al año siguiente, esta tendencia se mantuvo aunque se advertían ya algunos signos de deterioro.

Hacia fines de 1993 la percepción del desempeño económico del gobierno había empezado a cambiar. Ahora sólo 30.1 por ciento de los entrevistados consideraba que la situación económica había mejorado en los últimos cinco años, comparada con un 38.7 por ciento que afirmaba que las cosas habían empeorado y 28.8 por ciento que consideró que las cosas seguían igual. Las repercusiones políticas fueron inmediatas. Mientras las opiniones favorables a Cárdenas disminuían hasta ubicarse en 32.7 por ciento, la popularidad del presidente declinó alrededor de 10 puntos porcentuales para quedar en un nivel todavía muy alto de 82.1 por ciento.³⁹

³⁸ Este País, *Op. cit.*, abril, 1992.

³⁹ Encuesta Nacional de Opinión Pública, Bendixen, octubre, 1993.

El cambio vertiginoso en las condiciones políticas y económicas de los últimos meses de gobierno de Salinas de Gortari estuvo marcado por la conclusión de las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio con los E.U y Canadá (noviembre de 1993), la aparición en la esfera pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, enero de 1994) y el asesinato de Luis Donaldo Colosio candidato del PRI a la presidencia de la república en la ciudad de Tijuana (marzo de 1994). Los resultados de las elecciones presidenciales de 1994 corroboraron el intenso nivel de la lucha política cotidiana. Las tasas de participación crecieron aún más: 77.7 por ciento del electorado acudió a las urnas, lo que significó un incremento de alrededor del 80 por ciento respecto de los comicios de 1988.⁴⁰ Ernesto Zedillo, candidato del PRI, alcanzó la victoria con 50.1 por ciento del total de los votos emitidos, el PAN se ubicó en el segundo lugar con 26.6 por ciento y el PRD quedó en la tercera posición con 17 por ciento. El equilibrio de fuerzas en la cámara baja permaneció bajo el control del partido en el gobierno: el PRI obtuvo el 60.2 por ciento tanto de las diputaciones de mayoría relativa como de representación proporcional, seguido del PAN con 23.8 y el PRD con 14 por ciento.

Estas cifras constituían una clara señal de que la época de las mayorías absolutas había llegado a su fin. La baja identificación partidista y la alta volatilidad

⁴⁰ José Antonio Crespo, *Urnas de Pandora. Partidos Políticos y Elecciones en el Gobierno de Salinas*. Espasa Calpe. México, 1995. pag. 244.

del electorado⁴¹ culminaron el proceso de metamorfosis de la esfera pública que había arrancado a principios de los años ochenta con la irrupción del disenso. Durante las elecciones de 1994 las encuestas se consolidaron como un nuevo actor político, ya que a lo largo de las campañas electorales se dieron a conocer los resultados de más de 100 sondeos de opinión pública relacionados con las elecciones. En este contexto, aumentó la importancia del papel de los medios de comunicación así como la organización y desarrollo de las campañas.⁴² Todo ello contribuiría a modificar muchos de los parámetros establecidos de la política cotidiana, presionando sobre las formas sancionadas de representación política.

Cambio Político y Estabilidad

Las tensiones provenientes de la micro-cultura política donde el cambio es observable de manera directa e inmediata, pueden subir hasta el orden moral o disiparse sin que las reglas del juego se vean afectadas. Dichas reglas del juego, constitutivas del nivel intermedio de la cultura política, proporcionan los parámetros para la acción de los actores y en ese sentido son orgánicas, aunque al mismo tiempo son hegemónicas ya que tienen que ser ajustadas en función del juego de influencias de las fuerzas políticas dominantes. Por tanto, la lucha política cotidiana

⁴¹ Guadalupe Pacheco, "1994: Hacia un Realineamiento Electoral." Germán Pérez Fernández del Castillo, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez Gutiérrez (coords.), *La Voz de los Votos: Un Análisis Crítico de las Elecciones de 1994*. Miguel Ángel Porrúa. México, 1995. pag. 209.

⁴² Francisco Báez Rodríguez, "Encuestas y Conteos en las Elecciones de 1994." Jorge Alcocer (coord.), *Elecciones, Diálogo y Reforma*, vol. II. México, 1994. Nuevo Horizonte Editores. pags. 101-123.

tiene un efecto importante sobre la forma y evolución de las reglas del juego, los cambios en la micro-cultura política pueden regularse ajustando las reglas del juego a fin de evitar problemas de gobernabilidad al sistema en su conjunto, como el peligro de inestabilidad y descontento social. La historia del México contemporáneo es una reiteración incesante de esta dinámica donde el Estado no es sólo el instrumento para dirigir el cambio político sino el medio de control del cambio social a gran escala.⁴³

Legitimidad, Control Político y Reglas del Juego

A principios de los ochenta las tensiones provenientes del incremento de las protestas y la fuerza adquirida por los grupos movilizados, obligó a ensayar una política de apertura que reactivó una vez más la tradición reformista del Estado. Ante la disminución de la credibilidad pública, el gobierno de Miguel De la Madrid decidió ensayar una estrategia de liberalización que se concretó inicialmente en un programa de cambio estructural en la economía y la administración pública. Otro objetivo importante era ampliar las dimensiones del espacio político de manera controlada, aumentando el número de actores y haciendo más variado el repertorio de temas sujetos a discusión pública. La tarea no era fácil. Se trataba de conseguir dos objetivos al mismo tiempo: ganar apoyo para políticas de ajuste económico sumamente impopulares que implicaban un estricto control de la demanda, y

⁴³ Lawrence Whitehead, "Por qué México es Casi Ingobernable." *Rev. Mex. de Sociología*, enero-marzo, 1980. pags. 203-234.

contener el descontento desatado por la crisis económica. Para alcanzarlos había que fortalecer tanto al PRI como al presidente, evitando que las medidas adoptadas para controlar las demandas de la oposición politizaran las elecciones y contribuyeran a polarizar a la sociedad alejando a clases medias y sectores populares del partido.

Miguel De la Madrid arrancó su campaña de recuperación de la legitimidad de la figura presidencial con una cruzada anticorrupción -la renovación moral de la sociedad-, que fue seguida de una serie de reformas que ampliaron la definición del servidor público y crearon una instancia de supervisión administrativa a nivel del gabinete -la *Contraloría General de la Federación*. Se introdujeron también cambios en el funcionamiento del PRI que apuntaban al establecimiento de una estructura distrital para el partido, se promovió también un programa de consulta popular que organizaba foros de discusión pública para debatir temas relevantes de la agenda política nacional. Por último, se dio inicio a una estrategia de liberalización política que incluía el reconocimiento de algunos triunfos de la oposición a nivel local.⁴⁴ Para frenar el auge de los movimientos de protesta en la capital de la república, su gobierno se comprometió a promover una iniciativa política que establecería mecanismos de elección directa para la conformación de una asamblea de representantes.

⁴⁴ Wayne A. Cornelius, "Political Liberalization in an Authoritarian Regime: Mexico, 1976-1985." Judit Gentleman (ed.), *Mexican Politics in Transition*. Westview Press. Boulder and London, 1987. pags. 22-23.

Sin embargo, los resultados de las elecciones de 1983 modificaron drásticamente la dirección del proceso. El avance del PAN en ciudades como Chihuahua, San Luis Potosí, Hermosillo y Durango lo puso, por primera vez en su historia, frente a la posibilidad real de ganar la gubernatura de un Estado. Esta situación forzó al presidente De la Madrid a revertir el proceso de apertura política durante los siguientes tres años. Los efectos de esta decisión no fueron menores. La popularidad del gobierno y particularmente la del presidente cayeron a niveles pocas veces vistos. El regreso de la tradición trajo consigo no sólo el fraude o el voto corporativo sino la protesta y el conflicto postelectoral.

A lo largo y ancho de la república lo mismo en Juchitán que en Monclova, Puebla, Piedras Negras, Monterrey, Guanajuato, Alcozauca y muchas ciudades más se consiguió precisamente lo que se quería evitar: politizar las elecciones, atraer la atención nacional e internacional y aparecer ante la opinión pública como un gobierno intransigente. Además, esto propició el desarrollo de formas de acción política más radicales como medio de presión de los partidos opositores. En un contexto de ascenso de la vida pública, el PAN emprendió campañas de desobediencia civil y movilizaciones de protesta contra el fraude electoral que lo llevaron en 1985, a presentar los casos de Chihuahua y Durango ante la *Comisión de Derechos Humanos* de la Organización de Estados Americanos.

La izquierda por su parte, no permaneció inactiva y pronto ajustó su táctica creando coaliciones entre partidos como el PMS (*Partido Mexicano Socialista*) y el PSUM (*Partido Socialista Unificado de México*) en Oaxaca, Sinaloa y Guerrero con el propósito de coordinar más estrechamente sus acciones en el ámbito electoral. El nivel de politización de las elecciones y la intensidad de las protestas, ayudado en buena medida por la actuación del gobierno que polarizó aún más la situación, ayudó a crear vínculos entre organizaciones civiles de izquierda y derecha, que se unieron en defensa del voto como el *Foro por el Sufragio Efectivo*. La exigencia de apertura política se convirtió paulatinamente en el reclamo de una nueva reforma electoral. El desarrollo de este proceso con el telón de fondo de la irrupción del disenso en la esfera pública llevó a "...la cristalización de un fenómeno más profundo: la implantación de la opinión pública en el equilibrio político."⁴⁵

A medida que la situación se complicaba amenazando con desencadenar una crisis política aún mayor, el 12 de febrero de 1987, luego de una serie de audiencias públicas, el presidente De la Madrid propuso una iniciativa de reforma a la legislación electoral vigente que retomaba controlada. Las características de la propuesta aprobada apuntaban en esa dirección. Se incrementó de 100 a 200 el número de diputados de representación proporcional para los partidos de oposición en la Cámara Baja y se les aumentó la partida correspondiente del subsidio público,

⁴⁵ Soledad Loaeza, "Liberalización Política e Incertidumbre en México." María Lorena Cook, Kevin Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas, *Las Dimensiones Políticas de la Reestructuración Económica*. Cal y

también se reglamentó su acceso a los medios de comunicación, se les permitió una mayor participación en la supervisión de las elecciones y se creó el *Tribunal de lo Contencioso Electoral*, organismo de carácter administrativo dotado de autonomía para resolver los recursos de apelación y queja de los partidos políticos. Anticipando una competencia electoral más intensa se aprobó también una cláusula de gobernabilidad que garantizaba el control del Congreso si ninguno de los partidos alcanzaba la mayoría absoluta, -51 por ciento de la votación total. En ese caso, se asignarían diputados de representación proporcional al partido que hubiese obtenido la mayor votación a nivel nacional.⁴⁶

Aún cuando el texto de la reforma reconocía la creciente importancia de las elecciones para el régimen, no alcanzó a cumplir los objetivos deseados. La popularidad del presidente De la Madrid se mantuvo en niveles inusualmente bajos, no se logró legitimar las reglas de la competencia política y continuaron las denuncias de fraude, provocando que las elecciones siguieran siendo un tema fuertemente politizado. No obstante, la reforma hizo posible que el Estado mantuviera el control del cambio político sin que se produjeran déficit considerables de gobernabilidad en el sistema. Dadas las características de la cultura política el régimen logró aprovechar algunos de los efectos del proceso de liberalización política: la persistencia del conflicto en torno a los procesos electorales permitió que

Arena. México, 1996. pag. 181.

el PRI ajustara su estrategia, capitalizando el fortalecimiento de las tendencias al abstencionismo y la apatía así como la identidad entre oposición e inestabilidad social.⁴⁷

La administración de Carlos Salinas de Gortari tuvo que enfrentar un escenario más complejo que su predecesor. Los resultados de los comicios presidenciales no habían hecho sino politizar al extremo las elecciones y acentuar la pérdida de legitimidad de la figura presidencial. Para revertir esta situación emprendió una vasta serie de reformas constitucionales que iban desde la reprivatización de la banca y la modificación de las relaciones entre Estado e Iglesia, hasta cambios a las formas históricas de propiedad de la tierra en el campo.⁴⁸ En el terreno político los ajustes no fueron menos intensos, particularmente aquellos relativos al conjunto de normas que regulaban los mecanismos de acceso al poder, ya que se había producido un desajuste entre la lógica del modelo de partido “toma todo” y los nuevos niveles de competencia partidista.⁴⁹

Por consiguiente, uno de los retos más importante para el nuevo gobierno era restaurar la legitimidad de las reglas del juego electoral. Con ese fin reformó hasta en tres ocasiones la legislación electoral durante su mandato: 1990, 1993 y 1994. El 14 de julio de 1990 fue aprobado por cinco de los seis grupos

⁴⁶ Eduardo Castellanos Hernández, *Formas de Gobierno y Sistema Electorales en México. 1940-1994*. Centro de Investigación Jorge Tamayo. México, 1996. pags. 164-172.

⁴⁷ Stephen D. Morris, *Political Reformism in Mexico*. Lynne Rienner. Boulder and London. 1995. pag. 69.

parlamentarios que integraban la Cámara de Diputados, el *Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales* (COFIPE). Los efectos reguladores de la reestructuración de las reglas del juego sobre la presión procedente de la microcultura política se hace evidente en el contenido de la legislación electoral aprobada.

Para prevenir la formación de frentes antisistema se eliminó la posibilidad de registrar candidatos comunes y se hicieron más estrictos los requisitos exigidos para integrar coaliciones electorales. La transformación de la *Comisión Federal Electoral* en *Instituto Federal Electoral*, no afectó el control del gobierno sobre la organización y vigilancia del proceso en su conjunto. No obstante, como respuesta a la demanda de los partidos de oposición, se procedió a elaborar un nuevo padrón que puso en circulación la credencial de elector con fotografía, se creó el *Servicio Profesional Electoral* -un intento por profesionalizar los organismos electorales-, se fortalecieron las funciones de vigilancia de los partidos de oposición y se penalizaron los delitos electorales. La cláusula de gobernabilidad se mantuvo en un umbral del 35 por ciento, hecho que favorecía al PRI dado el formato del sistema de partidos.⁴⁸

La segunda reforma al COFIPE publicada el 24 de septiembre de 1993 reforzó las funciones de supervisión de los partidos de oposición, llevó el principio de

⁴⁸ Francisco Gil Villegas, "Cambio Constitucional en México Durante el Sexenio de Salinas de Gortari." *Foro Internacional*, enero-junio, 1996. El Colegio de México. pags. 158-187.

⁴⁹ Juan Molinar Horcasitas, *El Tiempo de la Legitimidad*. Cal y Arena. México, 1993. pag. 229.

representación proporcional al Senado de República, estableció límites a las contribuciones financieras a las campañas políticas, consolidó la presencia de los Consejeros Ciudadanos y eliminó la cláusula de gobernabilidad, aunque conservó la participación del partido mayoritario en el reparto de escaños en la Cámara Baja hasta en un 63 por ciento del total. Las nuevas condiciones políticas creadas por el levantamiento armado del EZLN y el asesinato del candidato presidencial del PRI, abrieron el camino de una nueva reforma a la legislación electoral aprobada en abril de 1994 durante un período extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados. Entre los elementos novedosos de la propuesta destacan el fortalecimiento del papel de los Consejeros Ciudadanos en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, la ampliación de la tipificación de los delitos electorales, el nombramiento de un fiscal especial, el establecimiento de condiciones más equitativas de acceso a los medios de comunicación, la limitación de los gastos de campaña de los partidos y el reconocimiento del papel de los observadores electorales nacionales.⁵¹

Tales cambios hicieron posible que se consiguieran algunos de los objetivos que la administración anterior no pudo alcanzar como la recuperación de la popularidad de la figura presidencial y los niveles de apoyo electoral para el PRI. Así, el gobierno obtuvo adelantos significativos en la batalla por relegitimar las reglas del juego y mantener el liderazgo institucional en la conducción del cambio

⁵⁰ Jean-François Proud'homme, "La Negociación de las Reglas del Juego: Tres Reformas Electorales (1988-1994)." *Política y Gobierno*, vol. III, no.1. CIDE, 1996. pags. 93-126.

político. Pese a ello, Salinas de Gortari terminó su sexenio igual que su predecesor, en medio de una crisis cuya profundidad le llevó a recurrir a la estrategia electoral de igualar oposición, inestabilidad y violencia. Esto no resulta extraño si se toma en cuenta que en el repertorio de valores de la cultura política nacional, el PRI es un referente obligado para definir positiva o negativamente los atributos del Estado. Lo que obliga a precisar que: "...en el contexto de las transformaciones sociopolíticas operadas en las dos últimas décadas, resulta más conveniente hablar de una cultura política de *intersección*, o *imbricación* entre valores modernos y tradicionales, que de una cultura política de transición."⁵²

Sistema de Partidos y Gobernabilidad

La absorción de los cambios de la micro-cultura política a través del ajuste de las reglas del juego electoral no estuvo exenta de conflictos. Por el contrario, si en el pasado reciente el estado de derecho había sido regido por el principio de que la Constitución y sus ordenamientos legales específicos reflejaban objetivos de largo plazo antes que la realidad social existente, en las nuevas condiciones la legislación electoral se convirtió en un campo de batalla acremente disputado. Pocos períodos históricos como el sexenio del presidente Salinas evidenciaron que las reglas del juego político en México son hegemónicas y sobre todo extraordinariamente

⁵¹ Stephen D. Morris, *Op. cit.* pags. 88-111.

⁵² Norma Ubaldi y Rosalía Winocour, "Cultura Política y Elecciones en México: Entre Miedos y Paradojas." Rosalía Winocour (comp.), *Culturas Políticas a Fin de Siglo*. Juan Pablos. México, 1997. pag. 215-216.

flexibles.⁵³ Constituían un reflejo tanto de la creciente competencia por el voto como de la fragmentación del sistema de partidos y la inadecuación de las formas tradicionales de representación política. Se libró una dura batalla que trataba de armonizar dos principios fundamentales de la historia política de México: democracia y gobernabilidad.

El sistema de partidos que emergió de las elecciones de 1988 introdujo un considerable nivel de incertidumbre en el espacio de interacción política. Se había roto una de las reglas del juego electoral no escritas, que aseguraba la victoria de los candidatos del PRI a los puestos de elección popular. La pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados tuvo dos consecuencias inmediatas: 1º. Convirtió a ésta última en un foro de acalorados debates y 2º. Alentó el acercamiento entre el gobierno y el PAN, con objeto de garantizar los votos necesarios para emprender las modificaciones constitucionales que requería su proyecto de reforma.

En el caso del PRD, la estrategia a seguir fue la de no aceptar los resultados oficiales, declarar a Salinas de Gortari usurpador e insistir en la ilegitimidad del nuevo presidente. Las autoridades respondieron con un acoso político sistemático lo que ocasionó que los niveles de violencia se elevaran considerablemente. La creencia casi mítica en que el apoyo electoral traería consigo tarde o temprano el colapso del sistema, bloqueó todo intento de diálogo y no permitió que el PRD se

⁵³ Howard Wiarda, "Constitutionalism and Political Culture in Mexico: How Deep the Foundations?" Daniel P. Franklin y Michael J. Baun (eds.), *Political Culture and Constitutionalism. A Comparative Approach*.

convirtiera en un interlocutor político para el gobierno. Como afirma Alonso Lujambio: “En vez de hacer la obra negra del partido, se construyó sin base institucional y en el caos organizacional, un ‘movimiento’ para sumar fuerzas y derrotar, cosa inevitable, destino patrio, al régimen de partido de Estado.”⁵⁴

En realidad, las variables eran más numerosas y complejas de lo que la oposición de izquierda creía. Históricamente, la cultura política ha tenido en México un papel fundamental en la demarcación de los límites y ritmos del proceso de cambio institucional. La estrategia de intransigencia democrática y antigobiernismo militante del PRD no sincronizaba con las expectativas y el ritmo de cambio de la tradición política nacional.

El cuadro 14 revela que en 1981 casi un 80 por ciento del total de personas entrevistadas consideraba que la mejor forma de cambiar la sociedad era por medio de reformas (77.2 %), en tanto que las actitudes extremas constituían valores relativamente pequeños entre quienes favorecían un cambio radical (12 %) y los que preferían el mantenimiento del *statu quo* (10.8 %). No deja de ser significativo que pese a la disminución del número de reformistas (6.5 %) y al incremento en la proporción de simpatizantes de opciones más radicales, ligadas a la revolución y al conservadurismo, la proporción de personas partidarias de la reforma gradual aún era muy alta (70.7 %).

Sharpe. Armonk, 1995. pags. 119-137.

Los datos por edad indican que en 1981 los jóvenes eran tanto los más radicales (12.9 %) como los más conservadores (11 %). Sin embargo, para 1990 fueron las personas de edad más avanzada quienes adoptaron dicha actitud. La distribución por nivel educativo de las actitudes frente al cambio político no siguió un patrón constante: en 1981 las personas con mayor educación eran las más radicales (12.7 %) al tiempo que las menos educadas optaban por una postura más conservadora (13.6 %). Diez años después los más radicales sólo tenían educación primaria (19.9 %) y aquellos con instrucción media se habían vuelto los más conservadores (15.5 %). Como cabría esperar, izquierda y derecha fueron los grupos más radicales y conservadores en ambas encuestas respectivamente. Es interesante observar que el centro, la región más radical en 1981 (15.2 %), cedería su lugar al norte en 1990 (21.4 %).

⁵⁴ Alonso Lujambio, "La Evolución del Sistema de Partidos: 1988-1994." Jorge Alcocer (coord.), *Elecciones, Diálogo y Reforma*. México, 1994. Nuevo Horizonte Editores. México, 1995. pag. 45.

Cuadro 14. CAMBIO POLITICO Y CULTURA POLITICA (%)

	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	la forma en que está organizada nuestra sociedad debe cambiarse radicalmente	nuestra sociedad debe mejorarse gradualmente	nuestra sociedad debe ser defendida contra las fuerzas subversivas	la forma en que está organizada nuestra sociedad debe cambiarse radicalmente	nuestra sociedad debe mejorarse gradualmente	nuestra sociedad debe ser defendida contra las fuerzas subversivas
<i>Nacional</i>	12.0	77.2	10.8	16.5	70.7	12.8
<i>Edad</i>						
16-29	12.9	76.1	11.0	15.2	74.3	10.5
30-49	11.5	77.8	10.7	17.4	69.1	13.5
50+	9.7	81.8	8.4	18.1	64.7	17.2
<i>Educación</i>						
básica	12.3	74.1	13.6	19.9	67.7	12.4
media	9.8	81.4	8.8	12.5	72.0	15.5
superior	12.7	78.7	8.5	10.2	78.0	11.9
<i>Afinidad Política</i>						
izquierda	26.0	62.3	11.6	31.3	61.2	7.5
centro	10.8	78.3	10.8	13.8	72.2	14.0
derecha	10.7	78.5	10.9	9.1	76.0	14.9
<i>Región</i>						
norte	10.4	79.5	10.1	21.4	65.4	13.2
centro	15.2	76.7	8.1	16.8	66.5	16.8
sur	9.7	71.6	18.7	12.4	73.8	13.8
D.F.	12.4	79.3	8.3	13.6	76.7	9.7

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Ann Arbor, Michigan: Institute for Social Research, 1994.

El desajuste entre la política del PRD y la tradición reformista de la cultura política nacional se puso de manifiesto en los comicios de 1991 donde el partido experimentó un marcado deterioro electoral. Para las elecciones presidenciales de 1994 tanto el PRI como el PRD tomaron como una de sus divisas favoritas el problema de la inestabilidad. A la táctica que identificaba oposición con violencia se

respondió con la ecuación fraude electoral = ingobernabilidad.⁵⁵ En un país mayoritariamente reformista, esta táctica alejó a vastas porciones del electorado de un partido que parecía comprometido con actitudes tendientes al radicalismo. El PAN se ajustó mejor a la situación, y ayudado por la política negociadora del presidente optó por el camino del gradualismo. Esta actitud terminó lo convirtió en el principal interlocutor político del gobierno de Salinas de Gortari, pese a los conflictos internos que acarreó y que llevarían a una escisión del partido en octubre de 1991.

El PRI por su parte, un partido creado con el propósito expreso de conservar el poder en lugar de competir por él, enfrentó serias dificultades para conciliar ambos objetivos. La consecución del primero era un supuesto indispensable del mantenimiento de una gobernabilidad basada en la dependencia del partido hacia el gobierno, mientras que la obtención del segundo posibilitaba mayores grados de legitimidad política, al costo de alterar las condiciones de gobernabilidad del sistema.⁵⁶ La inserción del PRI en un sistema de partidos más competitivo lo puso ante el predicamento de ofrecer al electorado un programa atractivo que representara los intereses de sus electores. Los esfuerzos en esta dirección no fueron alentadores.

⁵⁵ Germán Pérez Fernández del Castillo, *La Ingovernabilidad: ¿Una Hipótesis que se Autoconfirma?* Miguel Ángel Porrúa, Textos para el Cambio. México, 1994. pags. 6-7.

⁵⁶ Leopoldo Gómez y John Bailey, "La Transición Política y los Dilemas del PRI." *Foro Internacional*, julio-septiembre, 1990. pags. 57-87.

Durante la XIV Asamblea Nacional del PRI celebrada los primeros días de septiembre de 1990, se aprobaron reformas importantes como la reducción de la representación sectorial dentro del partido a un 20 por ciento del total de los delegados, el establecimiento de la afiliación libre e individual y la democratización de la selección de candidatos a través de un proceso de consultas a la base. No obstante, los intentos por llevar a la práctica las reformas desencadenaron una serie de conflictos entre los líderes locales y nacionales respecto al proceso de selección de candidatos en Tamaulipas (octubre 1989), Coahuila (julio 1990), Hidalgo (agosto 1990), Yucatán (octubre 1990) y Morelos (enero 1991), a tal punto que las reformas fueron bloqueadas en buena medida por la inestabilidad que ellas mismas habían provocado. Al final se eligió, como en el pasado, la gobernabilidad en lugar de la democracia y la XVI Asamblea revirtió muchas de las reformas efectuadas inicialmente.

“Cualquier sistema político que prevalezca largo tiempo debe complementarse con y apoyarse en un orden moral subyacente.”

Ronald Inglehart

VII

ESPERANDO A GODOT

Del Autoritarismo a la Tolerancia (y viceversa)

La tensión desencadenada por el proceso de cambio político sobre las formas culturales de relación entre gobernantes y gobernados, no se limitó al nivel de la transformación de los patrones institucionales de organización de la vida pública o la renegociación de las reglas de acceso al poder. Afectó también el consenso establecido en torno a la aceptación del conjunto de valores considerado hasta ese momento políticamente admisible. Aún cuando la tradición de gradualismo reformista de la cultura política nacional permitió que el ajuste de las reglas del juego electoral suavizara los efectos disruptivos provenientes de la micro-cultura política, la intensidad del proceso provocó que piezas clave del repertorio de valores del orden moral nacional-revolucionario se vieran sometidas a una fuerte tensión que empujaba en la dirección del cambio. La conversión de la democracia en el valor capital del nuevo imaginario político repercutió allende la estructuración

de la agenda pública del debate nacional, dejando sentir sus efectos en el plano de las actitudes, valores y comportamientos que habían normado las formas de relación básicas entre sociedad y Estado.

Así, la década de los ochenta fue testigo del florecimiento de una acendrada preocupación por estudiar la hipótesis de la discontinuidad política ante el entrelazamiento de los efectos del agotamiento del modelo de desarrollo económico, la modernización de la estructura social y el envejecimiento funcional de las formas de legitimación del orden público. Esta reconfiguración histórica alteró las formas convenidas de interacción política así como el orden de las regularidades cotidianas, hasta abarcar no sólo el ámbito del poder sino también el de la familia y el trabajo. En un país donde el proyecto modernizador se había cimentado en la transferencia inexorable de poder de la sociedad al Estado, manifiesto en el incremento progresivo de las atribuciones ejercidas por el gobierno, la semántica democrática suscribió desde el principio una retórica antiautoritaria que depositó las esperanzas de renovación política en la difusión del disenso, la movilización electoral y el pluripartidismo.

Por consiguiente, el interés de la mayoría de los trabajos sobre la transición se concentró en la evolución de las condiciones institucionales de ruptura, antes que en el análisis de la continuidad de valores o actitudes políticas. Ello se explica quizá porque es particularmente difícil entender un régimen autoritario *sui generis* como

el mexicano, respetuoso de las formas constitucionales, donde los derechos civiles y políticos nunca estuvieron formalmente proscritos. O tal vez porque la lógica que subyace al modelo del pacto permite simplificar el análisis. Luego de la caída del régimen autoritario las elites se ponen de acuerdo, diseñan un conjunto de reglas del juego democráticas que son aceptadas por los actores políticos más importantes, una vez que todos se conducen conforme al nuevo ordenamiento jurídico, la democracia, afirman, se ha institucionalizado. “La lógica es impecable y el final reconfortante.”¹

Sin embargo, el sistema político mexicano se ha destacado no sólo por su notable longevidad sino también por eludir las tipologías igual en sociología que en ciencia política. No hay momento de la historia nacional que no haya estado lleno de cambios significativos, cambios que han demostrado ser compatibles con el *modus operandi* y los principios básicos de la política mexicana. Como afirma Alan Knight: “...las costumbres políticas han tendido a permanecer más uniformes que las políticas nacionales.”²

El supuesto central de la transición era que a medida que se introdujeran sucesivas modificaciones a las reglas formales del proceso político, se corregirían gradualmente las prácticas autoritarias informales, sin correr el riesgo de

¹ Lawrence Whitehead, “Una Transición Difícil de Alcanzar.” *Política y Gobierno*, primer semestre de 1996. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). pags. 31-59.

² Alan Knight, “México Bronco, México Manso: Una Reflexión sobre la Cultura Cívica Mexicana.” *Op. cit.* pag. 9.

desestabilizar al sistema en su conjunto. El énfasis del modelo descansaba en la emergencia incremental de una cultura democrática que resultaría del cálculo racional, las interacciones estratégicas y un diseño institucional que confinaría el autoritarismo del sistema a la estructura del Estado. Dicha perspectiva ignoraba un hecho aparentemente reconocido por todos: que el desarrollo de una cultura democrática no es un subproducto del diseño institucional o el comportamiento electoral.

Crisis, Modernización y Autoridad

En 1970 Erich Fromm y Michael Maccoby encontraron que preocupación por la obediencia de los niños y respeto por la autoridad, constituían el sello distintivo de las formas de relacionamiento político y social de los habitantes de un pequeño pueblo del estado de Morelos. Cinco años después, Rafael Segovia demostró convincentemente que el proceso de socialización de los escolares mexicanos los hacía particularmente intolerantes de comunistas y disidentes. En un artículo publicado a mediados de la década de los ochenta, que resumía los resultados de una encuesta llevada a cabo en varias ciudades del norte del país, John Both y Mitchell Seligson detectaron que un alto porcentaje de entrevistados se manifestó a favor de extender la participación política de las minorías, pero en contra de permitir a los disidentes el derecho a ocupar un puesto en el gobierno. Adicionalmente, descubrieron que la clase obrera era sistemáticamente más

autoritaria que la clase media. Gracias a la utilización de una regresión estadística hallaron también que educación y género eran los únicos estimadores estadísticamente significativos de las preguntas concernientes al derecho a disentir, y la oposición a la supresión de las libertades democráticas. En síntesis, los datos recogidos sugerían que el autoritarismo de la cultura política no era incompatible con la transición a un sistema multipartidista más competitivo.³

La evidencia actual proporcionada por la *Encuesta Mundial de Valores* permite evaluar el efecto conjunto de crisis económica, modernización social y cambio político sobre la evolución de las tendencias autoritarias de la tradición política nacional. A contrapelo de algunos autores que asociaron de manera optimista deslegitimación del Estado y fin del autoritarismo, los datos de la encuesta advierten del peligro de uniformar el ritmo de cambio de los diferentes niveles de la cultura política.

Pese a los enconados cuestionamientos a la legitimidad del gobierno en un contexto de bancarrota moral del Estado, el cuadro 1 destaca la persistencia de un porcentaje significativo de personas entrevistadas, cuya respuesta ante el cambio político seguía siendo la preservación del respeto a la autoridad. En 1990 más de la mitad del total de la muestra valoraba positivamente esta actitud (65.4 %), una disminución de apenas 2 puntos porcentuales respecto de 1981. La distribución

³ John A. Both y Mitchel A. Seligson, "The Political Culture of Authoritarianism in Mexico: A Reexamination." *Latin American Research Review* vol XIX, no. 2, 1984.

social de este valor revela que las personas de mayor edad y con educación media se inclinaban más a defenderlo, en tanto que si atendemos su filiación política se observa un singular movimiento. A principios de los noventa los simpatizantes de izquierda dejaron de creer en la autoridad, ahora eran los individuos afines a la derecha quienes exteriorizaban un mayor compromiso con este valor. Por región se observa un desplazamiento de la importancia de este valor de sur a norte, acompañado de un movimiento de oposición al mismo que va del centro a la capital de la república.

Cuadro 1. CAMBIO POLITICO Y AUTORIDAD (%)

MAYOR RESPECTO A LA AUTORIDAD	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	bueno	malo	no me interesa	bueno	malo	no me interesa
<i>Nacional</i>	67.4	8.5	24.1	65.4	14.2	20.4
<i>Edad</i>						
16-29	66.4	8.5	25.1	59.0	17.8	23.2
30-49	67.7	9.2	23.2	70.1	10.1	19.8
50+	72.2	7.0	20.9	71.3	14.3	14.3
<i>Educación</i>						
básica	65.8	10.0	24.2	65.1	13.5	21.4
media	70.6	5.5	23.8	68.3	12.8	18.9
superior	67.8	8.2	24.0	64.4	17.4	18.3
<i>Afinidad Política</i>						
izquierda	73.4	6.5	20.1	49.4	21.9	28.7
centro	64.7	8.1	27.2	66.5	14.2	19.3
derecha	67.9	9.3	22.9	73.2	12.5	14.3
<i>Región</i>						
norte	73.8	5.1	21.1	68.1	11.1	20.8
centro	56.8	11.7	31.4	57.5	18.9	23.6
sur	74.8	8.2	17.0	67.0	14.2	18.9
D.F.	63.4	11.1	25.5	64.7	15.8	19.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

A mediados de la década pasada Enrique Alduncin recopiló abundante información empírica en el trabajo *Los Valores de los Mexicanos* que apuntaba en la misma dirección de los resultados expuestos líneas arriba. Alduncin encontró que casi el 80 por ciento de las personas encuestadas se manifestó a favor de la afirmación “el país requiere una mano firme y enérgica” (77 %), comparado con un 15 por ciento que no estuvo de acuerdo. Halló también que esta actitud se acentuaba con la educación y la riqueza. Síntoma de la progresiva fatiga estructural que enfrentaba la cultura de las mayorías absolutas, casi la mitad de las personas

entrevistadas expresó su inconformidad con “aceptar la decisión del líder si la gente no se pone de acuerdo” (47 %), en tanto que poco más de una tercera parte aceptó dicha aseveración (36 %).⁴ Asimismo, cuando se les preguntó su opinión sobre el alcance y posibilidades de extender la participación política, más del 50 por ciento aprobó la sugerencia de que “sólo los políticos deben hacer política” contra un 32 por ciento que discrepó con el cuestionamiento. El autoritarismo desde arriba no fue bien recibido ya que sólo un 37 por ciento consideró que “los nuevos programas de desarrollo debían llevarse a cabo aún si no eran aceptados”, por oposición a un 44 por ciento que se opuso a esa forma de manejar los asuntos del gobierno.⁵

La persistencia de rasgos sociales autoritarios cuestiona las dicotomías excluyentes típicas de la teoría de la modernización y obliga a repensar las identidades Estado = autoritarismo y sociedad civil = democracia desde una perspectiva más amplia, que no ignore la tarea de explorar la pluralidad de dimensiones de la vida política sujetas a la tensión entre continuidad y cambio. Esta situación se expresa no sólo en la forma de ver y sentir las relaciones con la jerarquía política sino también en el centro de trabajo, espacio donde emergen patrones culturales diferenciados de aceptación o rechazo de la autoridad.

El cuadro 2 muestra que a principios de los ochenta más de la mitad de los encuestados juzgaba inconveniente aceptar órdenes de sus superiores si no se les

⁴ Enrique Alduncin Abitia, *Los Valores de los Mexicanos. T.II. México en Tiempos de Cambio*. Fomento Cultural Banamex. México, 1991. pag. 200.

convención primero (55.7 %). Al mismo tiempo, casi una tercera parte del total de la muestra pensaba que los trabajadores debían seguir las instrucciones de sus superiores aunque no estuviera de acuerdo con ellas (32.5 %). La información de la segunda encuesta da cuenta de la disminución en el número de los que pensaban que la autoridad debía operar a través del convencimiento, incrementándose en cambio el número de individuos que consideraba correcto acatar las órdenes superiores sin tomar en cuenta la opinión de sus subalternos (6.3 %). Los grupos de mayor edad, con poca escolaridad, identificados con la derecha y geográficamente ubicados en el norte del país resultaron ser los más propensos a respaldar actitudes tendientes al autoritarismo.

⁵ Enrique Alduncin Abitia, *Op. cit.* pag. 203.

Cuadro 2. TRABAJO Y AUTORIDAD (%)

DISPOSICION A SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LOS SUPERIORES	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	deben seguirlas aunque no estén de acuerdo	deben estar convencidos primero	depende	deben seguirlas aunque no estén de acuerdo	deben estar convencidos primero	depende
<i>Nacional</i>	32.5	55.7	11.7	38.8	37.7	23.5
<i>Edad</i>						
16-29	30.4	57.1	12.6	34.8	41.1	24.0
30-49	34.0	55.5	10.5	38.7	36.5	24.8
50+	39.5	48.8	11.7	49.8	31.2	19.0
<i>Educación</i>						
básica	32.7	54.5	12.8	41.3	37.2	21.6
media	32.3	57.6	10.1	38.5	39.4	22.0
superior	32.4	56.3	11.3	31.8	38.1	30.2
<i>Afinidad Política</i>						
izquierda	29.9	63.3	6.8	22.1	47.1	30.7
centro	31.8	56.4	11.9	39.8	37.1	23.1
derecha	33.6	54.4	12.0	43.8	37.6	18.5
<i>Región</i>						
norte	30.6	55.6	13.7	43.7	30.6	25.7
centro	36.4	50.6	13.0	34.6	38.9	26.5
sur	29.8	59.5	10.7	40.4	38.6	21.0
D.F.	33.0	60.6	6.4	33.7	45.0	21.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Si los datos sobre la evolución de las pautas de comportamiento hacia la autoridad evidenciaban la imbricación entre pasado y presente lo mismo sucedía en el ámbito familiar. Históricamente uno de los temas predilectos de la literatura, la historia y la antropología, la familia ha tenido una importancia decisiva en la formación de los valores de la sociedad mexicana. Las encuestas de valores de 1981 y 1990 permiten calibrar el grado de influencia de la primera instancia encargada de socializar al individuo. En una escala ponderada de cero a cien la familia es la

institución más valorada por las personas entrevistadas (94.1 % en 1990), seguida del trabajo con 87.8 y la religión con 65.8 por ciento. A lo largo de este período se estrechan los valores compartidos entre padres e hijos. En 1981 75.1 por ciento de los encuestados compartía la misma religión con sus padres, 71.5 normas morales, 56.8 actitudes sociales, 29.1 actitudes políticas y 18.7 por ciento actitudes sexuales. Para 1990 se produce un incremento en todos los rubros mencionados. Ese año, 87.2 por ciento de los encuestados compartía creencias religiosas con sus padres, 78.1 normas morales, 62.7 actitudes sociales, 34.3 opiniones políticas y 23.8 por ciento actitudes sexuales.

Aunque a primera vista el vigoroso cambio social experimentado por el país pareciera no haber influido en la reproducción de pautas de comportamiento autoritarias del microcosmos familiar, el cuadro 3 despliega un panorama caracterizado por la lenta transformación de la importancia de fomentar la obediencia en la educación de los niños. Al igual que en el cuadro anterior tenemos un incremento marginal del número de personas entrevistadas que favorecían actitudes de respeto a la autoridad establecida (1.2 %), acompañado de una disminución relativa de igual magnitud de aquellos que consideraban poco relevante estimular patrones de subordinación y sometimiento en los niños (1.2 %). La obediencia se valoraba más entre las personas mayores y menos entre los jóvenes, mientras que por nivel educativo había una clara relación inversa: a mayor

educación menos tendencias a considerar la obediencia un valor que debía fomentarse en los niños. Por otro lado, los individuos que simpatizaban con la izquierda se oponían sistemáticamente a favorecer actitudes de conformidad y aquiescencia, contrariamente a los que se identificaban con la derecha quienes adoptaron una postura de respeto a las jerarquías. Finalmente, la segunda encuesta resalta la existencia de una demarcación regional entre la capital de la república, empeñada en no seguir subsidiando la tradición, y un norte donde el ritmo de desarrollo económico tomaba la delantera a la modernización social.

Cuadro 3. FAMILIA Y AUTORIDAD (%)

VALORES QUE DEBEN ALENTARSE EN LOS NIÑOS EN EL HOGAR	Año de la Encuesta			
	1981		1990	
	es importante alentar la obediencia	no es tan importante alentar la obediencia	es importante alentar la obediencia	no es tan importante alentar la obediencia
<i>Nacional</i>	43.9	56.1	45.1	54.9
<i>Edad</i>				
16-29	45.1	54.9	44.7	55.3
30-49	40.0	60.0	45.6	54.4
50+	46.5	53.5	44.7	55.3
<i>Educación</i>				
básica	48.0	52.0	45.1	54.9
media	42.7	57.3	48.3	51.7
superior	39.6	60.4	42.5	57.5
<i>Afinidad Política</i>				
izquierda	34.4	65.6	28.5	71.5
centro	42.5	57.5	46.9	53.1
derecha	45.5	54.5	45.6	54.4
<i>Región</i>				
norte	48.8	51.2	48.2	51.8
centro	38.3	61.7	47.9	52.1
sur	51.3	48.7	46.4	53.6
D.F.	34.9	65.1	38.6	61.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version: Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Según lo visto hasta aquí el proceso de formación del Estado nacional en México dio vida a un sistema corporativo y presidencialista que conformó estilos de vida, modalidades de acceso a los recursos y patrones de lealtad verticales, que hizo de la familia patriarcal autoritaria la célula de la organización cultural de la

sociedad.⁶ Los efectos del proceso de cambio político sobre esta peculiaridad pueden observarse en el cuadro 4.

En 1981 menos del 40 por ciento de los individuos entrevistados pensaban que la tolerancia era un valor importante que debía ser fomentado en los niños, al tiempo que más del 50 por ciento consideraba lo contrario. La segunda encuesta perfila un panorama diferente. Cerca de dos terceras partes están de acuerdo en que la tolerancia y el respeto por los demás, son actitudes que deben estimularse en los niños desde el entorno familiar (64.3 %). Los individuos jóvenes son quienes más aprecian este valor. Igual sucede con las personas de educación media. Aunque cabría esperar una disposición más acentuada hacia la tolerancia entre los estudiantes universitarios, los datos indican que se sitúan en el mismo nivel que las personas con menos educación. Sin embargo, fueron los simpatizantes de izquierda y particularmente los habitantes de la ciudad de México, quienes más se opusieron a reproducir la cultura de las mayorías absolutas, reafirmando su inclinación a valorar positivamente el respeto del derecho a disentir.

⁶ Larissa Adler Lomnitz, "Identidad Nacional/Cultura Política: Los Casos de Chile y México." *Redes Sociales, Cultura y Poder: Ensayos de Antropología Latinoamericana*. Miguel Angel Porrúa. México, 1994.

Cuadro 4. FAMILIA Y AUTORIDAD (%)

	Año de la Encuesta			
	1981		1990	
VALORES QUE DEBEN ALENTARSE EN LOS NIÑOS EN EL HOGAR	es importante alentar la tolerancia y el respeto por otras personas	no es tan importante alentar la tolerancia y el respeto por otras personas	es importante alentar la tolerancia y el respeto por otras personas	no es tan importante alentar la tolerancia y el respeto por otras personas
<i>Nacional</i>	39.5	60.5	64.3	35.7
<i>Edad</i>				
16-29	40.4	59.6	64.7	35.3
30-49	40.2	59.8	65.1	34.9
50+	32.1	67.9	61.5	38.5
<i>Educación</i>				
básica	38.7	61.3	64.6	35.4
media	40.7	59.3	67.0	33.0
superior	39.7	60.3	64.6	35.4
<i>Afinidad Política</i>				
izquierda	40.3	59.7	70.8	29.2
centro	40.3	59.7	63.7	36.3
derecha	39.2	60.8	63.0	37.0
<i>Región</i>				
norte	37.8	62.2	58.5	41.5
centro	39.4	60.6	63.9	36.1
sur	40.6	59.4	65.2	34.8
D.F.	42.3	57.7	71.3	28.7

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Se infiere de lo anterior que si el autoritarismo no es patrimonio exclusivo de una sola instancia, entonces es difícil analizar el proceso de cambio como si estuviera dividido en dos culturas políticas excluyentes: una perteneciente al Estado y la otra asentada en la sociedad civil,⁷ modificándose una con independencia de la otra. Por el contrario, el ejercicio cultural del poder impregna todos los espacios de

pag. 342-346.

⁷ Héctor Tejera Gaona, "Cultura Política: Democracia y Autoritarismo en México." *Nueva Antropología* no. 50, octubre, 1996. pag. 12.

la vida social y satura la forma que asumen los vínculos entre gobernantes y gobernados.⁸

En estos períodos el reto es evitar que el compromiso de explicar el presente lleve al regateo del estudio de la continuidad. Norbert Lechner reconoce el problema abiertamente: “Una de las dificultades del estudio (de la cultura política) consiste precisamente en ponderar la relación entre las pautas establecidas, transmitidas mediante largos procesos de socialización, y las nuevas ofertas de interpretación, aportadas por los productores de sentido de diversa índole. Ante todo en períodos tan convulsionados y opacos como suelen serlo los procesos de transición, resulta extremadamente difícil especificar en qué medida lo *nuevo* significa rupturas o adaptación de valores y hábitos arraigados.”⁹

Entre el Antiguo Régimen y la Revolución

El capítulo IV mostró como la profunda crisis económica implicó mucho más que la sola aplicación de una política económica de ajuste ortodoxo de las finanzas públicas, el tipo de cambio y el salario real. La persistencia del desequilibrio en las cuentas externas del país, agudizada por el desplome de los precios del petróleo, llevó a los gobiernos de Miguel De la Madrid y Carlos Salinas a reformar la

⁸ En una encuesta llevada a cabo en octubre de 1993 se encontró que la mayoría de los entrevistados consideraba que en México si existe la democracia (65.2 %). Victor Manuel Durand Ponte, “La Cultura Política Autoritaria en México.” *Revista Mexicana de Sociología*, 1995. pags. 67-103.

⁹ Norbert Lechner, *Cultura Política y Democratización*. FLACSO. Santiago de Chile, 1987. pag. 11.

centralidad del Estado desarrollista a través de la reducción de sus roles y atribuciones históricas, funciones que fueron asumidas progresivamente por la ampliación de la lógica del mercado. Esta circunstancia retroalimentó a su vez modificaciones en curso de la morfología social y los sistemas de integración política, provocando que el mantenimiento de la gobernabilidad estructurara relaciones sociales que escapaban a los modos clásicos de control estatal. El resultado final fue la alteración de los patrones y modelos interpretativos de la ciudadanía. En el nuevo contexto era cada vez más difícil reproducir los símbolos, rituales, afectos y valores que habían dado vida al orden político postrevolucionario. Se había producido una crisis de los esquemas ideológicos, acompañada de una reconstitución de los mapas cognitivos mediante los cuales se hacía inteligible la realidad política y social.¹⁰

Las consecuencias de tal reconstitución para la cultura política no fueron menores. Intimamente ligada a un sistema de economía mixta con partido dominante, la ideología que daba sustento al orden moral nacional-revolucionario empezó a chocar tanto con la modernización económica como con la democracia representativa.¹¹ Los criterios de eficiencia tecnocrática contradecían los principios del nacionalismo revolucionario. Poco a poco agrarismo, populismo sindical y proteccionismo, tres bastiones del discurso nacionalista-revolucionario fueron

¹⁰ Norbert Lechner, "Los Nuevos Perfiles de la Política. Un Bosquejo." *Nueva Sociedad* no. 130, 1994. pags. 32-43.

gradualmente abandonados. Al final, la pérdida de credibilidad en las instituciones políticas fue tan severa que incluso el culto al Estado, típico del orden moral nacional-revolucionario, devino un rasgo de la cultura política cada vez menos aceptado.

Liberalismo y Revolución

El cuadro 5 ilustra como luego de ocho años de quebranto económico cuya responsabilidad se atribuía fundamentalmente al Estado, una abrumadora mayoría de las personas entrevistadas veía a la competencia como algo positivo (80 %) mientras que menos de una tercera parte la consideraba nociva (20.4 %). La profundidad de los cambios se expresa en el hecho de que quienes más se inclinaban a emitir opiniones favorables a una lógica de mercado eran las personas de más de cincuenta años, socializadas en la época de prosperidad y afianzamiento político de los gobiernos postrevolucionarios. En contrapartida, los jóvenes aparecieron como el grupo más renuente a valorar favorablemente la competencia. Por su parte, las personas con mayor educación y ubicadas al centro del espectro político adoptaron también una postura que privilegiaba las bondades del mercado. Curiosamente, la proporción más alta de encuestados proclive a la competencia no se encontró entre la gente identificada con la derecha o los “norteños”, sino en el sur del país, una de las zonas económicamente más atrasadas. Luego de un largo

¹¹ Roger Bartra, “La Crisis del Nacionalismo.” *Oficio Mexicano*. Grijalbo. México, 1993. pags. 106-111.

período de crisis de regulación estatal, mercado y procesos electorales se habían transformado en una de las contadas arenas donde las personas podían participar directamente en la esfera pública.

Cuadro 5. DEL ESTADO AL MERCADO: ACTITUD HACIA LA COMPETENCIA %

	Año de la Encuesta	
	1990	
	La competencia es buena. Estimula a las personas a trabajar duro y desarrollar nuevas ideas	La competencia es dañina. Saca lo peor de las personas
<i>Nacional</i>	79.6	20.4
<i>Edad</i>		
16-29	77.3	22.7
30-49	81.0	19.0
50+	82.3	17.7
<i>Educación</i>		
básica	79.6	29.4
media	76.1	23.9
superior	82.0	18.0
<i>Afinidad Política</i>		
izquierda	79.6	23.1
centro	81.6	18.4
derecha	78.2	21.8
<i>Región</i>		
norte	77.3	22.7
centro	74.6	25.4
sur	83.4	16.6
D.F.	81.6	18.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

La expresión política explícita del compromiso cultural con el mercado se perfila más nítidamente en la actitud asumida frente al debate respecto al nuevo

equilibrio entre lo público y lo privado. El agotamiento del pacto social que dio lugar al nacionalismo revolucionario, uno de cuyos componentes esenciales había sido la presencia de un vigoroso estatismo, generó un fuerte malestar con las formas establecidas de pensar la política. Quizá proyectando sus propias aspiraciones, algunos autores llegaron a sostener “Ha concluido la sacralización del Estado. De él se esperan demasiadas cosas (casi todas), pero ya no es la entidad omnipotente de hace una o cuatro décadas.”¹²

El cuadro 6 da cuenta si no de la desacralización del Estado si de la modificación del balance entre los ámbitos público y privado. Un porcentaje muy alto de los individuos entrevistados pensaba que debía aumentar la propiedad privada de los negocios y la industria (alrededor del 70 %), particularmente las personas más educadas y mayores de 50 años. Como era de esperar, aquellos que se identificaban con la izquierda eran quienes más se oponían a la privatización de la economía, aunque inesperadamente fueron los que se ubicaban al centro los que favorecieron más el redimensionamiento del sector público. La distribución regional de las actitudes concernientes a la privatización de la actividad económica, confirmaba la existencia de un vigoroso consenso al respecto en el norte del país.

Esta información se complementa con otras investigaciones sobre valores llevadas a cabo en la década de los ochenta. En una encuesta levantada en 1987

¹² Carlos Monsiváis, “Notas sobre Cultura Política en México.” Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre y Juan Enrique Vega (coords.), *México: El Reclamo Democrático*. Siglo XXI. México, 1988. pag. 386.

Enrique Alduncin encontró que la eficiencia económica era la prioridad más alta de un conjunto de diecinueve premisas ideológicas y políticas planteadas a la población.¹³ Ello constituye un testimonio innegable de cuan interesada estaba la mayoría de la gente en aquellos aspectos relacionados con la recuperación del crecimiento económico, es decir, el aumento de la competitividad y la productividad, en un país azotado por crisis económicas cíclicas que había visto disminuir dramáticamente sus niveles de vida en menos de una década.

¹³ Enrique Alduncin Abitia, *Los Valores de los Mexicanos. T.III. En Busca de una Esencia*. Fomento Cultural Banamex. México, 1993. pags. 63-67.

Cuadro 6. ESTADO VS. MERCADO %

	<i>Año de la Encuesta</i>	
	1990	
	debe aumentar la propiedad privada de los negocios y la industria	debe aumentar la propiedad del gobierno de los negocios y la industria
<i>Nacional</i>	69.4	30.6
<i>Edad</i>		
16-29	68.2	31.8
30-49	69.1	30.1
50+	73.5	26.5
<i>Educación</i>		
básica	70.5	29.5
media	62.6	37.4
superior	71.1	28.9
<i>Afinidad Política</i>		
izquierda	60.7	39.3
centro	76.0	24.0
derecha	68.7	31.3
<i>Región</i>		
norte	73.5	26.5
centro	54.4	46.5
sur	71.3	28.8
D.F.	70.0	30.0

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

En un escenario donde la crisis se atribuía casi exclusivamente a la ineficiencia y corrupción de la administración pública, se insistía que una economía de mercado sólida, representaba la mejor protección del individuo contra la arbitrariedad del gobierno. Por lo tanto, la legitimación de los programas de ajuste económico apelaba ahora a la diferenciación funcional de los imperativos morales de Estado y mercado. De esta manera, a medida que el mercado ganaba espacio, los valores políticos se transformaban progresivamente, desplazando su posición,

significado e importancia relativa en la jerarquía del repertorio de valores dominante. Demandas tales como libertad, justicia social e igualdad, habían configurado un conjunto de valores fundamentales de la cultura política, cuyas posiciones relativas quedaron aseguradas de acuerdo a la importancia que alcanzaron en la retórica del discurso nacionalista revolucionario. Así, el pacto social de la revolución impulsó la justicia social como valor político clave, consolidando la idea de que sin intervención del Estado no hay ciudadanía.¹⁴ Justicia social e igualdad pasaron a ocupar un lugar preponderante en la definición de la cultura política postrevolucionaria, en un contexto histórico donde el status político del individuo, garantizado ya institucionalmente, podía ser desplazado en la jerarquía de los valores políticos dominantes.

El cuadro 7 confirma el proceso de deslizamiento de dichos valores. Signo de los nuevos tiempos, la significación de la libertad aumentó aunque marginalmente entre la primera y la segunda encuesta (1.4 %), mientras que la valoración de la igualdad disminuía alrededor de un 6.3 por ciento en promedio a nivel nacional. La trascendencia de la libertad como valor político se incrementó de manera consistente en las personas de edad madura, sureños y con preparación universitaria. En cambio, resultó ser menos relevante para los residentes de la capital de la república y los sectores identificados con la izquierda, quienes en 1990

¹⁴ René Millán, "Cultura de la Justicia y Cultura Política." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1995. pag. 164-170.

otorgaron mayor importancia a la igualdad, valor político propio de los gobiernos postrevolucionarios. Esta particularidad del proceso de cambio de la cultura política de intercambiar la posición relativa de los valores dominantes, fue documentada por otras investigaciones realizadas en el mismo período. Los autores del texto *Los Mexicanos de los Noventa* hallaron que la palabra “justicia” se correlacionaba más fuertemente con el vocablo democracia que con el término revolución. De hecho, la importancia del valor igualdad disminuía aún más en su estudio.¹⁵

Cuadro 7. ENTRE LIBERALISMO Y REVOLUCION (%)

QUE ES MAS IMPORTANTE: ¿LIBERTAD O IGUALDAD?	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	libertad	igualdad	ninguna	libertad	igualdad	ninguna
<i>Nacional</i>	59.4	40.6	-	60.8	34.3	4.9
<i>Edad</i>						
16-29	58.2	41.8	-	60.6	34.0	5.4
30-49	61.5	38.5	-	61.3	34.9	3.9
50+	59.1	40.9	-	60.0	34.0	6.0
<i>Educación</i>						
básica	59.5	40.5	-	59.7	35.2	5.1
media	58.5	41.5	-	59.3	37.1	3.6
superior	59.8	40.2	-	65.0	29.9	5.1
<i>Afinidad Política</i>						
izquierda	55.5	44.5	-	50.0	45.2	4.8
centro	63.8	36.2	-	63.2	33.3	3.5
derecha	58.3	41.7	-	70.1	25.5	4.5
<i>Región</i>						
norte	55.6	44.4	-	59.3	34.9	5.8
centro	58.8	41.2	-	62.1	31.6	6.3
sur	65.6	34.4	-	68.5	27.6	3.9
D.F.	61.7	38.3	-	55.6	40.6	3.7

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

¹⁵ Ulises Beltrán, Fernando Castañón, Julia Isabel Flores, Yolanda Meyenberg y Blanca Helena del Pozo, *Los Mexicanos de los Noventa*. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México, 1996. pag. 135.

La cultura política de la unanimidad, con su énfasis en la unidad de lo colectivo y su incansable recurso de apelar a los grandes agregados políticos de la nación y el pueblo, había puesto al individuo en función del cumplimiento de los objetivos nacionales. En un contexto de impotencia ante la supremacía del mandato de la autoridad pública, se activó una revalorización del individuo y los valores individuales, como respuesta a la imposición de la voluntad gubernamental. La integración del cambio al sistema político produjo una creciente personalización de la vida pública nacional. Es desde esta perspectiva que la lectura del cuadro 8 resulta especialmente pertinente. A primera vista llama la atención el hecho de que una abrumadora mayoría manifieste su beneplácito a una política de mayor atención al individuo (87.7 %). En el curso de una década los jóvenes se convirtieron en uno de los grupos sociales que más decididamente se puso a favor del estímulo al desarrollo individual (88.0 %) junto con las personas con educación universitaria (92.7 %), emplazadas al centro del espectro político (89.5 %) y residentes en la capital de la república (91.9 %).

Cuadro 8. DEL PUEBLO AL INDIVIDUO (%)

MAYOR ENFASIS EN EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	bueno	malo	no importa	bueno	malo	no importa
<i>Nacional</i>	82.0	6.5	11.5	87.7	7.1	5.2
<i>Edad</i>						
16-29	82.0	6.2	11.8	88.0	6.5	5.5
30-49	82.0	7.2	10.8	87.5	7.4	5.1
50+	84.5	5.3	10.2	87.3	8.0	4.8
<i>Educación</i>						
básica	77.3	8.6	14.0	85.1	8.5	6.4
media	88.1	3.2	8.7	91.7	3.9	4.4
superior	84.5	5.5	10.0	92.7	5.0	2.2
<i>Afinidad Política</i>						
izquierda	79.9	11.0	9.1	88.8	8.0	3.2
centro	86.5	3.9	9.6	89.5	6.8	3.7
derecha	80.5	7.2	12.2	85.9	8.5	5.6
<i>Región</i>						
norte	84.0	4.9	11.1	87.3	7.8	4.9
centro	78.2	6.6	15.2	81.0	8.0	11.0
sur	76.1	11.6	12.3	87.4	8.2	4.4
D.F.	90.3	4.4	5.4	91.9	4.8	3.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

Pese a la disminución relativa de la fuerza gravitacional del Estado sobre el conjunto de valores del orden moral hegemónico, producto del reacomodo de varios de los principios del Estado postrevolucionario desencadenado por la crisis económica, viejos hábitos del corazón tendían a permanecer entrelazados con las nuevas actitudes. A la pregunta formulada en el trabajo *Los Mexicanos de los Noventa* respecto a la conveniencia de apoyar las acciones del gobierno en las ideas de la revolución, un 30 por ciento respondió que debía seguirlo haciendo mientras

que un 51 por ciento se inclinó por abandonarlos.¹⁶ En un entorno de redefinición de los límites del interés público, una proporción muy significativa de los encuestados aún creía que los principios revolucionarios seguían vigentes.

Hace casi ciento cincuenta años Alexis de Tocqueville escribió que la libertad es sobre todas las cosas, una forma de vida que conecta lo público y lo privado, la existencia real de opciones consagradas por el orden político con la actitud del individuo y su capacidad de decisión ante ellas.¹⁷ Los efectos de más de medio siglo de tutela estatal de los derechos sociales y políticos del individuo quedan plasmados en el cuadro 9. El promedio nacional de la muestra se divide en dos grupos muy parecidos. Aquellos que apoyaban la idea de que los individuos deben ser capaces de asumir responsabilidades no sólo políticas sino también económicas, se convirtieron en la mayoría (alrededor de 60 %). Sin embargo, más del 40 por ciento de las personas entrevistadas se pronunció a favor de que el Estado se mantuviera como proveedor y garante de los derechos sociales del individuo.

Las respuestas por edad, educación, afinidad política y región revelan una franca polarización. Son los jóvenes (59.1 %), los universitarios (62.7 %) y los simpatizantes de la derecha (64.3 %) quienes más comulgan con la ideología neoliberal. Por otro lado, se observa que a mayor edad, menor educación y afinidad por la izquierda, mayor la preferencia por un Estado asistencial. Llama la atención

¹⁶ Ulises Beltrán et. al., *Op. cit.* pag. 120.

¹⁷ Alexis de Toqueville, *El Antiguo Régimen y la Revolución*. FCE. México, 1996. pags. 33-34.

que el sur sea la región más proclive a una ideología de mercado, ello podría interpretarse como un indicador del malestar con el gobierno en aquellos lugares donde la desilusión con el Estado proveedor era más intensa.

Cuadro 9. DEL INDIVIDUO AL CIUDADANO %

	Año de la Encuesta	
	1990	
	los individuos deben tener más responsabilidad para sostenerse a sí mismos	el estado debe tener más responsabilidad para asegurar que todos tengan sustento
<i>Nacional</i>	57.7	42.3
<i>Edad</i>		
16-29	59.1	40.9
30-49	56.6	43.4
50+	56.4	43.2
<i>Educación</i>		
básica	56.5	43.4
media	55.1	44.9
superior	62.7	37.3
<i>Afinidad Política</i>		
izquierda	52.6	47.4
centro	52.8	41.8
derecha	64.3	35.7
<i>Región</i>		
norte	51.9	48.1
centro	53.2	46.8
sur	66.7	33.3
D.F.	59.9	40.1

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Orden Moral y Cultura Política

Liberalismo y revolución han sido dos mitos políticos unificantes a lo largo de la historia nacional cuyos elementos constitutivos, a menudo contradictorios,

difícilmente podían echar raíces en una sociedad caracterizada por la intermediación y el clientelismo. Pese a que los aspectos liberales del orden jurídico mexicano han sido fundamentales, el sistema concede al mismo tiempo, un amplísimo poder de discrecionalidad legalmente sancionado, que mantiene una distancia insalvable entre el espíritu del texto constitucional y la regulación concreta de las prácticas sociales. Distancia que varía en función del problema y el momento histórico. Para algunos autores en México no ha existido nunca “una Constitución viva garantista.”¹⁸ La ingeniería de las instituciones políticas corrió paralela a las rutinas, hábitos y costumbres de una historicidad reacia a ser subsumida por modelos importados, que hacían abstracción del contexto político y social en el que se desarrollaba la acción de los individuos.

La fusión de ambas tradiciones en el discurso oficial dio origen a la idea de la continuidad del liberalismo en la revolución: “A partir de 1954 Reyes Heróles reafirmó la validez de la perpetua revolución al asegurar la continuidad del liberalismo, es decir, la rica herencia proporcionada por las ideas liberales para el México contemporáneo.”¹⁹ Sin embargo, el giro hacia políticas orientadas hacia el mercado y el proceso de liberalización política emprendido por el gobierno, provocaron agrias disputas respecto a la validez de esta pretensión, que asumió la

¹⁸ Carlos Elisondo Mayer-Serra, “El Constitucionalismo y la Reforma del Estado en México.” Mónica Serrano y Víctor Bulmer-Thomas (comps.), *La Reconstrucción del Estado. México después de Salinas*. FCE. México, 1998. pag. 73.

forma de una reivindicación de los derechos políticos y civiles del individuo. Esto llevó a considerar los procesos electorales el factor clave de la metamorfosis política mexicana. Buena parte de la atención se dirigió a temas relacionados con las elecciones: reforma electoral, preferencias electorales, fraude y conflictos postelectorales. Se asumía que las copiosas votaciones y la variación de las preferencias electorales implicaban un cambio en la cultura política, que contribuiría a crear condiciones favorables para el surgimiento de una ciudadanía más participativa, responsable y democrática.

El Retorno del Ciudadano

El recurso de apelar al ciudadano se incorporó de manera casi natural al discurso político ya que el concepto integraba tanto las exigencias de justicia como las de pertenencia comunitaria, es decir, vinculaba la noción de derechos individuales con la expectativa de una renovada integración política. De esta forma, se crearon las condiciones para tender un puente entre la reproducción de la cultura política dominante y el florecimiento de nuevas formas de participación ciudadana.

La tensión entre sus diferentes niveles fue conceptualizada por algunos autores como una lucha entre dos tipos diferentes de cultura política. Una cultura política de la pirámide, hegemónica, vertical y personalista, y una cultura política ciudadana, individual, pluralista, que valora más la diversidad que la unanimidad. La

¹⁹ Charles A. Hale, "Los Mitos Políticos de la Nación Mexicana: El Liberalismo y la Revolución." *Historia Mexicana* no. 184, abril-junio, 1997. pags. 826-827.

resultante de esta configuración vino a ser un escenario sumamente complejo donde: "The predominance of the culture of the pyramid in Mexico has resulted in a situation where the culture of citizenship is permanently subverted; in other words, it is subjected to a process of cultural *transformismo*."²⁰

Esta articulación cultural se ilustra en el cuadro 10. Uno de los primeros requisitos de una cultura política ciudadana es la extensión del interés por los asuntos públicos, dicho en otras palabras el énfasis en el valor que tiene la actividad política para los propios participantes. Pese a la creciente participación electoral, la información desplegada dibuja un cuadro incompatible con un optimismo desbordado. Menos de una tercera parte de las personas entrevistadas considera a la política como una actividad importante en su vida (29.2 %), comparada con aquellos que estiman dicha actividad en términos más bien negativos (alrededor del 60 %). Las personas de edad madura tienen la evaluación más alta en este rubro mientras que los jóvenes se ubican en el medio: aunque cerca de una tercera parte la considera medianamente importante (29.2 %) más de un 40 por ciento la juzga desfavorablemente.

Cuando analizamos los datos por educación emerge un patrón singular: los individuos con menos educación se sitúan en ambos extremos, con los valores más altos en las opciones "muy importante" y "nada importante". Por el contrario, los

²⁰ Wil Pansters, "Theorizing Political Culture in Modern Mexico." Wil Pansters (ed.), *Citizens of the Pyramid. Essays on Mexican Political Culture*. Thela Publishers. Amsterdam, 1998. pag. 9-10.

que estudiaron una carrera universitaria representan el grupo menos numeroso entre los que pensaban que la política no era importante. Si atendemos ahora a la filiación ideológica salta a la vista que la izquierda es el grupo que valora más positivamente la política, en tanto que centro y derecha adoptan posturas similares aunque los primeros tienden a secundar una postura más tradicional (43.0 % considera la política no muy importante). Por región, el norte y la capital constituyen las zonas geográficas que mayor importancia atribuían a la política (40.6 y 38.7 % respectivamente).

Cuadro 10. POLITICA Y CIUDADANIA (%)

IMPORTAN CIA DE LA POLITICA	Año de la Encuesta			
	1990			
	muy importante	importante	no muy impor tante	nada impor tante
<i>Nacional</i>	11.6	29.2	39.4	19.8
<i>Edad</i>				
16-29	10.7	29.7	41.5	18.1
30-39	12.9	28.8	39.5	18.8
50+	11.2	28.8	33.6	26.4
<i>Educación</i>				
básica	12.2	27.2	39.1	21.4
media	8.9	31.1	39.1	20.9
superior	11.8	33.8	40.4	14.0
<i>Afinidad Política</i>				
izquierda	20.5	40.6	28.5	10.4
centro	10.5	27.0	43.0	19.5
derecha	11.7	33.6	38.7	16.0
<i>Región</i>				
norte	13.1	32.3	37.0	17.6
centro	8.9	24.1	44.3	22.7
sur	10.1	28.6	41.7	19.6
D.F.	12.3	28.3	38.2	21.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

La explosión participativa en los procesos electorales había desatado profundas transformaciones en la micro-cultura política que fueron generalizadas como indicios del surgimiento de una cultura ciudadana fundada en un mayor interés en debatir temas políticos. Una mayor voluntad de involucrarse en el diálogo y la discusión en la vida pública son componentes distintivos de la teoría liberal de la ciudadanía.²¹

²¹ Will Kymlicka y Wayne Norman, "El Retorno del Ciudadano. Una Revisión de la Producción Reciente en Teoría de la Ciudadanía." *La Política*. Revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad no.3, octubre 1997. Barcelona, 1997. pags. 5-39.

No obstante, como muestra el cuadro 11, el grado en que los ciudadanos encuestados discutían de temas políticos era muy bajo. Si bien entre 1981 y 1990 aumentó el número de personas que discutían de política con más frecuencia (7.5 %), incremento que fue acompañado de una disminución en la proporción de aquellos que nunca lo hacían de más del 10 por ciento (12.9 %), aumentó también la parte más numerosa de la población (alrededor del 5 %), aquella que manifestaba un gran desinterés por las cuestiones relacionadas con la política (57.8 %).

A principios de la década pasada había una relación inversa entre edad e interés en la política entre quienes discutían con mayor frecuencia: a menor edad mayor interés. En la segunda encuesta la distribución se vuelve más uniforme, con los individuos entre 30 y 49 años ligeramente por arriba del promedio. Por nivel educativo los universitarios mostraron una mayor tendencia a discutir de temas políticos con sus amigos que el resto de los grupos. Lo mismo sucede con las personas que simpatizaban con la izquierda, las más propensas a debatir de cuestiones políticas. Geográficamente, 1990 marca el momento en que la capital deja de ser la zona del país donde se discute de política con más frecuencia para ceder ese lugar al norte.

Cuadro 11. EL HABITO CIUDADANO (%)

DISCUTE DE POLITICA CON SUS AMIGOS	Año de la Encuesta					
	1981			1990		
	frecuente mente	ocasional mente	nunca	frecuente mente	ocasional mente	nunca
<i>Nacional</i>	8.7	52.3	39.0	16.2	57.8	26.1
<i>Edad</i>						
16-29	10.9	53.7	35.4	15.1	59.2	25.7
30-49	7.1	51.8	41.1	17.9	58.5	23.6
50+	2.8	44.9	52.3	15.1	52.2	32.7
<i>Educación</i>						
básica	4.6	43.2	52.1	15.1	54.9	29.9
media	7.6	63.6	28.7	14.2	57.3	28.4
superior	14.1	57.3	28.6	20.7	66.5	12.9
<i>Afinidad Política</i>						
izquierda	16.6	41.1	42.4	33.5	56.6	10.0
centro	9.6	57.9	32.4	13.4	59.2	27.4
derecha	7.6	52.0	40.4	15.2	61.5	23.3
<i>Región</i>						
norte	8.5	51.1	40.5	19.2	54.8	26.0
centro	5.5	51.2	43.3	13.3	60.0	26.7
sur	7.9	55.1	37.0	11.0	64.5	24.5
D.F.	15.6	53.7	30.6	17.9	55.0	27.0

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Ahora bien, el desarrollo de una cultura cívica descansa no sólo en el interés por participar en la vida pública, sino también en la tendencia a aglutinarse con un sentido de identidad y pertenencia a una comunidad política y social definida por la confianza recíproca. Este es un atributo de la cultura política que poco ha cambiado en México. Pese a la modificación de los hábitos electorales, un principio básico de la interacción individual seguía siendo la desconfianza.²² En 1981 más del 80 por ciento de los encuestados se pronunció a favor de una actitud cautelosa en el trato

con los demás. Diez años después había aumentado significativamente el número de personas que consideraba se podía confiar en la gente (33.5 %), pero la proporción de quienes preferían guardar una actitud de reserva hacia los demás se mantuvo en un valor muy alto (66.5 %). Quienes manifestaron niveles más elevados de confianza interpersonal fueron las personas mayores, los más educados, los partidarios de la izquierda y los residentes de la región norte del país.

Cuadro 12. CONFIANZA INTERPERSONAL (%)

	Año de la Encuesta			
	1981		1990	
	se puede confiar en la mayoría de las personas	no se puede ser tan confiado	se puede confiar en la mayoría de las personas	no se puede ser tan confiado
<i>Nacional</i>	17.5	82.5	33.5	66.5
<i>Edad</i>				
16-29	16.2	83.8	33.9	66.1
30-49	17.7	82.3	32.6	67.4
50+	23.6	76.4	34.3	65.7
<i>Educación</i>				
básica	15.9	84.1	33.8	66.2
media	15.1	84.9	32.5	67.5
superior	20.6	79.4	33.1	66.9
<i>Afinidad Política</i>				
izquierda	19.5	80.5	34.2	65.8
centro	17.1	82.9	33.8	66.2
derecha	17.9	82.1	32.5	67.5
<i>Región</i>				
norte	18.2	81.8	37.7	62.3
centro	18.5	81.5	30.2	69.8
sur	14.3	85.7	29.9	70.1
D.F.	17.6	82.4	32.6	67.4

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor, Michigan, 1994.

²² Alberto Alvarez Gutierrez, "Cómo se sienten los Mexicanos?." Alberto Hernández Medina y Luis Narro Rodríguez (coords.), *Cómo somos los Mexicanos*. Centro de Estudios Educativos. México, 1987. pag. 81.

Así, el fortalecimiento de la participación social, un componente decisivo de la emergencia de una cultura cívica, se asoció no sólo a la liberalización del régimen político y la reforma económica, sino particularmente al surgimiento de movimientos sociales en la esfera pública. Se pensaba que estos nuevos actores contribuirían diseminando y profundizando demandas políticas y sociales que promoverían formas de participación contrarias a los mecanismos tradicionales de control político. El resultado de todo este proceso vendría a ser el aumento de la participación ciudadana. Desde esta perspectiva, la sociedad era valorada como el semillero de una virtud cívica que ni el mercado ni la política convencional garantizaban por sí solas. Era en las organizaciones voluntarias de la sociedad civil (iglesias, sindicatos, asociaciones de vecinos, organizaciones de beneficencia, etc.) donde se aprenderían las cualidades del ciudadano virtuoso y responsable.

El deseo ferviente de ver en la vivencia de la sociedad civil el proyecto organizativo de cooperación y solidaridad que pondría freno al presidencialismo, las tradiciones autoritarias y la impunidad hizo del optimismo realidad.²³ Si, como decía Alexis de Tocqueville, la existencia de una intensa vida asociativa es requisito obligado para ciudadanizar la participación individual entonces, el desarrollo de una moral cívica aún tiene mucho camino por recorrer. De acuerdo a la información suministrada por la *Encuesta Mundial de Valores*, a diferencia de los elevados

²³ Carlos Monsiváis, "Donde lo Relativo se vuelve Absoluto. (de la Moral Pública a fin de Siglo)". Juliana González y Josú Landa (coords.), *Los Valores Humanos en México. Siglo XXI*. México, 1997. pag. 120.

índices de participación electoral, los niveles de participación en organizaciones civiles resultaron ser mínimos: alrededor del 93.2 por ciento de los ciudadanos no formaba parte de ninguna agrupación cívica u organización no gubernamental. Excepción hecha de las organizaciones educativas, artísticas, musicales o culturales y de los grupos de barrio que trabajaban por su comunidad, que vieron aumentar el número de sus miembros, el resto de los grupos de la sociedad civil redujo su participación en la segunda encuesta desde valores ya de por sí insignificantes. Los datos anteriores confirmaban, según algunos autores, una situación donde: “Lo que falta, lo que ha faltado siempre es el orden moral de la ciudadanía, y no la participación política.”²⁴

²⁴ Fernando Escalante, “El Dinosaurio que llevamos Dentro. Democracia y Ciudadanía en México.” Manuel Alcántara y Antonia Martínez (comps.), *México Frente al Umbral del Siglo XXI. Siglo XXI de España*.

Cuadro 13. CIUDADANIA Y PARTICIPACION (%)

MEMBRESIA EN GRUPOS O ASOCIACIONES CIVILES	Año de la Encuesta			
	1981		1990	
	pertenece	no pertenece	pertenece	no pertenece
servicios de bienestar social para ancianos, minusválidos o personas necesitadas	9.0	91.0	4.5	95.5
organizaciones religiosas o de la iglesia	16.7	83.3	13.8	86.2
organizaciones educativas, artísticas, musicales o culturales	6.5	93.5	11.5	88.5
sindicatos	6.8	93.2	3.8	96.2
grupos de barrio que trabajan por su comunidad	1.7	98.3	4.3	95.7
asociaciones profesionales	4.6	95.4	2.7	97.3

Fuente: *World Values Survey 1981-1984 y 1990-1993*. ICPSR version. Institute for Social Research, Ann Arbor. Michigan, 1994.

Orden Moral y Ciudadanía

Pese a lo expuesto líneas arriba, el cuestionamiento generalizado de la autoridad moral del Estado y la instrumentación de una estrategia que reconocía la presencia del disenso al interior del sistema de representación política, dio lugar a un prolongado debate acerca de los alcances de la transformación de los valores que habían cimentado el orden político postrevolucionario. Numerosos estudios se ocuparon, desde diferentes perspectivas, de documentar el proceso de cambio vivido por el país. La palabra crisis pasó de ser un activo esporádicamente utilizado por la retórica oficial a patrimonio irrenunciable del vocabulario cotidiano. La crisis aparecía como cambio pero sobre todo como ruptura. Hanna Arendt había afirmado

ya que en la época moderna las revoluciones nos confrontan con el problema del origen. Las revoluciones son algo más que simples cambios. Para la conciencia actual, la idea de libertad debe coincidir con la experiencia de un nuevo origen.²⁵ La expresión política de esta posición asumió la forma de la existencia de una crisis moral.

A mediados de la década de los ochenta Roger Bartra había escrito: “...estamos atrapados por una crisis cultural que es el fruto de procesos de largo plazo; en este sentido, creo que es posible hablar de una *crisis moral*, en el sentido de la deterioración de las costumbres (*mores*) o de las reglas no escritas (*nomos*) que cimentaban la legitimidad de la cultura nacional postrevolucionaria tradicional.”²⁶ Soledad Loaeza utiliza la misma metáfora desde una perspectiva más sobria y mesurada para reconocer la coexistencia de dos fenómenos claramente diferenciados. Por un lado, la erosión de los valores políticos que había permitido construir una identidad colectiva, es considerada por la autora producto de la emergencia en el imaginario político nacional, de dos valores fundamentalmente opuestos al orden moral nacional-revolucionario: “la revaloración de la participación electoral y la legitimación de la oposición”.²⁷ Por el otro, la interacción de los niveles de la cultura política provocó que la sucesión de efectos no previstos

²⁵ Hanna Arendt, “El Significado de la Revolución.” *Sobre la Revolución*. Alianza Editorial. Madrid, 1988. pags. 21-59.

²⁶ Roger Bartra, “La República de las Letras Muertas y la Muerte de las Letras Públicas.” *Oficio Mexicano*. Grijalbo. México, 1993. pag. 45.

desencadenados por el proceso de cambio mismo "...por paradójico que parezca, son cambios que sustentan la continuidad."²⁸ En consecuencia, los resultados expuestos hasta ahora sugieren tomar con cautela la comprensión del cambio como un proceso que apunta básicamente a la ruptura. Los efectos de la liberalización política operan a varios niveles con ritmos diversos, que se hallan entrelazados y superpuestos entre sí, por lo que no conducen a procesos de cambio lineales.²⁹

Para corroborar la exactitud de esta afirmación se utilizó un modelo de análisis factorial. Esta herramienta estadística permite resumir la información contenida en una encuesta con V variables, identificando un número más reducido de factores que representan las variables originales con una pérdida mínima de información. Los factores son combinaciones lineales de las variables originales, cuyas correlaciones deben ser altas en su interior y bajas entre ellos.³⁰

El cuadro 14 muestra los resultados del análisis factorial de tres componentes clave del orden moral nacional-revolucionario: *participación política*, *estatismo* y *autoritarismo*. Del conjunto de preguntas se eligieron diez variables representativas que se agruparon en tres factores vinculados a los rubros ya mencionados. Cada una de las columnas del cuadro es un factor. El primero que aparece es aquel que

²⁷ Soledad Loeza, "México en 1994: los Síntomas de una Crisis Moral." Juliana González y Josú Landa (coords.), *Op. cit.* pag. 86.

²⁸ *Ibid.* pag. 85.

²⁹ Ronald Inglehart, "La Transformación de la Relación entre Desarrollo Económico y Cambio Cultural y Político." *Este País*, mayo, 1994. pags. 1-23.

³⁰ R. J. Rummel, "Para Comprender el Análisis Factorial." Simon Schwartzman (comp.), *Técnicas Avanzadas en Ciencias Sociales*. Nueva Visión. Buenos Aires, 1977. pags. 37-91.

contribuye mejor a explicar la información contenida en la encuesta. Los coeficientes desplegados en el cuadro son índices de correlación entre el factor y la variable y reciben el nombre de pesos, cargas o ponderaciones factoriales.

Lo primero que destaca es la presencia de un conjunto claramente definido de tres factores no correlacionados entre sí. Los factores y sus coeficientes están ordenados. El que mejor resume la varianza de la muestra es el primero, es decir, el componente participación política, le siguen estatismo y autoritarismo. La magnitud de los coeficientes de correlación de las variables es un indicador de cuanto cargan o se saturan en cada factor. Así, todas las variables ligadas al rubro participación tienen ponderaciones altas en ese factor, lo cual constituye una evidencia de la importancia que han adquirido estos valores en la cultura política. Particularmente altas son las cargas de las variables ligadas a la expresión del descontento en la esfera pública, entre las que destaca “participación en huelgas no autorizadas” y “ocupación de edificios”.

En el caso del segundo factor, las saturaciones factoriales de las variables relacionadas con la actitud hacia el Estado como protector y promotor del bienestar económico no cargan en la misma magnitud que en el caso del factor participación; no deja de ser revelador que el coeficiente más alto de este factor corresponda a la variable privatización. Más débil aún es la saturación de los coeficientes del tercer componente. Sin embargo, es por demás significativo que la variable con mayor

ponderación en este factor sea el fomento a la tolerancia en los niños, hecho que confirma la revaloración positiva de este componente del orden moral nacional-revolucionario.

Cuadro 14

Note: The sample size for Mexico 1991-1993 is n=1531. Cases with missing values were excluded from the analysis. For simplicity, factor loadings below .30 are not shown.

La afirmación de que el aumento de la participación electoral constituía la expresión de un cambio en la cultura política es un supuesto que debe ser

matizado. Ciertos elementos de la cultura política como la poca disposición a participar electoralmente y la hegemonía de una cultura de las mayorías experimentaron una rápida transformación; otros, como el estatismo y las tendencias autoritarias, disminuyeron su importancia, pero mostraron no ser incompatibles con una mayor participación política.

Estos hallazgos concuerdan con los resultados obtenidos por el equipo de investigadores que levantó la encuesta *Los Mexicanos de los Noventa* a mediados de 1994. Desde una aproximación metodológica diferente concluían: “La sociedad mexicana cambia con diversos ritmos y en ámbitos desiguales, mas lo hace sin abandonar algunos de los elementos y referentes culturales presentes en ella desde hace siglos. Adecua los elementos universales a sus propios códigos.”³¹ Ello significa que la persistencia de los residuos del *Antiguo Régimen* es parte fundamental del problema de cimentar un nuevo orden político. Seguramente también de la solución.

³¹ Ulises Beltrán et. al., *Ibid.* pag. 162.

“The state is, above all, the protector, not of a faith, but of a culture.”

E. Gellner

VIII

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

Cultura política y gobernabilidad son dos obsesiones ominipresentes en una historia política salpicada de fracasos de la tentativas de crear una voluntad colectiva nacional-popular. La revolución había completado el proceso de formación del Estado, articulándolo con las culturas políticas locales gracias a la construcción de una identidad nacional integradora y modernizante, que alimentó también un discurso del poder que impuso nuevas formas de racionalidad política, nuevos rituales y formas de regulación moral. El Estado asimiló a la nación, y el proyecto postrevolucionario se definió como el proyecto de un Estado homogeneizador.¹

De esta forma, se diseñó un sistema político presidencialista en el que la preocupación dominante era encontrar el punto de equilibrio entre democracia y gobernabilidad. Buena parte de ésta se basó en un sistema político inclusivo controlado desde arriba, un movimiento obrero corporativizado y una legitimidad fundada en el origen revolucionario del gobierno.

¹ Adrian A. Bantjes, “The Eight Sacrament: Nationalism and Revolutionary Political Culture in Mexico.” Wil Pansters, *Citizens of the Pyramid. Essays on Mexican Political Culture*. Thela. Amsterdam, 1997. pags. 131-146.

Se estableció así un orden político donde el patrón de vinculación entre gobernantes y gobernados quedaba estructurado en tres niveles: 1º. Un consenso de valores que giraba alrededor de un orden moral nacional-revolucionario, 2º. La legitimidad de las reglas del juego que sancionaban una forma de representación política monopartidista y una cultura de la unanimidad en la esfera pública, y 3º. Una cultura de las mayorías absolutas que se expresaba en un apoyo electoral masivo. Así, este patrón conformó un paradigma del buen gobierno que permitió canalizar y controlar las principales demandas y conflictos entre grupos políticos, sectores sociales y regiones.

Sin embargo, las medidas implementadas para superar la crisis provocaron modificaciones importantes a las formas de vinculación entre gobernantes y gobernados que alteraron el funcionamiento del paradigma del buen gobierno. Si el orden político postrevolucionario se había delineado con el supuesto de que la democracia podía devenir en ingobernabilidad, los años de la transición trajeron la consigna de que entre democracia y gobernabilidad había una relación directa, evidente e incuestionable. Democracia era sinónimo de un gobierno legítimo, eficaz y responsable.

Uno de los rasgos distintivos del cambio político consistió en defender la convicción de que la democracia era una forma superior de gobierno, reclamo que se tradujo en la demanda de un Estado responsable de sus decisiones y sobre todo,

eficaz en la atención y gestión de las demandas y expectativas ciudadanas.² Así, la configuración histórica que había hecho posible un sistema político que logró equilibrar las tendencias al conflicto con la búsqueda del consenso, creando las condiciones para evitar crisis o problemas de gobernabilidad, empezó a desgastarse progresivamente.

A medida que la crisis se hacía más profunda, los rasgos característicos del paradigma del buen gobierno no sólo devenían disfuncionales, se volvían inaceptables. Autoritarismo patrimonial, clientelismo, negociaciones cupulares secretas e identificación entre Estado y gobierno, eran atributos de un orden político que, se pensaba, había llegado a los límites de sus posibilidades: “La modernización democrática de México implica fundamentalmente la reforma del Estado, como un supuesto de viabilidad histórica y de estabilidad.”³

Este criterio, sin embargo, descuidaba el hecho de que no es posible superponer de forma mecánica Estado y sociedad o privilegiar lo institucional sobre lo social: “la gobernabilidad de las democracias depende *no sólo de la calidad de la acción de gobierno, sino de la calidad de funcionamiento del sistema social en su conjunto.*”⁴ Dicho en otras palabras, las visiones unilaterales de la gobernabilidad ignoraban el hecho de que las disposiciones culturales formaban parte de una

² Luis F. Aguilar, “Gobernabilidad y Democracia.” Esthela Gutiérrez Garza y Fernando Castañeda, *El Debate Nacional. Escenarios de la Democratización*. Diana. México, 1998. pags. 23-28.

tradición política que depositó en el gobierno el cuidado exclusivo de los asuntos de interés común.⁵

A lo largo de este trabajo se ha mostrado como el paradigma del buen gobierno estaba ligado no sólo a la naturaleza de las instituciones sino también al modelo cultural de la política subyacente. Gracias a la distinción entre niveles constitutivos de la cultura política, cada uno relacionado de manera específica con el paradigma del buen gobierno, fue posible dar cuenta de las tensiones provocadas por el proceso de cambio político experimentado por el país a partir de 1982. Observamos como en el primer nivel se produjo una intensificación de la lucha política cotidiana que trajo como resultado cambios importantes en la micro-cultura política que se tradujeron en la erosión de la cultura de las mayorías absolutas, el surgimiento del disenso en la esfera pública y la disminución de los niveles de apoyo electoral al gobierno. Ahora bien, dichas tendencias al cambio no representaron, como alegaban varios autores, una transformación global de la cultura política sino: "...una expansión de la cultura política de las clases educadas, tendientes no sólo a una confianza sino a una obligación cívica respecto a la utilización del sufragio, para lograr cambios políticos no violentos."⁶

³ Fernando Danel Janet, "Reforma del Estado: Itinerarios y Gobernabilidad." Rolando Cordera Campos, Raúl Trejo Delarbre y Juan Enrique Vega (coords.), *México: El Reclamo Democrático. Siglo XXI*. México, 1988. pag. 303.

⁴ Luis F. Aguilar, *Op. cit.* pag. 39.

⁵ Antonio Camou, "Gobernabilidad y Democracia en una Transición Incierta." Marcelo Cavarozzi (coord.), *México en el Desfiladero. Los Años de Salinas*. Juan Pablos. México, 1997. pags. 37-58.

⁶ Rafael Segovia, "Una Cultura Política Inmóvil." *Exámen*, no. 92, junio, 1997. pags. 16-17.

Asimismo, la metamorfosis de la esfera pública alteró las condiciones de gobernabilidad del régimen, ya que el Estado vio cómo se reducían sus márgenes de control sobre el comportamiento de los actores políticos, hecho que había influido para hacer del desempeño económico, algo endógeno al sistema, convirtiendo la toma de decisiones del gobierno en parte crucial de la viabilidad del ordenamiento funcional de la gestión pública. Ello explica por qué a lo largo del proceso de estabilización económica y cambio estructural, las desmedidas facultades discrecionales otorgadas por la constitución al jefe del ejecutivo, sumadas al funcionamiento eficiente del sistema de redes clientelares y al control del Estado sobre el proceso electoral, pusieron en manos del gobierno instrumentos extremadamente útiles en la puesta en marcha de los proyectos de reordenamiento económico y liberalización política.

Al nivel intermedio, si bien el cuestionamiento a las reglas del juego impugnó la legitimidad del gobierno para organizar de manera excluyente la manera de decidir cómo y quién ejerce el poder, mantuvo el perfil de una cultura política gradual y reformista así como la coincidencia entre condiciones de ejercicio y condiciones de acceso al mismo. Sin embargo, más allá de las explicaciones basadas en el síndrome del miedo a la violencia o la revolución, que estaría

llevando a las personas a emprender acciones políticas contestatarias,⁷ la pérdida de confianza en el gobierno, el aumento de la competencia política y la evolución de las preferencias electorales, introdujeron un grado de incertidumbre inédito en la escena política, desgastando el sistema de representación e integración política heredado de la revolución. En estas condiciones, acontecimientos políticos como el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, no hizo sino llevar a niveles insospechados el desafío a la ideología de unidad nacional, justicia social y equidad del gobierno, precipitando el hundimiento de la legitimidad de gestión sobre la cual el gobierno había fincado su estrategia de recuperación del modelo del buen gobierno.

Finalmente, a nivel macro, el orden moral nacional-revolucionario, expresión de un consenso valórico que había articulado un entramado de relaciones políticas y sociales que allanó el camino a décadas de estabilidad política con crecimiento económico, se vio sometido a una fuerte presión producto de la pérdida de centralidad política del partido en el gobierno y la lenta pero irreversible descorporativización de la política y la economía. Lo anterior provocó una modificación en las funciones históricas del nacionalismo, uno de los valores fundamentales del orden moral nacional-revolucionario. El nacionalismo no es más el lenguaje hegemónico del Estado. Por consiguiente, nacionalismo y modernidad

⁷ Linda Stevenson y Mitchell A. Seligson, "Se Desvanecen los Recuerdos de la Revolución. ¿Se está Desgastando la Estabilidad de México." Roderic A. Camp (comp.). *Encuestas y Democracia: Opinión*

no van más de la mano. El reto ahora es erigir una nueva institucionalidad política de consenso.⁸ Hay aquí sin embargo, un cambio más medido en otros de sus componentes como la desconfianza y el desinterés en la política, que ponen de manifiesto el lugar ambiguo que el Estado ha tenido en la cultura política mexicana; punto de referencia obligado positiva y negativamente –en tanto cambio es la crisis del Estado el detonante, como continuidad es la democracia desde arriba- donde la ingobernabilidad ha sido entendida como un problema más serio que la pérdida de legitimidad del Estado.⁹

El declinio del paradigma del buen gobierno y la tensión a que ha sido sometida la cultura política, pone en el centro de la discusión la necesidad de construir una gobernabilidad democrática que no caiga en la tentación de convertir la democracia en un hoyo negro al que van a parar todas las virtudes políticas. Una democracia gobernable tiene uno de sus factores primordiales en el tipo de relación que se establece con la sociedad, lo que implica que no es conveniente obviar el problema de construir una ciudadanía participativa y responsable, disolviéndolo en el problema de la soberanía popular o las nuevas “mayorías morales”.¹⁰ Por el contrario, la configuración política que haga posible una democracia gobernable,

Pública y Apertura Política en México. Siglo XXI. México, 1997. pags. 89-111.

⁸ Luis Rubio, “¿Es Gobernable el ‘Nuevo’ México?” *La Democracia Verdadera. Información, Ciudadanía y Política Pública*. Cal y Arena. México, 1998. pags. 83-104.

⁹ Lorenzo Meyer, “El Sistema Político y la Gobernabilidad Mexicana.” Samuel Schmidt (coord.), *La Capacidad de Gobernar en México*. Aguilar. México, 1997. pag. 72.

¹⁰ Antonio Camou, Sociedad Civil, Estado y Mercado en la Encrucijada: ¿Hacia una Nueva Cultura Política de la Gobernabilidad Democrática?”. *Sociedad Civil. Análisis y Debates*, no. 3, verano, 1998. pags. 43-65.

debe asumir que la instauración y funcionamiento de las instituciones democráticas no resuelve por sí sola los problemas de gobernabilidad, y que es impostergable la necesidad de fortalecer una cultura ciudadana que contribuya a instituir una nueva voluntad nacional y un orden político más plural.

Anexos

Anexo 1

World Values Survey

1990 QUESTIONNAIRE*

SHOW CARD A

Please say, for each of the following, how important it is in your life.

	<u>Very Important</u>	<u>Quite Important</u>	<u>Not Very Important</u>	<u>Not at all Important</u>	<u>DK</u>
V 4 A) Work	1	2	3	4	9
V 5 B) Family	1	2	3	4	9
V 6 C) Friends, acquaintances	1	2	3	4	9
V 7 D) Leisure time	1	2	3	4	9
V 8 E) Politics	1	2	3	4	9
V 9 F) Religion	1	2	3	4	9

NOTE: Throughout these surveys, "0" is used as a Not Ascertained (N.A.) code. With single-digit variables, "9" is also occasionally used as a N.A. code

* [INDICATES ITEMS ASKED IN BOTH 1981 and 1990 SURVEYS]

V 10 When you get together with your friends, would you say you discuss political matters frequently, occasionally or never?

- 1 Frequently
- 2 Occasionally
- 3 Never
- 9 Don't know

V 11 When you yourself, hold a strong opinion, do you ever find yourself persuading your friends, relatives or fellow workers to share your views? IF SO, does it happen often, from time to time, or rarely?

- 1 Often
- 2 From time to time
- 3 Rarely
- 4 Never
- 9 Don't know

SHOW CARD B

I am now going to read out some statements about the environment. For each one I read out, can you tell me whether you agree strongly, agree, disagree or strongly disagree? (READ OUT EACH STATEMENT AND CODE AN ANSWER FOR EACH)

	<u>Strongly Agree</u>	<u>Agree</u>	<u>Disagree</u>	<u>Strongly Disagree</u>	<u>DK</u>
V 12 A) I would give part of my income if I were certain that the money would be used to prevent environmental pollution	1	2	3	4	9
V 13 B) I would agree to an increase in taxes if the extra money is used to prevent environmental pollution	1	2	3	4	9
V 14 C) The Government has to reduce environmental pollution but it should not cost me any money	1	2	3	4	9
V 15 D) All the talk about pollution makes people too anxious	1	2	3	4	9
V 16 E) If we want to combat unemployment in this country, we shall just have to accept environmental problems	1	2	3	4	9
V 17 F) Protecting the environment and fighting pollution is less urgent than often suggested	1	2	3	4	9

V 18 Taking all things together, would you say you are...(READ OUT, REVERSING ORDER FOR ALTERNATE CONTACTS)

*

- 1 Very happy
- 2 Quite happy
- 3 Not very happy
- 4 Not at all happy
- 9 Don't know

SHOW CARD C

Please look carefully at the following list of voluntary organisations and activities and say...

a) which, if any, do you belong to?

(CODE ALL 'YES' ANSWERS UNDER (a))

b) which, if any, are you currently doing unpaid voluntary work for?

(CODE ALL 'YES' ANSWERS UNDER (b))

	(a) <u>Belong to</u>	(b) <u>Do unpaid</u> <u>work for</u>
V 19 A) Social welfare services for elderly, handicapped or deprived people	1	V 37 1
V 20 B) Religious or church organisations	1	V 38 1
V 21 C) Education, arts, music or cultural activities	1	V 39 1
V 22 D) Trade unions	1	V 40 1
V 23 E) Political parties or groups	1	V 41 1
V 24 F) Local community action on issues like poverty, employment, housing, racial equality	1	V 42 1
V 25 G) Third world development or human rights	1	V 43 1
V 26 H) Conservation, the environment, ecology	1	V 44 1
V 27 I) Professional associations	1	V 45 1
V 28 J) Youth work (e.g. scouts, guides, youth clubs, etc.)	1	V 46 1
V 29 K) Sports or recreation	1	V 47 1
V 30 L) Women's groups	1	V 48 1
V 31 M) Peace movement	1	V 49 1
V 32 N) Animal rights	1	V 50 1
V 33 O) Voluntary organisations		

concerned with health	1	V 51 1
V 34 P) Other groups	1	V 52 1
V 35 None	1	V 53 -
V 36 Don't know	9	V 54 -

For V19 to V54, "1" indicates "mentioned, "2" indicates "not mentioned." The Chinese questionnaire translated "Trade Unions" (V22 and V40) as "Trading Associations," which was chosen by very few people. "Professional Associations" was translated as "occupational organizations," which evokes the (government-sponsored) labor unions; thus, for China, V27 is functionally equivalent to V22.

The Swiss survey used the phrase, "charitable organization," for "social welfare services" in V19 and V37.

SHOW CARD D

Thinking about your reasons for doing voluntary work, please use the following five-point scale to indicate how important each of the reasons below have been in your own case. (WHERE 1 IS UNIMPORTANT AND 5 IS VERY IMPORTANT)

	<u>Unimportant</u>				<u>Very Important</u>	<u>DK</u>
V 55 A) A sense of solidarity with the poor and disadvantaged	1	2	3	4	5	9
V 56 B) Compassion for those in need	1	2	3	4	5	9
V 57 C) An opportunity to repay something, give something back	1	2	3	4	5	9
V 58 D) A sense of duty, moral obligation	1	2	3	4	5	9
V 59 E) Identifying with people who were suffering	1	2	3	4	5	9
V 60 F) Time on my hands, wanted something worthwhile to do	1	2	3	4	5	9
V 61 G) Purely for personal satisfaction	1	2	3	4	5	9
V 62 H) Religious beliefs	1	2	3	4	5	9
V 63 I) To help give disadvantaged people hope and dignity	1	2	3	4	5	9

V 64 J) To make a contribution to my local community	1	2	3	4	5	9
V 65 K) To bring about social or political change	1	2	3	4	5	9
V 66 L) For social reasons, to meet people	1	2	3	4	5	9
V 67 M) To gain new skills and useful experience	1	2	3	4	5	9
V 68 N) I did not want to, but could not refuse	1	2	3	4	5	9

SHOW CARD E

On this list are various groups of people. Could you please sort out any that you would not like to have as neighbours? (CODE AN ANSWER FOR EACH)

*

	<u>Mentioned</u>	<u>Not Mentioned</u>
V 69 A) People with a criminal record	1	2
V 70 B) People of a different race	1	2
V 71 C) Left wing extremists	1	2
V 72 D) Heavy drinkers	1	2
V 73 E) Right wing extremists	1	2
V 74 F) People with large families	1	2
V 75 G) Emotionally unstable people	1	2
V 76 H) Muslims	1	2
V 77 I) Immigrants/foreign workers	1	2
V 78 J) People who have AIDS	1	2
V 79 K) Drug addicts	1	2
V 80 L) Homosexuals	1	2
V 81 M) Jews	1	2

V 82 N) Hindus 1 2
The Slovenian survey and the Lithuanian, Latvian and Estonian surveys asked about "Gypsies," rather than "Hindus," in V82. The surveys in the Baltic countries asked about "extremists" (not Left-wing extremists) in V71, and about "people of other nationalities" in V73.

V 83 All in all, how would you describe your state of these days? Would you say it is...
 (READ OUT REVERSING ORDER FOR ALTERNATE CONTACTS)

- *
- 1 Very good
 - 2 Good
 - 3 Fair
 - 4 Poor
 - 5 Very poor
 - 9 Don't know

We are interested in the way people are feeling these days. During the past few weeks, did you ever feel...(READ OUT AND MARK ONE CODE FOR EACH STATEMENT)

*

	YES	NO
V 84 A) Particularly excited or interested in something	1	2
V 85 B) So restless you couldn't sit long in a chair	1	2
V 86 C) Proud because someone had complimented you on something you had done	1	2
V 87 D) Very lonely or remote from other people	1	2
V 88 E) Pleased about having accomplished something	1	2
V 89 F) Bored	1	2
V 90 G) On top of the world/feeling that life is wonderful	1	2
V 91 H) Depressed or very unhappy	1	2
V 92 I) That things were going your way	1	2
V 93 J) Upset because somebody criticized you	1	2

V 94 Generally speaking, would you say that most people can be trusted or that you can't be too careful in dealing with people?

- *
- 1 Most people can be trusted

- 2 Can't be too careful
- 9 Don't know

SHOW CARD F

V 95 Some people feel they have completely free choice and control over their lives, and other people feel that what they do has no real effect on what happens to them. Please use the scale to indicate how much freedom of choice and control you feel you have over the way your life turns out.

*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
None at all								A great deal	
DK = 99									

SHOW CARD G

V 96 All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days? Please use this card to help with your answer.

*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dissatisfied								Satisfied	
DK = 99									

SHOW CARD H

V 97 Why are there people in this country who live in need? Here are four possible reasons. Which one reason do you consider to be most important? (CODE ONE UNDER (a) BELOW) And which reason do you consider to be the second most important? (CODE ONE UNDER (b) BELOW)

	V 97 (a) Most <u>important</u>	V 98 (b) Second most <u>important</u>
Because they are unlucky	1	1
Because of laziness and lack of will power	2	2
Because there is injustice in our society	3	3
It's an inevitable part of modern progress	4	4
None of these	5	5
Don't know	9	9

India only: additional codes 6 and 8 refer to ascetic and religious motivations.

SHOW CARD I

Here are some aspects of a job that people say are important. Please look at them and tell me which ones you personally think are important in a job? (CODE ALL MENTIONED)

	Not <u>Mentioned</u>	<u>Mentioned</u>
V 99 A) Good pay	1	2
V 100 B) Pleasant people to work with	1	2
V 101 C) Not too much pressure	1	2
V 102 D) Good job security	1	2
V 103 E) Good chances for promotion	1	2

V 104	F) A job respected by people in general	1	2
V 105	G) Good hours	1	2
V 106	H) An opportunity to use initiative	1	2
V 107	I) A useful job for society	1	2
V 108	J) Generous holidays	1	2
V 109	K) Meeting people	1	2
V 110	L) A job in which you feel you can achieve something	1	2
V 111	M) A responsible job	1	2
V 112	N) A job that is interesting	1	2
V 113	O) A job that meets one's abilities	1	2
V 114	None of these	1	2

ASK ALL WORKING OTHERS SKIP TO V 118

How much pride, if any, do you take in the work that you do? READ OUT

*

- V 115 1 A great deal
 2 Some
 3 Little
 4 None
 9 Don't know

SHOW CARD J

Overall, how satisfied or dissatisfied are you with your job?

*

V 116	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dissatisfied								Satisfied	
	DK = 99									

SHOW CARD K

How free are you to make decisions in your job? Please use this card to indicate how much decision-making freedom you feel you have.

*

V 117	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	None at all								A great deal	
	DK = 99									

ASK ALL

SHOW CARD L

Here are some statements about why people work. Irrespective of whether you have a job, or not, which of them comes closest to what you think?

	<u>Mentioned</u>	<u>Not Mentioned</u>	
V 118	1	2	Work is like a business transaction.

V119	1	2	The more I get paid, the more I do; the less I get paid, the less I do I will always do the best I can, regardless
V 120	1	2	Working for a living is a necessity; I wouldn't work if didn't have to
V 121	1	2	I enjoy working but I don't let it interfere with the rest of my life
V 122	1	2	I enjoy my work; it's the most important thing in my life
V 123	1	2	I never had a paid job
V 124	1	2	Don't know

Imagine two secretaries, of the same age, doing practically the same job. One finds out that the other earns \$50 COUNTRIES OTHER THAN U.K.: Please use own currency a week more than she does. The better paid secretary, however, is quicker, more efficient and more reliable at her job. In your opinion, is it fair or not fair that one secretary is paid more than the other?

*

- V 125 1 Fair
2 Unfair
9 Don't know

SHOW CARD M

There is a lot of discussion about how business and industry should be managed. Which of these four statements comes closest to your opinion? (CODE ONE ONLY)

*

- V 126 1 The owners should run their business or appoint the managers
2 The owners and the employees should participate in the selection of managers
3 The government should be the owner and appoint the managers
4 The employees should own the business and should elect the managers
9 Don't know

SHOW CARD N

People have different ideas about following instructions at work. Some say that one should follow instructions of one's superiors even when one does not fully agree with them. Others say that one should follow one's superior's instructions only when one is convinced that they are right. With which of these two opinions do you agree?

*

- V 127 1 Should follow instructions
2 Depends
3 Must be convinced first
9 Don't know

Do you agree or disagree with the following statements?

Agree Neither Disagree DK

V 128	A) When jobs are scarce, men have more right to a job than women	1	2	3	9
V 129	B) When jobs are scarce, people should be forced to retire early	1	2	3	9
V 130	C) When jobs are scarce, employers should give priority to British countries other than U.K.: please substitute your nationality people over immigrants	1	2	3	9
V 131	D) It is unfair to give work to handicapped people when able-bodied people can't find jobs	1	2	3	9

SHOW CARD O

How satisfied are you with the financial situation of your household?

*

V 132	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dissatisfied								Satisfied	
	DK = 99									

How often, if at all, do you think about the meaning and purpose of life? (READ OUT IN REVERSE ORDER FOR ALTERNATE CONTACTS)

*

- V 133
- 1 Often
 - 2 Sometimes
 - 3 Rarely
 - 4 Never
 - 9 Don't know

Do you ever think about death? Would you say ...

- V 134
- 1 Often
 - 2 Sometimes
 - 3 Rarely
 - 4 Never
 - 9 Don't know

I am going to read out a list of statements about the meaning of life. Please indicate whether you agree or disagree with each of them. (READ OUT IN REVERSE ORDER FOR ALTERNATE CONTACTS)

Agree Disagree Neither DK

- V 135 A) Life is meaningful only

	because God exists	1	2	3	9
V 136	B) The meaning of life is that you try to get the best out of it	1	2	3	9
V 137	C) Death is inevitable, it is pointless to worry about it	1	2	3	9
V 138	D) Death has a meaning only if you believe in God	1	2	3	9
V 139	E) If you have lived your life, death is a natural resting point	1	2	3	9
V 140	F) In my opinion, sorrow and suffering only have meaning if you believe in God	1	2	3	9
V 141	G) Life has no meaning	1	2	3	9

SHOW CARD P

Here are two statements which people sometimes make when discussing good and evil. Which one comes closest to your own point of view?

*

- V 142 A. There are absolutely clear guidelines about what is good and evil. These always apply to everyone, whatever the circumstances.
 B. There can never be absolutely clear guidelines about what is good and evil. What is good and evil depends entirely upon the circumstances at the time.
 C. There are absolutely clear guidelines about what is good and evil. These always apply to everyone, whatever the circumstances.

- 1 Agree with statement A
 2 Disagree with both
 3 Agree with statement B
 9 Don't know

V 143 a) Do you belong to a religious denomination?

*

- 1 Yes - GO TO b)
 2 No - GO TO c)

b) (IF YES) Which one? (CODE UNDER (b) BELOW)

c) (IF NO) Were you ever a member of a religious denomination? Which one? (CODE UNDER (c) BELOW)

V 144 (b)

V 145 (c)

Religious
Denomination

Before

Roman Catholic	1	1
Mainline Protestant	2	2
Fundamentalist Protestant	3	3
Jew	4	4
Muslim	5	5
Hindu	6	6
Buddhist	7	7
Other	8	8
Never	-	0
No answer	9	9

NOTE: Japan, South Korea and many East European countries used different codes from these. For these and other deviations from the above, see V144 and V145 in section on NATION-SPECIFIC CODES.

ASK ALL

V 146 Were you brought up religiously at home?

- 1 Yes
- 2 No

SHOW CARD Q

V 147 Apart from weddings, funerals and christenings, about how often do you attend religious services these days?

*

- 1 More than once a week
- 2 Once a week
- 3 Once a month
- 4 Christmas/Easter day
- 5 Other specific holy days
- 6 Once a year
- 7 Less often
- 8 Never, practically never

Do you personally think it is important to hold a religious service for any of the following events?

	<u>Yes</u>	<u>No</u>	<u>DK</u>
V 148 A) Birth	1	2	9
V 149 B) Marriage	1	2	9
V 150 C) Death	1	2	9

Independently of whether you go to church or not, would you say you are...(READ OUT REVERSING ORDER)

*

V 151 1 A religious person

- 2 Not a religious person
- 3 A convinced atheist
- 9 Don't know

Generally speaking, do you think that your church is giving, in your country, adequate answers to ... (READ OUT AND CODE ONE ANSWER FOR EACH)

*

	<u>YES</u>	<u>NO</u>	<u>DK</u>
V 152 A) The moral problems and needs of the individual	1	2	9
V 153 B) The problems of family life	1	2	9
V 154 C) People's spiritual needs	1	2	9
V 155 D) The social problems facing our country today	1	2	9

Do you think it is proper for churches to speak out on:

	<u>YES</u>	<u>NO</u>	<u>DK</u>
V 156 A) Disarmament	1	2	9
V 157 B) Abortion	1	2	9
V 158 C) Third World problems	1	2	9
V 159 D) Extramarital affairs	1	2	9
V 160 E) Unemployment	1	2	9
V 161 F) Racial discrimination	1	2	9
V 162 G) Euthanasia	1	2	9
V 163 H) Homosexuality	1	2	9
V 164 I) Ecology and environmental issues	1	2	9
V 165 J) Government policy	1	2	9

Which, if any, of the following do you believe in? (READ OUT AND CODE ONE ANSWER FOR EACH)

*

	<u>YES</u>	<u>NO</u>	<u>DK</u>
V 166 A) God	1	2	9
V 167 B) Life after death	1	2	9
V 168 C) A soul	1	2	9
V 169 D) The Devil	1	2	9
V 170 E) Hell	1	2	9
V 171 F) Heaven	1	2	9
V 172 G) Sin	1	2	9
V 173 H) Resurrection of the dead	1	2	9
V 174 I) Re-incarnation	1	2	9

SHOW CARD R

*

- V 181 1 Married
- 2 Living as married
- 3 Divorced
- 4 Separated
- 5 Widowed
- 6 Single

Have you been married before?

- V 182 1 Yes - more than once
- 2 Yes - only once
- 3 No - never

NOTE: In the 1990 Dutch survey, V 182 was worded as: "How often have you been married?" 1= once, 2=more than once, 3=more than twice. This question gave rise to confusion in many countries; it was not clear whether being married before meant "have you ever been married?" or "have you ever been married before your present marriage?"

ASK ALL EXCEPT SINGLES

Do (did) you and your partner share any of the following?
(READ OUT AND CODE ALL MENTIONED)

*

- V 183 1 Attitudes towards religion
- V 184 1 Moral attitudes
- V 185 1 Social attitudes
- V 186 1 Political attitudes
- V 187 1 Sexual attitudes
- V 188 1 None of these
- V 189 1 Don't know

For V183-V196, code "2" indicates "not mentioned."

ASK ALL

And how about your parents? Do (did) you and your parents share any of the following?
(READ OUT AND CODE ALL MENTIONED)

*

- V 190 1 Attitudes towards religion
- V 191 1 Moral attitudes
- V 192 1 Social attitudes
- V 193 1 Political attitudes
- V 194 1 Sexual attitudes
- V 195 1 None of these
- V 196 1 Don't know

If someone said that individuals should have the chance to enjoy complete sexual freedom without being restricted, would you tend to agree or disagree?

*

- V 197 1 Tend to agree
2 Neither/it depends
3 Tend to disagree
9 Don't know

SHOW CARD U

Here is a list of things which some people think make for a successful marriage. Please tell me, for each one, whether you think it is very important, rather important or not very important for a successful marriage:

*	<u>Very Important</u>	<u>Rather Important</u>	<u>Not very Important</u>
V 198 A) Faithfulness	1	2	3
V 199 B) An adequate income	1	2	3
V 200 C) Being of the same social background	1	2	3
V 201 D) Mutual respect and appreciation	1	2	3
V 202 E) Shared religious beliefs	1	2	3
V 203 F) Good housing	1	2	3
V 204 G) Agreement on politics	1	2	3
V 205 H) Understanding and tolerance	1	2	3
V 206 I) Living apart from your in-laws	1	2	3
V 207 J) Happy sexual relationship	1	2	3
V 208 K) Sharing household chores	1	2	3
V 209 L) Children	1	2	3
V 210 M) Tastes and interests in common	1	2	3

Have you had any children? IF YES, how many?

*

- V 211
0 No child - skip to V 213
1 1 child
2 2 children
3 3 children
4 4 children
5 5 children
6 6 children or more
9 No answer

How many of them are still living at home?

- V 212
0 No child

- 1 1 child
- 2 2 children
- 3 3 children
- 4 4 children
- 5 5 children
- 6 6 children or more
- 9 No answer

ASK ALL

What do you think is the ideal size of the family - how many children, if any?

*

V 213

- 0 None
- 1 1 child
- 2 2 children
- 3 3 children
- 4 4 children
- 5 5 children
- 6 6 children
- 7 7 children
- 8 8 children
- 9 9 children
- 10 10 or more
- 99 Don't know

If someone says a child needs a home with both a father and a mother to grow up happily, would you tend to agree or disagree?

*

- V 214
- 1 Tend to agree
 - 2 Tend to disagree
 - 9 Don't know

(South Korean 1981 survey contains one undocumented code "4")

Do you think that a woman has to have children in order to be fulfilled or is this not necessary?

V 215

- 1 Needs children
- 2 Not necessary
- 3 Don't know (in some countries)
- 9 Don't know (in other countries)

Do you agree or disagree with the following statement? (READ OUT)

*

- | | YES | NO | DK |
|--|-----|----|----|
| V 216 Marriage is an out-dated institution | 1 | 2 | 9 |

If a woman wants to have a child as a single parent but she doesn't want to have a stable relationship with a man, do you approve or disapprove?

*

- V 217 1 Approve
 2 Depends
 3 Disapprove
 9 Don't know

SHOW CARD V

People talk about the changing roles of men and women today. For each of the following statements I read out, can you tell me how much you agree with each. Please use the responses on this card.

	Strongly <u>Agree</u>	<u>Agree</u>	<u>Disagree</u>	Strongly <u>Disagree</u>	<u>DK</u>
V 218 A) A working mother can establish just as warm and secure a relationship with her children as a mother who does not work	1	2	3	4	9
V 219 B) A pre-school child is likely to suffer if his or her mother works	1	2	3	4	9
V 220 C) A job is alright but what most women really want is a home and children	1	2	3	4	9
V 221 D) Being a housewife is just as fulfilling as working for pay	1	2	3	4	9
V 222 E) Having a job is the best way for a woman to be an independent person	1	2	3	4	9
V 223 F) Both the husband and wife should contribute to household income	1	2	3	4	9

SHOW CARD W

With which of these two statements do you tend to agree? (CODE ONE ANSWER ONLY)

*

V 224

- A. Regardless of what the qualities and faults of one's are, one must always love and respect them
- B. One does not have the duty to respect and love parents who have not earned it by their behaviour and attitudes

1 Tend to agree with statement A

2 Tend to agree with statement B

9 Don't know

SHOW CARD X

Which of the following statements best describes your views about parents' responsibilities to their children? (CODE ONE ONLY)

*

V 225

1 Parents' duty is to do their best for their children even at the expense of their own well-being

2 Neither

3 Parents have a life of their own and should not be asked to sacrifice their own well-being for the sake of their children

9 Don't know

SHOW CARD Y

Here is a list of qualities which children can be encouraged to learn at home. Which, if any, do you consider to be especially important? Please choose up to five. (CODE FIVE ONLY)

*

	<u>IMPORTANT</u>
V 226 A) Good manners	1
V 227 B) Independence	1
V 228 C) Hard work	1
V 229 D) Feeling of responsibility	1
V 230 E) Imagination	1
V 231 F) Tolerance and respect for other people	1
V 232 G) Thrift, saving money and things	1
V 233 H) Determination, perseverance	1
V 234 I) Religious faith	1
V 235 J) Unselfishness	1
V 236 K) Obedience	1

SHOW CARD Z

Do you approve or disapprove of abortion under the following circumstances?

*

	<u>Approve</u>	<u>Disapprove</u>
V 237 A) Where the mother's health is at risk by the pregnancy	1	2
V 238 B) Where it is likely that the child would be born physically handicapped	1	2
V 239 C) Where the woman is not married	1	2
V 240 D) Where a married couple do not want to have any more children	1	2

How interested would you say you are in politics?

V 241 1 Very interested

2 Somewhat interested

- 3 Not very interested
- 4 Not at all interested
- 9 Don't know

The Swiss survey asked about interest in international politics, national politics, regional politics and community politics. Responses to the question about community politics (which showed the highest levels of interest) were used here.

SHOW CARD AA

Now I'd like you to look at this card. I'm going to read out some different forms of political action that people can take, and I'd like you to tell me, for each one, whether you have actually done any of these things, whether you might do it or would never, under any circumstances, do it.

*

	<u>Have Done</u>	<u>Might Do</u>	<u>Would Never Do</u>	<u>DK</u>
V 242 A) Signing a petition	1	2	3	9
V 243 B) Joining in boycotts	1	2	3	9
V 244 C) Attending lawful demonstrations	1	2	3	9
V 245 D) Joining unofficial strikes	1	2	3	9
V 246 E) Occupying buildings or factories	1	2	3	9

(For V242, the normal N.A. code is "0" but "8" was used in some countries)

SHOW CARD BB

V 247 Which of these two statements comes closest to your own opinion?

*

A. I find that both freedom and equality are important. But if I were to choose one or the other, I would consider personal freedom more important, that is, everyone can live in freedom and develop without hinderance.

B. Certainly both freedom and equality are important. But if I were to choose one or the other, I would consider equality more important, that is, that nobody is underprivileged and that social class differences are not so strong.

- 1 Agree with statement A
- 2 Agree with Neither/depends
- 3 Agree with statement B
- 9 Don't know

SHOW CARD CC

V 248 In political matters, people talk of "the left" and "the right." How would you place your views on this scale, generally speaking?

*

should have to take any job available or lose their unemployment benefits

should have the right to refuse a job they do not want

V 254

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DK = 99

E) Competition is good. It stimulates people to work hard and develop new ideas

Competition is harmful. It brings out the worst in people

V 255

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DK = 99

F) In the long run, hard work usually brings a better life

Hard work doesn't generally bring success -- it's more a matter of luck and connections

V 256

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DK = 99

G) People can only accumulate wealth at the expense of others

Wealth can grow so there's enough for everyone

SHOW CARD FF

There is a lot of talk these days about what the aims of this country should be for the next ten years. On this card are listed some of the goals which different people would give top priority. Would you please say which one of these you, yourself, consider the most important? CODE ONE ANSWER ONLY UNDER a BELOW

And which would be the next most important? CODE ONE ANSWER ONLY UNDER b BELOW

V 257

V 258

(a)

(b)

First

Second

Choice

Choice

Maintaining a high level of economic growth

1

1

Making sure this country has strong defence forces

2

2

Seeing that people have more to say about how things are done at their jobs and in their communities

3

3

Trying to make our cities and countryside more beautiful

4

4

Don't know 9 9

SHOW CARD GG

a) If you had to choose, which one of the things on this card would you say is most important? CODE ONE ANSWER ONLY

*

b) And which would be the next most important? CODE ONE ANSWER ONLY

*

	V 259 (a) First <u>Choice</u>	V 260 (b) Second <u>Choice</u>
Maintaining order in the nation	1	1
Giving people more to say in important government decisions	2	2
Fighting rising prices	3	3
Protecting freedom of speech	4	4
Don't know	9	9

SHOW CARD HH

a) Here is another list. In your opinion, which one of these is most important? CODE ONE ANSWER ONLY

b) And what would be the next most important? CODE ONE ANSWER ONLY

	V 261 (a) First <u>Choice</u>	V 262 (b) Second <u>Choice</u>
A stable economy	1	1
Progress toward a less impersonal and more humane society	2	2
Progress toward a society in which ideas count more than money	3	3
The fight against crime	4	4
Don't know	9	9

V 263 Of course, we all hope that there will not be another war, but if it were to come to that, would you be willing to fight for your country?

*

- 1 Yes
- 2 No
- 9 Don't know

SHOW CARD II

Here is a list of various changes in our way of life that might take place in the near future. Please tell me for each one, if it were to happen whether you think it would be a good thing, a bad thing, or don't you mind?

*

	<u>Good</u>	<u>Don't mind</u>	<u>Bad</u>
V 264 A) Less emphasis on money and material possessions	1	2	3
V 265 B) Decrease in the importance of work in our lives	1	2	3
V 266 C) More emphasis on the development of technology	1	2	3
V 267 D) Greater emphasis on the development of the individual	1	2	3
V 268 E) Greater respect for authority	1	2	3
V 269 F) More emphasis on family life	1	2	3
V 270 G) A simple and more natural lifestyle	1	2	3

V 271 In the long run, do you think the scientific advances we are making will help or harm mankind?

*

- 1 Will help
- 2 Some of each
- 3 Will harm
- 9 Don't know

SHOW CARD JJ

Please look at this card and tell me, for each item listed, how much confidence you have in them, is it a great deal, quite a lot, not very much or none at all? CODE ONE ANSWER FOR EACH ITEM -READ OUT REVERSING ORDER FOR ALTERNATE CONTACTS

	<u>A Great Deal</u>	<u>Quite A Lot</u>	<u>Not Very Much</u>	<u>None At All</u>
*				
V 272 A) The church	1	2	3	4
V 273 B) The armed forces	1	2	3	4
V 274 C) The education system	1	2	3	4
V 275 D) The legal system	1	2	3	4
V 276 E) The press	1	2	3	4
V 277 F) Trade unions	1	2	3	4
V 278 G) The police	1	2	3	4
V 279 H) Parliament	1	2	3	4
V 280 I) Civil service	1	2	3	4
V 281 J) Major companies	1	2	3	4

V 282 K) The social security system	1	2	3	4
V 283 L) TV/European Community	1	2	3	4
V 284 M) NATO	1	2	3	4
V 285 N) The [Mexican]* political system	1	2	3	4

In West European countries and China, V283 refers to the European Community; elsewhere, it refers to TV newscasters.

The item concerning NATO (V284) was not asked in some countries.

In Slovenia, V280 "Civil service" was worded as "Local administration," to distinguish it from Yugoslav authority.

In Lithuania, Latvia and Estonia, the following changes were made: V276= this republic's (Lithuanian, etc.) mass media; V279=this republic's parliament; V281=cooperatives; V283 the People's Front [Baltic independence movement]; V284=this republic's government; V285=government of the USSR. In Russia, substitutions were made for V279-V285: V279=Parliament (USSR); V281=Government (USSR); V282=Parliament (Russia); V283=TV; V284=Government (Russia); V285=Soviet political system.

On this card are listed some things people have said make them proud of the [U.S.]* Do any of these things make you proud of this country?

...Is there anything else?

...And is there anything else? [CODE UP TO TWO MENTIONS]

	V 286	V 287
	First	Second
	<u>Choice</u>	<u>Choice</u>
[American]* scientific achievements	1	1
The American political system	2	2
American sporting achievements	3	3
American culture and arts	4	4
American economic achievements	5	5
American health and welfare system	6	6
None of these things make me proud	7	7
DK	9	9

***substitute your nation for "U.S." or "American" or "Washington"**

In Spain (ASEP survey) only, the codes for V286-V287 were: 0=scientific achievements, 1=the political system, 2=sporting achievements, 3=culture and arts, 4=economic achievements, 5=health and welfare system, 6=Spain's history, 7=the language, 8=none, 9=D.K.

In China, the above codes were used, with the addition of code 8= "the long, long Chinese history."

V 288 Generally speaking, would you say that this country is run by a few big interests looking out for themselves, or that it is run for the benefit of all the people?

- 1 Run by a few big interests
- 2 Run for all the people
- 9 Don't know

V 289 How much do you trust the government in [Washington]* to do what is right? Do you trust it almost always, most of the time, only some of the time, or almost never?

- 1 Almost always
- 2 Most of the time
- 3 Only some of the time
- 4 Almost never

SHOW CARD KK

There are a number of groups and movements looking for public support. For each of the following movements, which I read out, can you tell me whether you approve or disapprove of this movement? READ OUT AND CODE ONE ANSWER FOR EACH Please use the responses on this card!

	<u>Approve</u>		<u>Disapprove</u>		
	<u>Strongly</u>	<u>Somewhat</u>	<u>Somewhat</u>	<u>Strongly</u>	<u>DK</u>
V 290 A) Ecology movement or nature protection	1	2	3	4	9
V 291 B) Anti-nuclear energy movement	1	2	3	4	9
V 292 C) Disarmament movement	1	2	3	4	9
V 293 D) Human rights movement at home or abroad	1	2	3	4	9
V 294 E) Women's movement	1	2	3	4	9
V 295 F) Anti-apartheid movement	1	2	3	4	9

SHOW CARD LL

Please tell me for each of the following statements whether you think it can always be justified, never be justified, or something in between, using this card. READ OUT STATEMENTS REVERSING ORDER FOR ALTERNATE CONTACTS. CODE ONE ANSWER FOR EACH STATEMENT

*

V 296 A) Claiming government benefits which you are not entitled to

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99

V 297 B) Avoiding a fare on public transport

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99

- V 298 C) Cheating on tax if you have the chance
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 299 D) Buying something you knew was stolen
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 300 E) Taking and driving away a car
belonging to someone else joyriding
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 301 F) Taking the drug marijuana or hashish
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 302 G) Keeping money that you have found
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 303 H) Lying in your own interest
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 304 I) Married men/women having an affair
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 305 J) Sex under the legal age of consent
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 306 K) Someone accepting a bribe in the
course of their duties
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
Never Always
DK = 99
- V 307 L) Homosexuality
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

	Never	Always DK = 99
V 308 M) Prostitution	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 309 N) Abortion	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 310 O) Divorce	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 311 P) Fighting with the police	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 312 Q) Euthanasia terminating the life of the incurably sick	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 313 R) Suicide	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 314 S) Failing to report damage you've done accidentally to a parked vehicle	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 315 T) Threatening workers who refuse to join a strike	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 316 U) Killing in self-defence	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99
V 317 V) Political assassinations	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Never	Always DK = 99

V 318 W) Throwing away litter in a public place

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 Never Always
 DK = 99

V 319 X) Driving under the influence of alcohol

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
 Never Always
 DK = 99

SHOW CARD MM

a) Which of these geographical groups would you say you belong to first of all?

b) And the next?

	V 320 (a) First	V 321 (b) Next
Locality or town where you live	1	1
State or region of country where you live	2	2
The U.S. as a whole	3	3
North America	4	4
The world as a whole	5	5
(see nation-specific codes)	6	6
Don't know	9	9

V 322 How proud are you to be British?
[substitute your own nationality for 'British']

*

- 1 Very proud
- 2 Quite proud
- 3 Not very proud
- 4 Not at all proud
- 9 Don't know

SHOW CARD NN

Now I want to ask you some questions about your outlook on life. Each card I show you has two contrasting statements on it. Using the scale listed, could you tell me where you would place your own view? 1 means you agree completely with the statement on the left, 10 means you agree completely with the statement on the right, or you can choose any number in between.

V 323 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK = 99
 A) One should be cautious about making major changes in life You will never achieve much unless you act boldly

V 324 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK = 99
 B) Ideas that have stood the test of time are generally best New ideas are generally better than old ones

V 325 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK = 99
 C) When changes occur in my life, I worry about the difficulties they may cause When changes occur in my life, I welcome the possibility that something new is beginning

SHOW CARD OO

A variety of characteristics are listed here. Could you take a look at them and select those which apply to you?

- V 326 A) I usually count on being successful in everything I do 1
- V 327 B) I enjoy convincing others of my opinion 1
- V 328 C) I often notice that I serve as a model for others 1
- V 329 D) I am good at getting what I want 1
- V 330 E) I own many things others envy me for 1
- V 331 F) I like to assume responsibility 1
- V 332 G) I am rarely unsure about how I should behave 1
- V 333 H) I often give others advice 1
- V 334 None of the above 1

(For V327-V334, code "2" indicates "not mentioned")

SHOW CARD PP

I am going to read out some statements about the government and the economy. For each one, could you tell me how much you agree or disagree? Please use the responses on this card.

	Agree	Agree	Neither	Disagree	Disagree	Don't
	<u>completely</u>	<u>somewhat</u>	<u>disagree</u>	<u>somewhat</u>	<u>completely</u>	<u>know</u>

V 335
 A) This country's economic system needs fundamental changes

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

V 336
 B) Our government should be made much more open to the public

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

V 337
 C) We are more likely to have a healthy economy if the government allows more freedom for individuals to do as they wish

1 2 3 4 5 6

V 338

D) If an unjust law were passed by the government I could do nothing at all about it

1 2 3 4 5 6

V 339

E) Political reform in this country is moving too rapidly

1 2 3 4 5 6

SHOW CARD QQ

I now want to ask you how much you trust various groups of people: Using the responses on this card, could you tell me how much you trust... READ OUT EACH AND CODE AN ANSWER FOR EACH

<u>Trust them completely</u>	<u>Trust them a little</u>	<u>Neither trust nor distrust them</u>	<u>Do not trust them very much</u>	<u>Do not trust them at all</u>	<u>Don't know</u>
------------------------------	----------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------	-------------------

V 340

a) Your family

1 2 3 4 5 9

V 341

b) The British (substitute your nationality for 'British') in general

1 2 3 4 5 9

V 342

c) Black Americans

1 2 3 4 5 9

V 343

d) Hispanic Americans

1 2 3 4 5 9

V 344

e) Canadians

1 2 3 4 5 9

V 345

f) Mexicans

1 2 3 4 5 9

V 346

g) Russians

1 2 3 4 5 9

V 347

h) Chinese

1 2 3 4 5 9

Here, as elsewhere, "0" indicates N.A.

Items c through h were asked in 15 of the 43 countries surveyed in 1990. The nationalities referred to in these items vary from country to country: items c and d indicate some important ethnic group within the given country; e and f indicate some neighboring nationality; g and h refer to the Americans, the Chinese or the Russians. See Nation-Specific Variables in ICSPR codebook for details.

V 348 Were you born in the United States [this country]?

1 Yes

No (If no): Where were you born?

2 Latin America

3 North America

4 Asia

5 Europe

6 Africa

7 Other

V 349 (If no) In what year did you come to the United States [to this country]?

1 Within past 2 years

2 Within past 3-5 years

3 6-10 years ago

4 11-15 years ago

5 More than 15 years ago

V 350 To which of the following groups do you belong above all? Just call out one of the letters on this card. SHOW CARD

1 [A] Above all, I am an Hispanic American

2 [B] Above all, I am a Black American

3 [C] Above all, I am a white American

4 [D] Above all, I am an Asian American

5 [E] I am an American first and a member of some ethnic group second

[the groups coded in V350 vary from country to country; see the NATION-SPECIFIC CODES in ICPSR for codes used in countries other than the U.S.]

V 351 If there were a general election tomorrow, which party would you vote for? If DON'T KNOW: Which party appeals to you most? [see NATION-SPECIFIC CODES in ICPSR for codes used in given countries]

V 352 And which party would be your second choice? [see NATION-SPECIFIC CODES for codes used in given countries]

DEMOGRAPHICS

V 353 Sex of respondent:

*

- 1 Male
- 2 Female

V 354 a) Can you tell me your date of birth, please

*

V 355 b) This means you are years old.

NOTE: The surveys carried out in Sweden, South Africa and the Baltic countries did not ascertain the respondent's exact age, but did provide a collapsed six-category age variable: see V404 in ICSPR codebook.

V 356 At what age did you or will you complete your full time education, either at school or at an institution of higher education? Please exclude apprenticeships. (WRITE IN AGE)

*

Except as noted, the following categories were used in all surveys (see NATION-SPECIFIC CODES in ICSPR codebook for exceptions):

0. N.A.
1. Completed formal education at 12 years of age or earlier
2. Completed education at 13 years of age
3. Completed education at 14
4. Completed education at 15
5. Completed education at 16
6. Completed education at 17
7. Completed education at 18
8. Completed education at 19
9. Completed education at 20
10. Completed education at 21 years of age or older
99. N.A., D.K.

V 357 Do you live with your parents?

*

- 1 Yes
- 2 No

V 358 Are you yourself employed now or not?

IF YES:

*

About how many hours a week? If more than one job: only for the main job

Has paid employment

1. 30 hours a week or more
2. Less than 30 hours a week
3. Self employed

If no paid employment

4. Retired/pensioned
5. Housewife not otherwise employed
6. Student
7. Unemployed
8. Other PLEASE SPECIFY

.....

b) In which profession/industry do you or did you work? If more than one job, the main job WRITE IN

*

What is/was your job there? WRITE IN AND CODE BELOW

*

The following codes were used in most countries (see NATION-SPECIFIC CODES in ICSPR codebook for exceptions):

V 359

- 1 Employer/manager of establishment with 10 or more employees
- 2 Employer/manager of establishment with less than 10 employees
- 3 Professional worker lawyer, accountant, teacher, etc
- 4 Middle level non-manual - office worker, etc.
- 5 Junior level non-manual - office worker, etc.
- 6 Foreman and supervisor
- 7 Skilled manual worker
- 8 Semi-skilled manual worker
- 9 Unskilled manual worker
- 10 Farmer: employer, manager on own account
- 11 Agricultural worker
- 12 Member of armed forces
- 13 Never had a job

V 360 Are you the chief wage earner?

*

- 1 Yes - GO TO V 363
- 2 No - GO TO V 361

3 Equal wage earner (treated as "Yes") - GO TO V363

V 361

a) Is the chief wage earner employed now or not?

- 1 Yes
- 2 No

b) In which profession/industry does/did he she work? WRITE IN

.....

V 362 b) What is/was his/her job? WRITE IN AND CODE BELOW

Most countries used the following codes (see **NATION-SPECIFIC CODES** in ICSPR codebook for exceptions):

- 1 Employer/manager of establishment with 10 or more employees
- 2 Employer/manager of establishment with less than 10 employees
- 3 Professional worker lawyer, accountant, teacher, etc.
- 4 Middle level non-manual - office worker, etc.
- 5 Junior level non-manual - office worker, etc.
- 6 Foreman and supervisor
- 7 Skilled manual worker
- 8 Semi-skilled manual worker
- 9 Unskilled manual worker
- 10 Farmer: employer, manager on own account
- 11 Agricultural worker
- 12 Member of armed forces
- 13 Never had a job

ASK ALL

SHOW INCOME CARD

V 363 Here is a scale of incomes and we would like to know in what group your household is, counting all wages, salaries, pensions and other incomes that come in. Just give the letter of the group your household falls into, before taxes and other deductions. (see **NATION-SPECIFIC CODES** in ICSPR codebook for categories):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L

No answer = 98

V 364 INTERVIEWER CODE BY YOURSELF

* Socio-economic status of respondent

Most countries used the following codes (see **NATION-SPECIFIC CODES** in ICSPR codebook for exceptions):

- 1 AB Upper, upper-middle class
- 2 C1 Middle, non-manual workers
- 3 C2 Manual workers - skilled, semi-skilled
- 4 DE Manual workers - unskilled, unemployed

V 365 a) Time at the end of the interview:

V 366 b) Total length of interview Hours Minutes

V 367 During the interview the respondent was

- 1 Very interested
- 2 Somewhat interested
- 3 Not very interested

a) Town where interview was conducted: _____

[code in ICSPR codebook]:

V 368 b) Size of town:

Most countries used the following codes (see NATION-SPECIFIC CODES for exceptions):

- 1 Under 2,000
- 2 2,000 - 5,000
- 3 5 - 10,000
- 4 10 - 20,000
- 5 20 - 50,000
- 6 50 - 100,000
- 7 100 - 500,000
- 8 500,000 and more

V 369 Ethnic group [code by observation]:

Unless otherwise noted, all countries used the following coding scheme:

- 1 Caucasian/white
- 2 Negro Black
- 3 South Asian Indian, Pakistani, etc.
- 4 East Asian Chinese, Japanese, etc.
- 5 Arabic
- 6 Other
- 9 N.A.

V 370 Region where the interview was conducted:

See nation-specific codes in ICSPR codebook. The following is the U.S. example:

- 1 New England
- 2 Middle Atlantic states
- 3 South Atlantic

- 4 East South Central
- 5 West South Central
- 6 East North Central
- 7 West North Central
- 8 Rocky Mountain states
- 9 Northwest
- 10 California

Anexo 2

Nota Técnica

FIELDWORK, SAMPLING, INDEPENDENT VARIABLES, WEIGHTING

The World Values Surveys provide a broader range of variation than has ever before been available for analyzing the values and attitudes of mass publics. The 1990-93 surveys were carried out in 43 societies representing almost 70 per cent of the world's population and covering the full range of variation, from societies with per capita incomes as low as \$300 per year, to societies with per capita incomes as high as \$30,000 per year; and from long-established democracies with market economies, to ex-socialist states and authoritarian states. The 1981-1984 surveys provide time series data for 22 of these societies, enabling us to analyze the changes in values and attitudes that took place during the years between the two sets of surveys.

The World Values Surveys grew out of a study launched by the European Values System Study Group (EVSSG) under the leadership of Jan Kerkhofs and Ruud de Moor, with an advisory committee consisting of Gordon Heald, Juan Linz, Elisabeth Noelle-Neumann, Jacques Rabier and Helene Riffault. In 1981, the EVSSG carried out surveys in ten West European societies; it evoked such widespread interest that it was replicated in 14 additional countries.

Findings from these surveys suggested that predictable cultural changes were taking place: many variables showing large intergenerational differences, and were strongly correlated with Postmaterialist values. To monitor possible changes, a new wave of surveys was designed,

building on findings from the first wave, but this time designed to be carried out globally. The second wave of surveys was designed and coordinated by the following steering committee: Ruud de Moor, chair; Karel Dobbelaere, Loek Halman, Stephen Harding, Felix Heunks, Ronald Inglehart, Jan Kerkhofs, Renate Koecher, Jacques Rabier and Noel Timms. Inglehart organized the surveys in non-European countries and in several East European countries.

Most of the first wave World Values surveys were carried out in Spring, 1981, but fieldwork for the South Korean survey took place in 1982 and fieldwork for the Argentine survey was in 1984. Similarly, most of the second wave surveys were carried out in 1990 but two (the Swiss and Polish surveys) completed their fieldwork in 1989; and two surveys (those in Russia and Turkey) were completed in early 1991, while another (in Slovenia) was carried out in early 1992 and still another (in Romania) was carried out in Spring, 1993.

Fieldwork and Principal Investigators for the 1990 Surveys

Survey organization, sample size, fieldwork period and the principal investigator for Mexico is shown below. If not otherwise noted, the investigator is affiliated with the institution that carried out fieldwork:

MEXICO -- Market and Opinion Research International [MORI de Mexico] (Mexico City) n=1531; May, 1990. Principal investigators, Miguel Basañez, Instituto Tecnológico Autónomo de México and Ronald Inglehart.

Sampling procedures

All of these surveys were carried out through face to face interviews, with universe consisting of all adult citizens, ages 18 and older, Representative national samples were interviewed in all cases except for sub-national surveys in Northern Ireland and the greater Moscow region (which was surveyed in addition to the entire Russian republic). The quality of the samples varies from country to country. Surveys in Western countries were carried out by professional survey organizations with a great deal of experience, most of them members of the Gallup chain. In other countries they were carried out by the respective national academies of sciences or university-based institutes, some of which had carried out few previous surveys.

Apart from the regional samples mentioned above, national samples were used except in the following cases: In Chile, the sample covers the central portion of the country, which contains 63% of the total population; the income level of this region is about 40% higher than the national average. In Argentina, sampling was limited to the urbanized central portion of the country, where about 70 per cent of the population is concentrated, and which also has above-average incomes. In India, the sample was stratified to allocate 90% of the interviews to urban areas and 10% to rural areas; and to have 90% of the respondents with literate respondents (who are slightly less than 50% of the population); in Nigeria, the fieldwork was limited to urban areas plus a sample of rural areas within 100 kilometers of an urban center; and in China the sample is 90 per cent urban. These samples have been weighted accordingly to make the samples replicate the national population parameters more closely.

Fieldwork was carried out by professional survey research organizations in all countries except South Korea and Turkey, where sampling was designed by faculty and interviewing was executed by students from Ewha University and Bogazici University, respectively. In most

countries, stratified multi-stage random sampling was used, with the samples being selected in two stages. First, a random selection of sampling locations was made ensuring that all types of location were represented in proportion to their population. Next, a random selection of individuals was drawn up. In Great Britain, Northern Ireland, Italy and the Republic of Ireland, individuals were selected from electoral rolls; in Slovenia they were selected from a central registry of citizens. In Norway, Sweden and Denmark, stratified random samples were interviewed, with response rates averaging 71%. The U.S. and Canada used stratified random samples, with three call backs. The Japanese used a stratified multi-stage random sample, drawing names from records maintained by local government agencies; completed interviews were obtained with 62 percent of the individuals drawn. In some countries, the final selection was made by quota sampling, with quotas assigned on the basis of sex, age, occupation and region, using census data as a guide to the distribution of each group in the population.

This project was a confederation of equal partners. It was carried out with very little central funding and hence, with little central control. In most countries, funding for fieldwork and analysis was obtained from local sources. Inevitably, the quality of fieldwork varies cross-nationally; and the problems are not restricted to low-income societies.

The samples from China, India, Nigeria undersample the illiterate and rural portions of the public and oversample the more educated and urban portions; the weight variable is designed to correct for this problem by giving greater weight to the less educated. The samples from both the U.S. and South Africa were stratified by race; the weight variable corrects for this. The Swiss survey is stratified by language group, producing a sample that overrepresents the French-speaking and Italian-speaking groups; it is weighted to obtain a nationally representative sample. The weight variable also corrects for obvious deviations from national population parameters in age and education in other countries. In most cases, the more highly educated are oversampled,

and are accordingly weighted less heavily than the less educated. In the 1990 Italian sample, however, the more educated are substantially undersampled, and are weighted more heavily to compensate for it.

As a rough generalization, the surveys from low income countries, and countries in which survey research is new, tend to be less accurate than those from richer countries and societies with long experience in carrying out survey research. Though there are some exceptions to this generalization, it reflects some rather intractable problems. Richer societies tend to have more accurate census information and other social records, better communications infrastructure, and a longer-established and better developed survey research infrastructure.

Although these data have numerous imperfections, our experience in analyzing them suggests that the results from most societies are in the right ball park, in global perspective. A variety of indications point to this conclusion. Figure 1 in the introduction provides one piece of evidence. It shows how the responses of the publics from these 43 societies compare with each other on the two major dimensions of cross-cultural variation (based on responses to scores of items). If there were a great deal of error in measurement, one might expect to find the various societies scattered more or less randomly across these two key dimensions of cross-cultural variation. But the actual results show a remarkably clear and coherent pattern, as is pointed out in more detail in the introduction to this sourcebook.

There are a number of additional indications that the findings from these surveys are at least in the right ball park. For the most part, when we can check our results against findings from other sources, they are reasonably consistent. Moreover, the pattern of internal correlations shows an excellent fit with theoretical expectations. For example, Postmaterialist values are more prevalent among the young than among the old in nearly all societies; but the strength of this relationship varies a good deal cross-culturally, being strong in those societies that have

experienced rapid economic growth during the past several decades, and weak or non-existent in those that have experienced little or no growth. This is true more broadly: the findings show remarkably coherent patterns in cross-level analyses. With a wide variety of variables, the values and attitudes of the respective publics show strong relationships with logically related macro-societal characteristics, from economic development level to political institutions. And, as the tables demonstrate, these beliefs and values are consistently related to the GNP per capita of the given societies in a pattern that is consistent with the implications of modernization theory. The overall pattern of cross-national differences is remarkably coherent.

The reader may wonder, To what extent does the set of 43 societies included in this study represent the world's population? While it clearly is not a random sample of the world's societies, it does cover about 70 % of the world's population: having limited resources available, we made, a major effort to include the world's most populous societies, and accordingly have under sampled the mini-states. Thus, while the societies that were omitted probably do differ to some extent from those included here, the distribution of beliefs and values in the world as a whole could not differ very radically from those found here, since most of the world's population is included here. One of the most striking and important findings that emerges from this study is the fact that there are sizeable and systematic differences between the values and beliefs of the peoples of rich, as compared with poor, societies. This gives us some indication of what we might expect to find in given societies that were not included.

Copies of the original questionnaires used in the various societies can be obtained from the ICPSR survey data archive at the Institute for Social Research, University of Michigan.

Independent and weighting variables

The independent variables used for cross tabulation were gender, age, education, income, political affinity and materialist-postmaterialist values. With the exception of the variable **gender**, with which the original codes 1="male" and 2="female" were used (the marginals being 49% and 51 % respectively), all other variables were recoded and collapsed into three categories.

The variable **age** was constructed from variable V355 (age in years). Collapsing V355 into three categories was a straightforward process shown by the category labels themselves. Thus code 1=" 16-29" includes categories 16 through 29 from V355; code 2="30-49" includes categories 30 through 49 from V355; and code 3=50+ includes categories 50 through 99 from V355. Any other original codes were treated as missing data. Marginals for the constructed variable **age** are:

16-29 = 28% 30-49 = 41 % 50+ = 31%

The variable **education** was constructed from V356 or V375 depending upon the country. A single variable **education** was constructed for most countries from variable V356 (school leaving age) by collapsing the categories as follows: 1 ="lower" from categories 0 through 5; 2="medium" from categories 6 though 9; and 3="upper" from categories 10. Any other original original codes were treated as missing data.

The marginals for the constructed variable **education** are:

1 "Lower" 33%
2 "Medium" 41%

3 "Upper" 26%

The variable **income** was created from variable v363 (scale of household income), which is a ten point scale with 1=lower income and 10=upper income level. This scale was recoded for each nation into three categories: 1=Lower, 2=Middle; and 3=Upper. The criterion used for recoding was that each category would include a third of the sample as much as possible. Thus, by grouping the lower third, the middle third, and the upper third for each nation we would make our variable more cross-nationally comparable. The following are the codes that fall in each category for each nation:

Codes grouped in each category:

	Lower	Middle	Upper
Mexico	1-3	4-5	6-10

The variable **political affinity** was constructed from v248 ("Left-Right" self placement). Code 1=Left included categories 1 through 4; code 2=Center included categories 5 and 6; and code 3=Right included categories 7 through 10. The marginals for this variable are:

Left	27%
Center	46%
Right	27%

Anexo 3

Analisis Factorial: Estadísticos Finales

Correlation Matrix*

	firmar peticiones	manifestaciones pacificas	huelgas no autorizadas	ocupar edificios	propiedad negocios	actitud competencia	responsabilidad individuo o estado	respeto a los padres	respeto a la autoridad	importancia de fomentar la tolerancia en los niños
Correlation	firmar peticiones	.367	.338	.302	.069	.107	.001	-.034	-.078	.084
	manifestaciones pacificas	1.000	.560	.589	.039	.035	.012	-.152	-.137	-.015
	huelgas no autorizadas	.338	1.000	.687	.023	.017	.035	-.164	-.146	-.013
	ocupar edificios	.302	.589	.687	1.000	.040	-.001	-.012	-.143	-.053
	propiedad negocios	.069	.039	.023	.040	1.000	.296	-.029	-.071	-.017
	actitud competencia	.107	.035	.017	-.001	.296	1.000	.169	-.019	-.009
	responsabilidad individuo o estado	.001	.012	.035	-.012	.300	1.000	.049	.081	-.059
	respeto a los padres	-.034	-.152	-.164	-.143	-.029	.049	1.000	.110	.009
	respeto a la autoridad	-.078	-.137	-.146	-.138	-.071	-.009	.081	1.000	.005
	importancia de fomentar la tolerancia en los niños	.084	-.015	-.013	-.053	-.017	-.059	.009	.005	1.000

* Determinant = .195

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.722
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	2374.400
	df	45
	Sig.	.000

Communalities

	Initial	Extraction
firmar peticiones	1.000	.486
manifestaciones pacificas	1.000	.659
huelgas no autorizadas	1.000	.712
ocupar edificios	1.000	.712
propiedad negocios	1.000	.604
actitud competencia	1.000	.452
responsabilidad individuo o estado	1.000	.463
respeto a los padres	1.000	.362
respeto a la autoridad	1.000	.289
importancia de fomentar la tolerancia en los niños	1.000	.400

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	2.560	25.603	25.603	2.560	25.603	25.603	2.470	24.698	24.698
2	1.517	15.169	40.772	1.517	15.169	40.772	1.524	15.241	39.939
3	1.063	10.626	51.398	1.063	10.626	51.398	1.146	11.459	51.398
4	1.052	10.518	61.916						
5	.900	8.998	70.914						
6	.827	8.271	79.184						
7	.690	6.901	86.085						
8	.633	6.333	92.417						
9	.456	4.555	96.973						
10	.303	3.027	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
firmar peticiones	.565		.402
manifestaciones pacíficas	.808		
huelgas no autorizadas	.840		
ocupar edificios	.838		
propiedad negocios		.760	
actitud competencia		.664	
responsabilidad individuo o estado		.679	
respeto a los padres			.529
respeto a la autoridad			.458
importancia de fomentar la tolerancia en los niños			.627

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3
1	.968	.084	-.235
2	-.079	.996	.030
3	.237	-.011	.971

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Bibliografía

- A. Camp, Roderic (comp.). *Encuestas y Democracia: Opinión Pública y Apertura Política en México*. Siglo XXI. México, 1997.
- A. Camp, Roderic (ed.), *Mexico's Political Stability: The Next Five Years*. Westview Press. Boulder & London, 1986.
- A. Camp, Roderic, *La Política en México*. Siglo XXI. México, 1991.
- Acevedo, María Guadalupe, "Crisis del Desarrollismo y Transformación del Aparato Estatal: México 1970-1975", *Rev. Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, octubre-diciembre. México, 1975. pags. 133-163.
- Adler Hellman, Judith, "Mexican Popular Movements, Clientelism and the Process of Democratization." *Latin American Perspectives*, vol. 21, 1994.
- Adler-Lomnitz, Larissa, *Redes Sociales, Cultura y Poder: Ensayos de Antropología Latinoamericana*. Miguel Angel Porrúa. México, 1994.
- Aguilar Camín, Héctor, *Después del Milagro*. Cal y Arena. México, 1993.
- Aguilar Camín, Héctor, *Saldos de la Revolución. Cultura y Política de México: 1910-1980*. Nueva Imagen. México, 1982.
- Aguilar Villanueva, Luis, "Rasgos de la Vida Pública Mexicana." *Sociológica*, 1990. pags. 129-149.
- Agustín, José, *Tragicomedia Mexicana 3. La Vida en México de 1982 a 1994*. Planeta. México, 1998.
- Alcántara Sáez, Manuel, *Gobernabilidad Crisis y Cambio*. FCE. México, 1995.
- Alcántara Sáez, Manuel y Antonia Martínez (comps.), *México frente al Umbral del Siglo XXI*. Siglo XXI/CIS. Madrid, 1992.

- Alcocer, Jorge (coord.), *Elecciones, Diálogo y Reforma, vol. II*. Nuevo Horizonte Editores. México, 1994.
- Alexander, Jeffrey C. y Seidman Steven (eds.), *Culture and Society. Contemporary Debates*. Cambridge University Press, 1990.
- Almond, Gabriel y Verba Sidney (eds.), *The Civic Culture Revisited*. Sage. London, 1989.
- Almond, Gabriel (ed.), *Comparative Politics Today: A World View*. Little Brown, 1974.
- Almond, Gabriel y G. Bingham Powell Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Little Brown. Boston, 1966.
- Almond Gabriel y Verba Sidney, *The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press, 1963.
- Almond, Gabriel, "Comparative Political Systems." *Journal of Politics*, vol. 18, 1956. pags. 391-409.
- Alonso, Jorge (coord.), *Cultura Política y Educación Cívica*. Miguel Angel Porrúa. México, 1994.
- Alonso, Jorge, Alberto Azis y Jaime Tamayo (coords.), *El Nuevo Estado Mexicano IV vols*. Nueva Imagen. México, 1994.
- Anderson, Charles W. y William P. Glade Jr., *The Political Economy of Mexico*. University of Wisconsin Press. Madison, 1963.
- Arbós, Xavier y Giner Salvador, *La Gobernabilidad. Ciudadanía y Democracia en la Encrucijada Mundial*. Siglo XXI de España. Madrid, 1993.
- Arendt, Hannah, *La Condición Humana*. Paidós. Barcelona, 1993.
- Arendt, Hanna, *Sobre la Revolución*. Alianza Editorial. Madrid, 1988.

- Asa Berger, Arthur (comp.), *Political Culture and Public Opinion*. Transaction Publishers. New Jersey, 1989.
- Azis, Alberto y Jacqueline Peshard (coords.), *Las Elecciones Federales de 1991*. Miguel Angel Porrúa. México, 1992.
- Barry Carr, *La Izquierda Mexicana a Través del Siglo XX*. Era. México, 1996.
- Bartra, Roger, *Oficio Mexicano*. Grijalbo. México, 1993.
- Basañez, Miguel, "¿Para qué Sirven las Encuestas? La Experiencia Mexicana." *Este País*, enero, 1993. pag. 32.
- Basañez, Miguel, "Encuestas de Opinión en México." Carlos Bazdresch et. al. (comps.), *México. Auge, Crisis y Ajuste*. FCE. México, 1992. pags. 167-193.
- Basañez, Miguel, *El Pulso de los Sexenios. 20 Años de Crisis en México*. Siglo XXI. México, 1990.
- Beltrán, Ulises et. al., *Los Mexicanos de los Noventa*. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. México, 1996.
- Benson, Oliver, *El Laboratorio de Ciencia Política*. Amorrortu. Buenos Aires, 1974.
- Berntzen Einar y Selle Per, "Plaidoyer for the Restauration of the Concept of Political Culture or Bringing Political Culture Back In." *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 31, enero-abril, 1990. pags. 32-48.
- Bingham Powell, G, Jr., "Sistemas de Partidos y Funcionamiento del Sistema Político: Participación Electoral, Estabilidad Gubernamental y Violencia de las Masas en las Democracias Contemporáneas." *Rev. de Ciencia Política* no. 2, Instituto de Ciencia Política, Universidad Católica de Chile, 1983. pags. 41-74.
- Birch, Anthony H., "Overload, Ungovernability and Deligitimation: the Theories and the British Case." *British Journal of Political Science*, vol. 14, 1984. pags. 135-160.

- Bizberg, Ilán, "Legitimidad y Cultura Política: Una Discusión Teórica y una Revisión del Caso Mexicano." *Revista Mexicana de Sociología*, enero-marzo, 1997. pags. 3-18.
- Bizquera Alzina, Rafael, *Introducción Conceptual al Análisis Multivariable*. PPU. Barcelona, 1989.
- Blalock, Hubert, *Conceptualization and Measurement in the Social Sciences*. Sage. California, 1982.
- Blanco, José Joaquín y José Woldenberg (comps.), *México a Fines de Siglo. TII*. FCE. México, 1995.
- Boeninger, Edgar "La Gobernabilidad un Concepto Multidimensional." *Estudios Internacionales*, Universidad de Chile, enero-marzo, 1994. pags. 79-90.
- Both John, y Seligson Mitchell, "The Political Culture of Authoritarianism in Mexico: A Reexamination." *Latin American Research Review*, vol. XIX, 1984. pags. 106-124.
- Brachet Márquez, Vivian, *Estado, Clase y Reforma Social en México (1910-1995)*. El Colegio de México. México, 1996.
- Brachet-Márquez, Viviane, "Explaining Sociopolitical Change in Mexico: the Case of Mexico." *Latin American Research Review*, vol. 27, 1992. pags. 91-122.
- Brunner, José Joaquín, "La Cultura Política del Autoritarismo." *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 44, abril-junio, 1982. pags. 559-575.
- Burger, Thomas, *Max Weber's Theory of Concept Formation. History, Laws, and Ideal Types*. Duke University Press, 1987.
- C. Turner, Frederick, "La Validez de las Encuestas." *Este País*, diciembre, 1994.
- Calhoun, Craig (ed.), *Habermas and the Public Sphere*. MIT Press, 1996.

- Camou, Antonio, "Gobernabilidad y Democracia en Mexico. Avatares de una Transición Incierta." *Nueva Sociedad*, nov.-dic. Caracas, 1993. pags. 103-119.
- Camou, Antonio, "Gobernabilidad y Democracia. Once Tesis sobre la Transición Mexicana." *Nexos*, no. 170. México, 1992. pags. 55-65.
- Camou, Antonio, *Gobernabilidad y Democracia*. IFE. México, 1995.
- Campbell, A., G. Gurin, y W. E. Miller, *The Voter Decides*. Greenwood Press, 1954.
- Campbell, Angus, Philip Converse y W.E. Miller, *The American Voter*. Waley. New York, 1960.
- Cansino, César, "La 'Transición Política' en México: Dinámica y Perspectiva." *Estudios Políticos*, oct.-dic. México, 1991. pags. 7-41.
- Cansino, César, *Construir la Democracia. Límites y Perspectivas de la Transición en México*. Miguel Angel Porrúa. México, 1995.
- Carnero Arbat, Teresa (ed.), *Modernización, Desarrollo Político y Cambio Social*. Alianza Universidad. Madrid, 1992.
- Castellanos Hernández, Eduardo, *Formas de Gobierno y Sistema Electorales en México. 1940-1994*. Centro de Investigación Jorge Tamayo. México, 1996.
- Cavarozzi, Marcelo (coord.), *México en el Desfiladero. Los Años de Salinas*.
- Chartier, Roger, *Espacio Público, Crítica y Desacralización en el Siglo XVIII*. Gedisa. Barcelona, 1995.
- Chihu, Aquiles (coord.), *Sociología de la Cultura*. UAM Iztapalapa. México, 1995.
- Cline, Howard, *México: Revolution to Evolution, 1940-1960*. Oxford University Press, 1962.
- Coleman, Kenneth, *Public Opinion in Mexico City about the Electoral System*. University of North Carolina Press. Chapel Hill, 1972.

- Conway, Mary Margaret, "The Political Context of Political Behavior." *Journal of Politics*, vol. 51, febrero, 1989. pags. 3-10.
- Cook, María Lorena, Kevin Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas, *Las Dimensiones Políticas de la Reestructuración Económica*. Cal y Arena. México, 1996.
- Cordera Campos, Rolando et. al., *México: El Reclamo Democrático*. Siglo XXI. México, 1988.
- Córdova, Arnaldo, *La Revolución y el Estado en México*. Era. México, 1989.
- Córdova, Arnaldo et. al., *Interpretaciones de la Revolución Mexicana*. Nueva Imagen. México, 1988.
- Córdova, Arnaldo et. al., *La Clase Obrera en la Historia de México*. vol. 9. Siglo XXI. México, 1980.
- Cortés Guardado, Marco Antonio, "Normas y Valores de la Ciudadanía en México." *Diálogo y Debate de Cultura Política*, julio-septiembre. México, 1997. pags. 185-224.
- Cosío Villegas, Daniel, *El Sistema Político Mexicano*. Joaquín Mortiz. México, 1982.
- Couffignal, George (comp.), *Democracias Posibles. El Desafío Latinoamericano*. FCE. Buenos Aires, 1994.
- Crespo, José Antonio, "La Cultura Política después del 6 de julio." *Nueva Antropología*, vol. X, no. 35. México, 1989. pags. 29-38.
- Crespo, José Antonio, *Urnas de Pandora. Partidos Políticos y Elecciones en el Gobierno de Salinas*. Espasa Calpe. México, 1995.
- Crovi Druetta, Delia (coord.), *Cultura Política. Información y Comunicación de Masas*. México. Asociación Latinoamericana de Sociología, 1996.

Crozier, Michel, "The Ungovernability of Democracy." *The American Enterprise*, vol. 4, nov.-dic., 1993. pags. 28-33.

Cruces, Francisco, "Las Transformaciones de lo Público. Imágenes de Protesta en la Ciudad de México." *Perfiles Latinoamericanos* no. 12. Flacso, 1998. pags. 227-256.

Davis, Diane E., "Protesta Social y Cambio Político en México", *Rev. Mexicana de Sociología*. México, 1988. pags. 89-124.

Davis, Diane, "Failed Democratic Reform in Contemporary Mexico: from Social Movements to the State and Back Again." *Journal of Latin American Studies*, no. 26, 1994. pags. 375-408.

De la Peña, Guillermo, "La Cultura Política entre los Sectores Populares de Guadalajara." *Nueva Antropología*. México, 1990. pags. 83-107.

De Toqueville, Alexis, *El Antiguo Régimen y la Revolución*. FCE. México, 1996.

Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*. Allen & Unwin. London, 1983.

Diamond, Larry (ed.), *Political Culture and Democracy in Developing Countries*. Lynne Rienner Publishers. Boulder & London, 1993.

Díaz Arciniega, Víctor, "Calles: El Voluntarioso Circunspecto", *Historia Mexicana*. El Colegio de México. México, 1985. pags. 460-505.

Domínguez, Jorge y James McCann, *Democratizing Mexico. Public Opinion and Electoral Choices*. John Hopkins University Press. Baltimore, 1996.

Domínguez, Jorge y James McCann, "Shaping Mexico's Electoral Arena: The Construction of Partisan Cleavages in the 1988 and 1991 National Elections." *American Political Science Review*, vol. 89, no. 1, marzo, 1995. pags. 34-48.

Dornbusch, Rudiger y Edwards Sebastián (comps), *Macroeconomía del Populismo en América Latina*. FCE. México, 1992.

Dryzek, John S., "Opinion Research and the Counter-Revolution in American Political Science." *Political Studies*, vol. XL, 1992. pags. 679-694-

Ducantzenzeiler, Graciela y Philip Oxhorn, "Democracia, Autoritarismo y el Problema de la Gobernabilidad en América Latina." *Desarrollo Económico*, vol. 34, abril-junio. Buenos Aires, 1994. pags. 31-52.

Durand Ponte, Víctor Manuel, "La Cultura Política Autoritaria en México." *Revista Mexicana de Sociología*, 1995. pags. 67-103.

Durand Ponte, Víctor, "La Cultura Política en Nueve Ciudades Mexicana." *Revista Mexicana de Sociología*, enero-marzo, 1992. pags. 289-322.

Earl R. Babbie, *Survey Research Methods*. Wadsworth. California, 1973.

Eder, Klaus, "La Paradoja de la 'Cultura'. Más allá de una Teoría de la Cultura como Factor Consensual." *Zona Abierta*, nos. 77/78. Madrid, 1996-1997. pags. 95-126.

Elias, Norbert, *Compromiso y Distanciamiento*. Península. Barcelona, 1990.

Elias, Norbert, *La Sociedad de los Individuos*. Península. Barcelona. 1990.

Ellis, Richard, "Radical Lockeanism in American Political Culture." *Western Political Quarterly*, Vol. 45, diciembre, 1992. pags. 825-849.

Federico Reyes Heróles, "Sondear a México." *Este País*, julio, 1994.

Fernández, Paulina, "De la Libertad Ciudadana al Control Gubernamental. Historia Legal de los Candidatos Comunes y las Coaliciones Electorales (1946-1990)", *Estudios Políticos*, no. 8, octubre-diciembre. México, 1991. pags. 89-108.

Ferry, Jean-Marc et. al., *El Nuevo Espacio Público*. Gedisa. Barcelona, 1995.

- Flisfisch, Angel, "Gobernabilidad y Consolidación Democrática: Sugerencias para la Discusión." *Revista Mexicana de Sociología*, julio-sept., 1989. pags. 113-133.
- Florescano, Enrique (coord.), *Hacia una Moderna Cultura Nacional*. Cambio XXI/IEPES. México, s.f.
- Florescano, Enrique (coord.), *Mitos Mexicanos*. Aguilar. México, 1995.
- Foucault, Michel, *Genealogía del Racismo*. La Piqueta. Barcelona, 1992.
- Foweraker, Joe y Ann Craig (eds.), *Popular Movements and Political Change in Mexico*. Lynne Rienner. Boulder, 1990.
- Franco, Rolando, "Estado, Consolidación Democrática y Gobernabilidad en América Latina." *Revista Paraguaya de Sociología*, sept.-dic., 1990. pags. 141-161.
- Frei Ruiz-Tagle, Eduardo, *Gobernabilidad Democrática*. Andrés Bello. Santiago, 1997.
- Friedland, Roger, y Alford, Robert R., "La Sociedad Regresa al Primer Plano: Símbolos, Prácticas y Contradicciones Institucionales." *Zona Abierta*, nos. 63/64, Madrid, 1993. pags. 155-207.
- Garrido, Luis Javier, *El Partido de la Revolución Institucionalizada: La Formación del Nuevo Estado en México*. SEP/Siglo XXI. México, 1986.
- Geertz, Clifford, *La Interpretación de las Culturas*. Gedisa. Barcelona, 1992.
- Gentleman, Judit (ed.), *Mexican Politics in Transition*. Westview Press. Boulder and London, 1987.
- Gibbins, J. R. (ed.), *Contemporary Political Culture*. Sage. London, 1989.
- Gil Villegas, Francisco, "Cambio Constitucional en México Durante el Sexenio de Salinas de Gortari." *Foro Internacional*, enero-junio, 1996. El Colegio de México. pags. 158-187.

- Gómez Leopoldo y John Bailey, "La Transición Política y los Dilemas del PRI." *Foro Internacional*, julio-septiembre, 1990. pags. 57-87.
- Gómez Tagle, Silvia, *La Transición Inconclusa. Treinta Años de Elecciones en México*. El Colegio de México. México, 1997.
- González Casanova, Pablo y Héctor Aguilar Camín (coord.), *México ante la Crisis. El Impacto Social y Cultural. Las Alternativas*. Siglo XXI. México, 1985.
- González Pineda, Francisco, y Delhumeau Antonio, *Los Mexicanos Frente al Poder*. Instituto Mexicano de Estudios Políticos. México, 1973.
- González, Juliana y Josú Landa (coods.), *Los Valores Humanos en México*. Siglo XXI. México, 1997.
- Gordon, Sara, "Equidad y Justicia Social." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1995. pags. 175-184.
- Granados, Otto, "Estado y Rectoría del Desarrollo en México. Una Perspectiva Política", *México, Setenta y Cinco Años de Revolución. TI*. FCE. México, 1988.
- Guerra, François-Xavier, "The Spanish-American Tradition of Representation and its European Roots." *Journal of Latin American Studies*, vol. 26, 1994. pags. 1-35.
- Gutiérrez Espíndola, José Luis, "Opinión Pública, Identidades Políticas y Democracia." Seminario sobre Aproximaciones al estudio de la Cultura Política. IISUNAM-UAM Azcapotzalco. México, septiembre, 1990. pags. 1-25.
- Gutiérrez Garza, Esthela y Fernando Castañeda, *El Debate Nacional. Escenarios de la Democratización*. Diana. México, 1998.
- Gutierrez, Roberto, "Cultura Política y Transición a la Democracia. PRI y PRD en la Coyuntura Actual." *Sociológica*, sept.-dic., 1989. pags. 43-57.
- Haber, Paul Lawrence, *Collective Dissent in Mexico: The Politics of Contemporary Urban Popular Movements*. Ph.d Disertation, Columbia University ,1992.

Habermas, Jürgen, *Historia y Crítica de la Opinión Pública*. Gustavo Gili. Barcelona, 1994.

Habermas, Jürgen, *Moralidad, Ética y Política*. Alianza Editorial. México, 1993.

Habermas, Jürgen, *Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardío*. Buenos Aires. Amorrortu, 1986.

Hale, Charles A., "Los Mitos Políticos de la Nación Mexicana: El Liberalismo y la Revolución." *Historia Mexicana* no. 184, abril-junio, 1997. pags. 821-837.

Heredia, Blanca, "Estructura Política y Reforma Económica: El Caso de México." *Política y Gobierno*, CIDE, enero-junio, 1994. México, 1994. pags. 5-46.

Hernández Díaz, Sergio et. al., *El Proyecto Histórico del PNR. Tres Ensayos*. IEPES/El Día. México, 1990.

Hernández Medina, Alberto y Luis Narro Rodríguez (coords.), *Cómo somos los Mexicanos*. Centro de Estudios Educativos. México, 1987.

Hernández Rogelio, y Reyna José Luis, "El Riesgo de la Ingovernabilidad en México. Los Últimos Meses del Gobierno de Carlos Salinas." *Estudios Sociológicos*, 1994. pags. 515-532.

Hunt, Lynn (ed.), *The New Cultural History*. University of California Press, 1989.

Hunt, Lynn, *Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. University of California Press, 1984.

Huntington Samuel P., Crozier Michael y Watanuki Joji, *The Crisis of Democracy*. New York University Press, 1975.

Huntington Samuel P., y Moore Clement (eds.) *Authoritarian Politics in Modern Society*. Basic Books. New York, 1970.

Huntington, Samuel P, *El Orden Político en las Sociedades en Cambio*. Paidós. Buenos Aires, 1992.

- Huntington, Samuel, "Political Development and Political Decay." *World Politics*, no. 17, 1965. pags. 386-430.
- Inglehart, Ronald, "La Transformación de la Relación entre Desarrollo Económico y Cambio Cultural y Político." *Este País*, mayo, 1994. pags. 1-23.
- Inglehart, Ronald, "The Renaissance of Political Culture." *American Political Science Review*, vol. 82, diciembre, 1988. pags. 1203-1230.
- Jiménez Castillo, Manuel (coord.), *México: Una Sociedad en Cambio. Reflexiones Sobre Política y Cultura*. UAM-Azcapotzalco. México, 1994.
- Keane, John, *La Vida Pública y el Capitalismo Tardío*. Alianza Editorial. México, 1992.
- Knight, Alan, "México Bronco, México Manso: Una Reflexión sobre la Cultura Cívica Mexicana." *Política y Gobierno*, enero-junio. México 1996. pags. 5-30.
- Krotz, Esteban (coord.), *El Estudio de la Cultura Política en México. (Perspectivas Disciplinarias y Actores Políticos)*. Ciesas/Conaculta. México, 1996.
- Kymlicka, Will y Wayne Norman, "El Retorno del Ciudadano. Una Revisión de la Producción Reciente en Teoría de la Ciudadanía." *La Política*. Revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, no.3, octubre 1997. Barcelona, 1997. pags. 5-39.
- L. Glasser, Theodore y Charles T. Salmon (eds.), *Public Opinion and the Communication of Consent*. The Guilford Press. New York, 1995.
- Lajous, Alejandra, *Los Orígenes del Partido Único en México*. UNAM. México. 1979.
- Lane, Ruth, "Political Culture: Residual Category or General Theory?" *Comparative Political Studies*, vol. 25, octubre, 1992. pags. 362-387.
- Lazarsfeld, Paul, B. Berelson y H. Gaudet, *The People's Choice*. Columbia University Press, 1944.

- Lechner, Norbert, "Cultura Política y Gobernabilidad Democrática." *Leviatán* no. 68, verano 1997. pags. 75-85.
- Lechner, Norbert, "Los Nuevos Perfiles de la Política. Un Bosquejo." *Nueva Sociedad* no. 130, 1994. pags. 32-43.
- Lechner, Norbert, *Cultura Política y Gobernabilidad Democrática*. Instituto Federal Electoral. México, 1995.
- Lechner, Norbert, *Cultura Política y Democratización*. FLACSO. Santiago de Chile, 1987.
- Leftwich, Adrian (ed.), *New Developments in Political Science*. Elgar Publishing. London, 1990.
- Lindbeck, Assar, "Políticas de Estabilización en Economías Abiertas con Comportamiento Político Endógeno", *Revista Española de Economía*. Madrid, 1977. pags. 109-137.
- Linz, Juan, *Sociedad y Política en España*. Siglo XX. Madrid, 1963.
- Loeza Soledad, Lustig Nora, et. al., *México, Auge, Crisis y Ajuste*. FCE. México, 1992.
- Loeza Tovar, Soledad, "Cambios en la Cultura Política Mexicana: Surgimiento y Legitimación de una Derecha Moderna (1970-1988)." *Revista Mexicana de Sociología*, julio-septiembre, 1989. pags. 221-235.
- Loeza, Soledad, *El Llamado de las Urnas*. Cal y Arena. México, 1989.
- Lomnitz, Claudio, "Ritual, Rumor y Corrupción en la Formación del Espacio Nacional en México." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1996. pags. 21-51.
- Lomnitz-Adler, Claudio, *Las Salidas del Laberinto*. Joaquín Mortiz. México, 1995.

- López Panigua, Rosalía, y Torres Salcido Gerardo, "Entre el Autoritarismo y la Gestión Democrática. Cultura Política y Organización Social de los Pobres Urbanos." *Estudios Sociológicos*, enero-abril, 1994. pags. 183-203.
- Martin Lipset, Seymour, "Reconsideración de los Requisitos Sociales de la Democracia." *Este País*, México, mayo, 1995. pags. 2-18.
- Martin Lipset, Seymour, *El Hombre Político. Las Bases Sociales de la Política*. Buenos Aires. EUDEBA, 1977.
- Marván, Ignacio, "El Frente Popular en México durante el Cardenismo", *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. México, julio-septiembre, 1977. pags. 9-23.
- Medina, Luis, *Evolución Electoral en el México Contemporáneo*. Comisión Federal Electoral. México, 1978.
- Medina, Luis, *Historia de la Revolución Mexicana. 1940-1952. Civilismo y Modernización del Autoritarismo*. México. El Colegio de México, 1979.
- Merino Huerta, Mauricio (coord.), *Cambio Político y Gobernabilidad*. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública /CONACYT. México, 1992.
- Meyer, Lorenzo, "El Presidencialismo: Del Populismo al Neoliberalismo." *Revista Mexicana de Sociología*, no. 2, abril-junio de 1993. pags. 71-81.
- Meyer, Lorenzo, Rafael Segovia y Alejandra Lajous, *Historia de la Revolución Mexicana. Los Inicios de la Institucionalización Política del Maximato*. El Colegio de México. México, 1978.
- Millán, René, "Cultura de la Justicia y Cultura Política." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1995. pag. 164-170.

Millán, René, "Orden y Cultura Política en México." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1993. pags. 155-168.

Molinar Horcasitas, Juan, *El Tiempo de la Legitimidad*. Cal y Arena. México, 1993.

Montano Rodríguez, Rafael, *De Raza a Cultura: Un Acercamiento Crítico al Concepto de Mestizaje y Mexicanidad en Vasconcelos, Ramos, Paz y Fuentes*. Tesis de Maestría. Universidad de Montreal. Ann Arbor, Michigan, 1996.

Morris D., Stephen, *Corrupción y Política en el México Contemporáneo*. Siglo XXI. México, 1992.

Morris, Stephen D., *Political Reformism in Mexico*. Lynne Rienner. Boulder and London. 1995.

Muller N. Edward, y Seligson Mitchell A., "Civic Culture and Democracy: The Question of Causal Relationships," *American Political Science Review*, vol. 88, septiembre, 1994. pags. 635-652.

Nohlen, Dieter, *Democracia, Transición y Gobernabilidad en América Latina*. Instituto Federal Electoral. México, 1996.

Oliver Benson, *El Laboratorio de Ciencia Política*. Amorrortu. Buenos Aires, 1974.

Olvera Rivera, Alberto J., "El Concepto de Sociedad Civil en una Perspectiva Habermasiana." *Sociedad Civil. Análisis y Debates*, no. 1, vol. 1. México, 1996. pags. 31-44.

Pacheco, Guadalupe, "Urbanización, Elecciones y Cultura Política. El Distrito Federal de 1985 a 1988." *Estudios Sociológicos*, enero-abril, 1992. pags. 177-208.

Padgett, Vincent, *The Mexican Political System*. Houghton Mifflin. Boston, 1966.

Palma, Esperanza, y Gutierrez Roberto, "Sobre los Conceptos de Sistema y Cultura Política en México. (Para Pensar la Transición)" *Sociológica*, enero-abril, 1991. pags. 89-105.

Pansters, Wil G. (ed.), *Citizens of the Pyramid. Essays on Mexican Political Culture*. Thela Publishers. Amsterdam, 1997.

Parsons, Talcott, *El Sistema Social*. Alianza Editorial, Madrid, 1988.

Pérez Fernández del Castillo, Germán, Arturo Alvarado y Arturo Sánchez Gutiérrez (coords.), *La Voz de los Votos: Un Análisis Crítico de las Elecciones de 1994*. Miguel Angel Porrúa. México, 1995.

Pérez Fernández del Castillo, Germán. *La Ingovernabilidad: ¿Una Hipótesis que se Autoconfirma?* Miguel Angel Porrúa, Textos para el Cambio. México, 1994. pags. 5'21.

Proud'homme, Jean-François, "La Negociación de las Reglas del Juego: Tres Reformas Electorales (1988-1994)." *Política y Gobierno*, vol. III, no.1. CIDE, 1996. pags. 93-126.

Przeworski, Adam y Fernando Limongi, "Regímenes Políticos y Crecimiento Económico." *Desarrollo Económico*, julio-septiembre. Buenos Aires, 1994. pags. 163-179.

Przeworski, Adam, *Democracia y Mercado. Reformas Políticas y Económicas en Europa del Este y América Latina*. Cambridge University Press, 1995.

Rabotnikof, Nora, "Lo Público y sus Problemas: Notas para una Reconsideración." *Revista Internacional de Filosofía Política*. Madrid, 1993. pags. 75-98.

Rabotnikof, Nora, *El Espacio Público y la Democracia Moderna*. IFE. México, 1997.

Radcliffe Brown, A. R., *Structure and Fuction in Primitive Society*. Cohen and West. London, 1963.

Ramos, Samuel, *El Perfil del Hombre y la Cultura en México*. Espasa-Calpe. México, 1996.

- Reding, Andrew, "The Democratic Current: a New Era in Mexican Politics." *World Policy Journal* no. 2, 1988. pags. 323-366.
- Reyes Heróles, Federico, *Sondear a México*. Océano. México, 1995.
- Reyna, José Luis & Richard S. Weinert (eds.), *Authoritarianism in Mexico*. Institute for the Study of Human Issues. Philadelphia, 1977.
- Roett, Riordan (comp.), *La Liberalización Económica y Política de México*. Siglo XXI. México, 1993.
- Rokeach, Milton, *The Nature of Human Values*. Free Press. New York, 1973.
- Rose, Nikolas, y Peter Miller, "Political Power Beyond the State: Problems of Government." *British Journal of Sociology*, vol. 43, junio, 1992. pags. 173-205.
- Rosenbaum, Walter A., *Political Culture*. Praeger Publishers. New York, 1975.
- Roth, G., y W. Schluchter, *Max Weber's Vision of History: Ethics and Methods*. Berkeley. University of California Press, 1979.
- Rubio, Luis, *La Democracia Verdadera. Información, Ciudadanía y Política Pública*. Cal y Arena. México, 1998.
- Sáez de Nanclares, Mauricio, *La Disputa por lo Público*. DECA. México, 1997.
- Sánchez Susarrey, Jaime, " *La Transición Incierta*. Vuelta. México, 1991.
- Schmidt, Samuel, *La Capacidad de Gobernar en México*. Aguilar. México, 1997.
- Schmitter, Phillippe C., y Karl, Terry L, "Qué Es y Qué no Es la Democracia." *Sistema*, Madrid, septiembre, 1993. pags. 17-30.
- Schwartzman, Simon (comp.), *Técnicas Avanzadas en Ciencias Sociales*. Nueva Visión. Buenos Aires, 1977.
- Scott, Robert, *Mexican Government in Transition*. University of Illinois Press. Urbana, 1964.

- Segovia, Rafael, "Una Nueva Cultura Política." *Partidos y Candidatos*. Miguel Angel Porrúa, Textos para el Cambio. México, 1994. pags. 11-14.
- Segovia, Rafael, *La Politización del Niño Mexicano*. Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México. México, 1975.
- Serrano Mónica y Víctor Bulmer-Thomas (comps.), *La Reconstrucción del Estado. México después de Salinas*. FCE. México, 1998.
- Sirvent, Carlos, "Cultura y Democracia: Confianza y Eficacia en la Participación Política." *Estudios Políticos*, no. 8, UNAM. México, 1991. pags. 191-203.
- Smith Martins, Ma. Marcia y Victor Manuel Durand, "Actores y Movimientos Sociales Urbanos y Acceso a la Ciudadanía." *Ciudades*. Red Nacional de Investigación Urbana, enero-marzo, 1995.
- Somers, Margaret, "Citizenship and the Place of the Public Sphere: Law, Community, and Political Culture in the Transition to Democracy." *American Sociological Review*, vol. 58, octubre, 1993. pags. 587-620.
- Somers, Margaret, "Narrating and Naturalizing Civil Society and Citizenship Theory: The Place of Political Culture and the Public Sphere." *Sociological Theory*, noviembre, 1995. pags. 229-274.
- Somers, Margaret, "What's Political or Cultural about Political Culture and the Public Sphere? Toward an Historical Sociology of Concept Formation." *Sociological Theory*, julio, 1995. pags. 113-144.
- Street, John, "Review Article: Political Culture -from Civic Culture to Mass Culture." *British Journal of Political Science*, vol. 24, enero, 1994. pags. 95-114.
- Street, Susan, "Movimientos Sociales y Análisis del Cambio Social en México." *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio, 1991. pags. 141-158.

- Swidler, Ann, "Culture in Action: Symbols and Strategies." *American Sociological Review*, vol 51, abril, 1986. pags. 273-286.
- Taylor, Michael, "Structure, Culture and Action in the Explanation of Social Change." *Politics & Society*, vol. 17, 1989. pags. 115-162.
- Tejera Gaona, Héctor, "Cultura Política: Democracia y Autoritarismo en México." *Nueva Antropología*. México, 1996. pags. 11-21.
- Tilly, Charles, "Social Movements as Historically Specific Clusters of Political Performance." *Berkeley Journal of Sociology*, vol. 38, 1993-1994. pags. 1-30.
- Torres Ortíz, Edelberto, "América Latina. Gobernabilidad y Democracia en Sociedades en Crisis." *Nueva Sociedad*, nov.-dic. Caracas, 1993. pags. 89-101.
- V. Emy, Hugh, "From a Positive to a Cultural Science: Towards a New Rationale for Political Studies." *Political Studies*, vol. XXXVII, 1989. pags. 188-204.
- Valenzuela, Arturo, "Presidencialismo Devaluado. Nueva Gobernabilidad en América Latina." *Etcétera*. México, 1995. pags. 16-21.
- Varios Autores, *La Transición Interrumpida. México 1968-1988*. Nueva Imagen. México, 1993.
- Varios Autores, *México. Cincuenta Años de Revolución. La Economía*. FCE. México, 1960.
- Vega, Juan Eduardo (comp.), *Teoría y Política en América Latina*. CIDE. México, 1983.
- Villa, Manuel, "La Política en el Gobierno de Miguel de la Madrid." *Foro Internacional* no. 120, abril-junio, 1990. pags. 659-676.
- W. Traugott, Michael, y Paul J. Lavrakas, *Encuestas: Guía para Electores*. Siglo XXI. México, 1997.
- Villegas, Abelardo, *El Pensamiento Mexicano en el Siglo XX*. FCE. México, 1993.

- Weber, Max, *Economía y Sociedad*. FCE. México, 1983.
- Weber, Max, *Ensayos de Metodología Sociológica*. Amorrortu. Buenos Aires, 1982.
- Weber, Max, *Ensayos sobre Sociología de la Religión, TI*. Tecnos. Madrid, 1987.
- Welch, S. (ed.), *The Concept of Political Culture*. Macmillan, 1993.
- Werlin, Herbert, "Political Culture and Political Change." *American Political Science Review*, vol. 84, marzo, 1990. pags. 250-253.
- Whitehead, Lawrence, "Por qué México es Casi Ingobernable." *Revista Mexicana de Sociología*, enero-marzo, 1980. pags. 203-234.
- Whitehead, Lawrence, "Una Transición Difícil de Alcanzar." *Política y Gobierno*, primer semestre de 1996. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). pags. 31-59.
- Wiarda, Howard, "Constitutionalism and Political Culture in Mexico: How Deep the Foundations?" Daniel P. Franklin y Michael J. Baun (eds.), *Political Culture and Constitutionalism. A Comparative Approach*. Sharpe. Armonk, 1995. pags. 119-137.
- Winocour, Rosalía (comp.), *Culturas Políticas a Fin de Siglo*. Juan Pablos. México, 1997.
- Wolfe, Alan, *Los Límites de la Legitimidad*. Siglo XXI. México, 1987.
- Wuthnow, Robert, *Meaning and Moral Order*. University of California Press, 1987.
- Zavala, Iván, "Luz y Sombra de las Encuestas en México." *La Jornada*, 8 de agosto, 1987.

Información Empírica

Encuestas de Cultura Política, Opinión Pública y Valores

- 1.- Alduncin, Enrique, *Los Valores de los Mexicanos I*. Banamex, 1983.
- 2.- Basañez, Miguel, *Encuesta sobre la Nacionalización de la Banca*, 1982.
- 3.- Inter University Consortium for Political and Social Research. *World Values Survey I y II*. Ann Harbor, 1981-1983 y 1990-1993. Universidad de Michigan.
- 4.- IEPES-PRI, *Encuesta sobre Valores Políticos*, 1983.
- 5.- Centro de Estudios de Opinión Pública, *Encuesta Nacional de Partidos Políticos*, 1983.
- 6.- The New York Times, *The New York Times México Survey*, 1986.
- 7.- GALLUP-PRI, *Encuesta sobre Valores Sociales*, 1987.
- 8.- CREA, *Cómo somos los Mexicanos*, 1987.
- 9.- Alduncin, Enrique, *Los Valores de los Mexicanos II*. Banamex, 1987.
- 10.- La Jornada. *Preferencias Electorales en el país*, 1988.
- 11.- Presidencia de la República. *Encuesta sobre Renovación Moral*, 1988.
- 12.- Los Angeles Times. *Encuesta Nacional de Opinión Pública*, 1989.
- 13.- Presidencia de la República. *Los Primeros Diez Meses de Gobierno*, 1989.
- 14.- Excélsior. *Relaciones Iglesia-Estado*, 1990.
- 15.- Inglehart, Ronald, Miguel Basañez y Alejandro Moreno, *Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook*. University of Michigan Press. Ann Arbor, 1996.
- 16.- Los Angeles Times. *Encuesta Nacional de Opinión Pública*, 1991.
- 17.- Este País. *Encuesta Nacional de Opinión Pública*, 1991.

- 18.- Prospectiva Estratégica. *Badex, Banco de Datos de Encuestas Mexicanas*, 1992.
- 19.- Este País. *Encuesta Nacional de Opinión Pública*, 1992.
- 21.- Alduncin, Enrique, *Los Valores de los Mexicanos T III*. Banamex, 1993.
- 22.- UNAM/IIS, *Los Mexicanos de los Noventa*, 1996.